



Luis Oviedo

De las primeras Coordinadoras a las Asambleas Nacionales

Una historia del movimiento piquetero

Índice

- Introducción 5
- Antecedentes 11
- Caracterización y programa: “Organizar a los desocupados” 15
- Neuquén: cuna de los piqueteros 21
- Se extiende el movimiento 27
- Problemas estratégicos 33
- Neuquén: del Congreso de Desocupados al primer Cutralcazo 41
- El segundo Cutralcazo 47
- Tartagal-Mosconi: primera pueblada 53
- Jujuy, Cruz Del Eje: una pueblada nacional 59
- La organización de los desocupados en Buenos Aires: desarrollo y limitaciones 63
- Los piqueteros del movimiento obrero 75
- El movimiento piquetero frente al ascenso de la Alianza 81
- El Polo Obrero 85
- Corrientes: la Alianza debuta matando piqueteros 89
- Tartagal-Mosconi: un piquetazo obrero 93
- Una nueva pueblada en el Norte de Salta 97
- Argentina Piquetera 103
- De La Quiaca a la Patagonia 113
- El Congreso piquetero del Norte de Salta 125
- Las provocaciones de Storani 129
- La Matanza: crisis política del movimiento piquetero 133
- Los piqueteros de la Capital 137
- La necesidad de una política de conjunto 139
- Tartagal-Mosconi: el único gobierno representativo es el de los piqueteros 143
- Asamblea Nacional y plan de lucha piquetero: dos estrategias, una salida 153
- Adónde va el movimiento piquetero (Epílogo provisional) 161

Anexo - Documentos del Movimiento Piquetero

- Programa aprobado en el I Encuentro de trabajadores desocupados de Neuquén - 24 de mayo de 1996 163
- Carta Abierta al Movimiento Obrero - julio de 2000 164
- Llamamiento del Iº Congreso de trabajadores y desocupados del Norte de Salta - 9 de diciembre de 2000 166
- Declaración del plenario nacional de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados - 16 de diciembre de 2000 169
- Plataforma de reivindicaciones aprobada por el Congreso piquetero

de la Capital Federal - 21 de abril de 2001 171

- Declaración de Principios del Frente Unico de Trabajadores Desocupados (Futrade) de La Matanza - agosto de 2001 172
- Resolución de la II Asamblea Nacional Piquetera - 4 de septiembre de 2001 174

Introducción

El movimiento piquetero es la creación más genuina de la clase obrera y de las masas explotadas argentinas en los últimos veinticinco años. Como toda creación obrera, debió ganar su derecho a la existencia en una lucha tenaz contra las instituciones del Estado, desde el Ejecutivo, el Parlamento y la Justicia –que lo reprimieron, y lo reprimen, con saña– hasta la Iglesia, los partidos patronales y la burocracia de los sindicatos (integrada al Estado).

Nace de una necesidad vital para la masa trabajadora (y no sólo de los desocupados en particular): la lucha contra el desempleo, que con el menemismo-cavallismo adquirió dimensiones de catástrofe, ante el absoluto abandono de los desocupados y de sus reivindicaciones por parte de la burocracia oficial de los sindicatos. En la medida en que “organiza a los desorganizados”, el movimiento piquetero es, en sí mismo, un freno al intento de la burguesía de atomizar a la clase obrera a través del desempleo. En ese proceso de organización jugó un papel decisivo un experimentado y combativo activismo obrero que, como consecuencia de los despidos y la persecución patronal, había quedado fuera de las fábricas, de las obras y de los yacimientos.

El movimiento piquetero ha sido el protagonista excluyente de las grandes luchas populares que han conmovido a la Argentina en los últimos seis años, que han volteado ministros y gobiernos, que han movilizado a cientos de miles de trabajadores y explotados, que han revolucionado la vida interna de los sindicatos y que han promovido a una nueva generación de dirigentes obreros y populares. Las grandes puebladas, los cortes de ruta de los desocupados y hasta las mayores luchas sindicales de los últimos años se han desarrollado con la oposición de las direcciones oficiales de los sindicatos e, incluso, en gran parte, fuera de los propios sindicatos dominados por la burocracia.

En el cuadro del furioso ataque a las condiciones de vida y de trabajo de las masas lanzado por los capitalistas y sus gobiernos, el movimiento piquetero es el único que puede exhibir conquistas y victorias. La burocracia oficial de los sindicatos sólo puede mostrar retrocesos, liquidación de conquistas históricas y las peores derrotas –las que se producen sin lucha– que desmoralizan a los trabajadores y fortalecen a sus enemigos.

El piquete y el corte de ruta son el esfuerzo por hacer prevalecer la voluntad colectiva de la clase obrera y de los explotados por sobre la de la burguesía, cuya explotación social asume la forma de ‘derechos individuales’ (violentados por el piquete). “Mientras haya desocupación, las rutas serán nuestras” advertía una declaración ‘navideña’ de los piqueteros de Varela-Berazategui a fines de 1997.¹

El piquete constituye un instrumento de educación política para la masa porque desnuda la ficción de la ‘democracia’ como el reino abstracto de los ‘derechos y garantías’ de ‘ciudadanos’ iguales ante la ley: el régimen político y el orden jurídico garantizan efectivamente el derecho del capitalista a explotar a los trabajadores y a despedirlos cuando le viene en gana, pero no garantizan el ‘derecho al trabajo’ a millones de desocupados; sólo el piquete –es decir la acción coactiva y colectiva de los explotados– puede garantizar ese derecho en la práctica.

La clase obrera está históricamente determinada; aunque sea obligada a retroceder, sus experiencias de lucha, sus conquistas organizativas y programáticas no desaparecen; forman parte del sustrato de su memoria y de su conciencia colectiva. Es natural, entonces, que el movimiento piquetero renovara, bajo nuevas condiciones, la tradición histórica de la clase obrera argentina: entronca con los piquetes anarquistas y socialistas de principios de siglo, de la Semana Roja de 1909, de la Semana Trágica de 1919 y de la Patagonia Rebelde, masacrada por los De la Rúa de la época; con los grandes piquetes de huelga de la Década Infame y con los combativos piquetes obreros de la época de la dictadura ‘Libertadora’ y del gobierno de Frondizi, y con los Cordobazos, Rosariazos, Tucumanazos y las grandes puebladas de fines de los ‘60 y comienzos de los ‘70.

Los piquetes forman parte de la tradición obrera argentina desde hace más de cien años. Han regresado bajo nuevas circunstancias, no sólo como organización de los desocupados para quebrar la dictadura patronal que le niega al trabajador el único derecho verdadero que le asiste bajo el capitalismo, el derecho a ser explotado, sino también como organización que une al desempleado con el ocupado en una lucha común por el trabajo y por el salario. Esta ha sido la función de los piquetes en los grandes paros generales de los últimos años.

Donde con más claridad se ha visto esta fusión entre el movimiento piquetero y los trabajadores ocupados es en el norte de Salta, donde el piquete logró la incorporación de trabajadores a las obras, quebró el infame convenio de la Uocra y cortó las rutas en reclamo de aumento de salarios. “No es casual que una parte de los piqueteros que están a la cabeza de la organización en el Norte sean trabajadores ypefianos que han perdido el trabajo pero no la conciencia de la necesidad

de su propia organización, de la acción directa frente a un régimen de fuerza y de coacción contra los trabajadores y de una lucha común con todos los que viven de su trabajo. Los delegados de ayer en el Supe hoy toman lista rigurosamente en las asambleas y en las movilizaciones para educar en una organización de características militantes y de clase”.² Por eso, sólo una observación superficial del movimiento piquetero, en su exterioridad, justifica afirmar que “(los cortes de ruta) cuestionan el punto de vista tradicional de la clase obrera industrial como el sujeto más importante de la lucha de clases”.³ La fusión entre el trabajador ocupado y el desocupado es, en definitiva, la pueblada y la Asamblea Popular.

El movimiento piquetero comienza a organizarse a comienzos de 1995, en la época en que se preparaba la reelección de Menem, bajo la forma de comisiones de desocupados en el ámbito municipal (o incluso a nivel barrial), en particular en Neuquén.

Su desarrollo está indisolublemente ligado al derrumbe del peronismo. “El hecho significativo es que la gente que todavía en el ‘95 votó por Menem es la protagonista fundamental de los cortes de ruta. Las corrientes peronistas que se fueron del menemismo en el ‘89 no son las que cortaron las rutas; los que cortan las rutas fueron los que todavía en 1995 votaron por Menem, los que todavía creían que alguien del peronismo los podía sacar de la debacle. Por eso la brutalidad de los cortes de ruta; la reacción de la gente está en proporción directa al tamaño de su decepción y a la brusquedad de su desilusión”.⁴

En los años de ascenso de la Alianza (mediados de 1997 a fines de 1999), el movimiento fue parcialmente confiscado por los partidos y tendencias que actuaban en su nombre, el Frepaso y la CTA. Pero la Alianza –de la cual la CTA se consideraba su “pata sindical”– era, por su propia naturaleza, antipiquetera. Surgió a mediados de 1997, después de los Centralcazos y el primer Tartagalazo, según lo explicó el propio Alfonsín, “para canalizar la protesta”, es decir para abortar las posibilidades de su desarrollo independiente.

La central ‘alternativa’ se esforzó por cooptar a una parte de las direcciones de los movimientos que habían surgido y subordinarlas políticamente a la Alianza e integrarlas al Estado. La ‘confianza’ en el ‘progresismo’ e incluso la cooptación de ciertas direcciones del movimiento de desocupados por parte de una fuerza política esencialmente antipiquetera desarmó políticamente a esos movimientos, los desnaturalizó y hasta los llevó a su disolución.⁵

Con el vertiginoso fracaso del ‘progresismo’ aliancista, el movimiento piquetero vuelve al primer plano, pero ahora con una inusitada proyección política nacional. Es mucho más que “una forma de protesta contra las políticas de estabilización”.⁶ Había pasado del movimiento puramente reivindicativo y de reclamo de asistencialismo social, a formular programas políticos que levantaban reivindicaciones históricas de la nación atrasada (como la reestatización de YPF) y que planteaban en perspectiva, la transformación social de la Argentina e, incluso, el gobierno de los trabajadores.⁷

El movimiento piquetero había pasado de los cortes de ruta aislados a la huelga general y al plan de lucha nacional. Había pasado de organizar a los desocupados a incorporar activamente a sectores obreros industriales.

Junto a estas transformaciones, el movimiento piquetero había procedido de una manera sistemática a la selección y re-selección de sus cuadros y dirigentes a través de la experiencia de la lucha de masas y de la lucha política. Casi ninguno de quienes hoy están a la cabeza del movimiento piquetero tenía una participación dirigente en sus inicios. El ejemplo más claro de esta selección sistemática es el de los piqueteros de Tartagal y Mosconi: los compañeros que hoy están al frente, aunque estuvieron desde el principio en el movimiento, son la tercera ‘generación’ de dirigentes piqueteros.

El movimiento piquetero reúne a distintos componentes sociales explotados, desde los obreros industriales desocupados que pasaron por la experiencia de la lucha sindical, a una enorme masa empobrecida de los barrios, de jóvenes y de amas de casa, que no ha pasado por la ‘escuela’ de la fábrica y el sindicato. En esta ‘mezcla’ radica su riqueza y su vitalidad pero también su heterogeneidad. Es el movimiento popular más politizado de la Argentina; en su seno actúan las más variadas tendencias políticas, desde un ala revolucionaria –que lucha por la independencia política del movimiento, por la fusión de la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados y por la fusión de la lucha reivindicativa y política para darle una salida de conjunto a la clase obrera– hasta una tendencia pequeñoburguesa y burocrática, políticamente subordinada a los políticos burgueses ‘de izquierda’ y partidaria de la integración al Estado. Lógicamente, entre estos dos polos existe una amplia gama de ‘grises’.

En el seno de este movimiento se libra una aguda lucha política, de tendencias, programas y partidos. La creciente proyección política del movimiento piquetero expresa la transformación de la conciencia de una amplia vanguardia obrera y de una fracción de las masas en dirección a la independencia de clase.

El movimiento piquetero se ha transformado en un referente para todos los movimientos de lucha de los explotados de la ciudad y el campo, expresando la tendencia de la clase obrera a convertirse en la dirección de la nación oprimida. En la medida en que aparece como una autoridad política para las masas en lucha frente al Estado, plantea, en perspectiva, el poder de los explotados.

El movimiento piquetero argentino tiene, incluso, una proyección internacional. No sólo por el inocultable interés que ha despertado entre partidos e intelectuales de izquierda de todo el mundo este enorme esfuerzo de tendencias, corrientes y militantes por organizar a los desocupados y por las puebladas que ha protagonizado a lo largo de estos seis años contra distintos gobiernos y con distintas direcciones políticas. Este interés se manifiesta en los estudios y análisis que le han dedicado importantes revistas internacionales.

El ejemplo de los desocupados argentinos se ha extendido al Uruguay, donde se ha formado una Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) que agrupa nacionalmente a los desempleados y que ha participado como “observadora” en el último Congreso del PIT-CNT, la central sindical uruguaya. En la declaración aprobada en su Convención fundacional –realizada en Fray Bentos, a mediados de 2001– la UTD de Uruguay reivindica expresamente la lucha y la experiencia de los piqueteros argentinos.⁸

Los explotados argentinos no pueden esperar nada de la Alianza o del PJ –o de sus versiones de ocasión, como la Carrió o Farinello– ni de las instituciones del Estado ‘democrático’, excepto más explotación y entrega nacional. Para los explotados argentinos, la salida depende, en una medida sustancial, de la evolución política del movimiento piquetero en el sentido de su plena independencia de clase, de la maduración, el desarrollo y el fortalecimiento de sus tendencias revolucionarias y de su efectiva transformación en un caudillo nacional.

“El gran horizonte para los piqueteros es convertirse en la vanguardia política de la clase obrera y de todos los explotados. Una vanguardia obrera lucha en función de una estrategia y en base a un programa, y construye un partido propio para arrancarle el poder a los explotadores”.⁹

El objetivo de este trabajo es pasar revista a estos seis años de lucha piquetera, de empeño organizativo, de cortes de ruta y lucha física y política contra la represión, y de encendidos debates políticos y programáticos, desde las primeras Comisiones de Desocupados hasta las dos Asambleas Nacionales Piqueteras, celebradas en julio y septiembre de 2001 en La Matanza.

La organización independiente de los desocupados –es decir, de la fracción más explotada de la clase obrera– es una tarea revolucionaria en la que han participado, y participan, distintas y diversas corrientes políticas y sindicales. Todas ellas deben ser reconocidas y reivindicadas por esta tarea.

A lo largo de este trabajo se analizarán sus luchas, sus programas, sus perspectivas estratégicas y sus debates. Algunas corrientes serán reivindicadas; otras serán criticadas; para ambos casos, el criterio es si una corriente determinada, por su programa o por su estrategia política, desarrolla o limita las perspectivas y la potencialidad del movimiento piquetero. Ninguna de estas críticas, sin embargo, pretende desconocer o minimizar el papel que cada una de ellas ha jugado y juega como organizadora e impulsora del movimiento de masas que ha conmovido a la Argentina. Tampoco pretende desconocer que la inmensa mayoría de los militantes y dirigentes que han creado el movimiento piquetero son, además, subjetivamente revolucionarios. Al contrario, parte de ambos reconocimientos.

1. Prensa Obrera, 8 de enero de 1998.

2. Rath, Christian, “La experiencia de los piquetes del Norte”, en Prensa Obrera, 13 de diciembre de 2000.

3. Dinersterin, Ana C., “Roadblocks in Argentina: Against the Violence of Stability”; en *Capital & Class*; N° 74.

4. Altamira, Jorge, “La situación política en las vísperas del IX Congreso del Partido Obrero”, en *En Defensa del Marxismo*, mayo de 1998.

5. Es el caso del movimiento piquetero de Cutral Co, que será tratado en detalle más adelante.

6. Dinersterin, Ana C., *Op. cit.*

7. “Hemos demostrado que nosotros podemos administrar las cosas mejor que ellos, a pesar de que no somos tan letrados. Acá se resuelve todo por asamblea, nadie se queda con la plata de nadie, no necesitamos de los zánganos de la Intendencia. No sólo necesitamos trabajo, también necesitamos sacarnos de encima a los que nos han robado toda la vida”. Reportaje a Estela, ‘la santiagueña’, de Tartagal, activista municipal y dirigente del corte de diciembre de 1999, en *Prensa Obrera*, 23 de diciembre de 1999.

8. Ver Oviedo, Luis, “Uruguay: los desocupados se organizan y luchan”, en *Prensa Obrera*, 21 de junio de 2001.

9. Altamira, Jorge, “150.000 piqueteros”, en *Prensa Obrera*, 30 de noviembre de 2000.

Antecedentes

La era del Santiagueñazo

El movimiento piquetero es el hijo directo del Santiagueñazo, la pueblada que derrumbó el poder político de esa provincia en diciembre de 1993 y que marcó toda la década de las luchas obreras y populares en Argentina.

Los manifestantes santiagueños demolieron a su paso todas las sedes de las instituciones del poder político provincial –la Casa de Gobierno, la Legislatura, el Poder Judicial– y las mansiones de los corruptos políticos patronales, tanto oficialistas como opositores. La pueblada se extendió al interior de la provincia, donde se repitieron los mismos acontecimientos. En estos aspectos – su ataque al poder político del Estado y su extensión al interior– el Santiagueñazo fue incluso superior al Cordobazo de 1969.

El Santiagueñazo superó también al Cordobazo en otro aspecto decisivo. Mientras que el levantamiento cordobés enfrentó a una dictadura militar, la pueblada santiagueña apuntó contra una ‘democracia’. “Sólo por este motivo se puede decir con certeza que fue una manifestación superior de soberanía popular, ya que corrió el velo engañoso y fraudulento del sistema representativo burgués. Aunque en 1969 todos los ‘demócratas’ se comportaron como perfectos cobardes, no dejaron por ello de responsabilizar a la dictadura por el levantamiento popular. Contra el Santiagueñazo, en cambio, se formó un frente único desde Menem a Pino Solanas, sin excluir a Rico, claro, para apresurar la intervención federal a Santiago, ponerla bajo el control de los gendarmes, del represor de mujeres, Antoniotti, y encargarle la solución de sus problemas al cadete de Cavallo, Juan Schiaretto, hombre de los pulpos de la Fundación Mediterránea y de otros ‘privatizadores’ (...)”.¹⁰ El Santiagueñazo cumplió un enorme papel de pedagogía nacional, al poner tempranamente al desnudo la precariedad de la victoria menemista del 3 de octubre de 1993.

Contra el mismo frente de los ‘demócratas’ respaldados en las bayonetas de la Gendarmería debería enfrentarse el movimiento piquetero.

Como más tarde sucedería con los Cutralcazos o con el primer levantamiento de Tartagal, hubo quienes caracterizaron al Santiagueñazo como una “explosión espontánea” de “furia popular”, lo cual naturalmente era tan falso en Santiago en 1993 como lo fue luego en Neuquén o en el Norte de Salta en 1996/97. En el Santiagueñazo los manifestantes demostraron una elevada conciencia política cuando marcharon a destruir los símbolos del poder político... pero no tocaron un solo supermercado o comercio a pesar del hambre y la miseria. Las manifestaciones y huelgas contra el vaciamiento de la provincia habían sido una rutina en los dos años anteriores a la pueblada. Incluso el pueblo santiagueño había pasado por una acelerada experiencia política. La confianza en el peronismo y en el menemismo se había transformado en los meses previos a la pueblada en una viva adhesión al caudillo populista de la UCR, Eduardo Zavalía –que en las elecciones del 3 de octubre de 1993 había obtenido el 65% de los votos por su llamado a “la lucha armada para defender la soberanía nacional”, una demagogia tan extrema como típica de los burgueses populistas–. Pero bastó la adhesión de Zavalía a la reelección de Menem y al ‘pacto de Olivos’ entre Menem y Alfonsín y, finalmente, al ‘pacto’ que permitió el reemplazo del gobernador Mujica por el vicegobernador Lobo, para que sesenta días después del 3 de octubre, la casa de Zavalía sufriera las consecuencias de la ira de la multitud y para que el radicalismo en su conjunto se convirtiera en un cero a la izquierda en la provincia. No hubo nada de “espontáneo” en la pueblada santiagueña, que era una expresión concentrada de la experiencia del pueblo explotado con el régimen y los partidos de la ‘democracia’.

Al levantamiento popular santiagueño y a los Cutralcazos, Tartagalazos y Jujeños que lo siguieron, los encadenan las mismas causas. “El Santiagueño no es otra cosa que el producto del ‘plan Cavallo’, el que sólo podría sobrevivir creando y produciendo nuevos Santiagueños”¹¹.

También los unen los métodos de lucha a los que recurrieron las masas: “El Santiagueño habrá de jugar, y creemos que juega ya, un enorme rol homogeneizador del movimiento de las masas de Argentina (...). Para el conjunto de los movimientos sociales reivindicativos y de lucha, y para la clase obrera, el Santiagueño muestra el camino de la huelga general, de la acción callejera, de la ocupación de edificios, de las Asambleas populares y del poder”.¹²

Todo esto explica que se pudiera afirmar, apenas sucedidos los acontecimientos, que “(el) Santiagueño (es) el Cordobazo de los ‘90 (...) una rebelión que marcará época en los años ‘90”, como el Cordobazo marcó la década del ‘70.¹³

Las luchas de Jujuy y el Perro Santillán

Las luchas de los trabajadores estatales y municipales jujeños son, también, un antecedente directo del movimiento piquetero. El ‘plan Cavallo’ –con las privatizaciones, el ingreso masivo de capital especulativo, el endeudamiento externo, el ‘Pacto Fiscal’ que redujo la coparticipación para las provincias y la transferencia de la educación– hundió las finanzas provinciales. El derribo de las finanzas públicas creó en Jujuy una crisis política virtualmente crónica: entre 1990 y 1994, la provincia conoció cinco gobernadores.

Como en Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán y Corrientes, también en Jujuy los trabajadores estatales debían salir a la huelga y movilizarse para cobrar sus salarios. Las luchas de los empleados estatales y municipales de Jujuy comenzaron en 1990 y desde entonces se repitieron regularmente: las huelgas, la represión y la resistencia a la represión se hicieron un paisaje cotidiano en la provincia.

En estas luchas se destacó la figura de Carlos Perro Santillán, dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), y militante del PTP-PCR. El Seom, junto con los restantes gremios estatales, conformaba el Frente de Gremios Estatales que estaba a la cabeza de estas movilizaciones.

Por su participación en estas luchas, Santillán fue detenido en reiteradas oportunidades. Incluso fue secuestrado por una patota¹⁴ pero debió ser liberado después de una gran movilización del pueblo jujeño. Fue sometido a juicio por un ‘paquete’ de 19 causas penales. Después de su juicio –en el que acusó a sus acusadores– Santillán siguió a la cabeza de las luchas de los municipales. La persecución por parte de un gobierno hambreador y la dignidad con que se comportó frente a la represión convirtieron a Santillán en un dirigente político nacional y en una figura representativa del movimiento piquetero en toda una primera etapa.

La persecución contra Santillán anticipaba la que sufrirían, en toda la geografía argentina, miles de piqueteros en los siguientes años.

La huelga metalúrgica de Tierra del Fuego

La heroica huelga metalúrgica de Tierra del Fuego de mayo/abril de 1995 contra los despidos y los cierres de plantas es otro antecedente directo del movimiento piquetero.

Los reclamos que levantaron los trabajadores –la reducción de la jornada a seis horas sin afectar los salarios y la apertura de un “cuarto turno” para evitar los despidos– emparentan esta huelga directamente con las luchas piqueteras. También lo unen los métodos de lucha que utilizaron los trabajadores: las ocupaciones de planta y la lucha callejera.

Pero además, entre la huelga fueguina y la lucha piquetera hay un lazo de sangre. En la huelga de Tierra del Fuego caería el primer trabajador asesinado por las fuerzas represivas de la 'democracia': el obrero metalúrgico Víctor Choque. Años después, Teresa Rodríguez en Cutral Co; Aníbal Verón, Carlos Santillán y Omar Barrios en Salta; Ojeda y Escobar en Corrientes, caerían muertos por las mismas manos asesinas. De Tierra del Fuego a Salta, entre la 'democracia' y el movimiento piquetero hay una delimitación infranqueable trazada con sangre obrera.

10. Altamira, Jorge, "Santiagoñazo: el Cordobazo de los '90", en Prensa Obrera, 22 de diciembre de 1993.

11. Idem anterior.

12. Idem anterior.

13. Idem anterior.

14. El Ptp-Pcr responsabiliza por esta acción al brigadier menemista Antonietti, a Delfín Aguilar (ministro de gobierno jujeño) y a la Dea norteamericana.

Caracterización y programa: “Organizar a los desocupados”

En el debut del ‘plan Cavallo’, la desocupación era del 6,6% y se duplicó en sus tres primeros años (considerados ‘expansivos’). Con el comienzo de la recesión que siguió al ‘tequilazo’ mexicano de fines de 1994, y en apenas seis meses, creció otro 50% hasta alcanzar el 18,6% en julio de 1995, un récord histórico para la Argentina. La subocupación creció al mismo ritmo. Desde entonces, la suma de trabajadores ocupados y subocupados ha oscilado en el 30% (como promedio nacional, ya que existen amplias zonas del Gran Buenos Aires, como Florencio Varela o La Matanza, donde este porcentaje se eleva al 40%; o pueblos del interior, como Tartagal y Mosconi, en Salta, o Cutral Co y Plaza Huinca, Neuquén, donde supera holgadamente el 50%).¹⁵

A fines del 2001, la tasa de desempleo abierto alcanzó un máximo histórico del 20%. En la Argentina de hoy hay seis millones de desocupados y subocupados.

Con la ‘convertibilidad’ menem-cavalliana-delarruista, la desocupación creció sistemáticamente, con independencia de las distintas fases del ciclo económico. La desocupación masiva que desde hace seis años golpea a millones de trabajadores y a sus familias es la consecuencia conscientemente buscada de la política aplicada por los capitalistas. Es el resultado de la ‘flexibilización’, del desconocimiento de los convenios, del incremento de los ritmos de trabajo y de la productividad obrera, de las privatizaciones, de la elevación de la edad jubilatoria, de la rebaja de las indemnizaciones, del alargamiento de la jornada laboral y de la rebaja salarial que trajo aparejado un incremento vertical de la “tasa de actividad”, es decir del número de trabajadores que busca empleo.

Mediante el desempleo masivo, las patronales y sus gobiernos buscan agudizar la competencia y la división entre los obreros ocupados y sin trabajo: el temor a perder el trabajo paraliza a los ocupados; la desmoralización por el paro forzoso y prolongado paraliza a los desocupados. El desempleo y el sobretrabajo se refuerzan mutuamente.¹⁶

La existencia de una masa de desocupados –que es una consecuencia y, a la vez, una necesidad del proceso de la acumulación del capital– pone al desnudo las contradicciones insuperables del régimen social: su necesidad de incrementar constantemente la explotación del trabajo asalariado, y su tendencia a la sobreproducción de mercancías (y capitales) que no pueden ser adquiridos por los consumidores finales.

Un desempleo masivo y prolongado del 30% de la población obrera es un hecho excepcional que corresponde a la crisis del capitalismo, es decir, a su incapacidad para dar empleo a las fuerzas productivas ya creadas y a las susceptibles de crearse en forma inmediata. Pone en evidencia la incapacidad del régimen social para dar de comer a los explotados, y en consecuencia, de reproducir, mediante la explotación del trabajo, el propio régimen de explotación. Es decir que la desocupación masiva y prolongada pone en evidencia las tendencias del capitalismo a su autodisolución. En todo régimen de explotación, la incapacidad de los explotadores para alimentar a los explotados es una expresión de su agotamiento histórico y marca la apertura de un período de revolución social.¹⁷

Las direcciones obreras y los desocupados

¿Qué actitud asumieron las direcciones obreras frente a la desocupación?

La CGT oficialista no sólo abandonó a los desocupados a su suerte sino que incluso culpó de la catástrofe a sus propias víctimas. Gerardo Martínez, secretario general de la CGT, no tuvo empacho en declarar que “los inmigrantes son los grandes responsables de la desocupación”.¹⁸

La CTA, por su parte, levantó un programa contra el desempleo que planteaba el otorgamiento de subsidios para los capitalistas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) “vinculados a la efectiva generación de empleo” y aceptaba la reducción salarial (reducción de la jornada laboral pero sin decir nada de mantener el mismo salario).¹⁹ Con estos planteos, la CTA se ponía en el mismo campo de análisis que Cavallo y Martínez porque su punto de partida era la concepción, enteramente burguesa, de que “sólo una tasa de beneficio capitalista creciente ofrece una salida a la desocupación. Pero esa tasa de beneficio sólo puede aumentar con el aumento de la superexplotación y con una rebaja de salarios. La primera crea obreros excedentes, y la presión a la desocupación así creada lleva a la reducción de los salarios. La pretensión de combatir el desempleo elevando los beneficios patronales está condenada al fracaso, porque el capitalismo crea y reproduce la desocupación con la misma regularidad y sistematicidad con que una línea de montaje produce automóviles”.²⁰

Pero a diferencia de la CGT o incluso del MTA, la CTA realizó un esfuerzo por poner en pie su propia organización de desocupados mediante la cooptación de diversas organizaciones que fueron surgiendo en forma autónoma. El Congreso de Desocupados de Neuquén (1996), el Congreso Nacional de Desocupados (1997) y la formación de la FTV (Federación por el Trabajo, la Vivienda y el Hábitat) –a los que se hará referencia más adelante– son distintas expresiones de este esfuerzo. A la vez que buscaba establecer una reglamentación sobre un movimiento independiente que estaba surgiendo, el objetivo de la dirección de la CTA, era ‘compensar’ su debilidad relativa en el movimiento sindical, donde sus posibilidades de penetración en los grandes gremios industriales habían encontrado rápidamente un techo y donde registraba, incluso, un retroceso en estatales y docentes, sus dos principales gremios.

Los planteamientos que levantaron las diferentes organizaciones de izquierda frente a la desocupación atacaban –con mayor o menor claridad y consecuencia– el beneficio capitalista, pero carecían de una reivindicación práctica susceptible de convertirse en el eje de una movilización y una organización de los desocupados (y, en consecuencia, carecían de un llamado a los desocupados a organizarse).

El PTP-PCR, por ejemplo, levantó el siguiente programa: “1) reducción de la jornada laboral; 2) la reactivación de la obra pública; 3) tierra y crédito para los campesinos pobres y medios; 4) aumento a 250 pesos del subsidio por desocupación (se refiere al ultra-limitado subsidio establecido por el menemismo y que sólo rige para los trabajadores ‘en blanco’ con un mínimo de años de aportes jubilatorios, Nota del Autor); 5) 450 pesos de jubilación mínima; la declaración unilateral de la moratoria de la deuda externa”. En cuanto a los medios para imponer este programa, el PTP-PCR planteaba que “es necesario que las fuerzas revolucionarias, clasistas y combativas se pongan al frente, sin vacilaciones ni titubeos, de las luchas en curso”.²¹ En este programa, representativo de los planteos de la mayoría de los partidos de izquierda, estaba ausente una reivindicación capaz de movilizar y organizar a los trabajadores desocupados y subocupados, que constituían el 30% de la fuerza laboral argentina, y de un llamado a la organización de los desocupados.

En este cuadro, se destacaba la posición adoptada por el Partido Obrero, que no sólo planteó la necesidad de atacar el beneficio capitalista para combatir la desocupación: “Para acabar con el desempleo hay que actuar contra la ‘lógica capitalista’, es decir, quebrar la política de las patronales de reducir los salarios, con medidas y métodos anticapitalistas”.²² Por sobre todo, el PO levantó un programa de lucha –reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; seguro al desempleado equivalente al salario; reducción de la edad jubilatoria; aumento general de los salarios; eliminación de los impuestos al consumo; plan de obras públicas; suspensión del cobro de los servicios públicos; no pago de la deuda externa que ponía en el primer plano las reivindicaciones directas susceptibles de convertirse en un eje de movilización y de organización de un movimiento de desocupados.

El punto más importante de este programa, sin embargo, no era una reivindicación dirigida al poder político; era el llamado a los desocupados a organizarse para imponerle al poder político esas reivindicaciones por medio de la lucha. Planteaba sintéticamente: “Comités contra la desocupación. Las centrales sindicales tienen la responsabilidad de convocar asambleas y congresos de trabajadores ocupados y desocupados, para librar una lucha común”.²³

“La clase obrera –se decía en julio de 1995– tiene planteada una lucha a muerte por la defensa de su integridad física y moral. Para la lucha es necesaria una organización. Entre los desocupados existen muy valiosos, experimentados y combativos activistas obreros y sindicales. El completo abandono de los desocupados por parte de la burocracia hace recaer sobre estos compañeros –y sobre las organizaciones de izquierda y los delegados y activistas antiburocráticos– la tarea de organizar a los desocupados. En las colas para buscar empleo y en los barrios donde se concentran los desocupados es posible –y necesario– forjar la organización y la movilización de los sin trabajo. Para reclamar a los sindicatos, para que tomen la lucha de los desocupados en sus manos y para que convoquen a deliberaciones y a una lucha común de los ocupados y los desocupados, quebrando la cuña que meten las patronales y los burócratas para dividir la lucha obrera. Y para manifestar sobre el poder político por el ‘derecho al trabajo’ mediante movilizaciones, cortes de ruta y ocupaciones de edificios (...). No hay ‘salida económica’ para acabar con el desempleo; sólo la ‘acción extraeconómica’ (política) de los trabajadores podrá impedir su degradación física y moral a manos de la burguesía”.²⁴

Esta orientación estratégica de trabajo del Partido Obrero frente a la nueva situación que abría la desocupación en masa y la inevitable resistencia de los trabajadores a esta catástrofe, fue balanceada, reexaminada y enriquecida, apenas unos meses después, en el VII Congreso del Partido Obrero, celebrado en diciembre de 1995. En ese Congreso participaron como delegados militantes que estaban a la cabeza de las organizaciones de desocupados que se estaban formando en las provincias y los municipios.

La Resolución Política del VII Congreso del PO planteaba como “tarea general para el próximo período (...) reconstruir y desarrollar la organización obrera y de las masas, reventada por la burocracia sindical de todas las tendencias (...) la organización de Asambleas Populares y Congresos de Bases, de organización de las luchas”.²⁵

“El VII Congreso del PO –señalaba la resolución política– llama a desarrollar a fondo todas las luchas existentes y organizarlas allí donde haya un reclamo pendiente, en la perspectiva de su unificación nacional: la huelga general. La reconstrucción de las organizaciones obreras sólo puede plantearse en estrecho contacto con las reivindicaciones apremiantes de los trabajadores y la lucha por imponerlas”. Entre estas reivindicaciones se planteaba, junto a un salario mínimo de 1.100 pesos, un subsidio al parado de 500 pesos. La resolución dejaba en claro que “no se trata, sin embargo, sólo de reconstruir los sindicatos, sino de desarrollar las organizaciones de las masas, extendiendo todas las formas de agrupamiento que se den en el curso de la lucha. Por embrionarias que sean, se trata de formas de organización de consejos obreros, desde el momento que en todo el curso de la lucha, (...) se convierten en un poder alternativo, sustituyendo en los momentos de alza a la burocracia (...) en caso de generalizarse y desarrollarse, se convertirán, además, en una referencia para todo el movimiento obrero (...) frente al poder del Estado”.²⁶ El desarrollo del movimiento piquetero ha seguido, en sus líneas generales, este pronóstico.

“Reconstruir la organización obrera (...). Organizar a los desocupados (...) en las colas de empleo y en los barrios (...) manifestar sobre el poder político (...) manifestaciones, cortes de ruta, ocupación de edificios”. Con este programa y este desafío se dirigió el Partido Obrero a la masa de activistas obreros y sindicales despedidos de las fábricas, de las grandes empresas privatizadas y de las obras y puso a sus propios militantes –desocupados y ocupados– a trabajar en la “organización de los desorganizados”. Rápidamente, quedó en claro que la situación política y de las masas estaba madura para la tarea.

15. Como toda medición de desempleo, especialmente en épocas de alta desocupación, estos registros minimizan el problema ya que no se considera “desocupado” a aquel trabajador que dejó de buscar empleo porque ha perdido las esperanzas de encontrarlo. Más tarde, cuando se implanten los “planes de empleo” (‘plan Trabajar’ y otros), las estadísticas no considerarán como “desocupado” a quien los reciba (lo cual es, naturalmente, un artilugio ya que recibe los ‘planes’ precisamente porque está desocupado).

16. El incremento de la tasa de desempleo ha sido paralelo al incremento de las horas trabajadas por los obreros ocupados. El turno promedio en la industria ha pasado de 8 horas a 10 horas e incluso a 12 horas (que es la jornada normal en el comercio). El sindicato minero, por ejemplo, ha firmado un convenio con la empresa Cerro Vanguardia (Santa Cruz) que establece una jornada anual de 2.400 horas, es decir, de 10 horas diarias (con el agravante de que el ‘cálculo anual’ de las horas le evita a la patronal el pago de las horas extras).

17. “(...) para poder oprimir a una clase es menester asegurarle, por lo menos, las condiciones indispensables de vida, pues de otro modo se extinguiría, y con ella su esclavizamiento (...). La situación del obrero moderno (...) lejos de mejorar conforme progresa la industria, decae y empeora por debajo del nivel de su propia clase. El obrero se pauperiza, y el pauperismo se desarrolla en proporciones mucho mayores que la población y la riqueza. He ahí una prueba palmaria de la incapacidad de la burguesía para seguir gobernando la sociedad e imponiendo a ésta por norma las condiciones de su vida como clase. Es incapaz de gobernar, porque es incapaz de garantizar a sus esclavos la existencia ni aun dentro de su esclavitud, porque se ve forzada a dejarlos llegar hasta una situación de desamparo en que no tiene más remedio que mantenerles, cuando son ellos quienes debieran mantenerla a ella. La sociedad no puede seguir viviendo bajo el imperio de esa clase; la vida de la burguesía se ha hecho incompatible con la sociedad”; Marx, Carlos y Engels, Federico, El Manifiesto Comunista, Marxists Internet Archive, 1999.

18. Página/12, 11 de julio de 1995.

19. “El desempleo es la mejor ley de flexibilización”, documento presentado por la CTA al Primer Encuentro Nacional sobre Desempleo, mayo de 1996.

20. Oviedo, Luis, “La curiosa política de la CTA para combatir la desocupación”, en Prensa Obrera, 23 de mayo de 1996.

21. Delfini, Miguel, “Desocupación: cómo combatirla”, en Hoy, 26 de julio de 1995.

22. “Para acabar con la desocupación hay que aumentar los salarios”, en Prensa Obrera, 25 de julio de 1995.

23. Idem anterior.

24. Oviedo, Luis, “Los sindicatos y la desocupación”, en Prensa Obrera, 25 de julio de 1995.

25. “Política nacional: una situación prerevolucionaria”, resolución del VII Congreso del Partido Obrero, en Prensa Obrera, 12 de diciembre de 1995.

26. Idem anterior.

Neuquén: cuna de los piqueteros

El movimiento piquetero dio sus primeros pasos en Neuquén, entre fines de 1994 y comienzos de 1995. La privatización de YPF, la paralización de la industria de la construcción, el virtual vaciamiento del Banco Provincial y la crisis de las finanzas públicas habían disparado la desocupación directa por encima del 20%; en los pueblos del interior neuquino, el desempleo era todavía mayor. En esos pequeños pueblos (Senillosa, Centenario, San Martín de los Andes, Plottier) y en los barrios de la capital provincial se formaron las primeras Comisiones (o Coordinadoras) de Desocupados y tuvieron lugar las primeras manifestaciones.

A fines de 1994, se organizó el primer corte de ruta en la provincia, en la localidad de Senillosa. Este pueblo, ‘dormitorio’ de los obreros de la construcción de las grandes represas, languidecía bajo la desocupación después de la finalización de la represa de Piedra del Aguila. El corte de ruta, protagonizado por los obreros de la construcción, arrancó con una asamblea popular y, en su desarrollo, arrastró a la huelga general a toda la ciudad.²⁷ Un verdadero ‘anticipo’ de lo que luego serían los Cutralcazos.

En la lejana San Martín de los Andes, para tomar un ejemplo de un movimiento que surgió de una manera similar en el interior neuquino, la “Comisión de la Asamblea de Desocupados” también se formó con trabajadores despedidos de la construcción. Dos de sus animadores –Daniel Huenaihue y Pedro Huaiquifil– explicaban que “algunos compañeros nos reunimos y decidimos convocar a una asamblea ante un invierno muy duro. Con mucha nieve nos reunimos 15 compañeros la primera vez. Allí decidimos seguir adelante (...). Se formaron comisiones de difusión y se convocaron nuevas asambleas, con participación creciente. Cada asamblea formaba una Comisión provisoria y desde el primer momento también decidimos que nuestro método de lucha iba a ser la movilización, las ollas populares, los cortes de ruta. En la cuarta asamblea se formó la Comisión hoy reconocida hasta por el propio Concejo Deliberante (...). Pusimos como condición que todo compañero que fuera electo para una Comisión tuviera mandato revocable”.²⁸

El relato de estos organizadores revela cómo el movimiento fue una genuina creación de las masas. Pero no de unas masas que empezaban ‘de cero’ sino que traían consigo la experiencia que habían ganado en el movimiento sindical. El funcionamiento por asamblea y la revocabilidad de los mandatos, por una parte, y los métodos de acción directa, por el otro, revelaban un agudo balance de los primeros organizadores del movimiento piquetero respecto de la burocracia de los sindicatos y sus métodos.

En la capital provincial los desocupados también se organizaron y comenzó a activar una Coordinadora, con delegados de unos 20 barrios, que funcionó en un local de la zona oeste, donde se encuentran las barriadas más obreras. El PO y el MAS eran las fuerzas políticas que intervinieron activamente en este intento de organización de los desocupados en Neuquén.

Los reclamos y las movilizaciones a los municipios del interior provincial y el masivo empadronamiento de desocupados que empezaron a realizar las Comisiones, obligaron a las centrales sindicales de la provincia a convocar una marcha para el 9 de agosto de 1995. Un día antes, el gobierno de Sobisch (del Movimiento Popular Neuquino, el partido patronal provincial) sacó la “ley 2128”, que establecía un subsidio de 200 pesos para los jefes de familia desocupados... pero sin reglamentarla, lo que indicaba que sólo buscaba desarmar la movilización con promesas.

Con la sanción de la ley, e inmediatamente con la exigencia de su pago, el movimiento pegó un salto. En Neuquén Capital, el pago del primer mes de la “2128” fue impuesto bajo presión: ante la falta de respuestas, los desocupados ocuparon la Intendencia y permanecieron allí hasta que se les pagó; también en Senillosa, los desocupados tomaron la Municipalidad y anunciaron que no se retirarían hasta cobrar el subsidio; lo mismo ocurrió en San Martín de los Andes.

Bajo presión, el gobierno cedió y reglamentó la ley, pero estableciendo condiciones restrictivas para su otorgamiento: se requería ser sostén único de familia con hijos y tener una residencia mínima de dos años en la provincia (cinco para los extranjeros). Aunque la “2128” fue la primera victoria del movimiento (al día siguiente de su reglamentación, había varias cuadras de cola en los locales donde se inscribía), las organizaciones de desocupados de la provincia criticaron sus enormes limitaciones (en primer lugar su monto; además que fuera restringida sólo a los jefes de familia con residencia prolongada y que no se reconociera a la madres solteras como “jefes de familia”) y siguieron reivindicando la consigna que había dado nacimiento al movimiento: el subsidio de 500 pesos a todos los desocupados mayores de 16 años, sin discriminación.

Para administrar el pago de la “2128” se estableció una Comisión integrada por el gobierno, la Iglesia, la CGT y la CTA... que eran opositores al subsidio en nombre del “pleno empleo” y de la “dignidad del trabajador”. En esto eran respaldados por un grupúsculo, los llamados ‘bolcheviques’, que se había encaramado en la directiva del gremio docente de la Capital neuquina (junto con el MAS y el MST).²⁹ Por eso, sindicalistas oficialistas y opositores, clérigos y ‘bolcheviques’, apoyaban poco después la “contraprestación laboral” que comenzó a exigir el gobierno provincial a los “beneficiarios” de la “2128”. Pero al exigir una “contraprestación laboral”, el subsidio era desnaturalizado: dejaba de ser un límite impuesto por la lucha obrera a la competencia entre los trabajadores ocupados y desocupados y se convertía en su opuesto: un salario miserable por un trabajo precario, flexibilizado, en negro y sin derecho a la afiliación sindical... que establecía un nuevo “mínimo” de miseria para el conjunto del movimiento obrero.

La sanción de la “2128” potenció al movimiento: pocos días después, la Coordinadora de Desocupados de Neuquén Capital, realizó una gran manifestación de 3.000 compañeros para reclamar el aumento del subsidio y su pago sin discriminación a todos los desempleados. Para el gobierno era imperativo golpear a los piqueteros.

La ‘democracia’ contra los piqueteros

El gobernador Sobisch montó una provocación: incumplió el segundo pago de la “2128”, un anticipo de que pensaba anularla apenas pasaran las elecciones provinciales, a realizarse pocos días después. El 2 de octubre, más de mil desocupados marcharon a la Gobernación para reclamar el pago de lo adeudado; primero la rodearon y luego ingresaron en ella. Una delegación de la Coordinadora se entrevistó con las autoridades, a las que –además de diversas reivindicaciones– les entregó 50 proyectos de obras en toda la provincia. Jorge Mora, uno de los integrantes de la Coordinadora, relata lo que sucedió entonces en la Casa de Gobierno: “En mitad de la reunión, en un cuarto intermedio, se desencadenó un estudiado operativo represivo. Palos, balas de goma, gases, dentro y fuera de la Casa de Gobierno, se descargaron sobre los desocupados y sus familias. Esa tarde fue detenido, en la desconcentración, Horacio Panario (militante del MAS, de la Coordinadora y candidato por el Frente de Izquierda integrado por el PO y el MAS) y se inició una batida policial por los barrios contra los ‘activistas’ de la Coordinadora. El gobierno había montado una provocación”... que rápidamente fue instrumentada por los medios de comunicación y todas las fracciones de la burguesía y la burocracia contra el movimiento de los desocupados.³⁰ En los días siguientes se libraron decenas de órdenes de captura contra dirigentes y miembros de la Coordinadora.

Las elecciones realizadas inmediatamente después se desarrollaron en un clima de terror. Los principales candidatos del Frente de Izquierda, formado por el Partido Obrero y el MAS, entre los que se encontraban los más destacados dirigentes de las Coordinadoras de Desocupados (no sólo de Neuquén Capital sino también de Cutral Co, Plottier, San Martín de los Andes y Centenario), estaban con orden de captura. La provocación contra los desocupados era, también, un ataque contra la fusión de la izquierda con el movimiento de lucha de los explotados. Aunque ganó el MPN, se registró un muy alto voto en blanco (10% en la provincia; 20% en San Martín de los Andes), evidenciando una extendida desconfianza.

La provocación del gobierno provincial puso de manifiesto el carácter antiobrero de las direcciones sindicales de la provincia, incluidas las de la 'izquierda'. El 'movimiento sindical' hizo causa común con la 'democracia' contra los desocupados, es decir, que se solidarizó con el representante político de los explotadores contra el sector más explotado de la clase obrera.

El Comité de la "2128", integrado por la CGT y la CTA, denunció con nombre y apellido a "los activistas que no respetan el estado de derecho", pidiendo que "se actuara contra ellos en forma inflexible". El sindicato docente provincial (Aten) condenó "los hechos de violencia" (atribuyéndoselos a los desocupados); su seccional Capital, dirigida por los 'bolcheviques', reclamó la renuncia de algunos de sus miembros por haber apoyado la movilización, a la que calificó como un "hecho aventurero, que provoca el rechazo de los trabajadores organizados". En un pico de furia antipiquetera, los (quién sabe por qué) denominados 'bolcheviques' llegaron a exigir la expulsión del gremio docente de la esposa de Horacio Panario, miembro de la directiva del sindicato, contra la que recaía la única 'imputación' de ser esposa de uno de los detenidos.³¹

La política común de estas direcciones –desde la CGT menemista hasta los 'bolcheviques', pasando por la CTA– fue incumplir uno de los deberes y principios irrenunciables de todo luchador: la defensa incondicional de cualquier otro luchador o trabajador frente a la patronal y a la represión, sin que ello signifique un apoyo político a ese trabajador o movimiento de trabajadores. Se habían pasado al campo del enemigo de clase. Dos años más tarde, en ocasión del segundo Cutralcazo, se verían los extremos a los que serían capaces de llegar estas direcciones contra los desocupados y contra el movimiento de lucha de los explotados.³²

Bajo la presión, el MST y el MAS dejaron de participar en la Coordinadora de Desocupados. El PTP-PCR, por su parte, emitió un comunicado negando que su dirigente Mario Cambio hubiera participado en la movilización del 2 de octubre. No se trataba de un hecho aislado: el secretario general de Adunc (docentes universitarios de Neuquén), Tiscornia, se negó a que el gremio saliera en defensa de la Coordinadora de Desocupados, de Panario y de los perseguidos (había decenas de compañeros con orden de captura).³³ Posteriormente, el PTP-PCR desarrollaría un amplio trabajo de organización del movimiento de los desocupados, lo que significó un notable giro respecto de su política inicial frente al movimiento piquetero.

Mientras las direcciones sindicales de la provincia (CTA, ATE, Aten) establecían una tregua con el 'nuevo' gobierno³⁴, la Coordinadora de Desocupados libró una lucha tenaz para impedir que se la disolviera bajo la presión represiva del Estado (avalada por la burocracia sindical), para mantener el pago de la "2128" y para imponer la libertad de Horacio Panario (al que más tarde se sumaría Alcides Christiansen) y el cese de la persecución contra los desocupados. Naturalmente, libró esta lucha con métodos piqueteros. Recorrió los barrios, denunció que el objetivo del gobierno era liquidar el subsidio y continuó empadronando desocupados. Le asestó una derrota decisiva a la dirección docente carnera cuando, contra su oposición, logró ingresar en una asamblea general del gremio para denunciar el ataque represivo oficial y a las burocracias sindicales que se pusieron del lado del gobierno; la asamblea docente aprobó por unanimidad la exigencia de que se publicara una solicitada de apoyo a la lucha de la Coordinadora.

El 24 de octubre, tres semanas después de la provocación, la Coordinadora volvió a la calle: una columna de mil compañeros marchó a la Casa de Gobierno para exigir la libertad de Panario y el cese de las persecuciones y órdenes de captura contra los desocupados y los partidos de izquierda. La provocación había fracasado: el movimiento seguía en pie.

A los piqueteros neuquinos les esperaban luchas fundamentales en los próximos meses.

27. Ver Prensa Obrera, 1º de diciembre de 1994.

28. "De la Comisión de Desocupados de San Martín de los Andes", en Prensa Obrera, 5 de setiembre de 1995.

29. Las elecciones de Aten Capital habían sido ganadas por un frente de izquierda integrado por los 'bolcheviques', el MST, el PO, y el MAS. A comienzos de 1995, en base a una provocación, los 'bolcheviques' y sus aliados habían expulsado de la Directiva del sindicato a Silvia Cochet, dirigente de Tribuna Docente y del Partido Obrero.

30. "Neuquén: hubo provocadores pagados por el gobierno", reportaje a Jorge Mora y Norma Erize, en Prensa Obrera, 10 de octubre de 1995.

31. Los 'bolcheviques' desarrollaron extensamente sus posiciones políticas antipiqueteras, que ya se habían manifestado, antes de la provocación, en su rechazo al subsidio de la "2128", al que oponían el "pleno empleo". "Los 'bolcheviques' rechazan el subsidio integralmente, lo consideran 'indigno' y transfieren la 'dignidad' al 'pleno empleo', es decir, a la condición de explotado. La aspiración socialista a la dignidad humana –que el libre desarrollo de cada uno sea la medida del libre desarrollo de todos–, los 'bolcheviques' pretenden realizarla mucho más cerca y con domicilio conocido, el 'pleno empleo', o sea, la explotación del hombre por el hombre (...). Pero dejando de lado la factibilidad del 'pleno empleo' en el actual período de descomposición capitalista, es decir, aún si dejamos de lado que la respuesta a la desocupación no vendrá del 'pleno empleo', es decir del capitalismo, sino del socialismo; dejando de lado esto, ¿qué hacer hasta que llegue el 'pleno empleo'? ¿Morirse de hambre o reclamar que los capitalistas paguen un subsidio a quienes ellos han dejado sin medios de ganarse la sobrevivencia? La directiva de Aten Capital debe estar gozando de una buena alimentación, si se tiene en cuenta su desprecio por el subsidio. No reparó siquiera en su coincidencia con el obispado de Neuquén, que admite la caridad pero rechaza el subsidio, lo que sólo se explica porque éste fue impuesto al Estado por la lucha de los trabajadores. A la larga, ningún Estado capitalista estará dispuesto a mantener un régimen de subsidios, forzando a los trabajadores a luchar por objetivos más estratégicos (...). Los 'bolcheviques' pueden ver su sueño realizado antes de lo que esperan, esto porque Sapag prometió que exigirá una 'contraprestación laboral' a los que reciben el subsidio, lo cual podría llevar, 'si es aplicado consecuentemente', a un pleno empleo de 200 pesos..." (Altamira, Jorge, "Delincuentes vuelven al lugar del crimen", en Prensa Obrera, 31 de octubre de 1995.

32. Los docentes del Partido Obrero integraban, junto a los docentes del MST, el MAS y los 'bolcheviques' de Aten Capital, la Lista Rosa nacional de la Ctera. Frente a su política de carnereaje de la lucha de los desocupados, los docentes del PO reclamaron que los integrantes de la directiva de Aten Capital fueran expulsados de la Rosa. Las restantes corrientes que la integraban rechazaron la moción. En las elecciones provinciales de Aten, en 1996, los docentes del PO, junto con otros sectores críticos, impulsaron la Lista provincial Marrón-Rosa, de oposición a las direcciones provincial y de Capital de Aten.

33. Ver Santos, Rafael, "¿Por qué el Ptp-Pcr no impulsa la causa por la libertad de Panario?", en Prensa Obrera, 5 de diciembre de 1995.

34. Felipe Sapag, también del MPN aunque de una línea interna distinta, había reemplazado a Jorge Sobisch como gobernador.

Se extiende el movimiento

A partir de mediados de 1995, bajo la presión del crecimiento imparable de la desocupación y del infatigable esfuerzo de centenares de activistas, trabajadores y militantes, comienza a extenderse la organización de los desocupados en todo el país.

Buenos Aires

En el Gran Buenos Aires, la situación social era tan explosiva como en el Interior; los índices de desocupación y de miseria no eran inferiores a los de Neuquén, Salta o Jujuy. Pero el gobierno menem-duhaldista, consciente del peso político del conurbano, había montado una amplia red asistencialista-punteril: las ‘manzaneras’. Para financiar su actividad, el gobierno de Buenos Aires disponía de un fabuloso “fondo de reparación histórica” de 600 millones de dólares anuales. De una manera mucho más evidente que en cualquier otro lado, la lucha por la organización de los desocupados era, en Buenos Aires, una lucha por la independencia política de los explotados.

A pesar de esos enormes recursos, Duhalde ‘llegaba tarde’: seis años de menemismo, de privatizaciones, de liquidación de los convenios, de los salarios y de las jubilaciones y de entrega al imperialismo estaban demoliendo al peronismo como un factor de control político de las masas. Cada nuevo paso del gobierno derrumbaba las posibilidades de su política ‘asistencialista’. El sólo hecho de que Duhalde se viera obligado a montar esta organización por fuera de las estructuras tradicionales del justicialismo estaba revelando el agotamiento del peronismo como dirección política popular. Una militante del PO, conocedora de la zona de Presidente Perón, cuenta la experiencia de los trabajadores con el asistencialismo de Duhalde: “El censo que estamos haciendo –muy completo, por cierto– nos va revelando, entre los datos y opiniones que nos dan los desocupados de la zona, que no comen vidrio, que las dádivas de este tipo ‘no les resuelven el problema del corte de luz por falta de pago, los juicios por desalojo, etcétera’, y luego de muchos etcéteras, llegan a la síntesis de que estos planes no les resuelven nada. Que lo que quieren es trabajo y no limosna”.³⁵

Las primeras manifestaciones de desocupados en la provincia tuvieron lugar en Bahía Blanca, entre setiembre y octubre de 1995. Una carpa frente a la Intendencia reunió a 800 compañeros durante más de una semana y logró que se adjudicaran más de un centenar de ‘planes de empleo’ provinciales.

En el Gran Buenos Aires, la organización creció de manera más lenta y dificultosa por la presión de los grandes aparatos políticos. Visto retrospectivamente, salta a la vista el enorme desarrollo que ha tenido el movimiento piquetero: hoy las ‘manzaneras’ han desaparecido y el movimiento piquetero, que se extiende por toda la provincia y el país, es una referencia política para el pueblo trabajador.

En La Matanza, los primeros intentos de organizar el movimiento de los desocupados estuvieron ligados a la experiencia de los piqueteros neuquinos: en noviembre de 1995, en Laferrere, se realizó una reunión convocada para luchar por la libertad de Horacio Panario. Participaron vecinos de un puñado de barrios que contaban con una organización, con delegados por manzana; allí se decidió impulsar la formación de una Comisión de Desocupados de La Matanza.

En el ‘96, se plantearon los primeros reclamos de los barrios a la Intendencia y se organizaron ollas populares en las barriadas. La lucha por la organización en los barrios adquirió inmediatamente un carácter de enfrentamiento físico con los punteros y sus patotas. El delegado de uno de esos barrios denunciaba entonces que “tuvimos aprietes de parte de los punteros, hay rumo-

res de que van a seguir las patotas, nos robaron el megáfono, a dos compañeros les pegaron en la cancha el domingo porque están con la comisión. A nosotros mismos nos están proponiendo que nos abramos, que nos dejemos de joder, que ésta es una lucha en vano y que no vamos a ganar nada. En la municipalidad nos presionan ofreciéndonos microemprendimientos para que nos abramos de la comisión y que paremos el movimiento. Hay que seguir porque ellos no nos dan nada, nosotros peleamos por lo que es nuestro”.³⁶

En el movimiento convivían diferentes tendencias políticas (Frepaso, CTA, PTP-PCR, PO). Se planteó el debate sobre la consigna que debía orientar estratégicamente el movimiento. Si era el reclamo de un subsidio de 500 pesos para todos los desocupados y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario –como se reclamaba en Neuquén– o si, por el contrario, el eje del programa debía ser –como sostenía Juan Carlos Alderete, del PTP-PCR– “un punto irrenunciable: comida, y a partir de allí un programa que reclamaba puestos de trabajo, reactivación de la industria y planes del Estado”³⁷, es decir, que excluía explícitamente el subsidio al desocupado y la escala móvil de las horas de trabajo. Naturalmente, la reivindicación del subsidio y el reparto de las horas no excluyen el reclamo de alimentos ni la aceptación de ‘planes’ sino que establece el objetivo más general del movimiento que jamás puede ser un ‘trabajo’ flexibilizado de 150 ó 200 pesos que establece una competencia directa con los obreros ocupados.

En mayo de 1996, con base en la organización del Barrio de María Elena (del cual Juan Carlos Alderete era presidente de la Junta Vecinal), se montó una olla popular frente a la Intendencia; su programa era alimentos y ‘planes’. Se obtuvieron bolsas de alimento que ayudaron a fortalecer el movimiento.

El 19 de junio de 1996, en lo que fue la primera manifestación conjunta de los desocupados de La Matanza, un millar de trabajadores de veinte barrios se concentraron en Ruta 3 y Camino de Cintura para marchar a la Intendencia. La policía rodeaba el edificio municipal. Ni el intendente ni el Concejo Deliberante respondieron a los reclamos y, finalmente, se ordena la represión. Pero ni la represión ni los ‘aprietes’ podrían detener el proceso de organización que había comenzado.

También en el sur del Gran Buenos Aires los desocupados empezaron a organizarse en los barrios. Como en La Matanza, el debate político era álgido. Miguel Vittone, organizador de la Coordinadora de Desocupados de Berazategui, relata el debate que se planteó en los inicios del movimiento en torno a su programa y sus perspectivas: “Se ha organizado en Barrio Argentino una Comisión de Desocupados, fruto de una asamblea de más de 30 compañeros. Se debatió la propuesta de elevar un petitorio a las autoridades reclamando que se efectivicen los derechos consagrados en la Constitución Nacional... y la ONU, la cual fue rechazada por no tener reivindicaciones concretas (...) finalmente se votó un programa de lucha de 500 pesos a los desocupados a partir de los 16 años, no al corte de los servicios a los desocupados y jubilados; eximición de impuestos a los mismos; protección a la niñez (...)”.³⁸ El debate continuó. Otra vez explica Miguel Vittone: “En la segunda asamblea, la concurrencia fue mayor, y también mayor fue el debate político. Un integrante de la Comisión (del Frepaso) intentó infructuosamente levantar el programa votado en la asamblea anterior (y presentó un “documento” que: 1) desconoce la organización de los desocupados, al plantear la formación de un ente entre el gobierno, los empresarios, la Iglesia, los sindicatos... y los inversionistas; 2) encubre el subsidio a las empresas privadas (...) detrás del reclamo de ‘reactivación de la obra pública y privada’; 3) cambia la consigna de 500 pesos a los desocupados a partir de los 16 años, por el reclamo de que se repartan... comida y útiles (...) La Comisión desenmascaró estos planteos, explicó su rechazo y llamó a defender el programa votado”.³⁹

Este debate, y otros similares que se iban registrando en las Coordinadoras, tenían una importancia vital para el desarrollo del movimiento piquetero. La integración del movimiento de los desocupados al aparato estatal que planteaba, por ejemplo, el Frepaso de Berazategui, lo convertiría en una réplica de las ‘manzanas’ duhaldistas. Aún no había desarrollado un programa más general frente a la crisis, pero ya desde sus inicios los sectores más conscientes del movimiento entendían que las reivindicaciones se obtendrían como el fruto de la movilización política y de la organización independiente del Estado.

Con la clarificación política se desarrolló la movilización. Todos los lunes del mes de agosto de 1996, la Coordinadora de Berazategui montó una olla popular, a la que semanalmente concurrieron más de cien compañeros. La Municipalidad rechazó el reclamo del subsidio pero ofreció bolsas de comida. La asamblea en la olla popular rechazó los argumentos oficiales (“dicen que no hay plata, pero la plata está, sólo que la desvían para el pago de la deuda usuraria y el subsidio a los capitalistas”), ratificó el reclamo del subsidio y decidió aceptar las bolsas de comida bajo la condición de que fueran repartidas por la Coordinadora y no por los punteros del PJ. Esto, porque como explicaban los compañeros, la misma bolsa de comida repartida por un puntero es una limosna; repartida por la Coordinadora es una conquista que fortalece la organización. Ya en sus pasos iniciales, los piqueteros tenían en claro que habían entablado una lucha contra el aparato del Estado por el control y la dirección del movimiento de masas.

Con debates similares, con la misma lucha política y enfrentando las mismas trabas y aprietes de los punteros y las autoridades municipales, y con los mismos métodos de movilización, el movimiento piquetero se fue extendiendo en el Gran Buenos Aires (Florencio Varela, Quilmes, Villa Jardín, Villa Unión, San Martín) y en el resto de la provincia (además de Bahía Blanca, se formaron coordinadoras en La Plata, Ensenada, Mercedes y Carlos Casares).

Junto con la extensión del movimiento, comenzaron también los esfuerzos por su coordinación. El 27 de junio de 1996 se realizó en San Justo un plenario “pro-marcha de los desocupados del conurbano bonaerense”: por primera vez, el movimiento piquetero se planteaba una proyección más allá de los límites municipales. Asistieron 87 organizaciones (aunque la mayoría eran organizaciones políticas); la Mesa de la Asamblea estuvo constituida por representantes de las organizaciones de desocupados de La Matanza, Berazategui, Villa Unión y por un representante de la Correpi. El 6 de setiembre de 1996, por primera vez, el movimiento piquetero marchó a la Plaza de Mayo. La “Marcha contra el hambre, la desocupación y la represión” congregó a mil compañeros, en su mayoría organizados por las Comisiones de Desocupados; se destacaron las columnas de La Matanza y Berazategui. Néstor Pitrola, que habló en nombre del Partido Obrero, cerró su intervención “con un llamado a impulsar la convocatoria a un Congreso Nacional de Desocupados, que discuta un programa y una estrategia y le dé un marco y una perspectiva nacional a la lucha planteada”.⁴⁰

A fines de 1996, el movimiento piquetero había establecido una sólida ‘cabeza de playa’ en el corazón de la mayor concentración proletaria de Argentina y bastión histórico del peronismo: el cordón industrial del Gran Buenos Aires.

Córdoba

Los primeros pasos del movimiento en Córdoba mostraron los recursos políticos y económicos que el Estado estaba dispuesto a movilizar para impedir la organización independiente de los desocupados. La Comisión de Desempleados nació del esfuerzo de un puñado de activistas que se largaron a empadronar a los desempleados de la capital mediterránea: en poco más de un mes de trabajo, que comenzó a principios de 1996, habían empadronado 700 compañeros y editado el primer número de su boletín.

La “Declaración programática” que aprobó una asamblea de desocupados a fines de abril de ese año tiene un profundo contenido anticapitalista. Responsabiliza por la desocupación al régimen social capitalista; denuncia “que la desocupación no es la consecuencia de un supuesto ‘desarrollo tecnológico’ (y que) el aumento de la productividad se había logrado a expensas de la explotación del trabajador”. Denuncia también “la superexplotación de los compañeros desempleados que impulsan el gobierno nacional y los provinciales con los llamados ‘programas de empleo’ (que) pretenden valerse de la desocupación para establecer de hecho un ‘salario mínimo’ inferior a un peso la hora...” y formula una aguda crítica a la burocracia sindical: “La lucha contra la desocupación, que resulta de esta política, no es asumida por las organizaciones gremiales, dejando a los trabajadores sin trabajo despojados de toda protección”.⁴¹ Finalmente, planteaba un conjunto de reivindicaciones –la primera de las cuales era el subsidio de 500 pesos

para todos los desempleados mayores de 16 años– que fue entregada como petitorio al gobierno municipal a fines de mayo de 1996.

Al mismo tiempo, la Comisión seguía extendiendo su trabajo de empadronamiento. En julio ya había empadronado a 6.400 desempleados y había comenzado a realizar asambleas en tres barrios. Sobre la base de esta movilización, convocó a una asamblea en Luz y Fuerza, a la que concurrieron 800 compañeros y que contó con la participación de una delegación de los desocupados de Neuquén. Al reunirse la asamblea (mediados de agosto), el número de empadronados había trepado a 9.000 y la organización alcanzaba a diez barrios. La asamblea resolvió marchar dos semanas más tarde a la Municipalidad a reclamar la respuesta a su petitorio. En la movilización participaron 600 compañeros organizados de once barrios y se había reunido un padrón de 10.000 desocupados.

Ante el rápido crecimiento de la Comisión –tanto en el número de empadronados como en el de barrios organizados– el gobierno municipal (radical) montó una maniobra para dividir el movimiento: desconoció a los miembros de la delegación votada en la asamblea y digitó una ‘delegación’ con la cual previamente había acordado una ‘ayuda oficial’ para lanzar ‘microemprendimientos’... que no figuraban en el programa de la Comisión.

José Carpio, de la Coordinadora de Desempleados, explicaba entonces por qué la asamblea había rechazado el planteo de los ‘microemprendimientos’: “No son una salida a la desocupación; son proyectos ‘independientes’, inciertos, montados sobre el esfuerzo laboral de los participantes, sin un salario asegurado, para trabajar como proveedores semigratuitos de las grandes empresas (...). Contemplan una infinitésima parte de los desocupados, que en Córdoba llegan a 500.000”.⁴² No casualmente, muchos de los desocupados habían llegado a la Coordinadora después de haber hecho su experiencia y de haber perdido las indemnizaciones que habían cobrado por sus despidos en los más variados tipos de ‘microemprendimientos’. La evidencia de que se trataba de una maniobra para reventar a un movimiento genuino llevó a un periodista a calificar a este grupo como ‘Desocupados S.A.’...

El movimiento se dividió. Aunque los primeros organizadores y una parte de los desocupados se quedó en la Coordinadora, su ascenso se interrumpió. El clientelismo de los agentes del gobierno y la utopía de los “microemprendimientos” se mostraban tempranamente como destructores del movimiento de los desocupados.⁴³

35. Victoria, “Las ‘manzaneras’ de Duhalde”, en Prensa Obrera, 12 de diciembre de 1996.

36. “Luchamos por 500 pesos para todos los desocupados”, reportaje a tres delegados de la Comisión de Desocupados de La Matanza, en Prensa Obrera, 7 de agosto de 1996.

37. Alderete, Juan Carlos / Arnoldo Gómez, “La desocupación en el infierno menemista”, Cuadernos de Editorial Agora, Nº 6, marzo de 1999.

38. Vittone, Miguel, “Berazategui, capital nacional de la desocupación”, en Prensa Obrera, 4 de abril de 1996.

39. Vittone, Miguel, “El Frepaso boicotea; la organización crece”, en Prensa Obrera, 25 de abril de 1996.

40. “Marcha del 6 de setiembre”, en Prensa Obrera, 12 de setiembre de 1996.

41. “Declaración programática de la Comisión de Desempleados de Córdoba”, en Prensa Obrera, 2 de mayo de 1996.

42. Carpio, José, “La Coordinadora de Desempleados de Córdoba pasó una importante prueba”, en Prensa Obrera, 12 de setiembre de 1996.

43. El sindicalismo centroizquierdista de Córdoba colaboró, por sus propias razones, en el ataque gubernamental a la Coordinadora de Desempleados. En una carta enviada a Prensa Obrera, José

Carpio, dirigente de la Coordinadora, denunció que las organizaciones sindicales convocantes del acto del 1º de Mayo de 1997 (plenario de Luz y Fuerza), rechazaron el reclamo de la Coordinadora de intervenir con un orador (sólo se leyó una adhesión) pero “la tribuna fue cedida a un individuo responsable de cobrar 5 pesos el empadronamiento de los desempleados; que en complicidad con los legisladores hace llenar solicitudes de trabajo para Fiat; que se pronunció a favor del intendente en la lucha de los municipales” (“‘Agente encubierto’ habla el 1º de Mayo en Córdoba”, carta de José Carpio, en Prensa Obrera, 22 de mayo de 1997).

Problemas estratégicos

Los debates planteados en Berazategui y en La Matanza se reprodujeron, de una manera general, en todo el movimiento de desocupados porque tenían un evidente carácter estratégico.

¿El movimiento piquetero debía organizarse independientemente, como una organización obrera, es decir, como un “sindicato de desocupados”, y tender a la unidad con el movimiento obrero organizado, o debía ser parte de un movimiento más amplio, ‘multisectorial’, con los sectores patronales perjudicados por la política económica menemista?

Directamente ligado a lo anterior, se planteaba el problema de si el naciente movimiento debía levantar sus propias reivindicaciones, ligándolas al conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero contra la flexibilización y la rebaja salarial, o si, por el contrario, debía levantar reivindicaciones de otras clases, e incluso de clases hostiles a la clase obrera, como el reclamo de la “reactivación” o de los subsidios crediticios y fiscales para las Pymes.

Incluso estaba en debate cuál debía ser la consigna que orientara estratégicamente al movimiento: el subsidio de 500 pesos para todos los desempleados mayores de 16 años y el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios o el otorgamiento de ‘planes de empleo’ y asistencia alimentaria.

Lo que estaba en juego en el debate era la propia definición de clase y el futuro del movimiento.

“Reactivación”

El planteo ‘reactivador’ y de subsidios a las Pymes era levantado por la CTA y el PTP-PCR. Su base teórica era que sólo la elevación de la tasa de beneficio capitalista podría reducir el desempleo.

Pero el desempleo masivo es, precisamente, la expresión de que la acumulación del capital ha chocado con los límites que le son propios, es decir que el capital se ha “sobrecumulado”, creando una masa de capitales y mercancías excedentes que derrumban la tasa de beneficio. Las crisis –es decir, la autodestrucción de una parte del capital y de las fuerzas productivas como una condición para el relanzamiento de la acumulación capitalista– es el método bárbaro de que se vale el capitalismo para ‘purgarse’ de tales excesos. La crisis liquida una parte del capital instalado (quiebras, absorciones, fusiones) y permite aumentar la explotación del trabajo asalariado, sentando las bases para un nuevo ciclo de acumulación.

No es el aumento del beneficio capitalista lo que eleva el empleo; al revés, es el aumento del desempleo lo que permite recomponer el beneficio capitalista. Mientras los capitales y las mercancías excedentes no hayan sido destruidos, ningún subsidio elevará la producción ni permitirá emplear trabajadores adicionales porque ningún capitalista producirá mercancías que no puedan venderse ni contratará trabajadores para producir tales mercancías. Tal es la experiencia concreta del fracaso de dos décadas de ‘planes de promoción del empleo’ en Francia.⁴⁴

El problema no es la reactivación industrial sino el proceso capitalista de la reactivación industrial, que está basado en el incremento de la superexplotación de los trabajadores por la vía de la flexibilización, el alargamiento de la jornada laboral y la rebaja de los salarios. Esto explica el hecho –que los partidarios de la consigna de la ‘reactivación’ pasaban completamente por alto– de que en los primeros años del ‘plan Cavallo’, el aumento de la desocupación había ido de

la mano del crecimiento industrial y comercial. “El reclamo de ‘reactivación de la industria nacional’ no corresponde al movimiento de lucha de los desocupados, sino a los pulpos exportadores y a la burguesía nacional en quiebra, que hoy pide la baja de los aportes patronales para la seguridad social, no pagar más impuestos y recibir nuevos subsidios”.⁴⁵

El reclamo de que se subsidiara a las Pymes, a su vez, pasaba por alto el hecho de que el gran capital absorbe cualquier subsidio que éstas puedan recibir. Los precios a los que las Pymes deben comprar sus insumos y vender sus productos a las grandes empresas se convierten en un instrumento para extraerle al pequeño capitalista una parte sustancial de sus potenciales beneficios; adicionalmente, el cobro de tasas usurarias a las Pymes por el gran capital bancario complementa esta ‘expropiación’ del pequeño capitalista por el grande. La aguda concentración económica operada bajo el ‘plan de convertibilidad’ había profundizado este proceso de expropiación del pequeño capitalista, porque las Pymes que habían quedado en pie se encontraban bajo una dependencia absoluta del gran capital, tanto en términos financieros (endeudamiento) como productivos (patentes, tecnología, mercados). La ‘tercerización’ o subcontratación a empresas más pequeñas, de procesos productivos que antes se realizaban en las grandes empresas, había convertido a muchas Pymes en virtuales ‘secciones’ de las grandes plantas.

El planteo de subsidios a las Pymes y de ‘incentivos’ tendientes a la reactivación industrial estuvo presente, en sus inicios, en los programas de la inmensa mayoría de los movimientos de desocupados. Esto porque transmitía la idea de que los capitalistas, al igual que los trabajadores, son perjudicados por la crisis y que, por lo tanto, existiría un interés común y una salida común a explotados y explotadores. Pero lo que es verdad para el capitalista individual –que va a la quiebra como consecuencia de la crisis– no lo es para el régimen capitalista en su conjunto, ya que la crisis le permite deshacerse de los capitales (y los capitalistas) excedentes y recomponer la tasa de beneficio de los capitalistas ‘sobrevivientes’ elevando la explotación sobre la clase obrera.

En este terreno se ha producido una evolución política y una delimitación programática en la misma medida en que los movimientos de desocupados fueron pasando por la experiencia de ver que las Pymes recibían subsidios... sin crear un solo puesto de trabajo. Así, por ejemplo, el programa aprobado en el Congreso de los trabajadores desocupados del norte de Salta (diciembre de 2000) o la resolución aprobada en la II Asamblea Piquetera Nacional (septiembre de 2001) no levantan entre sus reivindicaciones el subsidio a las Pymes.

“Multisectoriales”

El planteo ‘multisectorial’ –es decir, la integración de los movimientos de desocupados en frentes más ‘amplios’, que incluyan a sectores patronales perjudicados por la política económica oficial– era reivindicado por la CTA y el PTP-PCR. Esto era algo natural ya que su programa reivindicaba lo que pretendían era un interés común de trabajadores y capitalistas: la reactivación industrial y los subsidios a las Pymes.

El PTP-PCR, reivindicaba especialmente a la ‘multisectorial’ de Jujuy, escenario de una de las crisis económicas y políticas más álgidas de todo el país y de una importantísima lucha de masas, en particular de los empleados estatales. El PTP-PCR jugaba un papel importante en esa provincia a través de Carlos ‘Perro’ Santillán, dirigente del gremio municipal y del Frente de Gremios Estatales.

A fines de 1995, la provincia estaba en quiebra: la deuda estatal superaba los 600 millones de pesos, una cifra pavorosa en relación a su economía; el banco provincial estaba en quiebra, saqueado durante años por los capitalistas de adentro y de afuera; y el empapelamiento en bonos había llevado al derrumbe de su valor. Los docentes, empleados y obreros de la administración pública cobraban el 100% de su salario en bonos sin valor y acumulaban atrasos de hasta dos meses. En ese cuadro, “el Frente de Gremios Estatales, centro de la resistencia popular en la provincia, a instancias del sindicato municipal, se integró en una ‘multisectorial’ que reunía al

99% de las fuerzas patronales de la provincia y al 100% del clero. Concretamente, ‘el Obispado de Jujuy, la Unión Industrial de Jujuy, la Unión de Empresarios de Jujuy, la Cámara de Hoteleros, la Cámara de la Construcción, Supermercadistas’ y la lista sigue. Eso significa que el frente no se limitaba a los ‘pequeños y medianos empresarios’.⁴⁶

El programa de esta ‘multisectorial’ jujeña reivindicada por el PTP-PCR, no planteaba una sola reivindicación obrera. Reclamaba un “fondo de reparación histórica” (al estilo del de la provincia de Buenos Aires), una mejora en la coparticipación federal, la recuperación del Fondo del Tabaco, la “normalización” del Banco de la Provincia, y la “convertibilidad de los Bonos a la vista y en forma automática”.⁴⁷ Incluso la ‘multisectorial’ omitía pronunciarse sobre los despidos de trabajadores estatales y la transferencia de la Caja Jubilatoria provincial a la Nación “por la simple razón de que los capitalistas apoyaban esas medidas”.⁴⁸

Si los símbolos tienen un valor político, el programa de las ‘multisectoriales’ estaba condensando la imagen-símbolo que mostraba por entonces, con orgullo, el periódico del PTP-PCR: “Mientras Carlos Santillán, un comerciante y un industrial de la provincia norteña izaban la bandera frente a la catedral metropolitana, encabezando una protesta que reunió a más de 12.000 personas, Carlos Menem jugaba al golf”.⁴⁹

El PTP-PCR, lógicamente, criticaba parte del programa de la ‘multisectorial’ y, en la práctica, el gremio encabezado por Santillán luchaba contra los despidos y el vaciamiento de la provincia. Pero la perspectiva estratégica de las ‘multisectoriales’ limitaba esta lucha al subordinarla a intereses hostiles a los de la clase obrera. ¿Cómo mantener la “unidad de los distintos sectores populares” –la unidad con el industrial, con el comerciante y con el obispo– y, a la vez, luchar por la “hegemonía” de los explotados? Una y otra cosa son incompatibles. La burguesía se aleja rápidamente de las luchas de masas cuando no puede controlarlas y manipularlas para obtener la satisfacción de sus propias reivindicaciones de clase (que no son las de las masas explotadas y que, en el 99,9% de los casos, son perjudiciales para las masas). En los grandes combates de masas se puede percibir una tendencia a la escisión de la sociedad en clases sociales antagónicas. El problema consiste en ver si la clase obrera (incluyendo a los desocupados) puede convertirse en caudillo de la gran masa explotada, para que esa lucha sea consecuente; para ello debe imponer su programa. Pero si los trabajadores “hegemonizan”, con su programa, sus reivindicaciones, y sus hombres y mujeres como dirección, los capitalistas se alejan. Si pretende evitar que se alejen, la clase obrera está obligada a subordinarse políticamente a sus explotadores.

Detrás de la “unidad de los opositores”, como era presentada la estrategia ‘multisectorial’, la clase obrera era subordinada a sus enemigos. El VII Congreso del Partido Obrero, de 1995, denunció “el planteo de formar ‘multisectoriales’ con las patronales grandes y ‘pequeñas’ como una política de recambio del sistema, de ‘paz social’ y de derrota de los trabajadores” y le opuso la organización de “Asambleas Populares, congresos de bases y congresos de trabajadores en todas las provincias y el país”.⁵⁰

El carácter reaccionario de las ‘multisectoriales’ se pondría rápidamente en evidencia en las puebladas de Cutral Co (1996/97) y Tartagal (1997), donde se pusieron al frente del movimiento para expropiarlo políticamente en beneficio de los capitalistas locales, que supieron extraer subsidios y beneficios de la lucha de los piqueteros.

“Consejos de Emergencia”

Con el agravamiento de la crisis social y el desarrollo del movimiento piquetero, los gobiernos provinciales y municipales comenzaron a poner en pie “Consejos de Emergencia”, que no eran otra cosa que ‘multisectoriales’ con el gobierno, es decir, con responsabilidades de poder.

El verdadero inventor de los “Consejos de Emergencia” fue la CTA en una situación extremadamente crítica, el primer Cutralcazo. Fueron reflatados por la jerarquía eclesíástica jujeña en ocasión del gran corte del ‘97. Años más tarde, se creó un “Consejo de Emergencia” en La Ma-

tanza, al que se integraron la FTV-CTA y el PTP-PCR, lo que revela el profundo acuerdo programático existente entre ambas corrientes.

¿Cuál era la función de estos “Consejos de Emergencia”? Integrar a las direcciones de los movimientos de desocupados al Estado, no para resolver sus reclamos, sino para hacerlas actuar como parte de la ‘red de contención’ del régimen político y social que había provocado la catástrofe de la desocupación. Gerardo Morales, el funcionario aliancista que negoció con los piqueteros salteños en los cortes del 2000, resumió la función de estos “Consejos de Emergencia”: “coordinar con las intendencias correspondientes la ayuda social” para suplir “la falta de contención”; por eso recomendaba que los integraran “el intendente, algún concejal opositor, la federación de centros vecinales, la Iglesia, el pastor, representantes de la comunidad...”.⁵¹

La función de los “Consejos de Emergencia” quedó graficada en una de las cláusulas que se les impuso a los piqueteros de La Plata en el corte de octubre/noviembre del 2000: “La integración de los representantes de la llamada Coordinadora de Trabajadores Desocupados al Consejo de Emergencia, para la toma de decisiones, en lo que concierne a la crisis del empleo en la región, exclusivamente en este ámbito. En otras palabras, significa que cualquier acción que realice esta organización sin consultas al Consejo implicará la anulación de los beneficios otorgados”.⁵²

Subsidio al desocupado o ‘planes de empleo’

En 1996, el gobierno menemista lanzó los ‘planes Trabajar’, a los que falsamente calificó como “planes de empleo”. Según su propia definición, el ‘plan Trabajar’ es “una ocupación transitoria de trabajadores desocupados, preferentemente jefes de familia”, que “no podrá tener una duración inferior a los tres meses ni superior a los seis meses” en los que “el trabajador debe realizar “obras sociales de infraestructura social y económica”, como “pavimentación de calles, reparación de escuelas o la limpieza de la vía pública”, a cargo de municipalidades y organismos públicos. Como se trata de una ‘ocupación’ y no de un empleo, el trabajador no recibe un salario sino “una ayuda económica no remunerativa de hasta 200 pesos” (después reducida a 150 pesos) o sea, un jornal de 10 pesos por día o apenas un peso y centavos la hora. Como es una ‘ayuda’, el trabajador tampoco tiene jubilación, salario familiar, obra social o cobertura por invalidez y fallecimiento; sólo lo cubre un “seguro de riesgos de accidentes”. Finalizado el contrato, “las gobernaciones y las municipalidades no se comprometen a tomar en forma permanente a esos trabajadores”.⁵³ Las provincias, por su parte, también lanzaron sus propios ‘planes’ sobre la base de este modelo (e incluso, como en Neuquén, modificaron los subsidios que ya habían establecido para adaptarlos a los ‘planes’).

El propósito de estos ‘planes’ era acostumar al trabajador a ganar un peso la hora, sin derecho a la jubilación ni a la indemnización... y por esta vía deprimir todavía más el salario de los trabajadores que tenían empleo. Esto explica que en las puebladas de Cutral Co y en la primera pueblada de Tartagal, las cámaras patronales que actuaban en las ‘multisectoriales’ impulsaran el reemplazo del reclamo de subsidios por puestos en los ‘planes’.

Los ‘planes’, en tanto instrumento de la burguesía, son lo opuesto al reclamo de subsidio que levantaba el movimiento de desocupados. El subsidio significa exigirle al Estado que, como capitalista colectivo, sostenga a los desempleados.⁵⁴ Con el subsidio se pone un límite al intento de utilizar la desocupación para rebajar los salarios y empeorar las condiciones de trabajo de los obreros ocupados; los ‘planes’, en cambio, refuerzan esta competencia entre trabajadores.⁵⁵

La reivindicación del subsidio como medida de emergencia está ligada a otra reivindicación, de carácter transitorio: el reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario. El reparto de las horas –una consigna que cualquier trabajador entiende perfectamente, como lo prueba el reclamo de la huelga metalúrgica de Tierra del Fuego de crear un “cuarto turno”– es perfectamente posible desde el punto de vista puramente ‘técnico’: basta con empadronar a los desocupados y asignarlos en las empresas de acuerdo a su calificación laboral o profesional. Su

'dificultad' es puramente social: el rechazo de los capitalistas a aceptar una reducción de la tasa de beneficio. La consigna del reparto de las horas de trabajo pone en evidencia que la base social de la desocupación es el beneficio capitalista y que la solución de la cuestión del desempleo plantea la necesidad de una completa reorganización social de la sociedad y, en consecuencia, del ascenso al poder de una nueva clase social, capaz de llevarla adelante: el gobierno de los trabajadores. Los 'planes', por el contrario, no afectan el beneficio capitalista; tampoco tienden un puente hacia la unión de la lucha de los ocupados con los desocupados ni plantean la necesidad de la superación histórica del régimen social capitalista.

Pero los 'planes' tenían otra función: reforzar el aparato punteril 'de contención' de los gobernadores e intendentes, que asignaron la inmensa mayoría de los 100.000 'planes' que se distribuyeron en 1996. Posteriormente, esa cifra llegó hasta los 400.000 'planes'.

La experiencia no tardaría en demostrar que las organizaciones que fundaron su perspectiva estratégica en la obtención y el mantenimiento de estos 'planes' se vieron obligadas –como consecuencia de sus limitaciones políticas y programáticas– a actuar como intermediarias entre los desocupados y los gobernadores e intendentes que manipulaban los 'planes' a su arbitrio. Es decir, a integrarse –aún contra su voluntad o de la mayor o menor conciencia que tuvieran de ello– al aparato clientelístico de contención montado por los gobernadores. Esta sería una fuente permanente de crisis dentro del movimiento de desocupados.

44. Ver Jacques Le Goff, "Una política de empleo a la deriva", en *Le Monde Diplomatique*, mayo de 1996; y Oviedo, Luis, "El fracaso mundial de las 'políticas de empleo'...", en *Prensa Obrera*, 28 de noviembre de 1996.

45. Rath, Christian, "¿La 'reactivación de la industria' debe ser un reclamo de los desocupados?", en *Prensa Obrera*, 30 de abril de 1998.

46. Rath, Christian, "La Multisectorial de los grandes pulpos y el clero", en *Prensa Obrera*, 16 de enero de 1996.

47. Pregón, 30 de noviembre de 1995.

48. Rath, Christian, "La Multisectorial de los grandes pulpos y el clero", en *Prensa Obrera*, 16 de enero de 1996.

49. Ferro, Ricardo, "El Jujeñazo mostró el camino hacia el paro nacional", en *Hoy*, 6 de diciembre de 1995.

50. "Política nacional: una situación pre-revolucionaria", resolución del VII Congreso del Partido Obrero, en *Prensa Obrera*, 12 de diciembre de 1995.

51. Declaraciones a Radio Mitre, 14 de noviembre de 2000.

52. *El Día*, 17 de noviembre de 2000.

53. *Clarín*, 23 de marzo de 1997.

54. Para que esta carga no recayera sobre la población trabajadora, los movimientos de desocupados planteaban el financiamiento del subsidio por impuestos a los grandes capitales y al beneficio capitalista. En Neuquén, por ejemplo, el movimiento de desocupados rechazó los 'avances' del gobierno de reducir las partidas de salud o educación o de reducir los salarios de los estatales, para financiar el subsidio.

55. De una manera general, los 'planes Trabajar' forman parte de una tendencia mundial del capitalismo a la destrucción de la seguridad social.

"La tendencia dominante (...) de la 'política social' de la burguesía mundial (...) es ligar los beneficios de la seguridad social a la realización de una 'contraprestación laboral' obligatoria por parte de sus beneficiarios, ya sea en empresas privadas o en programas de empleo estatal. (...)

La seguridad social deja de ser una cobertura que forma parte del valor de la fuerza de trabajo, para convertirse en la contraprestación monetaria de un nuevo trabajo (...). De esta manera, la burguesía busca atenuar el desempleo por medio de una más pronunciada caída de los salarios y de una más inflexible precarización del empleo. (...)

“Donde estas ‘reformas’ llegaron más lejos es en los Estados Unidos: (los) 700.000 beneficiarios del seguro social del Estado de California, por ejemplo, deberán trabajar por lo menos 32 horas semanales para no perder sus beneficios. El Estado subsidiará a los empleadores que los contraten y los que no consigan empleo deberán realizar obligatoriamente ‘trabajos comunitarios’. En Nueva York, los beneficiarios deben integrarse a los ‘grupos de trabajo’ del municipio (para limpiar plazas u otras tareas) e inscribirse en ‘clubes de empleo’ a los que las empresas de la ciudad van a reclutar trabajadores. El beneficiario que se niegue a trabajar para la municipalidad o que rechace una oferta laboral de una empresa a través de un ‘club de empleo’ (no importa lo irrisorio del salario que se le ofrezca o lo penoso de la tarea a desarrollar), pierde automáticamente sus beneficios. Quienes trabajan para la ciudad cobran 68 dólares por quincena por una tarea de 20 horas semanales, es decir a razón de 1,70 dólares la hora, ¡la tercera parte de lo que se paga por los empleos peor remunerados!

“Como resultado de estas ‘reformas’, en los dos primeros años de aplicación, el número de beneficiarios de la seguridad social se redujo, a escala nacional, en un 30%” (Oviedo, Luis, “La crisis capitalista y la ‘política social’ de la burguesía, en En Defensa del Marxismo, mayo de 1998).

Neuquén: del Congreso de Desocupados al primer Cutralcazo

Después del golpe recibido por la detención de Panario y las órdenes de captura contra varios de sus dirigentes, las organizaciones de desocupados de Neuquén se vieron obligadas a remar contra la corriente (no sólo de la represión estatal sino también de la ‘tregua’ establecida por las direcciones sindicales con el gobierno de Sapag). 56

El gobierno utilizó la ‘tregua’ para reducir los salarios de los estatales y los docentes, para reducir el subsidio de la “2128” de 200 a 150 pesos y para imponer la ‘contraprestación laboral’ a sus beneficiarios. Ante estos ataques, la ‘temperatura’ popular subió rápidamente y las organizaciones de desocupados volvieron a ganar empuje. El 22 de febrero de 1996 hubo una gran movilización de 4.000 docentes y estatales, en la que la Coordinadora participó con una columna y una declaración propia. En la segunda quincena de abril, 5.000 trabajadores cortaron las rutas por unas horas –¡los métodos piqueteros comenzaban a extenderse al movimiento obrero!– para reclamar la derogación de los decretos de rebaja salarial. En Cutral Co, la segunda ciudad de la provincia, la reducción del subsidio llevó a la convocatoria de una Asamblea Popular, con más de 500 asistentes, que obligó al Concejo Deliberante a declarar su “rechazo total” al decreto provincial; también en Zapala hubo movilizaciones contra la rebaja del subsidio. El 1º de Mayo, en el acto convocado por los sindicatos, Jorge Mora habló en representación de la Coordinadora de Desocupados, lo que reflejaba la reconstrucción del movimiento sobre la base de las asambleas barriales y de las movilizaciones que se iban desarrollando.

En este cuadro, el 24 de mayo de 1996 se reunió el Primer Congreso de Desocupados de Neuquén, convocado en forma conjunta por la CTA y por la Coordinadora de Desocupados. Jorge Mora, dirigente de la Coordinadora, señalaba las divergentes perspectivas políticas que animaban a sus convocantes: “Mientras que para la CTA este Congreso ‘no es para discutir los problemas de fondo’, sino una instancia para formar su propio reagrupamiento de desocupados y lograr una base que pierde cada día en los gremios estatales, para la Coordinadora de Desocupados no solamente significa un paso muy importante para fortalecer a los desocupados. Este Congreso debe votar la lucha contra la rebaja en la “2128”... por la apertura del empadronamiento en la “2128” sin discriminación (...) seguro mínimo de 500 pesos a todos los desocupados a partir de los 16 años (...). Libertad a Panario y a los compañeros presos (...)”.57

El Congreso tuvo una amplia representatividad: reunió a unos 200 delegados en representación de las Coordinadoras de Desocupados de Neuquén-Capital, Centenario, Loncopué, El Huecú, Chos Malal, San Martín de los Andes, Cutral Co, Senillosa, Junín de los Andes, Plottier, Zapala y la Mesa Directiva de la CTA local. Fue un congreso ampliamente democrático y muy disputado. La Mesa de la CTA venía dando un giro que se manifestaba en la propia convocatoria del Congreso: pocos días antes, se había retirado de la Mesa del “Comité de la 2128”, presionada por las movilizaciones y pronunciamientos, y también porque el gobierno la obligaba a implementar la rebaja del subsidio. Cuando la Mesa de la CTA anunció su retiro del “Comité...”, fue muy aplaudida por los delegados, que mostraban así su rechazo al participacionismo sindical.

El proyecto de resolución presentado por la CTA planteaba “exigir la desgravación impositiva, de créditos, etc., a las actividades que generen una efectiva contratación de nuevos puestos de trabajo”. En el ‘borrador’ presentado por la CTA no figuraba el seguro a todos los desocupados, ni la exigencia de la libertad de Panario y Christiansen (que poco tiempo antes se había entregado a la justicia).

El Congreso, luego de un fuerte debate, aprobó reclamar un seguro mínimo al desocupado de 500 pesos sin discriminaciones, para todo mayor de 16 años. Se exigió que la “contraprestación laboral” que establecía ahora la “2128”, incluyera cargas sociales, aguinaldo y vacaciones, y el

pase a planta permanente de todos los beneficiarios que cumplen tareas tanto “en el Estado como en la actividad privada”. Esto significaba, en la práctica, la liquidación de la “2128”.⁵⁸

Decenas de intervenciones plantearon la lucha por la libertad de Panario, lo que obligó a la CTA a declarar, en la segunda sesión del congreso, su acuerdo con esta consigna.⁵⁹ Se votó la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, “rechazando los decretos de rebajas salariales a los compañeros docentes y estatales”, y se planteó, contra los despidos masivos, el “reparto de las horas de trabajo sin disminuir el salario”.

Una importante polémica tuvo lugar en torno a la organización del movimiento. La CTA planteó que todas las Comisiones de Desocupados se integraran a la Central pero numerosos activistas defendieron la independencia de las Coordinadoras y el frente único entre ellas y la CTA, sobre la base de la lucha. Para muchos de los compañeros que habían organizado desde la nada el movimiento, estaba muy fresco el recuerdo de la integración de la CTA a la comisión de la “2128” y la posición que había adoptado frente a la represión del 2 de octubre en la Casa de Gobierno. Como consecuencia del debate, se resolvió formar una Mesa Coordinadora Provincial integrada por todos los movimientos de desocupados y la CTA, que actuaría como mandataria del programa votado hasta el próximo Congreso.

El Congreso, también, aprobó una resolución que, desde entonces, pasaría a formar parte de las resoluciones y reclamos de lo más avanzado del movimiento piquetero en todo el país: la convocatoria a un Congreso nacional de trabajadores desocupados. Cinco años después, los dos mil piqueteros reunidos en la 1ra Asamblea Nacional realizada en La Matanza, daban cumplimiento al mandato votado en el Congreso neuquino.

Por su combatividad y por las importantes resoluciones adoptadas, “el Congreso cerró la etapa de reflujo en el movimiento de los desocupados, que se inició con la represión del 2 de octubre del año pasado”.⁶⁰

Finalmente, el Congreso resolvió organizar una marcha provincial “contra el hambre y la desocupación” para el 21 de junio. Ese día estallaba el primer Cutralcazo.

El primer Cutralcazo

A partir del 21 de junio de 1996, y por toda una semana, la ruta 22 fue cortada por los piqueteros de Cutral Co y Plaza Huinul. El detonante del corte, precedido por movilizaciones de los desocupados y numerosos reclamos, fue el anuncio de Sapag de que se derogaría el acuerdo con la empresa canadiense Agrium para establecer una planta de fertilizantes en esa ciudad. Sapag, que negaba el seguro a los desocupados en nombre de conseguir fuentes de trabajo “genuinas”, ahora cerraba esta pequeña posibilidad. El antecedente directo de la pueblada fue la Asamblea Popular de 500 compañeros realizada unas semanas antes contra la rebaja de la “2128”, a la que el gobierno había hecho oídos sordos. ¡Ahora, la Asamblea contaba con la presencia de más de 5.000 vecinos!

Para el mismo día en que comenzó la pueblada, estaba convocada la movilización provincial votada en el Congreso de Desocupados. A pesar de la escasa propaganda, se reunieron frente al monumento a San Martín más de 300 desocupados, provenientes de los barrios de la Capital, Centenario, Plottier, Senillosa y San Martín de los Andes. Los colectivos que venían de Zapala, Loncopué y El Huecú se sumaron al corte de Cutral Co.

En Cutral Co y Plaza Huinul, el pueblo rechazó la carga de la Gendarmería y obligó a Sapag ‘a bajar’ hasta las barricadas para negociar. Los piqueteros le arrancaron importantes concesiones: la reconexión de la luz y del gas a los desocupados, el otorgamiento de centenares de subsidios a desempleados (en muchos casos, se devolvieron los 50 pesos que se habían descontado de la “2128”), la realización de urgentes obras públicas (hospital, etc.); se estableció, además, el compromiso de que el importante yacimiento de gas de El Mangrullo fuera explotado por el Estado, quedando su producido para las dos ciudades. También se impuso que no se aplicara

ningún tipo de persecución penal a los protagonistas de la pueblada, lo cual era un verdadero triunfo democrático, luego de los procesos contra Panario y Christiansen.⁶¹ Este punto del acuerdo, como muchos otros, no sería respetado: poco tiempo después era detenido el piquetero Basilio Estrada y se lanzaba una escalada represiva contra los desocupados de Cutral Co.

El Cutralcazo no fue un hecho aislado. Para rechazar a la Gendarmería se decretó un paro y se marchó a ocupar los puentes que unen a Neuquén con Río Negro. El triunfo de la pueblada despertó la conciencia y la movilización de los explotados de toda la provincia. En Chos Malal, Senillosa y Plottier los piqueteros salieron a cortar la ruta reclamando iguales derechos a los obtenidos por Cutral Co y Plaza Huinul.

Pero la dirección de la CTA, en lugar de impulsar la realización de Asambleas Populares en todos los pueblos y un Congreso Provincial de estas Asambleas, presentó en la Legislatura un proyecto “para la creación de un Consejo Económico y Social... destinado a analizar y buscar salidas consensuadas a la situación de crisis que atraviesa la provincia”,⁶² que estaría integrado por el gobierno, los gremios y las organizaciones empresarias. Asustada por la belicosidad de los desocupados y los trabajadores, la CTA quería ‘consensuar’ en un organismo corporativo con las patronales y el Estado... sin ninguna responsabilidad ante la Asamblea Popular o los piqueteros. ¡Pero justamente, el pueblo de Cutral Co y Huinul se había levantado porque el Estado y los capitalistas se habían demostrado completamente incapaces de encontrarle una ‘salida’ al hundimiento de las dos ciudades! La CTA volvía a las andadas: el retiro de la comisión de la “2128” y el Congreso de Desocupados no habían llevado a su dirección a superar su tendencia a la integración con el Estado.

En Cutral Co hubo una revolución

En muchos sentidos, la pueblada de Cutral Co y Plaza Huinul fue una verdadera revolución, algo que el Partido Obrero se empeñó en destacar.⁶³

En primer lugar, “el Cutralcazo puso al desnudo la contradicción irreconciliable entre las necesidades de la mayoría popular y el Estado capitalista, incluso en su forma ‘democrática’. Mostró que la soberanía popular, completamente ficticia en el marco de la democracia capitalista, se reencuentra a sí misma en la movilización popular. El Cutralcazo mostró que el Estado capitalista es una maquinaria organizada para responder a las necesidades de los explotadores, no de los explotados. El Cutralcazo reveló que la victoria de cualquier movimiento popular obliga a superar las restricciones que impone el Estado capitalista a la acción directa del pueblo, y a crear organizaciones adaptadas a la lucha, que respondan directamente a la voluntad y mandato de las bases. El Cutralcazo fue una clase magistral de docencia política”.⁶⁴

Tanto o más importante, la pueblada impuso que “la pepita de oro del negocio de la planta (de fertilizantes), el yacimiento de gas del Mangrullo, sea explotado por el Estado, lo que garantizaría un ingreso anual de 20 millones de dólares a las dos ciudades. La solución popular a la desocupación, que en este caso no reconoce ninguna inspiración doctrinaria o partidista, se presenta entonces como un ataque a la privatización y a los derechos de los capitalistas, y como la imposición, en principio, de una gestión social de los recursos productivos (...). Es fácil de ver que el acuerdo de explotación estatal del gas, hará fracasar la licitación de la planta de fertilizantes, lo que obligará a ir al planteo más profundo de la estatización del proceso industrial del gas. Pero esto significa cuestionar el conjunto del proceso privatizador en el país y las relaciones sociales y políticas que se han montado sobre ese proceso. Por eso el acuerdo alcanzado entre los piqueteros y el gobierno es precario; porque tiene un alcance que supera los márgenes que ofrece la actual situación política. Sin embargo, este camino es el único que puede poner fin a la desocupación en todo el país: medidas profundas contra el monopolio privado capitalista y una estatización dirigida a satisfacer las necesidades sociales en su sentido más amplio, es decir, una estatización bajo la gestión obrera”.⁶⁵

Y una cuestión clave: “La gestión de los trabajadores aparece claramente en el punto del acuerdo referido a la distribución de los víveres, donde los piqueteros impusieron su derecho a voz y voto en la comisión encargada; ésta es una reivindicación que deben hacer suya rápidamente los movimientos de desocupados del resto del país. Cuando formularon esta exigencia, los piqueteros denunciaron la completa inacción de las municipalidades ante la desocupación creciente, es decir que vincularon el reconocimiento del derecho a la gestión popular con el derrumbe de las instituciones estatales existentes (...). La pueblada de Cutral Co-Plaza Huincul es una demostración irrefutable de que en todo movimiento profundo de los explotados se expresa instintivamente la tendencia a la reorganización de la sociedad sobre nuevas bases”. 66

Contrarrevolución democrática

Pero si en Cutral Co hubo una revolución, también hubo una contrarrevolución, ‘democrática’ y centrozquierdista, contra los piqueteros. Apenas se levantaron las barricadas, el gobierno comenzó a desconocer los acuerdos firmados mientras el movimiento era políticamente expropiado por los partidos patronales y las ‘fuerzas vivas’ (cámara empresaria, etc.) de las dos ciudades, organizados en una ‘multisectorial’. Después de firmar que el producido del yacimiento El Mangrullo debía quedar para un ‘fondo de reparación histórica’ de las dos localidades, técnicos de la Subsecretaría de Energía provincial recomendaron a Sapag que el yacimiento fuera operado por una empresa privada.

En un reportaje que reflejaba el estado de ánimo generalizado, dos de los piqueteros que estuvieron en la primera fila de la lucha mostraban su desconfianza en el gobierno y en el ‘secreto’ que rodeaba las negociaciones: “El problema ahora es que no tenemos informes de la comisión de 17 piqueteros designada (...) el temor es que usen a los 17 como ‘amortiguadores’. Por eso, entre los compañeros se está planteando que hay que convocar a una nueva Asamblea Popular, para que se informe qué es lo que se está negociando y cuáles son los resultados. Los compañeros designados tienen que sentir la presión y saber que o pelean por los puntos que fueron mandados o se elige a otros”. 67 Pero esto no sucedería.

Mientras incumplía los acuerdos, Sapag lanzó una escalada represiva, judicial y ‘extrajudicial’ contra las organizaciones de desocupados. Fue detenido Basilio Estrada; hubo razzias en Cutral Co y seguimientos y aprietes en toda la provincia. Pero había una rebelión en curso; los cortes y movilizaciones se extendían por toda la provincia e incluso en la vecina Río Negro. Los reclamos llovían y Sapag se vio obligado a dar un conjunto de concesiones para frenar la rebeldía en los municipios. Pero como editorializó un diario regional, “nada que se haga en este plano alcanzará, porque tan pronto se entrega un subsidio acá, se levanta otra población allá”.68 Para echar lastre, la justicia provincial ordenó en diciembre la liberación de Panario, Christiansen y Estrada. La movilización piquetera de Cutral Co y de toda la provincia los había arrancado de la cárcel.

La falta de cumplimiento de los acuerdos, una norma que seguirían de aquí en más cada uno de los gobernantes que enfrentó una pueblada, llevaría un año más tarde al segundo Cutralcazo.

56. Para un desarrollo más detallado de la lucha de clases en Neuquén entre 1995 y 1997, véase Santos, Rafael, “Tres años de combates de clase en Neuquén”, en En Defensa del Marxismo, julio de 1997.

57. Mora, Jorge, “Congreso de Desocupados de Neuquén: Convocatoria de la CTA y de la Coordinadora de Desocupados”, en Prensa Obrera, 23 de mayo de 1996.

58. Ver anexo “Documentos del movimiento piquetero”.

59. La posición inicial de la dirección de la CTA de Neuquén frente a la detención de Panario y la represión contra la Coordinadora desató una crisis en su seno, ya que iba a contramano de la

política que seguían las direcciones de ATE y CTA del interior de la provincia que, al decir de Norberto Calducci, dirigente del PO local, “ocupaban y cortaban como el que más”.

En un plenario provincial, la base de la CTA obligó a su dirección a defender el reclamo de la libertad a Panario. La evidencia de que este reclamo le fue impuesto contra su voluntad es que la dirección de la CTA lo violó apenas pudo para sustituirlo por el pedido de “la inmediata elevación a juicio de la causa en que está procesado Horacio Panario”, a lo cual agregaba que esto “no implica ni un aval a los disturbios (sic) producidos en la Casa de Gobierno el pasado 2 de octubre ni un intento de interferir en el trabajo de la justicia” (Diario Río Negro, 3/2/96). El Partido Obrero hizo una denuncia sistemática de la política de la CTA-Neuquén frente a la detención de Panario y sobre la violación del mandato de su propia base que exigía la lucha por su libertad.

“Los dirigentes de la CTA se niegan sistemáticamente a reclamar la libertad de Panario y a interferir en la justicia por medio de una actividad popular organizada en defensa de este militante del pueblo. Esgrimen como razón para actuar de este modo bárbaro que el ingreso de los desocupados a la casa de gobierno de Neuquén fue un ataque a la democracia y que, en todo caso, en una democracia el fallo judicial tiene un carácter político y moral definitorio. Con este argumento no han logrado meter en cana a ningún represor o corrupto, ni impedir los indultos a los asesinos del pasado régimen, pero siguen usando incommovibles ese raciocinio incluso si se aplica a los luchadores del pueblo (...). De cualquier manera, hay una razón más profunda para explicar esta política que esos argumentos ‘democráticos’: la profunda hostilidad hacia el movimiento de los desocupados, que arrancó la sanción de un seguro legal y que se ha organizado en forma independiente de los patrones y el Estado.” (Jacobs, Mónica, “Dirección del CTA-Neuquén viola mandato de plenario”, en Prensa Obrera, 20 de febrero de 1996).

60. Santos, Rafael, “Un gran, gran paso adelante”, en Prensa Obrera, 30 de mayo de 1996.

61. En el primer Cutralcazo se produjo un hecho político-judicial de la mayor importancia, que sentaría un antecedente para la defensa del movimiento piquetero frente a los ataques gubernamentales: la jueza llamada a desalojar el puente, ante la negativa de los miles de trabajadores que lo ocupaban, se declaró “incompetente”, es decir que calificó al levantamiento popular como una manifestación política del pueblo y no como un asunto “judiciable”. Ver Devoto, Juan Carlos, “En Cutral Co, las masas convierten a la ‘coacción agravada’ y a la ‘sedición’ en derecho constitucional ‘de petición’...”, en Prensa Obrera, 4 de julio de 1996.

62. La Mañana, 3 de julio de 1996.

63. Altamira, Jorge, “En Cutral Co hubo una revolución”, en Prensa Obrera, 4 de julio de 1996.

64. Idem anterior.

65. Idem anterior.

66. Idem anterior.

67. “Cutralcazo: Asamblea Popular para verificar el mandato”, en Prensa Obrera, 11 de julio de 1996.

68. Diario Río Negro, 21 de julio de 1996.

El segundo Cutralcazo

El primer Cutralcazo fue un factor de la mayor importancia en el ascenso de las luchas obreras en todo el país que habrían de forzar, pocos meses después, la renuncia del hasta entonces 'invencible' ministro Cavallo.

En Neuquén, este ascenso se manifestó en una serie de cortes de ruta (el más importante fue la pueblada de Rincón de los Sauces, en marzo de 1997, donde se cortaron los accesos a los yacimientos de YPF y se tomó el aeropuerto local en repudio a la llegada de María Julia Alsogaray) y, sobre todo, en la huelga docente que impidió el inicio del ciclo escolar. Norberto Calducci, dirigente del Partido Obrero neuquino, anticipaba que "una nueva rebelión popular está en marcha, en momentos que en la provincia se desarrolla una masiva huelga docente, con gran apoyo de la comunidad y, que se ha reabierto la disputa por el yacimiento El Mangrullo con las comunidades gestoras del Cutralcazo".⁶⁹

La huelga docente se desarrollaba rodeada por la solidaridad popular. Se constituyeron Coordinadoras de Padres, que fueron importantes para enfrentar a los punteros del gobierno en las barriadas. La Coordinadora de Estudiantes Secundarios convocó al paro y boicoteó a los pocos profesores carneros. Las marchas de apoyo eran cada vez más masivas. Los docentes de Río Negro también estaban de paro general y había una tendencia a la confluencia. A pesar de que los trabajadores estatales también sufrían similares reducciones salariales, la CTA evitaba cuidadosamente unificar todas estas luchas en una huelga general provincial y regional. De vez en cuando, bajo presión, lanzaba un paro aislado de 24 horas, pero bloqueaba todo intento de deliberar en común y de marchar hacia la huelga general. En su lugar, promovía la formación de 'multisectoriales' con los partidos patronales, las cámaras empresarias, la Iglesia y las 'fuerzas vivas' para 'mediar' entre el gobierno y los huelguistas.

El lunes 24 de marzo de 1997, aniversario del golpe militar, un paro general provincial apoyó la marcha de más de 10.000 docentes, estudiantes, padres y vecinos, que culminó con la ocupación de los puentes que unen Neuquén y Río Negro. ¡Los métodos piqueteros ya eran un patrimonio común de los explotados! Se paralizó por completo la provincia, lo que creó un vacío de poder. Se repetía lo de Cutral Co, pero ahora en la capital y diversas ciudades del interior (Centenario, etc.). La toma de los puentes dejó de ser 'simbólica', como pretendían las directivas de Aten (Provincia y Capital), para convertirse en 'permanente', impuesta por la presión del activismo y las masas, que se volcaban en apoyo a los docentes.

El 'desalojo' de los puentes, dos días después, fue negociado por las directivas de los docentes (de provincia y de Neuquén Capital) y la CTA con los diputados oficialistas, el Frepaso y la Iglesia. La Gendarmería avanzó confiada de que no iba a encontrar resistencia pero se equivocó; tuvo que tirar gases porque la base se negaba a entregar los puentes. Los jóvenes del barrio Sapere (vecinos del puente) hostigaron durante horas a los gendarmes a piedrazos. Un grupo de docentes de la distante Las Lajas recuerda que "viajamos un grupo importante, dispuestos a quedarnos y enfrentar a la Gendarmería. Fuimos todo el tiempo al frente y creemos que el puente no había que entregarlo. Allí comenzamos a ver que la conducción gremial no se estaba jugando a fondo".⁷⁰

A pesar de haber logrado desalojar los puentes, la directiva de Aten no logró levantar la huelga y se vio obligada, por la presión de las asambleas, a convocar a una nueva jornada de movilización, el 9 de abril, "marchando sobre las rutas" en cada localidad.

En Cutral Co y Plaza Huincul, el pueblo salió a la calle; los desocupados y la juventud levantaron barricadas y bloquearon las rutas. Las Coordinadoras de Padres de Cutral Co y Plaza Huincul

y los estudiantes secundarios jugaron un papel decisivo al resolver, después de “marchar sobre las rutas” (la convocatoria original de Aten), quedarse en ellas y ocuparlas.

Estallaba así la bronca acumulada por el incumplimiento de los acuerdos del primer Cutralcazo. Recién tres días después la Gendarmería logró desalojar las rutas. Al perseguir a los piqueteros dentro de la ciudad, provocó la rebelión del pueblo. Más de 15.000 personas se enfrentaron a los gendarmes y a la policía provincial, y los hicieron huir. Sobre el pavimento quedaron el cuerpo ensangrentado de Teresa Rodríguez y de decenas de heridos. El pueblo de Cutral Co quedó dueño de la ciudad y de la ruta. Se volvieron a instaurar las barricadas y se formó una Asamblea Popular, que se transformó en el gobierno real de la zona. Los piqueteros habían aprendido de su experiencia: fue elegido un secretariado de 12 miembros, que era renovado por tercios ante cada gestión ante los poderes para impedir que los dirigentes fueran corrompidos por el Estado y/o los partidos patronales (como había pasado con varios dirigentes del Cutralcazo del '96).

Aterrada por el levantamiento popular, la directiva de Aten le dio la espalda a la pueblada y salió a decir que “el corte no tenía apoyo gremial en Neuquén”⁷¹ y se sumó a la campaña maccartista del gobierno contra los piqueteros. María Eugenia Figueroa, dirigente de Aten, declaró públicamente que “los ‘fogoneros’ de Cutral Co estaban ‘al margen de los maestros y los padres de los alumnos, no pertenecen a nuestra organización, ni a ninguna otra organización reconocida’...”, justificando así la represión contra los ‘marginales’.⁷² La traición del 2 de octubre de 1995 no había sido un hecho aislado o casual.

En la noche del sábado –el mismo día en que Cutral Co hacía huir a la Gendarmería y caía asesinada Teresa Rodríguez– y mientras 15.000 personas manifestaban frente a la Casa de Gobierno, la directiva de Aten se entrevistó con Sapag y elaboró un “acta” para “solucionar el conflicto”. Cuando informaron a la muchedumbre sobre el contenido del acta, los directivos fueron silbados y abucheados al grito de “traidores”. Los manifestantes, sin embargo, no habían llegado a escuchar los términos del acta; su repudio respondía a que los dirigentes de Aten se habían sentado a negociar mientras había una compañera muerta, heridos, detenidos y se luchaba en Cutral Co contra la Gendarmería.

El acta fue una traición porque no solucionó ninguno de los reclamos de la huelga y porque abandonó a su suerte a los piqueteros de Cutral Co. En una asamblea docente, los ‘bolcheviques’ de la directiva de Aten Capital se negaron incluso a reclamar el retiro de la Gendarmería, como sí lo hacían los docentes, los piqueteros de Cutral Co y los trabajadores de toda la provincia: “No se puede decir ‘fuera la Gendarmería’ porque hay que cambiar todo el sistema (...) como se tendría que ir de todo el planeta, y entonces nuestra huelga no se levantaría nunca más, es más valiente no reclamarlo”. Esta ‘valentía blindada’ fue repudiada por los maestros al grito de “¡Cutral Co, Cutral Co!”.

Fueron necesarias varias asambleas ‘de ablande’ para que, finalmente, y ante la evidencia de que la dirección sindical abandonaba la lucha, los docentes aceptaran que se levantara la huelga. Pero aún había mucho ‘trabajo sucio’ por hacer para levantar la pueblada y el corte de ruta. Un diario regional reveló, cuando ya todo había terminado, “la trama secreta que se tejió para levantar el corte de la ruta 22”⁷³, que es un vivo retrato de la expropiación del movimiento.

Todo comenzó con el “aumento de la presión sobre los ‘fogoneros’, ejercida especialmente por YPF, cuyo vicepresidente de Exploración y Explotación, Marcelo Guiscardo, recorrió los piquetes (...) (y) ofreció –el jueves 17 a la madrugada– 200 pesos de adelanto de sueldo y la posibilidad de trabajar en la empresa, si levantaban el corte. Los manifestantes dijeron quiero y paso: sí al trabajo, no al levantamiento hasta que hubiera un puesto seguro para todos”. Esa misma madrugada, en una asamblea con la presencia de los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul, se propuso, por primera vez, “la idea de suspender el corte (...) montada sobre las primeras respuestas a los reclamos”; pero los fogoneros “con un rápido movimiento, torcieron el brazo” a ese intento (idem). La comisión ‘negociadora’ se vio obligada a delimitarse de ese planteo. Quien lo propuso, un comerciante, “no recogió un solo voto”.

La traición, sin embargo, se consumó plenamente al otro día. “A la mañana, una asamblea –reducida en comparación con la mayoría de las que se realizaron a lo largo del conflicto– aprobó

rápidamente la suspensión temporaria del corte de la ruta” para ‘facilitar’ las negociaciones en la capital provincial. Al retorno de la ‘comisión’, los fogoneros volvieron a cortar la ruta y comenzó “una nerviosa asamblea, de la que por primera vez participaron activamente los fogoneros. Cuestionaron cada uno de los 19 puntos firmados por los gobiernos nacional y provincial, y exigieron seguir con el corte hasta que estuvieran respaldados por una ley”.

“Los integrantes de la comisión debieron esquivar algún que otro piedrazo”. Hubo un cuarto intermedio; luego “quienes estaban a favor de aceptar la oferta de los gobiernos tomaron el micrófono y no lo soltaron más (...). Para caldear más los ánimos, a las 20:20 se cortó la luz y todo quedó a oscuras”. A diferencia de la asamblea de la mañana –en que un grupo de fogoneros aún pudo expresar su oposición al levantamiento– en la segunda asamblea se montó un vasto operativo para dar por concluida la pueblada en forma pérfida y cínica.

Expropiación política

El segundo Cutralcazo fue expropiado por las direcciones políticas patronales y las cámaras empresarias y comerciales que actuaban a través de la Comisión negociadora y establecían su política. Esta expropiación política se vio facilitada por las limitaciones políticas de los propios piqueteros. A pesar de desarrollar una heroica resistencia contra la Gendarmería y la policía provincial, los piqueteros casi no tuvieron participación en las decisiones ya que “casi no participaban de la Asamblea (...) le dejaban la Asamblea Popular a todo el centrismo y los elementos pro-patronales porque ellos, los fogoneros, ‘estaban para pelear, no para hacer política’...”.⁷⁴

Las propias actas firmadas eran la confirmación de esa expropiación. “En el acta firmada con el gobierno nacional, las partes son el Poder Ejecutivo Nacional, el provincial, intendentes y concejales, diputados nacionales y provinciales, senadores y el Centro de Comerciantes e Industriales de Cutral Co y Plaza Huinul. Allí, la Comisión sólo figura como ‘participante en la discusión’, es decir, sin peso alguno en el acuerdo. Sin embargo, por esta acta, ‘la Comisión nombrada por la asamblea se compromete a realizar las tareas necesarias para restituir la confianza general en las operaciones industriales o productivas que se estudien’, es decir, pasa a ser la garante del ‘orden’”.⁷⁵ Los ‘19 puntos’ no eran más que promesas. Los 1.500 puestos de trabajo ‘ofrecidos’ tenían un carácter temporario y precario (4 meses los de YPF y seis los del ‘plan Trabajar’, por 400 pesos los primeros y 200 los segundos). Estaban por debajo de los subsidios por desempleo, arrancados por los desocupados neuquinos en 1995. “El carácter de modestos paliativos de estas últimas medidas ha salido a luz rápidamente, y se expresa en el clima de belicoidad y deliberación que anida entre los jóvenes y desocupados que protagonizaron el Cutralcazo”.⁷⁶

Diez días después del levantamiento, un grupo de piqueteros volvió a cortar la ruta contra la manipulación burocrática de la Comisión negociadora y el intendente de Cutral Co. Pero ya la burguesía había retomado el control de la situación y había armado una ‘salida política’: el juicio político al intendente y la convocatoria a elecciones municipales en el curso de los siguientes 90 días. La Comisión negociadora, actuando como correa de transmisión de la presión de los comerciantes y las cámaras patronales, se sumó a este operativo postergando sin previo aviso la convocatoria de la Asamblea Popular y negándose a la renovación de sus integrantes establecida originalmente. “El recambio (juicio político-destitución-llamado a elecciones) en manos del MPN, PJ, UCR, Frepaso, sin las masas movilizadas y con la asamblea popular desarticulada, será sólo una maniobra distraccionista para aplicar la misma política de hambre y desocupación, y para violar todas las promesas realizadas para desmontar las puebladas”.⁷⁷ Así fue.

En la contrarrevolución ‘democrática’ y centroizquierdista –que fue muy lejos contra los piqueteros de Cutral Co– jugó un papel destacado el concejal del Frepaso Rioseco, quien durante la pueblada, había actuado como ‘vocero’ de la Asamblea Popular. Rioseco se candidateó para intendente presentándose como el vocero de la pueblada y hasta como el garante del cumplimiento de los acuerdos, incluso chocando abiertamente con la dirección provincial del Frepaso (Massei), que atacó a los piqueteros con argumentos francamente derechistas. Detrás de Riose-

co se encolumnaron muchos piqueteros, incluidos los del piquete número 1, el más aguerrido y el que había estado en la primera fila en los enfrentamientos con la Gendarmería.

Pero una semana antes de las elecciones, el Frepaso y Rioseco retiraron su candidatura y llamaron a votar por el candidato de la UCR, Benítez, que no había jugado ningún papel en la pueblada. Así, a través de la 'intermediación' del Frepaso, los más aguerridos piqueteros cutralqueños fueron llevados a respaldar al candidato radical. Luego de asumir, Benítez nombró a Rioseco como su secretario de gobierno. La unidad UCR-Frepaso en Cutral Co, que tenía el evidente objetivo de domesticar políticamente a los piqueteros y liquidar toda posibilidad de evolución política independiente, es el verdadero antecedente de lo que más tarde sería la Alianza.

La CTA provincial –que era considerada como la sección más 'radicalizada' de la CTA nacional– se colocó en la primera fila de apoyo al nuevo binomio radical-frepasista y jugó un papel clave en el operativo político que diluyó al movimiento piquetero de Cutral Co. En mayo de 1998, cuando ya la Alianza estaba formada en el plano nacional, la CTA de Neuquén organizó, en conjunto con el gobierno municipal de Benítez-Rioseco, una "Jornada de la militancia política y social" en Cutral Co, con la que terminó de consolidar alrededor del gobierno al movimiento de los desocupados.

La 'colonización' del movimiento de los desocupados por la CTA, las ilusiones en Rioseco y en su 'política social' –en combinación con una represión 'selectiva' sobre los que no aceptaban subordinarse– diluyeron al movimiento piquetero de Cutral Co.

Poco después en Tartagal, como en Cutral Co, el primer levantamiento popular sería políticamente expropiado por elementos patronales. Pero existía una vanguardia clasista organizada y con tradición de lucha que logró asimilar críticamente la experiencia para, más tarde, superar políticamente a estos elementos y reencauzar el movimiento de los desocupados en un sentido de independencia de clase. En Cutral Co, eso no ocurrió porque esa vanguardia era más inexperta, y tanto política como numéricamente más débil y dispersa.

Las 'multisectoriales' demostraban ser el camino de la derrota; el 'progresismo' el de la destrucción del movimiento piquetero.

69. Norberto Calducci, "Puebladas y piqueteros en Rincón de los Sauces", en Prensa Obrera, 20 de marzo de 1997.

70. "Organizarnos para triunfar", reportaje a los docentes B., N., T., G. y H., de Las Lajas, en Prensa Obrera, 24 de abril de 1997.

71. Diario Río Negro, 12 de abril de 1997.

72. Crónica, 13 de abril de 1997.

73. Diario Río Negro, 19 de abril de 1997.

74. Calducci, Norberto, "Los 'enamoramientos' del PTS", trabajo inédito.

75. Calducci, Norberto, "Balance de Cutral Co para los compañeros de Tartagal", en Prensa Obrera, 15 de mayo de 1997.

76. Malaj, Norberto, "Los acuerdos de la traición", en Prensa Obrera, 30 de abril de 1997.

77. Calducci, Norberto, "Neuquén: los fogoneros no estaban de acuerdo, nomás", en Prensa Obrera, 9 de mayo de 1997.

Tartagal-Mosconi: primer levantamiento

En mayo de 1997, cuando todavía no se apagaban los ecos del segundo Cutralcazo, estalló la pueblada de Tartagal, que en muchos aspectos fue todavía más profunda que la de Neuquén: los piqueteros de Tartagal-Mosconi eran proporcionalmente mucho más numerosos que los que se jugaron en Cutral Co y Plaza Huincul; en el norte salteño se rompió la separación entre la población blanca y los aborígenes de una manera francamente revolucionaria, ya que se tomaron las reivindicaciones de los pueblos originarios y se las puso, codo a codo, unos y otros, en los piquetes; se rechazaron los 'planes Trabajar' porque eran temporarios, de 200 pesos, sin protección social y sometidos al arbitrio del burócrata; la lucha política entre los elementos combativos y los patronales fue mucho más abierta y aguda y el bloque combativo logró estructurarse como una tendencia definida en el curso de la lucha.

El levantamiento popular se extendió a todo el norte de Salta (Tartagal, Mosconi, Aguaray, Cornejo) y estuvo motorizado por los sectores más explotados, que constituyen la amplia mayoría de la población, esencialmente la enorme masa de desocupados, que en ciertas zonas llega al 65%; por los sectores aborígenes, que en algunas localidades, como Cornejo, son mayoría; por la docencia y los trabajadores públicos, que ganan salarios miserables y sufren permanentes 'ajustes', por las mujeres y por los jóvenes estudiantes y desocupados.

Una experiencia de lucha

En el norte de Salta había acumulada una vasta trayectoria de lucha; también existían cuadros obreros, con una gran experiencia combativa, que habían encabezado la lucha contra la privatización de YPF, en setiembre/octubre de 1991. Entonces, en una Asamblea Popular en Mosconi, que reunía a 4.000 compañeros, Cesar 'Perico' Raineri, militante del PO, mocionó la realización de un corte de ruta. Esta moción fue aprobada y se marchó desde el Complejo Deportivo de Mosconi hacia la ruta, en lo que constituía entonces una modalidad completamente novedosa en Argentina: era la primera vez que se utilizaba el corte de ruta como método de lucha.⁷⁸ La movilización del norte salteño obligó a la burocracia del Supe a convocar la huelga general en todo el país. El día de la huelga general del Supe, nuevamente se cortaron las rutas en Mosconi y Campo Durán contra la privatización y el cierre de la destilería; la Asamblea Popular reunió ese día a 10.000 trabajadores y destituyó al secretario general del Supe-Yacimiento Norte.

Tres años más tarde, a fines de 1994, estalló una pueblada en General Güemes, enfrentando una desocupación superior al 50% que golpeaba al pueblo como consecuencia del levantamiento del Ferrocarril Belgrano, el cierre de sus talleres, y los cierres de la cementera Minetti y del Ingenio San Isidro. Por iniciativa de los dirigentes de la cooperativa del Ingenio, se cortó la ruta 34. La represión desató una violenta reacción popular. La dirección del movimiento, sin embargo, quedó en manos de una 'multisectorial' que se subordinó a los reclamos patronales de obtención de créditos blandos y refinanciación de deudas para las Pymes.

Desde comienzos de 1997, la movilización en Tartagal y en General Mosconi venía en ascenso. En enero, mil vecinos se autoconvocaron en Mosconi para exigir la liberación de los dirigentes de la Unión de Trabajadores Desocupados, que habían ido a reclamar al Concejo Deliberante. La presión obligó a liberar a los detenidos; el PO de Mosconi, en una declaración, llamaba entonces a convocar a una Asamblea Popular. En marzo, frente al empeoramiento del servicio eléctrico como consecuencia de la privatización de la empresa provincial de energía (en beneficio del pulpo Exxel), el Sindicato de Prensa y el PO llamaron a un apagón de protesta, que fue cumplido

masivamente; pocos días después se reunió una Asamblea Popular, con la presencia de más de 1.000 trabajadores. Inmediatamente después de la pueblada de Cutral Co, más de 1.000 vecinos se movilizaron en repudio del asesinato de Teresa Rodríguez. El 1º de Mayo, varios sindicatos y el PO convocaron a una Asamblea Popular, que se reunió el 7 de mayo con la presencia de 2.000 compañeros y votó un plan de lucha, que incluía el corte de la ruta: desde la Plaza San Martín de Tartagal se recorrieron los siete kilómetros hasta Mosconi, lugar elegido para el corte. Así se fueron reuniendo las condiciones para la pueblada.

Ascenso

El levantamiento popular siguió un curso ascendente hasta el lunes 12 de mayo. Los cortes se extendían por todo el departamento de San Martín (unos cien piquetes controlaban todos los accesos); comenzaban las acciones solidarias en otros departamentos; se fortalecía la organización de los piqueteros para enfrentar cualquier ofensiva represiva. El gobierno provincial había fracasado en diversas maniobras; el gobierno nacional y el juez federal no se animaban a lanzar la Gendarmería.

La Asamblea Popular –que venía de la experiencia de la lucha contra la privatización de YPF– había quedado instalada definitivamente como la instancia popular soberana e incluso único organismo reconocido por las masas (durante siete días, las intendencias y sus Concejos Deliberantes dejaron de existir). En la Asamblea Popular participaba todo el mundo y cada uno podía hablar en nombre propio. La Comisión Regional de Vecinos designada por la asamblea, sin embargo, estaba integrada por un delegado por sector (aunque hubo sectores vitales como la juventud o los piqueteros de Pocitos o Cornejo que no tuvieron delegados). Esta Comisión era una ‘multisectorial’ absolutamente desproporcionada ya que los desocupados y los trabajadores tenían un delegado cada uno, al igual que los sectores empresarios con sus diferentes cámaras, lo cual les daba a estos últimos una representación desmesurada.

En el programa votado por la Asamblea Popular aparecían reivindicaciones vitales como el subsidio al desocupado de 400 pesos ó 5.000 puestos laborales estables (no ‘planes Trabajar’). También se reclamaba “un fondo de reparación histórica”, que se constituiría con las regalías que deben pagar los pulpos petroleros y gasíferos de la región. El planteo de “los compañeros de Tartagal-Mosconi (...) de meter mano en las petroleras (es) un acierto descomunal. (...) Sin la investigación de las deudas fraudulentas de los gobiernos de Ulloa y Romero; sin la ruptura con los planes del Banco Mundial, que hipotecan los recursos provinciales al pago de las deudas con los capitalistas; sin una sustancial elevación de la regalía del petróleo, para financiar por lo menos la industrialización del norte salteño; sin estas medidas, cualquier solución popular quedará a medio camino”.⁷⁹ A último momento, fueron incluidos numerosos reclamos de sectores patronales en crisis de la zona, que buscaban explotar la rebelión en beneficio propio, estableciéndose un petitorio de 36 puntos.

Desde el mismo inicio de la pueblada, se libró una aguda lucha política –tanto en la Asamblea Popular como en la Comisión– entre el bloque combativo y los sectores patronales. Los sectores combativos impusieron la reivindicación de ‘meter mano en las petroleras’, lograron imponer la huelga general en el gremio docente en el departamento de San Martín y frenaron los intentos del Centro Empresario y de sectores vinculados al PJ de impedir el funcionamiento de la Asamblea Popular o de reemplazar el reclamo de subsidios por ‘planes Trabajar’. Cuando todavía se estaban desarrollando los acontecimientos, el Partido Obrero, que tenía una fuerte intervención en la lucha, instaba a “que los sectores más combativos coordinen su accionar, para impedir el accionar coordinado de los sectores conciliadores, pro-patronales, que en forma sistemática están trabajando para que el movimiento de lucha se levante sin que se hayan resuelto los reclamos fundamentales de los desocupados, del sector educativo y de la salud pública, y de los aborígenes”.⁸⁰

Perico Raineri, dirigente docente y miembro del PO, elegido para la Comisión de Vecinos, alertaba entonces sobre los peligros que corría el levantamiento: “A partir de la Asamblea Popu-

lar que rechaza el intento de sustituir la reivindicación del subsidio al desocupado por puestos en el 'Plan Trabajar', un planteo que era impulsado por los sectores patronales, nos encontramos con que este mismo sector de la Comisión de Vecinos comienza a darse una política de desmovilizar, de intentar negociar a espaldas de la Asamblea y de promover una creciente desorganización en los piquetes. No han garantizado el fondo de huelga ni tampoco el grave problema del abastecimiento de alimentos, que comienza a afectar al conjunto de la población e incluso a los propios piqueteros. El sector conciliador es mayoría en la Comisión aunque hasta el momento no ha podido impedir que todos los días se reúna la Asamblea Popular, pero lo van a intentar".⁸¹

Las maniobras de la 'multisectorial' y la Iglesia

El martes 13 de mayo, llegaron a Tartagal negociadores del gobierno provincial, que se reunieron con la Comisión en presencia del obispo de Orán. Después de más de seis horas, cuando ya cundía la impaciencia, algunos piqueteros anunciaron que los ministros no querían conceder los reclamos, que no había que dejarlos salir y que había que rodear las instalaciones donde se realizaba la reunión. Grupos de piqueteros subieron a los árboles y algunos ya comenzaban a saltar los alambrados. La consigna era bloquear el helicóptero en el que habían llegado los funcionarios.

Esto obligó a Marcelo Gerez, un periodista local que actuaba como vocero de la Comisión, a prometer que en una hora más se firmaría el acuerdo. A las 19 horas, la Comisión Vecinal convocó a la Asamblea Popular. Ante más de 10.000 personas impacientes, Gerez informó sobre las distintas soluciones ofrecidas a los 36 puntos. Muchas despertaron el repudio (como los puestos laborales del 'Plan Trabajar'); otras despertaron aplausos (los 1.000 subsidios de desempleo o los 1.420 puestos en la petrolera); en otros casos, interrogantes. Gerez informó también que el gobierno exigía que se levantara el corte, lo que generó voces de repudio. Inmediatamente, hizo uso de la palabra Juan Nievas, de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi y ligado a la CCC, para señalar que la promesa de 1.420 puestos laborales de las petroleras privadas era sólo una versión, lo cual provocó el rechazo de la oferta del gobierno al grito de "el pueblo no se va". Cuando Gerez bajó de la tarima, un grupo de piqueteros intentó agredirlo porque quería entregar la lucha.

La Comisión volvió a reunirse con el obispo, que la reprendió duramente; atacó la Asamblea Popular y dijo que la Gendarmería estaba por avanzar. Con anterioridad, los curas locales habían armado una procesión, que se había llevado fuera de los cortes, a una misa en la plaza de Mosconi, a unas 500 personas. Una de las radios de Tartagal planteó entonces que el 70% del petitorio estaba resuelto y que había que salir a festejar el triunfo. El Centro Empresario, a partir de la iniciativa del sector maderero, también promovió el levantamiento del corte; simultáneamente, anunciaba que no iba a seguir contribuyendo con víveres al sostenimiento del corte. La FM de Mosconi reclamó la destitución de Nievas y Raineri, a pesar de que los movileros de esa radio informaban desde el corte que eran los únicos delegados con los que la gente estaba conforme.

Gerez logró entonces que un sector de piqueteros levantara el corte principal. El levantamiento duró apenas media hora: otros grupos lo restablecieron porque ninguna asamblea había resuelto levantar la lucha. En ese momento, Gerez desapareció, otros miembros de la Comisión se escondieron; Nievas y Raineri retomaron la conducción y llamaron a la multitud a mantener la unidad y a fortalecer el corte pues se temía que la Gendarmería utilizara la confusión para reprimir. Esa noche, los piqueteros fueron miles.

La masa de la población, sin embargo, iba arribando a la conclusión de que el petitorio no sería satisfecho en su totalidad y que la mayoría de la propia Comisión no estaba dispuesta a ir a fondo. En ese cuadro, fue ganando terreno la idea de que lo fundamental era mejorar la situación de los desocupados, tanto en el monto como en la cantidad de puestos laborales. La lucha no lograba extenderse en forma consistente a otros departamentos (la dirección del sindicato docente había respondido al reclamo de un paro provincial de apoyo con un 'telegrama de solidaridad'); muchos miembros de la dirección actuaban en forma vacilante y, en algunos casos,

promovían abiertamente el divisionismo. El obispo captó este clima: esa noche se reunió separadamente con distintos líderes de los piqueteros y, valiéndose de promesas y amenazas, convenció a la mayoría para que levantara el corte.

La Asamblea Popular de la mañana del miércoles 14 de mayo resolvió levantar el corte, luego de que el gobierno se comprometiera a otorgar 1.000 ‘fondos de desempleo’ de 220 pesos por un año; 2.200 puestos por un año del ‘plan Trabajar’ por el mismo importe; otros 1.000 puestos por 6 meses y 800 vacantes en petroleras privadas y a no tomar ningún tipo de represalias. El reclamo era de 5.000 subsidios o puestos laborales por 400 pesos, más carga social y salario familiar.

En todo este proceso de lucha se había diferenciado un bloque combativo, que se esforzó por darle un carácter consecuente a la movilización, que defendió el funcionamiento de la Asamblea Popular, que intentó que los delegados fueran electos y también revocables. Gracias a la orientación de este bloque se extendió el corte y se resolvió el paro por tiempo indefinido de la docencia del departamento de San Martín, que se fue ampliando a los otros sectores de trabajadores.

El bloque combativo no logró superar el frente de las patronales y la Iglesia ni pudo torcer el rumbo de los acontecimientos pero ganó una experiencia de lucha y una autoridad política frente al pueblo trabajador, dos ‘activos’ que sabría utilizar en un futuro no muy lejano. La lucha por defender lo conquistado por la pueblada quedaba por entero en sus manos.

El bloque combativo sacó conclusiones fundamentales para el desarrollo futuro de la lucha. “La emergencia de las puebladas y el funcionamiento de las Asambleas Populares no cancela la lucha política, sino que la exacerba. En este tipo de lucha de clases, se pone en juego la capacidad de los explotados (y ello depende de que actúen con una política propia) para imponer sus intereses”.⁸² De una vez y para siempre, la dirección piquetera salteña había superado el callejón sin salida de las ‘multisectoriales’.

La violación por parte del gobierno de Romero de los acuerdos que permitieron el levantamiento del corte, le daría oportunidad a los piqueteros de Tartagal y Mosconi de llevar a la práctica esas conclusiones políticas. Había nuevos levantamientos populares por delante.

78. En la vecina Bolivia, el corte de ruta era un método de lucha utilizado con frecuencia, en especial por los campesinos y los pueblos originarios.

79. Altamira, Jorge, “Un nuevo levantamiento popular”, en Prensa Obrera, 15 de mayo de 1997.

80. Daniel Blanco, “La victoria es posible, ¿cómo lograrla?”, en Prensa Obrera, 15 de mayo de 1997.

81. “Fortalecer el bloque combativo”, reportaje a Perico Raineri, en Prensa Obrera, 15 de mayo de 1997.

82. Blanco, Daniel, “Balance del levantamiento del corte”, en Prensa Obrera, 22 de mayo de 1997.

Mayo/ Junio de 1997: Jujuy, Cruz del Eje, una pueblada nacional

Sin un momento de respiro, a la pueblada de Cutral Co le siguió la del norte salteño. A ésta le siguieron las de Jujuy y Cruz del Eje. El movimiento piquetero se extendía por todo el país.

En Jujuy, la pueblada comenzó con el corte de la ruta 34 a la altura del Ingenio Ledesma por parte de los zafreros desempleados. La represión de la Gendarmería, que dejó 50 heridos, entre ellos mujeres y niños, extendió el corte –1.500 vecinos se sumaron inmediatamente– e hizo estallar a la provincia. En el curso de una semana se sumaron Perico, Palpalá, San Pedro, La Quiaca, La Mendieta, Abra Pampa. El Frente de Gremios estatales declaró la huelga general.

“El crecimiento geométrico de los cortes de ruta tiene una sencilla explicación: el abismo que existe entre la oferta gubernamental y las necesidades de los trabajadores. Mientras el gobierno provincial promete, como simple intermediario títere del gobierno menemista, crear 2.400 puestos de trabajo para toda la provincia; en una sola de las localidades en conflicto, San Pedro, se solicita la implementación de fuentes de trabajo para más de 4.000 desocupados. Por supuesto que la ‘solución’ acercada por el gobierno nacional, aparte de insuficiente, no consiste en otra cosa que el nefasto ‘Programa Trabajar II’, por 200 pesos, que se convierten en 150 pesos cuando son las municipalidades las que ofrecen el ‘trabajo’. Esto explica porqué los piqueteros han rechazado hasta ahora la oferta de Ferraro, gobernador jujeño (...). Acorralado por esta rebelión popular, le pidió a la Gendarmería que se retire de las zonas en conflicto, para no terminar incendiando la provincia”.⁸³

Los movimientos de corte de rutas estaban encuadrados dentro de ‘multisectoriales’, en las que actuaba el empresariado local. Por ejemplo, la Comisión Multisectorial de Ledesma, que fue a reunirse a San Salvador con el gobernador, estaba compuesta por desocupados y miembros de la Unión de Empresarios de la zona. Uno de los voceros de la Multisectorial era nada menos que el presidente de esta central empresaria, Antonio Alvarez, quien se manifestó en contra de la “cerrada de ruta que pueda terminar en un descalabro”.

Después de estas palabras no es difícil comprender que el corte, en realidad, empezó en contra de la voluntad de la Multisectorial de Ledesma. “Aquí coexisten tres comisiones de desocupados, pero la que verdaderamente jugó un papel en la lucha fue la comisión de piqueteros, surgida de una ruptura con los sectores afines a la multisectorial. Esta no avalaba el corte de ruta y metía miedo constantemente con el tema de la represión por parte de la Gendarmería. Por lo que se registra en los testimonios recogidos (...), la CTA y el MTA no apoyaron en ningún momento el corte; menos aún la CGT, que cuando arreciaba la represión, el 22 de mayo, estaba firmando la flexibilización laboral con el gobierno (...) Pablo Dietrich, piquetero de Libertador y militante del MST, generaliza aún más esta afirmación: “Los sindicatos no apoyaron los cortes de ruta”.⁸⁴

El fenómeno principal del corte de Jujuy fue que los trabajadores desocupados hicieron fracasar, por todo un período, las maniobras que había aplicado el gobierno para desmontar los cortes en Cutral Co y en Tartagal. En numerosas localidades de Jujuy, las promesas de los ‘planes Trabajar’ combinadas con la mediación de la Iglesia y la desgravación impositiva para los empresarios, no dieron resultado. Esto era particularmente agudo en Libertador, donde los ‘representantes’⁸⁵ que ‘bajaban’ esas propuestas a las asambleas eran vivamente cuestionados por los piqueteros. Los trabajadores en lucha no querían paliativos sino compromisos firmes; no querían ‘planes’ baratos sino un verdadero seguro al desocupado de 400 ó 500 pesos; reclamaban la reactivación de los centros productivos, lo que equivalía a exigir la estatización de los monopolios azucareros, agrícolas, comerciales o energéticos que dominan en esas regiones.

En un folleto publicado seis meses después de la pueblada jujeña, Susana Valerdi recuerda que “crecían las críticas a quienes ‘nos quieren representar pero en realidad no nos representan’. La falta de una dirección para la lucha, la violación repetida de los mandatos, era cada vez más sentida. Había gran preocupación porque Libertador era considerado bastión de la lucha en toda la provincia”.⁸⁶ Uno de los ‘representantes’, que intentó defender la propuesta oficial fue abucheado. “Se escuchan gritos: ‘Vendidos’, ‘Se han vendido’...”.⁸⁷ Hay propuestas de cambiar la Comisión.

En ese momento decisivo intervino Nancy 88, una piquetera reconocida por su combatividad, que refiriéndose a los ‘representantes’ señaló: “Anoche estábamos muy enojados por lo que pasó, no vinieron aquí (...) Démosles otra oportunidad. Está bien, nos han desobedecido pero démosles otra oportunidad”.⁸⁹ Entonces se rechazó la primera propuesta oficial pero se mantuvieron los mismos ‘representantes’. El sector más combativo de los piqueteros no se presentaba como una dirección alternativa sino que se limitaba a ejercer presión sobre los ‘representantes’... entre los que se encontraban los miembros de la Unión de Empresarios de la zona. Entre éstos, no sólo había elementos que impulsaban la aceptación de la miserable propuesta oficial sino que, además, estaban de acuerdo con la maniobra que impulsaba el gobierno para dividir el movimiento: que Libertador y San Pedro arreglaran ‘por separado’ y se repartieran los ‘planes’, dejando sin nada a las demás localidades. Este planteo también fue rechazado en la asamblea.

Fue necesaria la intervención a fondo de la Iglesia para forzar a los piqueteros. Los párrocos “moderaron las asambleas de manifestantes” y sus “sugerencias” consistieron, fundamentalmente, en “el impulso a la formación de frentes sociales con la participación del Gobierno, los empresarios y los sindicalistas”.⁹⁰ El acta firmada finalmente, apoyada por el Frente de Gremios Estatales y ATE, tuvo que ser impuesta por la ‘presión’ del “combativo cura Jesús Olmedo”, que salió a “atemperar los ánimos de los piqueteros menos flexibles sin perder el espíritu de cuerpo de la flamante Coordinadora de Piqueteros”.⁹¹

La Iglesia impuso su salida a la pueblada, tanto al gobierno (que debió aflojar finalmente 12.579 ‘planes’) como a los piqueteros, como lo ponía en evidencia el hecho de que la propia Coordinadora reconocía a la Iglesia como “sola intermediaria” en el manejo de “todos los beneficios, puestos de trabajo, subsidios”.⁹² El dominio político de la Iglesia sobre la Coordinadora Provincial de Piqueteros era tan marcada que su acta constitutiva establecía que “los presentes firman de conformidad (...) rogando la protección de Dios, fuente de toda Razón y Justicia”.⁹³

Aunque el acta dejaba constancia que los piqueteros consideraban “totalmente insuficientes” los logros alcanzados –lo que explica por qué no dismantelaron los piquetes, sino que los transformaron en ‘ollas populares’ a la vera de los anteriores cortes– la confianza en los sectores ‘combativos’ de la Iglesia sería mortal para los piqueteros jujeños.

El Cordobazo de Cruz del Eje

En Cruz del Eje, la ‘pueblada’ fue tan impresionante como la jujeña, la salteña o la neuquina. Una asamblea popular, el martes 27 de junio de 1997, no sólo rechazó el acuerdo establecido por una ‘comisión multisectorial’ con el enviado del gobierno nacional, el futuro gobernador De la Sota, sino que, además, decidió “la destitución de esa comisión bajo el (para nada amigable) rótulo de ‘traidores que firman por atrás’”.⁹⁴

En esa asamblea fue abucheado el intendente e insultado el obispo. Fue repudiado, además, el ministro de gobierno de Mestre (Aguad). La asamblea consideró los anuncios de De la Sota y Aguad como ‘promesas vagas’ y ‘propuestas no satisfactorias en función de los problemas planteados’. Así, los piquetes arrancaron con extraordinaria fuerza en los cinco accesos principales de la ciudad. El programa del corte, sin embargo, no planteaba el subsidio a los desocupados sino “la declaración de estado de emergencia económico y social, que resulta en exenciones impositivas a las empresas de la zona y a las que se instalen en el futuro. Así, gran parte del pro-

grama –impulsado tanto por la vieja multisectorial como por la nueva– estaba destinado a la burguesía comercial, industrial y agrícola, y no a los desocupados”.⁹⁵

El miércoles 28, cuatro mil personas votaron por unanimidad seguir con el corte... El jueves, pese a que los dirigentes de la nueva ‘multisectorial’ –con el padre Tito a la cabeza, único sobreviviente de la comisión que había sido destituida el martes– quisieron ‘orientar la asamblea a levantar el corte’, “ocho mil personas decidieron seguir”.⁹⁶ Pero sin un bloque clasista organizado que combatiera la presión de la Iglesia y de los elementos burgueses, ni una reivindicación clara a la cual aferrarse, el movimiento no podía ir mucho más allá. El viernes, como resultado de la enorme presión de la Iglesia, se logró el levantamiento, en una asamblea donde, para evitar sorpresas, la nueva ‘multisectorial’ no abrió la lista de oradores.

La pueblada de Cruz del Eje es otro ejemplo de cómo el asistencialismo, el clientelismo y la ausencia de independencia política destruyen al movimiento piquetero. La Comisión que protagonizó el corte –dirigida por Ralo Avila, un hombre ligado al sindicalismo centroizquierdista– se constituyó como una “organización no gubernamental” (ONG), que comenzó a tramitar y a gestionar ‘planes Trabajar’. Poco a poco, los ‘planes’ comenzaron a disminuir sistemáticamente y fueron renunciando los miembros designados por la asamblea; un año después de la pueblada, llovían sobre la ONG denuncias de corrupción y de componendas con los partidos del gobierno y las instituciones (su aniversario fue ‘celebrado’ con una misa por el obispo Colomé, declarado sostén político del ex intendente preso por defraudación y miembro de la primera comisión revocada en la pueblada).

Claudia Avallay, militante del PO y miembro renunciante de la Comisión, denunciaba un año después de la pueblada que “los puestos ‘Trabajar’ cubren a una minoría de desocupados, fueron repartidos según simpatías, adhesiones políticas y favoritismos; no han solucionado el problema de la desocupación y sí han establecido mano de obra barata y sin derechos laborales (...). El anunciado diferimiento impositivo benefició a los oligarcas de Cruz del Eje que ahora pagan menos impuestos”.⁹⁷

El movimiento de desocupados de Cruz del Eje se reconstituyó sobre una base independiente, pero le tomó más de dos años remontar la cuesta provocada por la derrota que desde adentro del propio movimiento había provocado la Comisión transformada en ONG. Cuando los desocupados volvieron a cortar la ruta, en marzo de 2000 y fueron reprimidos, la ONG y Avila les dieron la espalda.

83. Brodsky, Jorge, “Una provincia cortada por los piqueteros”, en Prensa Obrera, 29 de mayo de 1997.

84. Brodsky, Jorge, “Instantáneas de la izquierda en Jujuy”, en Prensa Obrera, 11 de setiembre de 1997.

85. Así se designaba a la “Comisión negociadora”, que estaba integrada por la Comisión de Desocupados, los tres gremios estatales (municipales, docentes primarios y docentes secundarios) y la Unión Empresaria, que constituían la ‘Multisectorial’.

86. Valerdi, Susana, “La pueblada de Libertador y el Jujueñazo (12a nota). El nuevo corte en Libertador”, en Hoy, 25 de febrero de 1998. Originalmente este trabajo apareció publicado como una sucesión de notas en el periódico Hoy; posteriormente fue editado como folleto separado.

87. Idem anterior.

88. No siempre las crónicas de los periódicos obreros recuerdan los nombres y los apellidos de los compañeros que intervienen en las luchas populares. A lo largo de este libro se encontrarán referencias y expresiones de luchadores de los que, como en este caso, la crónica sólo menciona por su nombre, su apellido o, a veces, tan sólo por su apodo.

89. Idem nota 86.

90. Clarín, 1º de junio de 1997.

91. Página/12, 1º de junio de 1997.

92. “Acta Constitutiva de la Coordinadora de Piqueteros y Desocupados de la Provincia de Jujuy”, en Hoy, 4 de junio de 1997.

93. Idem anterior.

94. Daniel Salas y Claudio Sosa, “El Cordobazo de Cruz del Eje”, en Prensa Obrera, 5 de junio de 1997.

95. Idem anterior.

96. Página/12, 1º de junio de 1997.

97. “A un año de la pueblada, Cruz del Eje toca fondo”, reportaje a Claudia Avallay, en Prensa Obrera, 6 de agosto de 1998.

La organización de los desocupados en Buenos Aires: desarrollo y limitaciones

Las primeras organizaciones de desocupados en el Gran Buenos Aires –o, al menos, los primeros intentos de organización– tuvieron lugar en 1996. Pero fue en 1997 –el año en que comenzó a manifestarse abiertamente el derrumbe del peronismo (en Buenos Aires, el PJ perdió las elecciones parlamentarias a manos de la naciente Alianza)– que las organizaciones de desocupados tuvieron un desarrollo masivo, en particular en dos grandes distritos: La Matanza y la Zona Sur del Gran Buenos Aires.

El desarrollo de las organizaciones de desocupados es paralelo al derrumbe del peronismo y al resquebrajamiento del aparato asistencialista montado por Duhalde –las ‘manzaneras’– que se produjo tanto desde afuera como desde adentro. Desde afuera, por el creciente rechazo de los trabajadores y los desocupados a la manipulación de los punteros que los obligaban, a cambio de bolsones de alimentos o ‘planes de empleo’, a afiliarse al PJ, a votar en sus internas o a concurrir a los actos de algún candidato del partido que promovía el desempleo, la flexibilización y la rebaja de los salarios. En un folleto sobre el surgimiento de la organización de desocupados de la CCC, Juan Carlos Alderete recuerda la “gran conmoción” provocada por sus denuncias de “la instrumentación de la entrega de mercadería para llevar gente al acto de Duhalde en Racing (durante la campaña electoral de 1997)”.⁹⁸

Pero el aparato asistencialista también se resquebrajaba por dentro. A mediados de 1997, un grupo de ‘manzaneras’ de distintos barrios de Avellaneda elevó un petitorio a la Municipalidad reclamando ser incluidas en el ‘plan Trabajar’. Una ‘manzanera’ denunciaba que “somos trabajadoras sociales, pero sin recibir un sueldo del Estado (...). La mayoría de nosotras no hace esto por ser de Chiche (Duhalde), o del gobierno. Necesitamos un medio de sustento, tanto como toda la gente a la que le damos la comida”.⁹⁹ La reivindicación se generalizó y el gobierno se vio obligado a hacer una reunión general de ‘manzaneras’ para salir al cruce del reclamo.

Este planteo de las ‘manzaneras’ mostraba la realidad del ‘aparato asistencial’ duhaldista: “Un gigante de pies de barro, corroído internamente por la crisis social. Las ‘manzaneras’ (comenzaban) a reconocerse como integrantes de la inmensa legión de desocupados y subocupados de la provincia: (...) no habían sido ‘asimiladas’ al aparato duhaldista por convicción, sino empujadas por su propia miseria y desesperación. El famoso ‘ejército de las manzaneras’ está compuesto por rehenes del gobierno, y amenaza con romperse en mil pedazos ante el agravamiento de la miseria social y la multiplicación de los reclamos en las barriadas del Gran Buenos Aires”.¹⁰⁰

La derrota electoral de 1997 y la creciente fractura del peronismo –enfrentamientos entre el menemismo y el duhaldismo y, dentro de éste, entre sus numerosas líneas internas– acelerarían este proceso. Tanto Juan Carlos Alderete, de la CCC de La Matanza, como Silvia Jayo, del Polo Obrero de la Zona Norte del Gran Buenos Aires¹⁰¹, coinciden en señalar el papel que jugaron las ‘manzaneras’ que rompían con el aparato –en forma individual o en pequeños grupos– en la formación de las primeras organizaciones de desocupados.

Los desocupados de La Matanza

En 1996, el PTP-PCR comenzó trabajar en la organización de los desocupados, lo que significó un giro de 180 grados en la política que había seguido hasta entonces frente al naciente movimiento.¹⁰²

La orientación política que estableció para este trabajo fue reemplazar la consigna de “subsidio de 500 pesos para todos los desocupados mayores de 16 años” que venían planteando los distintos movimientos, por el reclamo de ‘planes de empleo’ y ‘ayuda social’, es decir, alimentos, chapas, etc. A lo largo de estos años, el PTP-PCR, en diferentes plenarios y asambleas, ha votado explícitamente contra las mociones que planteaban el subsidio y el reparto de las horas de trabajo (por ejemplo, en el plenario que estableció el programa del corte de La Matanza de octubre/noviembre de 2000).

En el folleto ya mencionado, Juan Carlos Alderete hace un verdadero elogio de los ‘planes de empleo’. “Los pañoles –escribe– son un hervidero de ‘chalecos amarillos’ (nombre que se les da a los que participan del plan Barrios Bonaerenses en La Matanza, por el color de sus casacas). Hombres, mujeres, jóvenes, va cada grupo con su capataz, sus herramientas y la tarea del día. Le han cambiado la cara a nuestros queridos asentamientos. Con machete y pala limpian el zanjón y mantienen las cunetas. Hay alegría, porque no trabajan como esclavos, sí, pero también porque saben que lo que hacen es útil’...”.¹⁰³

Es cierto que ante la situación desesperante de la miseria, ninguna organización de desocupados responsable puede despreciar el más insignificante paliativo que ayude a sobrellevar la miseria; también es cierto que estos paliativos, cuando son conquistados mediante la lucha, fortalecen la organización y permiten encarar la lucha por nuevas conquistas. Pero de ahí a considerar como una fuente de “alegría” a un empleo transitorio, de 150 pesos (la octava parte de la canasta familiar), sin jubilación ni cobertura de salud, hay un trecho muy largo...

En mayo de 1996, lo que más tarde sería la CCC de La Matanza organizó una olla popular frente a la Intendencia en reclamo de alimentos y ‘planes’. Se obtuvieron alimentos, lo que sirvió para fortalecer el movimiento.

En julio de 1997, un movimiento de desocupados más extendido cortó la ruta 3. El corte duró tres días y movilizó, a lo largo de toda su duración, a unos 1.000 desocupados. El corte fue levantado cuando, aprovechando el momento en que había menos desocupados, la policía amenazó con reprimir. Lo que podía haber resultado un fiasco terminó convirtiéndose en una victoria: “Así como con la olla del ‘96 nos adelantamos al lanzamiento del ‘plan Vida’, ahora nos anticipamos al ‘plan Barrios’ (que) Duhalde iba a anunciar (...). Los tenían preparados para las elecciones y las puebladas los obligaron a jugarlos antes”.¹⁰⁴ Se obtuvieron 60 ‘planes’ y el movimiento pegó un nuevo salto. Sobre esta base se desarrollaría la CCC-Desocupados de La Matanza que, más tarde, sería la base de la organización nacional de desocupados de la CCC.

El eje político y organizativo del movimiento fueron los ‘planes’ como explicaba el propio Alderete en un reportaje: “Impulsamos cualquier proyecto de infraestructura que nos permitiera entrar a cualquier plan, nacional o provincial”.¹⁰⁵ Con los ‘planes’, el movimiento se desarrolló; se organizaron nuevos barrios y contingentes de desocupados.

En esta etapa, la CCC logró desarrollar el movimiento de los desocupados de La Matanza sacando provecho de la política oficial para ‘contener’ la explosión de una pueblada en el Gran Buenos Aires, que consistía en el reparto más o menos masivo de ‘planes’. ¡Tan grande era el temor que habían despertado entre los explotadores los Cutralcazos, Tartagalazos y Jujeñazos! El grueso de esos planes iba a parar a los punteros del PJ; una parte –menor– la recibían las organizaciones de desocupados.

El propio Alderete explica que se estableció entonces una especie de ‘coparticipación’ en el reparto de estos ‘planes’ entre la CCC de La Matanza y el gobierno municipal. “El gobierno de la provincia –explicaba– tiene determinados planes otorgados a la Municipalidad, y la Municipalidad no quiere que nadie se los toque, pues ya están arreglados con cada ‘puntero’. En febrero (de 1998) acordamos con la Municipalidad que los planes futuros que cediera la provincia, por encima de los que ellos tenían, los íbamos a compartir”.¹⁰⁶

La fractura del aparato del PJ y los choques entre las distintas camarillas que lo componían facilitaban estos “acuerdos”.¹⁰⁷

El horizonte estratégico de la política del PTP-PCR –los ‘planes’ y la comida y el rechazo al subsidio y a la escala móvil de horas de trabajo– convirtió obligadamente a la CCC en una intermediaria entre el gobierno y los desocupados. Esta función de intermediación puso a la organización de los desocupados en una tensión permanente entre una tendencia a la integración al Estado –para asegurar el mantenimiento de los ‘planes’, como por ejemplo en los “acuerdos” que señala Alderete o en su integración en el Comité de Emergencia– y su resistencia a esta integración –que se manifiesta en los sistemáticos choques que mantiene con el aparato de la municipalidad y su tendencia a defender lo conquistado por medio de la movilización.

La política que establece como norte estratégico de la organización de los desocupados la obtención de ‘planes’ permitió un amplio desarrollo de la CCC pero, al mismo tiempo, le impuso serios límites políticos.

El primero es el serio retroceso sufrido por la CCC en el movimiento obrero industrial. Importantisimos dirigentes obreros y sindicales ligados a la CCC –como Edgardo Quiroga, de la CGT de San Lorenzo; Germán Pitter, de la Comisión Interna de Dálmine Siderca; o Miguel Delfini, dirigente de la histórica ocupación de la Ford en 1985 y primer Coordinador Nacional de la CCC– rompieron con ella acusándola de “abandonar el trabajo en el movimiento obrero industrial”. Es evidente que una orientación basada en los ‘planes’ y los bolsones, pone muy serios límites a la posibilidad de desarrollar un trabajo de integración de las luchas entre los trabajadores ocupados y los desocupados –el ocupado no está interesado en los ‘planes’; el desocupado no está interesado en las luchas del movimiento obrero industrial, que no aumentan sus posibilidades de obtener ‘planes’.

La solidaridad del movimiento de los desocupados de La Matanza hacia algunas de las luchas obreras que se desarrollaron en el distrito en ese período –que fue real, efectiva y valiosa, como, por ejemplo, en la huelga gráfica de Interpack– no tenía como base un interés común, establecido a través de una reivindicación que unificara a los trabajadores ocupados y desocupados.

No era ésta, sin embargo, la única razón de la crisis de la CCC con sus más prominentes dirigentes obreros. El trabajo sindical de la CCC estaba siendo golpeado, además, por su subordinación a las burocracias de Moyano y la CTA en la Mesa de Enlace, que dejó morir sin perspectivas ni continuidad la Marcha Federal de 1995 y que, a partir de 1997, estableció su estrategia en función del apoyo a las candidaturas patronales en las elecciones presidenciales de 1999 con el argumento de “castigar al menemismo en las urnas”... unos a través de Duhalde, otros a través de la Alianza.¹⁰⁸

Una segunda limitación que su programa impuso a la CCC es la dificultad para establecer planteos políticos programáticos más amplios y más profundos como consecuencia del desarrollo del propio movimiento. La corriente del PTP-PCR no ha podido desarrollar nuevos planteos reivindicativos que acompañen el crecimiento del movimiento o planteos políticos más amplios que extiendan su horizonte, como los planteos de los piqueteros salteños o neuquinos de ‘meter la mano en las petroleras’ o las luchas en el norte salteño para que las petroleras contraten desocupados. Este desarrollo reivindicativo y programático no ha venido desde fuera del movimiento de los desocupados sino desde adentro, como consecuencia de su maduración política y de su experiencia. Pero choca casi de inmediato con los límites que establece el planteo de las ‘multisectoriales’ con los sectores patronales afectados por la política económica oficial que reivindica el PTP-PCR. Esto explica el escaso desarrollo de la CCC en las regiones donde el movimiento ha tenido un desarrollo político y programático que superó el reclamo de los ‘planes’ y los planteos ‘multisectoriales’.

Una tercera limitación impuesta a la CCC por su programa es que, en la medida en que se apoya en los ‘planes’, el PTP-PCR no puede aparecer como un competidor político de los gobiernos que los distribuyen. Esto explica, en parte, el votoblanquismo del PTP-PCR o su nulo desarrollo como factor político (en comparación con el desarrollo de la CCC). Pero, a la larga, la propia CCC “deberá sufrir las consecuencias de no tener un partido que participe de la lucha directa contra los otros partidos por la conquista de la opinión de los trabajadores por su programa”.¹⁰⁹

El desarrollo de la FTV de La Matanza es posterior. Como la CCC matancera, surgió a partir de una organización barrial, en la que Luis D’Elía había jugado un papel dirigente en la lucha por

la titularización de las tierras. Surgió con el apoyo de la CTA como ‘contrapeso’ de la CCC de La Matanza y, más en general, como parte de la política de la central ‘alternativa’ para ‘contrapesar’ su menor peso relativo en el movimiento sindical.

La FTV-CTA se favoreció con el ascenso de la Alianza –D’Elía, miembro del Frepaso, fue elegido entonces concejal de La Matanza. Estableció un acuerdo estratégico con la CCC de La Matanza, apoyado en sus enormes acuerdos programáticos, pero manteniendo con ella una directa competencia organizativa.

Las organizaciones de la Zona Sur: el MTD y el MTR

El Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Florencio Varela surgió en 1997; en un primer y pequeño corte de ruta, obtuvo 50 ‘planes’, que le permitieron un gran salto organizativo, tanto en el número de barrios como de desocupados organizados. El segundo corte que realizó el MTD tuvo ya características masivas: se movilizaron 1.500 desocupados y se arrancaron mil ‘planes’. A partir de este triunfo, el MTD se extiende fuera de Varela, hacia otros distritos (en particular los del llamado ‘ramal Quilmes’), convirtiéndose en la organización de desocupados más importante de la zona.

El MTD reúne en su seno distintas corrientes políticas: un ala ligada al movimiento Quebracho, otra al anarquismo, elementos provenientes de la Iglesia y, finalmente, sectores que se refieren políticamente en las Madres de Plaza de Mayo. Combina un ‘discurso’ extremadamente politizado y radical –“lo principal es la toma del poder y no quedarnos en la lucha por el salario (...) los desocupados luchamos por 120 ó 160 pesos de salario, luchamos por la educación popular, pero también luchamos, que quede claro, por la toma del poder político”¹¹⁰– con un programa práctico que se circunscribe al reclamo de ‘planes Trabajar’ y de asistencia social. En contradicción con su ‘discurso’ politizado (pero no con su programa cotidiano), el MTD es hostil a la unificación de las reivindicaciones sociales y políticas de la clase obrera y, por sobre todo, es hostil a los partidos de izquierda. Los militantes del Partido Obrero que, como Mónica Vilela, jugaron un papel de vanguardia en la organización inicial del MTD, fueron perseguidos por su dirección y finalmente expulsados bajo la única acusación de “ser militantes del PO”. El MTD, a diferencia de la CCC, el FTV-CTA y el Polo Obrero, no tiene, ni intenta tener, un desarrollo en el movimiento sindical y en las luchas de los trabajadores ocupados.

Como la CCC, el MTD, sostiene que “los ‘planes’ son un subsidio” (y no su negación) y plantea como objetivo práctico del movimiento la conquista de estos ‘planes’. A diferencia de la CCC, sin embargo, establece una suerte de ‘objetivo final’ (“la toma del poder”; “el socialismo”). Pero entre su “programa mínimo” y su “programa máximo” no existe ninguna conexión, ni en términos de programa ni en términos de organización o de lucha política. En ningún momento el MTD explica cómo pasar de los ‘planes Trabajar’ a la “toma del poder”.

El MTD intenta superar esta contradicción mediante lo que denomina “politización” o “educación política”. Pero la “politización” y “educación” de un movimiento de trabajadores sólo puede desarrollarse a partir de la profundización del programa y en conexión con la estrategia por la cual esos trabajadores luchan a diario. La pretensión de “politizar” un movimiento al margen de su lucha y de sus reivindicaciones cotidianas está condenada al fracaso.

La historia del movimiento obrero enseña que cuando una organización tiene un “programa máximo” y un “programa mínimo” sin conexión entre sí y hasta contrapuestos, lo que determina su carácter es su “programa mínimo” que es, en los hechos, su verdadero y único programa. En el caso del MTD, la conquista de ‘planes Trabajar’.

Convertir una reivindicación parcial, cualquiera sea ella, en un fin en sí mismo en el cuadro del presente régimen político y social y no considerarla como un elemento de movilización en el cuadro de una salida de conjunto para los trabajadores y la nación atrasada, es mortal para un movimiento de lucha. Le da a los explotadores, con siglos de experiencia, una herramienta para manipular estas reivindicaciones –los ‘planes’; bolsones de comida; remedios, lo que sea– para

llevar a las organizaciones de desocupados a su integración al Estado y convertirlas en parte de su engranaje. En el caso del MTD, ese peligro fue advertido oportunamente. “Tenemos que luchar para que nos den esos reclamos, pero sin aceptar la integración al Estado o a los capitalistas (porque) de la integración al Estado al vaciamiento del MTD como movimiento de lucha hay un paso. Se plantea el camino inverso: afirmar el carácter reivindicativo del movimiento dándole un programa y una proyección políticas”.¹¹¹ La tensión entre la tendencia a la integración con el Estado –para ‘garantizar’ los ‘planes’ y la asistencia social– y el rechazo a esta integración recorre como una constante la actividad del MTD.

En la práctica, por ejemplo, el MTD fue desarrollando una serie de “relaciones” más o menos estrechas con la Municipalidad de Florencio Varela que incluía el “reparto” (entre el municipio y el MTD) de los ‘planes’ obtenidos; Pereyra, el intendente de Varela, se reservaba el papel de “mediador” entre el MTD y los gobiernos nacional y provincial. Esta confianza le ocasionó un muy fuerte golpe al MTD en ocasión del corte de fines de 1997/principios de 1998.

El corte ‘navideño’ del 97 duró 13 días y fue sostenido con una muy esforzada movilización de los desocupados y de los barrios. Pero terminó en una brutal represión policial, que el MTD no preveía y para la cual no estaba preparado, y que dejó decenas de detenidos.

Esa represión era parte de un giro más general de la política del gobierno frente a las organizaciones de desocupados. El gobierno había comprobado que el masivo otorgamiento de ‘planes’ sólo había servido para desarrollar masivamente las organizaciones de los desocupados en detrimento de su aparato de punteros. Se comenzó entonces a reducir la entrega de ‘planes’; los que caían no eran renovados. El movimiento fue puesto a la defensiva y obligado a librar luchas duras y aisladas para no perder lo conquistado.

A fines de 1998, el MTD sufrió una severa crisis con la expulsión de quien hasta entonces era su principal dirigente, Roberto Martino. El proceso de la separación fue oscuro y sus causas políticas nunca han sido debidamente aclaradas. De esta escisión surgiría, casi un año más tarde, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) encabezado por Martino. La evolución política posterior de ambas organizaciones permite reconstruir, parcialmente, las razones de la escisión.

El MTD –ahora organizado como “Coordinadora de Desocupados Aníbal Verón”– ha profundizado los planteos hostiles a los partidos de izquierda, detrás de los cuales se oculta un sector fuertemente clientelista. Se ha negado a participar en las Asambleas Piqueteras porque acusa indiscriminadamente a sus participantes –CCC, FTV-CTA, Polo Obrero, MTR– de “consensuar los cortes con el gobierno”.¹¹² En un documento reciente, el MTD no plantea una sola reivindicación política frente al hundimiento del régimen aliancista y a la cesación de pagos; se limita a plantear una “articulación” al margen de las luchas y de la catástrofe nacional ya que “sabemos que estos procesos de coordinación son sólidos cuando avanzan despacio”.¹¹³

El MTR, en cambio, ha buscado superar el apoliticismo y establecer, frente a la crisis terminal del régimen, una orientación política para el movimiento piquetero. Participó de las Asambleas Piqueteras y ha sido uno de los primeros movimientos, dentro de la Asamblea, que sostuvo la necesidad de una consigna política de conjunto para el movimiento: “Fuera De la Rúa-Cavallo”.

El MTR, que también tuvo un importante desarrollo en la zona Sur del Gran Buenos Aires, ha sido víctima de violentas represiones policiales, como la detención de 60 de sus integrantes en el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires en julio de 2001.

Crisis en la Iglesia

Como en todo el país, también en la provincia de Buenos Aires existía otro aparato asistencialista, tanto o más poderoso y ramificado que el de Duhalde pero con muchos más años de experiencia: el que manejaba la Iglesia. Especialmente en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, los obispos habían desarrollado un vasto sistema de comedores, entrega de ropas y medicamentos. El arquetipo de este sistema asistencialista era, en ese entonces, el cura Farinello.

Aunque en una medida mucho menor que el de Duhalde, también este aparato fue erosionado por la crisis. Una serie de sacerdotes, partiendo de los comedores, comenzaron a organizar a los desocupados. A diferencia de los años 70, cuando existía el movimiento de “Curas por el Tercer Mundo”, estas iniciativas eran individuales y no tenían un carácter organizado. Inmediatamente, estos sacerdotes chocaron con la jerarquía eclesiástica: lo último en lo que la Curia estaba interesada era en promover un movimiento –como el de los desocupados– al que combatía en todo el país. La resolución oficial de la Curia fue que la Iglesia no organiza a los desocupados sino que los ‘socorre’, y que ese trabajo ‘caritativo’ debía canalizarse a través de Caritas, es decir de la propia jerarquía eclesiástica.

Los sacerdotes que persistieron en su trabajo de organización de los desocupados fueron primero advertidos y más tarde expulsados de la Iglesia. Algunos, incluso, resistieron la expulsión y hasta ocuparon las capillas, con el respaldo de sus vecinos. De una de esta crisis surgió otro importante movimiento de desocupados de la Zona Sur, el MTD de Solano, orientado por el sacerdote (expulsado) Alberto Spagnuolo.

El Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (Mijp)

En la Zona Sur del Gran Buenos Aires, especialmente en el ‘ramal Lomas’, se desarrolla de una manera expresiva otra organización de desocupados: el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (Mijp) dirigido por Raúl Castells.

El Mijp nace alrededor del año 1993, como una organización de jubilados, en la lucha contra la destrucción del sistema previsional estatal por Menem y Cavallo. Se desarrolla en oposición, y a expensas, de la organización tradicional de los jubilados dirigida por el PC. El Mijp denuncia la destrucción del sistema jubilatorio y su consigna central es la “normalización del Pami”, por entonces intervenido por el gobierno menemista.

Se desarrolla sobre una base política asistencialista. En el juicio que se celebró en su contra a fines del 2000, Castells definió a su organización como una “entidad de bien público” que atendía una veintena de comedores para ocho mil jubilados, con suministros provistos por instituciones públicas. Comparó incluso esta asistencia con la que realizaba, con otras modalidades, el padre Farinello.

Para el sostenimiento de estos comedores, a los que como consecuencia de la crisis ya no sólo concurrían jubilados sino también desocupados, Castells inauguró una práctica que es distintiva de su movimiento, y que le dio notoriedad: las movilizaciones a los supermercados para solicitar la provisión de alimentos. La columna llega al supermercado, se solicita una entrevista con alguna autoridad del mismo y se le reclama la entrega de alimentos. Habitualmente, obtienen lo que reclaman. “Recurrimos a los supermercados cuando el gobierno no atendía nuestros reclamos” explicaba el propio Castells en un reportaje.

En 1996, cuando el PTP-PCR comenzó a trabajar en el movimiento de los desocupados, estableció un acuerdo con el Mijp. Este se incorporó a la CCC pero se mantuvo dentro de ella como una organización autónoma. Más adelante, cuando Castells intentó formar un “Sindicato Nacional de Desocupados” comenzó a tener roces crecientes con la CCC.¹¹⁴

El 12 de mayo de 1997, en solidaridad con los piqueteros de Tartagal, el Mijp, con el respaldo de la CCC, realizó el primer corte en el Gran Buenos Aires: ocupó por unas horas el Puente de La Noria. La represión fue verdaderamente brutal: Juan Carlos Alderete, de la CCC, recibió quince puntos de sutura como consecuencia de los golpes recibidos.¹¹⁵

En agosto de 1997, el Mijp organizó una movilización de todos los centros de jubilados que había desarrollado en el Gran Buenos Aires: cortó el Puente Pueyrredón durante unas horas para marchar, luego, a la Intendencia de Avellaneda. Obtuvo la promesa de 100 ‘planes’ y 3.000 kilogramos mensuales de alimentos para abastecer sus comedores. De allí, la columna se dirigió al

supermercado Wal-Mart, donde se reclamaron alimentos. Por esta movilización al supermercado, Castells fue procesado.

Esta práctica de reclamar alimentos en los supermercados –que no pretendía tener alcances revolucionarios y que incluso se realizaba con un cierto apoyo oficial– acabó sembrando la inquietud del gobierno menemista debido a las condiciones generales del país después del derrumbe del ‘plan’ Cavallo, en especial la desocupación masiva y la creciente organización de los desocupados. Por eso, Castells fue encarcelado –mucho después de sucedidos los hechos que se le imputaban– bajo la ridícula acusación de “extorsión” contra el supermercado Wal-Mart. El dirigente del Mijp había sido víctima de una maniobra montada por Duhalde y el menemismo para imponerle una ‘condena ejemplificadora’ al creciente movimiento de los desocupados. A pesar de que el delito del que se lo acusaba era excarcelable, Castells debió pasar la mayor parte del período de sustanciación del juicio en una prisión de alta seguridad.

La lucha por la libertad de Raúl Castells ocupa toda una página de la historia del movimiento piquetero. Se realizaron marchas, actos y manifestaciones por su libertad y el propio Castells mantuvo una prolongada huelga de hambre. Como consecuencia de esta lucha, se logró el traslado de Castells de la prisión de alta seguridad a la situación de arresto domiciliario.

A fines del 2000, cuando el proceso llegó a la instancia del juicio, era evidente que esa represión ‘preventiva’ había fracasado en toda la línea: Menem y Duhalde habían tenido que irse y el movimiento piquetero se extendía por todo el país. Durante el juicio, “Castells humilló a sus jueces y fiscales”.¹¹⁶ Aunque quedó en libertad, sufrió una condena ‘en suspenso’ que le impuso el tribunal, en parte para autojustificar su negativa a otorgarle la libertad durante la sustanciación del juicio y, también, para dejar un ‘antecedente’. Hoy Castells se encuentra nuevamente detenido; en caso de ser declarado culpable, deberá cumplir las dos condenas.

Los desocupados de Mar del Plata

Fuera del Gran Buenos Aires, uno de los movimientos de desocupados más pujantes de la provincia se desarrolló en Mar del Plata, una ciudad que tenía la particularidad –a diferencia de la inmensa mayoría de los municipios del conurbano– de estar gobernada por el radicalismo.

El movimiento ‘nació’ en 1997 con un corte de la ruta 88, en el que obtuvo la promesa de 6.000 ‘planes’ provinciales. Aunque estas promesas no fueron cumplidas, el compromiso arrancado sirvió para desarrollar el movimiento, que se ramificó: se formaron comisiones en decenas de barrios. Frente al explosivo crecimiento del movimiento, el intendente radical Aprile y la justicia provincial duhaldista ordenaron el procesamiento de 41 piqueteros que habían participado en el corte de la ruta 88.

Esta lucha inicial consiguió arrancar efectivamente 2.000 ‘planes Barrios’, impedir su distribución clientelista por los punteros de la Alianza y el PJ, y extenderlos más allá de los plazos previstos originalmente. Se fortalecieron las comisiones barriales y se obtuvo, además de un bolsón alimentario, algo todavía más importante: el control de su distribución.

El movimiento progresó y se formó una Coordinadora que tomó el nombre de “Unión de Comisiones por el Movimiento Teresa Rodríguez” con representantes de casi 30 barrios; la dirección la ejercen militantes afines al MTR del Gran Buenos Aires. Pero el movimiento refluó: en diciembre de 1997 agrupaba apenas a seis barrios; existían otras cinco comisiones que se encontraban fuera de la Coordinadora.

El movimiento se relanzó en abril de 1998, ante los múltiples conflictos planteados por las bajas selectivas de activistas en los ‘planes’ provinciales y por el congelamiento de las vacantes. Se ocupó el Concejo Deliberante, se realizaron asambleas en los barrios y el plan de lucha culminó con un corte de la ruta 226.

A comienzos de julio de 1999, el MTR de Mar del Plata ocupó la catedral local: además de exigir la ampliación de los ‘planes’, levantaba un programa que planteaba la necesidad de repar-

tir las horas de trabajo, un seguro de 500 pesos y la huelga general para imponer esta salida. Durante la ocupación de la Catedral, las comisiones de desocupados de una decena de barrios se concentraron en el centro de la ciudad, con picos de 300 compañeros y organizaron un festival que reunió 500 trabajadores y desocupados.

Después de 21 días de ocupación, los desocupados fueron desalojados violentamente de la Catedral por un comando parapolicial. El grupo GEO (policía antimotines) completó la tarea y detuvo a los dirigentes de la lucha. Las movilizaciones que durante varios días rodearon los tribunales lograron liberar a los detenidos.

El movimiento piquetero de Mar del Plata fue duramente golpeado por la represión. Emilio Alí, piquetero marplatense fue condenado, en abril de 2001, a cinco años y seis meses de prisión por el “delito” de pedir alimentos en el supermercado Tía para el sostenimiento del comedor popular de su barrio. La condena fue una aberración jurídica –todos los empleados del supermercado negaron haber sido amenazados por Alí– que estaba en la línea de las provocaciones y la escalada represiva lanzada por Storani en diciembre del año anterior.

A las sesiones del juicio, trucho desde el principio al fin, se movilizaron mil piqueteros pero fue notoria la ausencia de banderas, columnas y dirigentes sindicales, con la sola excepción de la Comisión Provisoria del Soip, la agrupación 22 de Abril de la Uocra y una columna de ATE Capital. Raúl Castells, presente en el juicio, denunció que “a mi juicio vinieron De Gennaro y Moyano; parece que hay presos de primera y presos de segunda”.

Pero la condena de Alí por un régimen en absoluta descomposición no amedrentó a los piqueteros. Las organizaciones piqueteras de Mar del Plata señalaron entonces que “la brutal condena de Emilio Alí nos ha dado pie para constituírnos como Coordinadora de lucha de trabajadores ocupados y desocupados en el camino de converger en un gran congreso nacional de piqueteros para superar las trabas que viene poniendo la burocracia sindical, sumando a todas las organizaciones de trabajadores, ocupados y desocupados, de estudiantes, de los sin techo, y demás organizaciones sociales en lucha”. Integraban esta Coordinadora organizaciones sindicales (CTA, Directiva Provisoria del Soip), organizaciones de desocupados (Unión de Vecinos Organizados, MTR, Coordinadora de Desocupados de Bosque Grande y Zona, FTV), organizaciones estudiantiles, de derechos humanos y partidos políticos de izquierda.¹¹⁷

La libertad de Emilio Alí es, desde ese momento, una bandera irrenunciable de todo el movimiento piquetero.

98. Alderete, Juan Carlos y Gómez, Arnoldo, Op. cit. Esta denuncia tocó un nervio particularmente sensible del aparato duhaldista: pocos días después, patotas gubernamentales destruyeron el jardín de infantes construido por los vecinos del Barrio María Elena.

99. Peralta, Marcelo, “Avellaneda, las manzaneras se rebelan: ‘queremos ser tratadas como trabajadoras’...”, en Prensa Obrera, 18 de setiembre de 1997.

100. Idem anterior.

101. Jayo, Silvia, “Las manzaneras de Zona Norte, un camino”, en Prensa Obrera, 8 de octubre de 1998.

102. Entre los partidos de la izquierda, sólo el PO y el Ptp-Pcr, como organizaciones nacionales, desarrollaron un trabajo de organización de los desocupados. El Pc, el Mst y el Pts estuvieron ausentes en esta tarea, aunque militantes de esos partidos o de alguna fracción de oposición a sus direcciones integran, en algunas provincias, los movimientos de desocupados, o incluso los encabezan, como por ejemplo en Comodoro Rivadavia (donde militantes del Pc tienen un papel destacado) o en el Chaco. El Mas, que inició un trabajo en Neuquén, posteriormente lo abandonó.

103. Alderete, Juan Carlos y Gómez, Arnoldo, Op. cit.

104. Idem anterior.

105. Hoy, 29 de julio de 1998.

106. Idem anterior.

107. “Estaba todo en juego: el gobierno de la provincia, Chiche Duhalde, Pierri. El arte está en usar sus matices y diferencias entre ellos a favor del movimiento” (Idem anterior).

108. La estrategia de la Cta de subordinar la lucha de los trabajadores a la campaña electoral de la Alianza fue expresada, de una manera indiscutible, por Julio Fuentes, de la Cta neuquina, cuando en un acto realizado durante una huelga general de los estatales de la provincia en 1999, cerró su discurso diciendo: “Yo no les voy a decir a quien votar, pero sí a quien no votar. No voten al PJ o al MPN”.

109. Altamira, Jorge, “Las posiciones del Partido Obrero y sus reuniones con el Pcr”, en Prensa Obrera, 27 de septiembre de 2001.

110. “En la Argentina hay una enorme reserva de poder popular”, en La Maza, sin indicación de fecha (alrededor de julio/agosto de 2001).

111. Heller, Pablo, “Crisis en el Mtd de Varela: Es necesario un replanteo general”, en Prensa Obrera, 7 de enero de 1999.

112. Coordinadora de Trabajadores Desocupados “Aníbal Verón”, “La más contundente de las medidas de lucha en el Gran Buenos Aires y el debate sobre las líneas de acción para los sectores en lucha”, Buenos Aires, 23 de noviembre de 2001.

113. Idem anterior.

114. Cuando este libro entraba a imprenta, se hizo pública la ruptura del Mijp de Castells con la Ccc.

115. La ocupación del Puente de La Noria tuvo un enorme impacto mediático, así como otras actividades que desarrolló el Mijp de Castells, como por ejemplo la ocupación del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, el 30 de diciembre de 1997. En un reportaje, Castells reconoció la influencia recibida, en este aspecto, de la ya fallecida Norma Plá, dirigente del movimiento de los jubilados con una especial habilidad para atraer la atención de los medios de difusión hacia las manifestaciones o actividades de su movimiento.

116. Prensa Obrera, 13 de diciembre de 2000.

117. “Coordinadora por la libertad de Emilio Alí”, en Prensa Obrera, 10 de mayo de 2001.

Los piqueteros del movimiento obrero

Algunas tendencias burguesas o pequeñoburguesas menosprecian al movimiento piquetero, al que califican como “asistencialismo de izquierda”, quizás más democrático, quizás más ‘participativo’, pero no sustancialmente diferente del asistencialismo burgués tradicional.

Esos fueron, precisamente, los ‘argumentos’ que utilizó Izquierda Unida para no respaldar el gran corte de ruta de La Matanza de octubre/noviembre del 2000. “El MST se opuso al corte de ruta en La Matanza argumentando que era una lucha de aparatos, ‘asistencial’ y al servicio de burócratas como Luis D’ Elía, conceptos casi textuales de la posición levantada por la representante del MST en la Comisión Directiva del Suteba Matanza. La posición fue homogénea con la del PC, que denunció el pliego del corte por ‘reclamar lo que el sistema, por propia iniciativa, implementa como parches para sustituir a las verdaderas fuentes de trabajo y la vivienda digna; es decir, disponer de más planes Trabajar y más asistencia alimentaria’ (Propuesta, 9/11)”.¹¹⁸

Los que no ven en el movimiento piquetero más que ‘duhaldismo de izquierda’, no han captado –o han captado demasiado bien– que ningún movimiento ‘asistencial’ en la historia ha protagonizado puebladas y asambleas populares y, menos todavía, estableció –aún con un carácter tentativo o incompleto– un programa de reorganización social como el planteo de los piqueteros de Cutral Co y Tartagal-Mosconi de “meter mano en las petroleras”. Pero lo que, por sobre todo, pone en evidencia la miopía de estos críticos es el hecho, irrefutable, de que el movimiento piquetero ha revolucionado los métodos de lucha del movimiento obrero y ha reforzado a sus tendencias antiburocráticas, algo que no podría hacer ningún ‘asistencialismo’, sea de derecha o de izquierda.

El hecho sustantivo es que en la Argentina no sólo existen desocupados piqueteros y organizaciones piqueteras de desocupados; existen también obreros piqueteros y organizaciones sindicales piqueteras, que han tomado como propios los métodos de lucha de los desocupados –¡los piquetes!– que, en definitiva, no son más que los métodos de lucha históricos de la clase obrera que la burocracia sindical intentó hacer pasar al olvido. Y existe, por sobre todo, una tendencia a la unidad de acción de los piqueteros ocupados y desocupados. El movimiento piquetero es, en resumen, la unidad, y hasta la fusión, de las organizaciones sindicales y de las organizaciones de desocupados en una lucha común contra el capital y su Estado y como un paso para resolver la necesidad de una dirección propia y consecuente de la clase obrera.¹¹⁹

Ya se ha señalado cómo los docentes en lucha de Neuquén actuaron como piqueteros cuando ocuparon los puentes que unen esa provincia con Río Negro para llevar la gran huelga de 1997 a la victoria; también se ha visto cómo los docentes del norte de Salta se sumaron a los piquetes y a la pueblada de los desocupados de Tartagal y de Mosconi. Los petroleros del norte de Santa Cruz –en otro ejemplo de la utilización de los métodos piqueteros por los obreros ocupados y de la tendencia a la fusión de los movimientos de ocupados y desocupados– se valieron de los cortes de ruta para luchar por el salario, movilizaciones que fueron respaldados por los petroleros desocupados.

La heroica huelga de los gráficos de Atlántida, de comienzos, de 1997 es un ejemplo vivo del movimiento obrero piquetero. En una lucha inculdicable que duró varios meses, los piqueteros de Atlántida ocuparon la planta, resistieron a la policía, cortaron en varias oportunidades la ruta Panamericana, formaron piquetes para impedir que la producción de Atlántida fuera realizada en otras plantas gráficas (una antigua tradición piquetera del gremio gráfico abandonada por la burocracia ongarista), montaron una “carpa del aguante” frente a la planta cuando fueron desalojados de la planta por sucesivos operativos de cientos de policías el 1º y el 4 de abril de 1997, impulsaron la unidad combativa del movimiento obrero de la Zona Norte, se movilaron al poder público e, inclusive, participaron –por mandato de la asamblea obrera– en el acto de 1º de Mayo organizado por diversas organizaciones políticas y sindicales en la Plaza de Mayo.

La lucha piquetera de Atlántida tuvo una enorme proyección en el gremio gráfico. A pesar de su derrota, importantes comisiones internas gráficas, como la de Perfil, pasaron al campo clasista. Otras empresas dirigidas por los clasistas de la Lista Naranja, como las grandes fábricas gráficas de La Matanza, Interpack I y II, protagonizaron una gran lucha piquetera contra los despidos, a fines de 1998, que también fue una extraordinaria experiencia de fusión de la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados.

El Secretario General de la Interna de Atlántida, Néstor Pitrola, dirigente histórico de la Lista Naranja Gráfica, perseguido y procesado, se presentó a las elecciones del gremio del año 2000, al frente de una lista integrada por 50 delegados, y obtuvo el 40% del voto fabril gráfico de Capital y Gran Buenos Aires. La huelga de Atlántida y su dirección –la Comisión Interna clasista que encabeza la Lista Naranja gráfica– son el más rotundo desmentido a quienes pretenden que el movimiento piquetero es ‘asistencialismo de izquierda’.

Todas las luchas obreras importantes de ese período –las ocupaciones mecánicas en Córdoba, la ocupación de la metalúrgica Emfer, la lucha de los aceiteros de Santa Fe, la de los choferes de Transporte del Oeste, la ocupación de las minas de carbón de Río Turbio, la lucha de Corni– desarrollaron una tendencia marcadamente piquetera, como lo harían más tarde decenas de luchas, grandes y pequeñas, y, en particular, los paros generales. La razón es que la experiencia le iba demostrando al activismo obrero que para ganar era necesario recurrir a los métodos piqueteros. Los métodos de la burocracia, que aisló y boicoteó cada uno de estos conflictos, eran el camino seguro a una derrota sin lucha, es decir a una derrota desmoralizante.

En San Lorenzo, una CGT piquetera

La CGT de San Lorenzo fue una verdadera precursora de la utilización de los métodos de lucha piqueteros. Realizó los primeros cortes de ruta en 1992, en la lucha de los aceiteros, varios años antes de que se generalizaran en todo el país.

La CGT de San Lorenzo supo utilizar el piquete y el corte de ruta como un organizador de la lucha sindical: salió a armar piquetes y a cortar las rutas con delegados y activistas de todos los gremios frente a las plantas en conflicto cuando, por debilidad o por el terror impuesto por la patronal, los trabajadores y los delegados no lograban pararlas desde adentro.

En toda su área de influencia, la CGT de San Lorenzo respaldó con cortes de rutas y con ocupaciones de plantas y de edificios públicos los principales conflictos, como los de los aceiteros, la papelería Andino, la toma del frigorífico Ardeol o la lucha de los municipales de Capitán Bermúdez. Esta huelga fue verdaderamente histórica: duró 150 días y los trabajadores, con el respaldo de la CGT, ocuparon en tres oportunidades la Intendencia.

La conducta de la CGT de San Lorenzo constituye un verdadero ejemplo de cómo actúa una central obrera que está empeñada en la victoria. El de la CGT San Lorenzo fue un respaldo físico, con sus principales dirigentes a la cabeza, poniendo el cuerpo; como consecuencia de esta lucha, la justicia le abrió a Edgardo Quiroga, su secretario general, 41 juicios penales.

En julio de 1999, el propio Edgardo Quiroga trazaba un balance de la lucha piquetera de la CGT San Lorenzo, que contrastaba fuertemente con la seguidilla de derrotas, retrocesos y pérdidas de conquistas que muestra el movimiento sindical oficial: “Lo principal que señala Quiroga es que hemos tenido muchas luchas, en las cuales obtuvimos mayoría de victorias, como Vicentín, Ruyati, aceiteros, Resinfor, municipales de Capitán Bermúdez con efectivización y aumento de salario del 30%. Otra cuestión significativa es que, desde aquel glorioso plenario de abril del ‘97, no hubo un solo despido en los gremios adheridos a esta CGT. Esto no quiere decir que las patronales no hayan despedido. Lo que estoy diciendo es que el accionar conjunto de los sindicatos con esta CGT hizo reingresar a los compañeros despedidos (...)”.¹²⁰ La conducta de la CGT de San Lorenzo muestra la vitalidad de las organizaciones sindicales, como instrumento de la lucha obrera, cuando a su frente se encuentra una dirección clasista.

A mediados de 1999, la CGT de San Lorenzo formuló un llamamiento a todas las organizaciones obreras del sur de la provincia de Santa Fe para “consensuar un plan de lucha y un programa

ma mínimo” y para, muy importante, convocar “a un Congreso de Delegados de fábricas que analice, mejore y corrija el plan de lucha, que debatido en Asambleas, legitime las medidas y garantice la masividad en las movilizaciones”.¹²¹

El llamamiento de la CGT San Lorenzo tomaba la posta de otra consigna histórica del movimiento obrero argentino: el Congreso de bases de la CGT...

La reconquista piquetera del Soip de Mar del Plata

La lucha de los trabajadores del puerto de Mar del Plata es otro gran ejemplo del combate piquetero del movimiento obrero. Comenzó en 1999, con la huelga por tiempo indeterminado de los marinos, y se desarrolló plenamente al año siguiente. Los marinos y el Soip, que reúne a los trabajadores que procesan el pescado en las plantas de tierra, forman el corazón de la clase obrera industrial marplatense. Este último gremio había sido partido en dos por la acción de las patronales y de la burocracia, a través de la creación de cooperativas truchas armadas o sometidas a las grandes patronales que permitieron una explotación feroz. Se creó entonces un fenómeno nuevo: la organización de los expulsados del trabajo permanente, hasta convertirse en la fuerza dominante de la movilización del gremio. Pero no fue la burocracia la que organizó a estos trabajadores ‘cooperativizados’ sino la oposición clasista, la Unidad Obrera del Pescado.

En la huelga del 99, la “Comisión de lucha de los trabajadores en negro” fue ovacionada en una asamblea de 2.500 trabajadores cuando exigió una movilización por el blanqueo de la relación laboral (lo que les permitiría a los ‘cooperativizados’ cobrar la ‘garantía horaria’) o un subsidio al desocupado. Esta “Comisión...” pone en un enorme brete a los que oponen el movimiento de los desocupados con el movimiento sindical. Porque es indudable que se trata de una comisión sindical, pues organizó y representa a los trabajadores de las cooperativas truchas, una parte sustancial del gremio (el 60% según los cálculos más recientes), y como tal participa activamente en la vida del sindicato; pero, al mismo tiempo, reclama el subsidio al desocupado ya que los trabajadores ‘en negro’, a diferencia de los efectivos, no cobran la ‘garantía horaria’, y hasta organiza manifestaciones que “tienen arrinconado al municipio para que la ayuda social se efectivice ya”.¹²²

Si en el puerto de Mar del Plata, 1999 fue un ‘ensayo’; en el 2000 llegó la función a toda orquesta. Durante cien días, y ante la pasividad de las burocracias del MTA y de la CTA, los marinos desarrollaron una impresionante huelga general. Desde el inicio, la Unidad Obrera del Pescado llamó a sumar a la huelga a los obreros de la industria de tierra. A veinte días de iniciada la huelga, la UOP dio un paso adelante: actuando en la práctica como una verdadera dirección sindical, llamó a la huelga a los sectores ‘cooperativizados’ (en negro). Se produjo así la fusión de los obreros del mar y los de tierra. El miércoles 28 de junio, un gigantesco piquete de más de 1.000 trabajadores –marinos, ‘cooperativizados’ y efectivos del Soip– recorrió las grandes plantas procesadoras para sumar a sus trabajadores a la huelga portuaria; allí estalló la bronca contenida de los marítimos y de los obreros ‘en negro’ de la industria. Los obreros resistieron valientemente los intentos de reprimir su movilización, lo que generó una verdadera batalla campal en el puerto de Mar del Plata. Luego, los obreros marítimos hicieron el ‘aguante’ en la movilización de los trabajadores de la industria hacia el Soip que culminó en la ocupación del sindicato. La extraordinaria asamblea que se realizó entonces en el Soip ocupado, destituyó a la burocracia carnera y eligió una Directiva Provisoria.

El resumen de esta experiencia que hace Miguel Pérez, miembro de la Directiva Provisoria del Soip, deja en claro su carácter piquetero: “En el último paro biológico, y ante la reducción de la pesca de la merluza, nos juntamos con los compañeros marinos, que tomaron conciencia de que la única forma que tenían de obtener los reclamos era ir a la huelga. En esos momentos, nuestra dirección sindical llama a tres asambleas (que) votan en forma unánime adherirnos a la huelga por nuestros reclamos, el blanqueo, la actualización salarial y un subsidio de 500 pesos para cada trabajador desocupado. Nuestra conducción sindical no acata las resoluciones de la asamblea. Entonces, en movilización con más de 1.500 trabajadores, nos vamos al sindicato de marinos y les manifestamos que estamos de acuerdo con la huelga. Se forma un acuerdo de bases. Y nos presentamos juntos en las plantas. Cuando llegamos a las plantas, no nos dieron

bolilla. En ese momento, con el cansancio de la gente, se desataron los hechos que todos conocemos. Movilizados, fuimos capaces de superar a nuestra dirección sindical burocrática. Y tomamos en nuestras manos la tarea de pelear por nuestras propias reivindicaciones. Y adoptamos los métodos que teníamos a mano. A raíz de adoptar estos métodos, entramos en una lucha campal con la policía. Nos tiraron gases lacrimógenos, nos tiraron balas de goma, nos mordieron los perros. Muchos compañeros fueron detenidos (...). Durante todo este proceso, nuestras centrales gremiales, la CGT o la CTA, ni siquiera propusieron una simple huelga. Tampoco una pequeña movilización. Estábamos huérfanos. Tomamos la tarea de recuperar el sindicato en nuestras propias manos. Eso fue lo que hicimos".¹²³

Después de cien días de huelga, los marítimos marplatenses ganaron con los métodos piqueteros. Arrancaron un aumento de los salarios y del mínimo garantizado y un aumento de los francos. Esta era la conquista más importantes de la huelga porque permitía a los marinos descansar un mes por cada tres trabajados (con un salario garantizado), lo que constituía una suerte de reducción de la jornada y planteaba la contratación de nuevos trabajadores, lo que implicaba la virtual instauración de un 'cuarto turno'.

Para vencer, los marítimos debieron derrotar a la burocracia nacional del Somu. Mientras que en Mar del Plata se luchaba por el aumento salarial, la burocracia nacional negociaba un convenio que establecía una rebaja salarial del 30%. Cuando se puso a votación en asamblea el convenio firmado por la burocracia nacional, las bases lo repudiaron y resolvieron continuar la huelga por el aumento salarial. Entonces, la burocracia nacional intervino el sindicato marplatense, lo que fue 'acompañado' por el copamiento del puerto por la Guardia de Infantería y la masiva detención de activistas (liberados por las movilizaciones). Querían romper la huelga a sangre y fuego.

Pero la burocracia nacional del Somu no pudo tomar el sindicato: se lo impidió un masivo y combativo piquete de marinos y trabajadores del Soip que durante toda una semana rodeó la sede del Somu para impedir que cayera en manos de los rompehuelgas. La derrota de la burocracia abrió el terreno para que las patronales aflojaran el aumento de los salarios y de los francos.

En el gremio del pescado (Soip), la justicia ordenó el desalojo de la Directiva Provisoria de la sede y se la restituyó a la burocracia. Pero el golpe sufrido por la burocracia había sido demoleedor: la UOP no sólo había movilizado a los 'cooperativizados' sino también a un tercio de los efectivos e, incluso, a una franja de los delegados. Se abrió una nueva batalla por la recuperación del Soip, que aún no ha terminado.

* * *

La lucha piquetera del movimiento obrero ha ido creciendo en paralelo a la parálisis de las direcciones oficiales de los sindicatos. La nota dominante de las grandes luchas fabriles y sindicales que se desarrollaron bajo el gobierno aliancista fue la utilización de los métodos piqueteros. Un ejemplo notable fue la lucha de Aerolíneas, que comenzó con la gran huelga de los técnicos contra los despidos (comienzos de 2001), donde los cortes de ruta y los piquetes fueron impuestos por iniciativa de los delegados de base, y continuó con las iniciativas de lucha desarrolladas por los delegados de base de Ezeiza, Aeroparque y Perú 2: cortes de ruta, bloqueos de los mostradores, y toma de la pista para impedir la salida de los vuelos. Los piquetes de Aerolíneas lograron algo que parecía un sueño: el corte de una ruta... aérea.

Esta lucha piquetera reforzó a las tendencias antiburocráticas, como se puso en evidencia en la muy importante y prolongada lucha de la planta ceramista Zanón de Neuquén contra las suspensiones, los despidos y el cierre de la planta. Una combativa Comisión Interna, movilizada con los métodos piqueteros, logró recuperar el sindicato de las manos de la burocracia y está sosteniendo, durante meses, la lucha por la fuente de trabajo.

118. Rath, Christian, "IU no es piquetera", en Prensa Obrera, 27 de diciembre de 2000.

119. El Pc opone las organizaciones de los trabajadores ocupados y las de los desocupados o, para decirlo con sus propias palabras, opone "el lenguaje de protesta del movimiento obrero, que se inscribía en una tradición que incluía a los partidos y al Estado" al "lenguaje del corte o del estallido que no exhibe un futuro claro y aún no avizora una nueva identidad" (Propuesta, 16 de noviembre de 2000). Quien, como el Pc, reivindica en bloque la "tradición" de los sindicatos, los partidos y el Estado, lo que está reivindicando, en realidad, es la integración de los sindicatos al Estado, algo contra lo que luchan los piqueteros del movimiento obrero. Al reivindicar esta "tradición", el Pc repudia la "revolución" que el movimiento piquetero ha producido en el interior de los sindicatos, reforzando a las tendencias combativas que luchan por expulsar a la burocracia sindical.

120. "La convocatoria de la CGT de San Lorenzo", reportaje a Edgardo Quiroga, secretario general, en Prensa Obrera, 15 de julio de 1999.

121. "Llamamiento de la CGT de San Lorenzo", en Prensa Obrera, 6 de julio de 1999.

122. Comparada, Raúl, "Mar del Plata: por la victoria de los trabajadores portuarios", en Prensa Obrera, 22 de junio de 2000.

123. "Recuperar el sindicato... eso fue lo que hicimos", reportaje a Miguel Pérez, de la Comisión Directiva provisoria del Soip de Mar del Plata, en Prensa Obrera, 21 de setiembre de 2000.

El movimiento piquetero frente al ascenso de la Alianza

El régimen menemista llegaba a su fin en medio de una crisis excepcional. La producción industrial caía en picada; la desocupación afectaba a más de cuatro millones de trabajadores; el Estado nacional, las provincias y los grandes monopolios se encontraban en una virtual cesación de pagos de la deuda externa. El proyecto de integración económica sudamericana se había transformado en un campo de agudas rivalidades capitalistas y nacionales. La desnacionalización completa del sistema bancario, de gran parte de la industria y de los latifundios había reducido aún más la capacidad de los explotadores argentinos para gobernar en términos de autonomía nacional. La experiencia sobre las posibilidades transformadoras de un gobierno del peronismo se había agotado. La burocracia sindical de todas las tendencias, que había atado a las organizaciones obreras al proyecto 'nacional' de los partidos patronales y del Estado, había demostrado su definitiva incapacidad para defender las conquistas históricas de la clase obrera y hasta las propias organizaciones sindicales.

El carácter excepcional de la crisis, sin embargo, no sólo estaba representado por el derrumbe económico o la situación social desesperante a que habían sido llevadas las masas sino también por la feroz resistencia que desplegaron los trabajadores. A las grandes luchas que se han reseñado, se sumaron muchas otras.

En el norte de Santa Cruz (Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras, Cañadón Seco) y en Comodoro Rivadavia (Chubut), los desocupados petroleros protagonizaron varias semanas de cortes de rutas. Hubo nuevos cortes en Neuquén y en el Gran Buenos Aires, algunos de ellos de gran importancia como el de los desocupados de Florencio Varela, que se extendió por trece días y fue brutalmente reprimido; la movilización logró arrancar a todos los detenidos de la cárcel. En Mar del Plata, el movimiento de desocupados desarrolló un vigoroso plan de lucha, con cortes de ruta y ocupación del Concejo Deliberante. Surgían nuevas e importantes organizaciones de desocupados, como la Comisión del Barrio La Loma, en Laferrere, que en su extensión y desarrollo se convertiría más tarde en el Futrade (Frente Unico de Trabajadores Desocupados) de La Matanza, o la Coordinadora de Desocupados de Catamarca, que realizaba sus primeras movilizaciones. Se libraban importantes luchas en las empresas privatizadas (contra los despidos en Telefónica y Metrovías) y, sobre todo, grandes luchas provinciales en Jujuy, Tucumán y Corrientes, que adquirirían las dimensiones de verdaderas puebladas.

En este cuadro de hundimiento menemista, el imperialismo y la burguesía pasaron a respaldar a la Alianza entre la UCR y el Frepaso, que se presentaba como garante de la 'convertibilidad' y de las privatizaciones, es decir como defensora de las 'conquistas sociales' que las patronales habían logrado arrancarle al movimiento obrero en la década menemista. En realidad, la formación de esta Alianza fue precipitada por la crisis del menemismo y por la 'amenaza' que representaban las luchas que desarrollaron los explotados desde el Cutralcazo. En la formación de la Alianza influyeron decisivamente tanto la burocracia de la CTA (el propio Alfonsín reconoció la insistencia de De Gennaro en este sentido) como el Departamento de Estado y algunos de los grandes capitalistas que se beneficiaron con el menemismo, como Rocca (Techint), Soldati o el petrolero Oscar Vicente.

La CTA actuó como la 'pata sindical' de la Alianza. Esto significó un golpe para el movimiento piquetero, que fue llamado desde arriba a 'confiar' y a 'esperar'. Aunque hoy Luis D'Elía, de la FTV-CTA de La Matanza, señale públicamente su frustración por haber votado por De la Rúa, en la base del movimiento de desocupados este paso despertó, ya muy tempranamente, serias resistencias que se pusieron de manifiesto en el Congreso de las organizaciones de desocupados de la CTA, realizado a fines de agosto de 1997.

Un participante de ese Congreso, Miguel Vittone, de la Coordinadora de Desocupados de Berazategui, hace notar la frialdad con que fue recibido el llamado de De Gennaro de apoyar a la Alianza “para que le pegue un cachetazo al gobierno...”. También relata el abierto repudio de los delegados a la iniciativa de “reclamar derechos constitucionales de pleno empleo y trabajo digno por la vía judicial o a través de las organizaciones internacionales como la OIT, etc.” o que “el gobierno decrete la emergencia ocupacional”. El planteo, impulsado por la delegación de Rosario y respaldado por la Mesa del Congreso, de que el gobierno permitiera a los desocupados pagar los impuestos con... mano de obra fue directamente rechazado.

“Muchos compañeros –explicaba Vittone– se anotaron para decir lo que señaló el representante de Madryn: que nosotros tenemos que reclamar la eximición del impuesto y la reconexión de los servicios, que las instituciones del Estado abran un padrón de desocupados y para esto marcó el camino de la organización y la lucha, cosa que desde la mesa jamás se impulsó”.¹²⁴

El Congreso, también, puso en evidencia las dificultades de la dirección de la CTA para regimenter el movimiento: “Los desocupados pusieron en evidencia una mayúscula contradicción de la CTA: mientras eran llamados a afiliarse a la central y a participar, nunca fueron incluidos en su Comité Ejecutivo”.¹²⁵

La conclusión central de este Congreso es que la CTA se disponía a impedir que el movimiento piquetero ‘arruinara’ la campaña electoral de la Alianza... antipiquetera. La parálisis voluntaria de la CTA en la etapa de ascenso político de la Alianza provocó un serio retroceso de la central ‘alternativa’, que prácticamente no tuvo participación en las grandes luchas provinciales que se desarrollaban en Corrientes, Tucumán y Jujuy.

Otra corriente con peso en el movimiento piquetero, el PTP-PCR, llamaba a votar en blanco. Este voto en blanco evitaba combatir las ilusiones aliancistas, y sobre todo, frepasistas. No hay que olvidar que el Frente Grande (antecedente del Frepaso) surgió de un frente patrocinado por el PC y el PTP-PCR en 1992; tampoco que en las elecciones presidenciales de 1995 el PTP-PCR había anunciado que, en un eventual segundo turno, votaría por Bordón (que iba en una alianza con el Frepaso) ni que el PTP-PCR había acompañado, en la Mesa de Enlace, la política de la CTA de diluir las grandes luchas y manifestaciones populares de ese período detrás de la campaña electoral de la Alianza.

Otras corrientes que actuaban en el movimiento piquetero –como el MTD de Varela o el movimiento de Castells– también llamaban a votar en blanco pero, en este caso, justificándose en la necesidad de ‘separar la actividad política de la actividad reivindicativa’, es decir, en el apolitismo. Justamente, fue esta negativa a fusionar la política obrera con la reivindicación obrera en un movimiento común lo que frustró la posibilidad de realizar un acto unitario de las organizaciones piqueteras y de desocupados el 1º de Mayo de 1998, ya que el MTD de Varela, entre otros, pretendía impedir la intervención en el mismo de los partidos políticos obreros. La posición ‘antipolítica’ del MTD y su hostilidad a los partidos de izquierda estaba reflejando de una manera directa el atraso de una parte de las direcciones del movimiento pero, por sobre todo, las enormes presiones que sufría de parte de la burguesía y los aparatos estatales municipales, que administraban y distribuían los ‘planes Trabajar’.

La tendencia ‘antipolítica’ en el movimiento obrero es, históricamente, una tendencia que refleja los intereses y la presión de la burguesía ya que “para los capitalistas nuestras reivindicaciones no deben tener un alcance político porque cuestionan su poder (...). No basta el objetivo de la ‘coordinación de las luchas’ (coordinación que la dirección del MTD siempre circunscribió a las organizaciones ‘sociales’ en oposición a las ‘políticas’). Lo que traba la lucha y el accionar de las organizaciones ‘sociales’ es precisamente su subordinación a los partidos patronales”.¹²⁶

El centroizquierdismo aliancista o pro-aliancista había diluido dos de los movimientos piqueteros más importantes que se habían desarrollado en esos dos años, los de Cutral Co y Cruz del Eje. En la etapa del ascenso político de la Alianza, los años 1998/99, se interrumpió el ciclo de ascenso que el movimiento piquetero había mostrado desde sus inicios. En esos años hubo luchas esforzadas y duras –como el corte de Varela, el plan de lucha de los desocupados marplatenses, los cortes de la CCC de La Matanza para impedir las bajas en el ‘plan Barrios’, o los piquetes de obreros y desocupados que garantizaron el paro general del 14 de agosto de 1997–

pero fueron luchas aisladas y defensivas. El quiebre del ciclo ascendente del movimiento estaba mostrando las ilusiones que despertaba la Alianza pero, muy especialmente, las presiones de las direcciones aliancistas, como la CTA, para frenar el movimiento en función de las perspectivas electorales del binomio De la Rúa-Chacho Alvarez.

Fue necesario el ascenso efectivo de la Alianza al gobierno y su rapidísimo agotamiento para que se relanzara nuevamente el movimiento piquetero.

124. Vittone, Miguel, “De Gennaro llama a apoyar a la Triple Alianza en el Encuentro de Desocupados de la Cta”, en Prensa Obrera, 4 de setiembre de 1997.

125. Ana C. Dinerstein, Op. cit.

126. Heller, Pablo, “Crisis en el MTD de Varela”, en Prensa Obrera, 7 de enero de 1999.

El Polo Obrero

El Partido Obrero ofreció una salida política a la crisis del movimiento piquetero, y más en general del movimiento obrero, planteada por el ascenso de la Alianza, mediante la convocatoria a la formación de un “polo clasista”, aprobada en su X Congreso, de julio de 1999.

La resolución “Por la formación de un polo clasista” señalaba que “la década menemista ha constituido una verdadera lápida para el conjunto de las direcciones del movimiento sindical sin excepción. En ningún otro período de la historia la pérdida de conquistas obreras ha sido de tal magnitud. (...) La resistencia a semejante ofensiva capitalista ha sido protagonizada fundamentalmente al margen de los sindicatos. El Santiagueño, el fueguino metalúrgico, el Cutralcazo, el ‘aguante’ correntino, las puebladas y los cortes de ruta de los desocupados, tuvieron lugar con la oposición de la burocracia de los sindicatos”.127

De esta situación, eran plenamente co-responsables las direcciones sindicales ‘disidentes’ o ‘alternativas’. “El MTA y la CTA protagonizaron una Marcha Federal ¡hace cinco años! y una jornada contra la flexibilización laboral sin futuro dos años más tarde; la movilización de fines de julio y el extraordinario paro general de todas las centrales de principios de agosto de 1996 fueron dejados sin perspectiva. Todas las tendencias de la burocracia se han asociado a la privatización de las obras sociales. Cetera ha dejado caer el Estatuto del Docente; es inminente la entrada en vigencia de un convenio firmado por Upcn sin ninguna oposición consecuente y hasta con la complicidad de ATE (...). Aunque se consiguió la instalación de molinetes, la explotación de los choferes ha crecido como nunca, con el sistema de colectivos truchos, y en el subte se ha entregado la jornada de seis horas por insalubridad. La vida interna de los sindicatos, en su inmensa mayoría, es prácticamente inexistente”.128

A su vez, el profundo retroceso de la CCC en el movimiento obrero industrial, por su subordinación a la Mesa de Enlace CTA-MTA, demostraba “la necesidad apremiante de un polo de real carácter clasista, que luche para sustituir a la burocracia de los sindicatos y no para colaborar con ella”.129

La resolución ponía al descubierto una contradicción. Frente a la parálisis oficial, “el conjunto de esta situación, a saber, agravamiento sin precedentes de la crisis social; derrumbe económico capitalista; agotamiento del menemismo; inmovilismo programático de la Alianza; impotencia irreversible de la burocracia de los sindicatos; creciente rebelión popular, incluida la clase obrera industrial; todo esto plantea la oportunidad para construir una alternativa clasista en los sindicatos”.130

La recuperación clasista de los sindicatos era planteada como una tarea de conjunto del movimiento obrero, que excedía las fronteras formales de los sindicatos. “En la lucha por hacer renacer el movimiento obrero y dar paso a una dirección obrera clasista, es necesaria la concurrencia práctica de los jóvenes y de la mujer, y la organización de los desocupados. La organización independiente de la juventud y de la mujer trabajadora, y la organización de los desocupados, contribuirán enormemente a la formación de un polo clasista”.131

A mediados de agosto de 1999, un plenario obrero del que participaron comisiones, delegados y activistas de estatales de ATE de Capital, San Martín, Pilar y San Lorenzo; de Upcn Capital; congresales y delegados gráficos de la Lista Naranja; delegados de Cables-Uta de Smata; delegados docentes de Tribuna Docente-Lista Rosa; delegados de diversas líneas de UTA (TDO, 160, etc.); comisiones internas del gremio de prensa (Perfil, Diario Popular); la junta promotora de Suteba-Mercedes; metalúrgicos de San Martín; delegados municipales del Ramos Mejía y otros; delegados y congresales de Sanidad; delegados de Aerolíneas; la Coordinadora de Desocupados de Berazategui; delegados de Agrupaciones Clasistas de Metrovías; activistas de TBA;

delegados de Shell; un directivo y delegados telefónicos de Foetra-Capital; directivos de la Asociación Gremial de docentes de la UBA; delegados no-docentes de la UBA y un delegado de Godyear, se lanzó a la tarea práctica de formar y estructurar efectivamente el “polo obrero”.

Esta tarea recorrió diversas etapas. En julio de 2000, los promotores del Polo Obrero –a los que se habían sumado importantes dirigentes sindicales como Edgardo Quiroga, Secretario General de la CGT San Lorenzo– publicaron una “Carta Abierta al Movimiento Obrero”¹³² en la que se reclamaba un Congreso de Bases de la CGT para debatir un programa de los trabajadores frente a la crisis y la huelga general para imponerlo.

La “Carta abierta...” fue sumando adhesiones y pronunciamientos. Sobre esta base se lanzó una campaña de actos públicos de organizaciones sindicales y de desocupados en apoyo a las luchas que se venían desarrollando en el país.

En el acto realizado en Capital, a mediados de septiembre de 2000, encabezado por Edgardo Quiroga y Néstor Pitrola, participaron además de las organizaciones convocantes, una importante delegación del cuerpo de delegados de La Internacional (UTA), representantes del MTD de Varela y una nutrida delegación de la Comisión Provisoria del Soip de Mar del Plata. También estuvieron presentes Aníbal Varela, presidente de Adeom, Municipales de Montevideo, Gustavo López, Secretario de Organización del sindicato de los taxistas de Montevideo (Suat) y Jorge Altamira, legislador de la Capital por el Partido Obrero.¹³³

La campaña continuó con un muy importante acto obrero en Rosario, en el que participaron Edgardo Quiroga, secretario general de la CGT de San Lorenzo; Carlos Ghioldi, delegado de Empleados de Comercio; Rita Tissera, del cuerpo de delegados de Amsafe-San Lorenzo; José Zárate, de la Lista Verde-Naranja del Sindicato de la Carne-Rosario; Chinche Medina, delegado Foetra-Rosario, Lista Blanca; Noni Monzón, Secretario General de Municipales-Capitán Bermúdez; Claudio Ciani, de la Comisión Directiva de Amsafe-Rosario; Horacio Galaretto, de la Comisión Directiva de Aceiteros-San Lorenzo; Néstor Pitrola, congresal gráfico por la Lista Naranja, Federación Gráfica Bonaerense, y Carlos Blanco, de la Comisión Interna del Hospital Baigorria.

En el acto realizado en Córdoba tuvo una destacada participación la Comisión Directiva del Sindicato Municipal, que en esos momentos, en la lucha contra la flexibilización, había instalado una carpa frente al Palacio Municipal. También participaron en el acto del Polo Obrero cordobés el Sutrade (Sindicato de Trabajadores Desempleados) y delegados docentes.

El Polo Obrero también organizó en Mar del Plata un importante acto en apoyo a las luchas del movimiento obrero y los desocupados: participaron el MTR marplatense, la Comisión de Desocupados de Bosque Grande, el secretario general de la Asociación Bancaria, la Comisión Provisoria del Soip (pescado) y la Agrupación 22 de abril de la Uocra.

A través de esta campaña política, que fue estableciendo un reagrupamiento político-reivindicativo del movimiento piquetero de los trabajadores ocupados y desocupados, y con la intervención activa en cada una de las luchas se fue construyendo el Polo Obrero.

127. “Por la formación de un polo clasista”, resolución del X Congreso del Partido Obrero, en Prensa Obrera, 12 de agosto de 1999.

128. Idem anterior.

129. “Resolución Política del X Congreso del Partido Obrero”, en En Defensa del Marxismo, agosto de 1999.

130. “Por la formación de un polo clasista”, resolución del X Congreso del Partido Obrero, en Prensa Obrera, 12 de agosto de 1999.

131. “Resolución Política del X Congreso del Partido Obrero”, en En Defensa del Marxismo, agosto de 1999.

132. Ver apéndice “Documentos del Movimiento Piquetero”.

133. Además de estas delegaciones, en el acto realizado en la Fatpren participaron delegados de Apta (Aerolíneas); miembros de las comisiones directivas de Suteba de La Matanza y de Esteban Echeverría; delegados del Conicet; el Secretario General de AGD-UBA (docentes universitarios de la UBA); delegados de la rama postal del sindicato de camioneros; la Comisión de Desocupados de Laferrere; la Comisión de Desocupados de San Fernando; las comisiones internas gráficas de Quebecor, Unión, Recali, Cotigraf e Interpack; el cuerpo de delegados de TDO y delegados y activistas de Metrovías; activistas de Télam, delegados de BAE, de Editorial Perfil y Diario Popular; delegados docentes de Amsafe-Rosario; delegados y activistas de AFIP, delegados de Foetra Buenos Aires, delegados municipales de Suteba y de municipales de Avellaneda, delegados de La Solidaria, delegados de Shell, la Junta Vecinal del barrio Unidad y Lucha, miembros de la Comisión de Vecinos de Honor y Dignidad, la Coordinadora de Desocupados de Berazategui, delegados docentes de Varela, la Comisión Interna de Sulfacid y delegados municipales de San Lorenzo, delegados docentes de Lomas de Zamora, la Comisión de Desocupados de Benavídez, la Comisión de Desocupados de Bosques (Mar del Plata), delegados de ATE-Mar del Plata, delegados y activistas de Inta-Castelar, delegados y activistas de Cnea-ATE, delegados docentes de San Martín, delegados y activistas de Segemar-ATE, docentes de San Isidro, delegados de la metalúrgica M. Royo, activistas de distintas líneas de UTA, gráficos, metalúrgicos de zona norte, ferroviarios y delegados y activistas de la lista opositora en Sanidad.

Corrientes: la Alianza debuta asesinando piqueteros

El 10 de diciembre de 1999 la Alianza asumió el gobierno nacional. Ese mismo día, diez mil trabajadores correntinos –estatales, docentes, judiciales– ocupaban el puente que une esa provincia con la del Chaco, pero no para festejar la asunción de De la Rúa sino para reclamar el pago de sus salarios varios meses atrasados.

Un semana después, la ocupación del puente continuaba porque el nuevo gobierno no había dado ninguna solución. Ese día, y como paso previo a la intervención federal, el nuevo ministro de Interior aliancista, el ‘progresista’ Federico Storani, ordenó a la Gendarmería desalojar el puente. La represión fue salvaje y la lucha se extendió por horas: los manifestantes se reagrupaban y volvían al puente; luego pelearon a gomo limpio en las avenidas y en los barrios adyacentes; los vecinos les daban refugio y agua. Los tiros, los gases y los bastonazos dejaron centenares de heridos y dos trabajadores muertos (según la cifra oficial, aunque los correntinos siempre denunciaron que el número había sido muy superior). La Alianza antipiquetera había debutado asesinando obreros.

La lucha de los estatales correntinos se venía desarrollando desde hacía varios meses; la pueblada correntina –junto con la tucumana y la jujeña– signó los últimos meses del gobierno menemista. Por referencia a las otras, la lucha correntina tenía, en determinados aspectos, un carácter políticamente superior. Los trabajadores se levantaban contra el vaciamiento de la provincia y la quiebra de su banco por los clanes capitalistas ligados al menemismo, primero a través de la intervención federal (Claudia Bello) y luego a través del gobierno de Tato Romero Ferris, un representante de la oligarquía provincial que había roto con su partido tradicional, el Autonomista, para asociarse al menemismo. La crisis política provocó su caída como intendente correntino, al igual que la de varios mandatarios; el gobierno provincial era ejercido por una coalición de duhaldistas, aliancistas y autonomistas.

Los trabajadores venían ocupado el puente de manera intermitente desde el mes de julio; incluso en varias oportunidades rechazaron los intentos de la Gendarmería por desalojarlos. Con estos cortes, fueron consiguiendo que el gobierno menemista en fuga adelantara fondos para achicar la deuda. La Alianza debutó advirtiendo que no adelantaría más fondos y que la crisis debería “resolverse en la provincia”, es decir, mediante un acuerdo de las distintas camarillas que la habían llevado a la catástrofe.

La burocracia sindical colaboraba abiertamente con la coalición duhaldista-aliancista-autonomista que gobernaba la provincia. Marilín Araujo, secretaria general de ATE, por ejemplo, se había integrado al gobierno que no pagaba los sueldos de los trabajadores estatales en condición de subdirectora del Instituto de la Vivienda.

Autoconvocados, los piqueteros correntinos

El fenómeno más extraordinario de la pueblada correntina fue que, en oposición a la política de las burocracias sindicales oficiales, surgió un movimiento de trabajadores ‘autoconvocados’ que se extendió a todas las localidades de la provincia y se constituyó como una verdadera dirección alternativa.

Empezó con los docentes ‘autoconvocados’; siguió con los estatales ‘autoconvocados’; luego vinieron los estudiantes ‘autoconvocados’, y finalmente, los desocupados ‘autoconvocados’. En los momentos más álgidos de la crisis, hasta la policía provincial se ‘autoconvocó’. Cada uno de estos grupos instaló su carpa en la “Plaza de la Dignidad”, que se mantuvo durante varios meses (hasta la intervención de la Alianza) y era el centro de la lucha.

Las reivindicaciones centrales del movimiento eran el pago total e inmediato de las deudas salariales, el pleno funcionamiento de las obras sociales y el rechazo a cualquier tipo de despidos. Los 'Autoconvocados' correntinos realizaron varias asambleas provinciales. En una de ellas, en junio, se resolvió la formación del "Movimiento de Autoconvocados 7 de junio" para transformarse "en una herramienta aglutinante y canalizadora de los problemas políticos, sociales y económicos que afectan a la población". El objetivo trazado era llegar a "un verdadero parlamento del pueblo (...) abierto al conjunto de la sociedad". La Coordinadora se declaraba "independiente de todo partido político o expresión gubernamental" y, en una resolución que creaba una verdadera situación de 'doble poder' en el movimiento de lucha, decidió que "solamente reconoce como decisión el mandato que viene de las asambleas de base".

Los Autoconvocados planteaban la necesidad de "un gobierno provisional capaz de asumir los destinos de la provincia (...) basado en el mandato que emane de las asambleas de sectores autoconvocados de toda la provincia".¹³⁴

El planteo de los autoconvocados era extremadamente radical desde el punto de vista de la democracia política –un gobierno basado en las asambleas de las organizaciones de las masas en lucha. Incluso planteaban algunas medidas que afectaban agudamente a los intereses capitalistas –como el "control popular de la administración de los recursos del Estado" o "la revisión de las concesiones de servicios públicos desde el inicio de la etapa democrática". No establecían, sin embargo, la relación entre estas reivindicaciones y la necesidad de confiscar la propiedad del latifundismo y sus cómplices y expropiar a los latifundistas de la provincia. Tampoco la necesidad de recuperar las organizaciones obreras mediante la expulsión de la burocracia sindical o de convocar a una huelga general provincial.

La represión y la intervención aliancista diluyeron, al menos temporariamente, las ricas posibilidades de evolución política que ponían en evidencia las posiciones políticas del movimiento autoconvocado.

Un gobierno servil

Habiendo debutado con un 'programa de austeridad', el gobierno de la Alianza no quería poner un peso para satisfacer los reclamos de los trabajadores correntinos ni demostrar 'debilidad' frente a sus movilizaciones. Por eso, inicialmente, dijo que no intervendría la provincia pero la profundización de la lucha lo obligó a intervenir. El primer paso fue la represión porque, como 'explicó' Storani, "el interventor no podía asumir condicionado por la ocupación del puente". Al pequeño burgués 'progresista' le parecía natural que el FMI y los bancos condicionaran a su gobierno mediante la deuda externa y el 'riesgo país' pero no aceptaba ser 'condicionado' por los trabajadores.

Con el puente desalojado a balazos, el interventor federal (Ramón Mestre, que luego reemplazaría a Storani en el Ministerio de Interior) se dio como primera tarea desactivar a los "autoconvocados". Para lograrlo, y con el apoyo de las burocracias sindicales, enfrentó a cada sector de trabajadores con los otros; a una localidad con las otras; priorizó el pago de los salarios docentes, que habían sido el corazón de la lucha, mientras postergaba a otros sectores, como los jubilados. A partir de ahí, pudo dedicarse a "poner en orden las cuentas provinciales", es decir a despedir trabajadores de la administración pública provincial y municipal y descargar el peso de la crisis sobre la población trabajadora. La combinación de represión, recursos financieros y la colaboración de las burocracias sindicales con la Intervención 'progresista' desarmaron la pueblada correntina.

Pero los acontecimientos de Corrientes habían sido un shock para todo el movimiento obrero porque dejaban en claro la naturaleza de clase del gobierno aliancista y de las direcciones sindicales que eran tributarias de éste.¹³⁵ "La crisis correntina ha puesto al desnudo la situación real del país y, por sobre todo, de sus protagonistas. El gobierno aliancista es algo peor que un gobierno sin política o con una política anti-popular; es un gobierno servil. Está objetivamente con-

dicionado por los grandes capitales, pero lo que es peor es que está subjetivamente obnubilado por estos capitales y sus respectivos Estados. El progresismo pequeño burgués ha caducado por completo como fuerza reformista o como afirmación de la independencia nacional; para cumplir con sus mandantes capitalistas no ahorrará sangre del pueblo (...). El destino de las causas populares depende por completo de la asimilación que los explotados, de un lado, y los luchadores que emergen de ellos, del otro, hagan de estas experiencias".¹³⁶

Los sucesos de Tartagal, que se desarrollaban en forma casi paralela a los correntinos, demostraban cómo una vanguardia clasista y piquetera estaba asimilando el proceso político.

134. Citado por Santos, Rafael, "En Corrientes se plantea un doble poder", en Prensa Obrera, 5 de agosto de 1999.

135. Victor De Gennaro se vio obligado, ante la magnitud de la represión, a convocar a una huelga general, pero 'explicó' que "la huelga no es contra nadie sino por la vida".

136. Altamira, Jorge, "Por que De la Rúa debuta matando obreros", en Prensa Obrera, 23 de diciembre de 1999.

Tartagal: un piquetazo obrero

A mediados de diciembre de 1999, mientras se luchaba en Corrientes, volvieron a estallar Tartagal y Mosconi en el norte de Salta. Piquetes de entre 800 y 1.000 trabajadores cortaron la ruta 34 en distintos puntos. Por las noches, llegaban piqueteros solidarios de Vespucio, Mosconi y Tartagal; se reunían entonces 3.000 compañeros. Los piquetes eran 'duros' y verdaderamente combativos. Durante todo el día ardían centenares de gomas a escasos cincuenta metros de los tanques de las refinerías y a pocos metros de la llave general de un gran gasoducto. Todo parecía similar a la pueblada de 1997, pero era radicalmente distinto.

El lunes 13 de diciembre, los piqueteros se enfrentaron con la policía local que trató de impedir el corte. La resistencia quebró la represión y la policía tuvo que huir como pudo.

El conflicto se había estado gestando desde 30 días antes, cuando fueron despedidos 162 municipales. El conflicto se extendió en el tiempo; la estadía frente al municipio que impulsaba ATE era tan desgastante como inútil. José Barraza, dirigente de la lucha, relata cómo se inició la pueblada. "Primero, como PO, en volantes y en las asambleas, planteamos la necesidad de una asamblea departamental, un plan de lucha y un congreso de ATE en Tartagal sin encontrar respuestas favorables (...). En oportunidad de las elecciones de ATE, se había formado una lista opositora, que obtuvo el 25% de los votos. Allí se empezó a realizar una diferenciación de muchos activistas con la dirigencia local de ATE en cuanto a cómo enfrentar la grave situación. Entonces, con esos compañeros y otros compañeros desocupados y del 'plan Trabajar', se fue gestando la idea de hacer el corte como en el '97. Comenzaron, entonces, las reuniones para impulsarlo y hubo cuatro intentos fallidos coordinados con los desocupados de Mosconi. Luego, cuando se sumaron las bajas en los 'planes Trabajar' y los casi 5.000 desocupados del departamento de San Martín, la situación se hizo insostenible. Con los desocupados, pudimos imponerlo. Luego, el intento de la policía por impedirlo lo galvanizó y los acontecimientos se desarrollaron vertiginosamente. La dirigencia local de ATE siempre estuvo en contra del corte, desde el primer momento".¹³⁷ En el norte de Salta se estaba fusionando en una lucha piquetera común el obrero ocupado y el desocupado, lo que constituía un salto cualitativo del movimiento piquetero. No era el único.

Ante la detención del dirigente de ATE, y a iniciativa de José Barraza, se realiza una asamblea. Los desocupados, los del 'plan Trabajar' y los municipales fueron eligiendo sus representantes en los piquetes donde se empezaron a tomar resoluciones y propuestas que empezaron a ser procesadas en asambleas generales del corte. Así nació el programa de 9 puntos del conflicto, luego extendido a 12 puntos. Era un programa clasista, con consignas que superaban el mero reclamo de trabajo y reincorporación de los despedidos, pues incluían hasta la lucha contra la privatización de la salud, la educación, el reparto de las horas de trabajo y el desprocesamiento de todos los luchadores populares.

En Tartagal se estaba viviendo una verdadera revolución que tenía como base la asimilación política por parte de una vanguardia clasista de la experiencia del corte anterior. Se desarrollaba una clara delimitación política; el programa de los piqueteros se alejaba cada vez más del pedido de dádivas y exigía imponer compulsivamente puestos de trabajo a las empresas privadas. "Pedimos trabajo, no limosna; en el '97, prometieron todo y no nos dieron nada; ahora no levantamos hasta que se resuelva dar los 1.420 puestos de trabajo prometidos por las empresas petroleras" declaraba entonces 'Cuchilla', dirigente del piquete N° 1, el más combativo del corte.

"El corte es diferente al del '97; no hay 'multisectorial', se ha prohibido la palabra a los partidos políticos, por asamblea, en repudio a los punteros del PJ y la Alianza que se habían acercado para intervenir. También se prohibió, por asamblea, la intervención a la Iglesia, lo que no es poco".¹³⁸

Barraza confirmaba en un reportaje el carácter clasista del corte y de su programa. “Hay una marcada evolución. El (programa) anterior fue casi ‘institucional’, funcionaba una ‘multisectorial’ y sobra apoyo organizativo, alimentos, equipos de sonido y lo que precisáramos. Este conflicto es diferente, tiene un programa obrero, no hay elementos de apoyo del comercio, la ayuda es restringida, se come una vez por día, escasean los alimentos y no hay apoyo organizativo: es un corte de los trabajadores. Con una marcada tendencia a aumentar la transgresión, no se esconden los elementos de la lucha, se han radicalizado la forma y los métodos; hay gente dispuesta a ir muy lejos en este sentido. Se siente, del ‘97 hasta ahora, una agudización profunda de la crisis en la provincia, el rápido agotamiento de los punteros burgueses. El intendente elegido hace unos días hoy es casi un cadáver y hay un creciente reconocimiento al papel que juega en la lucha el Partido Obrero”.¹³⁹

ATE, que se había opuesto desde el inicio al corte, se negaba a convocar un paro general provincial que hubiera obligado a capitular a Romero. La conducta de ATE –que en Corrientes llamaba a un “paro por la vida”– le daba aire al gobierno de Salta para ensayar la represión, es decir para cobrarse nuevas vidas obreras. En lugar de declarar la huelga provincial, ATE ‘gestionó’ el viaje de una delegación de piqueteros a Buenos Aires para entrevistarse con funcionarios nacionales. La asamblea general votó en contra de concurrir a Buenos Aires y se exigió que el gobierno bajara a Mosconi o a Tartagal. Solamente después de horas de reclamos por radio, por parte de Teo Peralta, dirigente nacional de ATE, se logró a las cinco de la mañana que los piqueteros dieran consentimiento a la comisión. Mientras Teo Peralta reivindicaba las bondades de la ‘gestión’ de ATE y el espíritu ‘dialoguista’ del gobierno, la Gendarmería asesinaba a trabajadores correntinos en el puente. A la vuelta de la comisión de Buenos Aires se ratificó el corte en una asamblea masiva, el domingo al mediodía, pues no había nada concreto. El 23 de diciembre, los funcionarios comenzaron a mostrar sus debilidades.

El corte se levantó con una victoria. Se le impuso al gobierno provincial la reincorporación de los municipales despedidos, lo que significaba un golpe al plan Romero de despedir 3.500 estatales en toda la provincia. Se le impuso al gobierno nacional el mantenimiento de los 1.963 ‘planes Trabajar’ y el otorgamiento de otros 3.000. Los 2.653 ‘planes’ provinciales también fueron prorrogados, pero apenas por un mes, “el tiempo que se tomarán los compañeros para recuperar el Sitrap (Sindicato de Trabajadores de los Planes) y, a partir de allí, establecer un plan de lucha y la huelga general de todos los trabajadores para que estos puestos se prorroguen por dos años”.¹⁴⁰ Quedaba pendiente el reclamo de los puestos de trabajo en las petroleras; vendrían nuevas luchas para imponerlos.

En la asamblea que decidió el levantamiento del corte de ruta, José Barraza resaltó la importancia política de la lucha piquetera y de su victoria: “Cualquier historiador que se proponga escribir la historia de la clase obrera, no podrá dejar de mencionar a los piqueteros del Norte de Salta, a los fogoneros de Cutral Co, como la vanguardia que instaló los nuevos métodos de protesta y al nuevo sujeto social, el piquetero”.

El corte de Tartagal y Mosconi –por su programa, por sus conquistas y hasta por su propia realización– fue una victoria política de los piqueteros sobre la política centrozquierdista de la CTA –que llevaba a la disolución del movimiento en beneficio del gobierno aliancista– en el momento de máximo esplendor de esta política: a pocos días de asumido el gobierno y cuando vastas capas de trabajadores depositaban sus esperanzas en el ‘progresismo’ del Frepaso.

Los piqueteros de Tartagal y Mosconi abrieron la brecha de la lucha obrera y popular contra el gobierno de la Alianza. El gran paro general del 24 de febrero del 2000 –contra la ley de flexibilización laboral de la Alianza, la ‘ley Banelco’– mostraría la rapidez con que se agotaban estas expectativas entre los trabajadores.

El piquete obrero de Mosconi y Tartagal mostraba el camino de la victoria a todo el movimiento piquetero: la independencia y la lucha de clase.

137. “En el ‘97, teníamos apoyo ‘multisectorial’, ahora es sólo obrero y dispuesto a todo”, reportaje a José Barraza, en Prensa Obrera, 23 de diciembre de 1999.

138. Ferro, Juan, “La clase obrera del norte argentino comenzó una lucha gigantesca”, en Prensa Obrera, 23 de diciembre de 1999.

139. “En el ‘97, teníamos apoyo ‘multisectorial’, ahora es sólo obrero y dispuesto a todo”, reportaje a José Barraza, en Prensa Obrera, 23 de diciembre de 1999.

140. Barraza, José, “Tartagal: se levantó el corte de ruta”, en Prensa Obrera, 13 de enero de 2000.

Una nueva pueblada en el Norte de Salta

En mayo de 2000 estalló una nueva pueblada en el norte salteño que abarcó a Mosconi, Tartagal, Aguaray y Pocitos.

Esta nueva pueblada fue la consecuencia de la falta de una solución de fondo a los reclamos de los anteriores cortes. Sólo se habían concedido 'planes Trabajar' de carácter temporario, con salarios cada vez más reducidos, con el agravante de que los 'planes' vencían y una gran parte de ellos no iban a ser renovados. Paralelamente, los empleados públicos venían de cobrar su primer sueldo con reducciones salariales (una parte sustituida por tickets de alimentos), y una suma de constantes atropellos, como la amenaza de desalojos a numerosos vecinos que no podían pagar sus cuotas, o el vaciamiento hospitalario. En todos los pueblos se señalaba que mientras las petroleras anunciaban beneficios de cientos de millones de dólares, en la zona se profundizaba la degradación social.

Daniel Blanco, dirigente del Partido Obrero del NOA, sintetiza ajustadamente la evolución del movimiento de lucha en el norte de Salta: "Si se compara esta pueblada con los cortes del '97 y el '99, lo que se observa es lo siguiente:

- a) En el '97 el movimiento tuvo un carácter 'multisectorial'. La Comisión de Vecinos tenía delegados de los desocupados y de diversas organizaciones de los trabajadores, pero también de los comerciantes y de los empresarios madereros. En la lucha del '99 y en la actual también, se conformó un cuerpo de delegados pero sólo era representativo de los sectores explotados (desocupados, docentes, etc.), o sea que tuvo un carácter más definidamente clasista;
- b) En el '97, Marcelino Gerez, un periodista vinculado al PJ y con posturas conciliadoras y democratizantes, que contó con el apoyo de la actual Izquierda Unida¹⁴¹, se transformó en el líder más reconocido de la lucha y fue el que por todos los medios actuó como vocero de los sectores pequeño burgueses y patronales representados en la Comisión de Vecinos. En la pueblada reciente, Pepe Barraza, reconocido dirigente del PO en la zona, fue elegido como uno de los representantes, reconociendo su rol de organizador y el programa con el que el PO ha venido interviniendo en los diferentes conflictos. El petitorio de los 31 puntos se conforma fundamentalmente por la influencia del PO y a partir de la intervención como delegado electo de Pepe Barraza;
- c) La lucha del '97 tuvo un carácter masivo; la del '99 fue inferior en cantidad de gente, pero muy aguerrida y sobrellevó la represión policial. La reciente pueblada tuvo los dos ingredientes: fue originalmente un corte improvisado pero la intervención de los trabajadores a partir de que se produjo la represión fue la acción más masiva de la historia local; la población se volcó como nunca lo había hecho antes a enfrentar la represión gubernamental, y logró vencerla, al recuperar la ruta, y al obligar al gobierno a recular y tener que ir a una negociación con los dirigentes electos en una Asamblea Popular".¹⁴²

Después del triunfo del corte de fines del '99 y de la evolución política de los piqueteros, el principal objetivo de los gobiernos provincial y nacional era aplastarlos. Por eso Romero dio piedra libre a la represión y se fue de vacaciones. El gobierno nacional, por su lado, envió la Gendarmería y planteó que no iba a negociar nada si antes no se levantaba el corte. La cuestión era política. Tanto el gobierno nacional como el provincial querían escarmentar a los trabajadores de una de las zonas más combativas del país, para que sirviera de 'lección' al resto de los trabajadores. Creyeron que podrían hacerlo porque inicialmente el corte estuvo relativamente aislado, incluso deliberadamente por parte de algunos punteros del PJ, que bloqueaban la intervención del PO, y también de punteros de la Alianza, que procuraban que otros reclamos, como el conflicto docente, no empalmaran en una lucha común con los desocupados.

Todo el pueblo fue ocupado por las fuerzas represivas en horas de la madrugada: la iglesia y el hospital fueron puestos a cargo de oficiales de Gendarmería; el cuartel de bomberos fue ocupado para impedir que se pudieran usar las sirenas de alarma. Una vez concretado el desalojo, los gendarmes se sacaban fotos en la ruta y festejaban; sus oficiales hablaban de 'tarea cumplida'. Pero los piqueteros lograron reagruparse y resistir durante dos horas. Cuando amaneció y la población tomó conciencia de lo que ocurría, se produjo la reacción. De todos los pueblos (Pocitos, Aguaray), pero particularmente de Tartagal, decenas de miles de trabajadores mostraron a las fuerzas represivas su solidaridad con los piqueteros y el odio contenido contra la política de hambre y entrega de los gobiernos del PJ y la Alianza. El pueblo expulsó a la Gendarmería de Mosconi y recuperó la ruta.

La reacción popular fue masiva. El rol de las mujeres y la juventud fue decisivo. Algunos medios denunciaron saqueos y hechos vandálicos. Si bien se quemó y se saqueó la Municipalidad y sus reparticiones o el banco Macro (ex Banco Provincia, privatizado), sólo se castigó a las instituciones que simbolizaban el poder político y cuyos integrantes estaban escondidos esperando que la represión cumpliera su tarea. En medio de muchas acciones, se deliberó si se entraba a supermercados o a casas privadas, lo que fue rechazado e impedido por los sectores más combativos y lúcidos del activismo. No se saqueó ningún comercio. A pesar del hambre, hubo en este terreno una elevada conciencia política clasista.¹⁴³

La acción popular permitió recuperar el cuartel de bomberos y luego el hospital, donde se volvió a colocar al personal a cargo para que atendiera a los heridos del pueblo. Se llegó a ocupar la comisaría; su jefe fue obligado a que una comisión de mujeres inspeccionara las celdas para ver si había detenidos, y finalmente se volvió a recuperar la ruta. Las acciones de heroísmo de trabajadores anónimos fueron incontables, lo que terminó desconcertando aún más a las fuerzas represivas, que fueron aisladas y rodeadas por decenas de miles de trabajadores. En esa lucha cayeron los compañeros Gómez y Justiniano. Habla uno de los protagonistas: "Había más de 20 mil personas, que avanzaban por la ruta, que rodearon a los gendarmes, que corrían huyendo de la gente; seguramente lo hacían para tomar posición para lanzar gases, pero tenían que retroceder. Ya había una decisión de todo un pueblo, y así se produce una pueblada que debe ser comparada con las grandes luchas obreras del país como el Santiagueño, como el Cordobazo. Creo que es importante destacar esto, fue todo un pueblo el que se volcó a la lucha".¹⁴⁴

Entonces, por la acción de la Iglesia, se impuso una tregua. Continúa Barraza: "La acción de la Iglesia fue el gong que en el boxeo salva al que está por caer en la lona. La Gendarmería, estoy segurísimo, iba a ser sobrepasada, y como ocurrió en el otro corte, a partir de la masividad, se iba en dirección de capturar a todo el grupo de gendarmes. Esto también tiene un contenido político, porque muchos sectores habrían sacado la conclusión de que cuando hay decisión, cuando hay masividad se puede derrotar a las fuerzas represivas. Hubiera servido de ejemplo para aquellos sectores que creen que las fuerzas represivas son invencibles. Lo que impidió que fueran derrotados completamente fue la acción de la Iglesia. Vinieron a salvarla para arbitrar una negociación y enmarcarla dentro en lo que es la acción de la Iglesia: manejar los 'planes' y así poder manipular a la gente explotando sus necesidades".¹⁴⁵

A partir de ese momento, se empezó a funcionar con el método de la Asamblea Popular, con delegados electos y mandatados. En el petitorio que elaboraron los trabajadores se combinaban reclamos muy importantes, como la libertad de los detenidos y el levantamiento de cualquier causa contra los trabajadores; la creación de 15 mil puestos de trabajo genuinos; la elevación de los salarios de los actuales 'planes Trabajar'; la reducción de la jornada laboral de 12 horas a 8 en las petroleras, para incorporar trabajadores desocupados a esa área; la triplicación de las regalías que pagan las petroleras; reivindicaciones históricas de los aborígenes relativas a la propiedad de la tierra; un conjunto de obras públicas y la industrialización de las riquezas petroleras y agrícolas, que significaría, en caso de realizarse, una completa reactivación económica en la zona; figuraban también todas las reivindicaciones docentes rechazando el plan de ajuste y de reducción salarial. Combinadas con éstas, figuraban reivindicaciones de 'compre local', subsidios a las Pymes locales, y el reclamo de intervención a los municipios.

La mujer fue protagonista de este corte, como en ninguno de los anteriores. Habla otro protagonista, Perico Raineri: “Estoy asombrado que en el propio control y por cualquier decisión que se adoptaba durante el corte, las mujeres debían ser consultadas. O sea que en este corte, a diferencia de los anteriores, las mujeres cumplían un rol dirigente. También fue emocionante ver que las mujeres iban al frente de la lucha, o sea al frente del combate franco y abierto contra los gendarmes, incluso con una agresividad superior a la de muchos hombres. Era asombroso ver a la mujeres soportando los gases, los golpes”.¹⁴⁶

Los gobiernos nacional y provincial tuvieron que recular y negociar con una comisión de delegados electos en la Asamblea Popular, lo que constituía una de las derrotas políticas más importantes que habían sufrido tanto De la Rúa como el gobernador Romero, poniendo de relieve la enorme debilidad del régimen político aliancista para imponer sus planes.

El acuerdo al que se arribó era similar a los anteriores: el gobierno sólo se comprometió a mantener los ‘planes Trabajar’ vigentes hasta el mes de diciembre y con un salario de 160 pesos. Se logró la libertad de los detenidos y que no se abrieran causas pero las demás reivindicaciones quedaron como promesas a ser estudiadas... salvo las referidas a los créditos y subsidios a las Pymes locales, alrededor de los cuales la Alianza pretendería rearmar su influencia política en la zona y sostener su base social pequeñoburguesa. Por todo esto, los piqueteros salteños caracterizaron que “el acuerdo es una victoria, pero no una salida”.¹⁴⁷

El corte había abierto un nuevo rumbo para el movimiento piquetero. José Barraza lo señalaba en un reportaje: “Debemos apuntar a la organización de un Congreso Departamental de Trabajadores para que las puebladas no tengan sólo un contenido reivindicativo sino también un contenido político y la organización necesaria para que lo que se consiga con la lucha no sean solamente ‘planes Trabajar’, sino genuinas reivindicaciones, como es el salario mínimo de 600 pesos, el reparto de las horas de trabajo (...). La salida de los trabajadores está esbozada en el petitorio elaborado en la asamblea popular. La privatización de YPF es la madre de toda la crisis en la zona. Por eso, la lucha por su renacionalización bajo control obrero, para poder abrir paso a un plan de industrialización de los recursos petroleros y gasíferos, es la reivindicación central que debe presidir cualquier programa obrero que pretenda dar salida a la falta de trabajo y a los bajos salarios, y al propósito de contar con los recursos para rescatar la educación, la salud y la obra pública que beneficie las condiciones de vida de los trabajadores”.¹⁴⁸

Un Congreso de Trabajadores para discutir una salida de conjunto, política, de los trabajadores frente a la crisis nacional: en el fragor de la lucha, los piqueteros salteños estaban fijando la perspectiva estratégica para el movimiento piquetero de todo el país.

141. Izquierda Unida (Mst) llevó como candidato a Gerez en las elecciones de 1997. Cuando el PO, junto con el bloque combativo del corte, impulsó una serie de asambleas para trazar un balance de esa experiencia y fijar un plan político-reivindicativo que colocara a los dirigentes combativos del corte como una alternativa política independiente en las elecciones nacionales y provinciales que se avecinaban, el Mst se autoexcluyó y las boicoteó.

En lugar de integrarse al frente piquetero que se estableció a partir de esas asambleas, “se lanzó a formar uno de los cinco subtemas de la ‘Agrupación Federalista Popular de Tartagal’. Esta agrupación, que es una escisión del Partido Renovador del capitán Ulloa y está liderada por un sector de empresarios de la madera local, señala como una de sus ‘virtudes’ que dejará en libertad de acción a sus afiliados para votar por quienes quieran en los cargos departamentales y nacionales” (Claudio del Plá, “Mst en Tartagal: con la patronal maderera y el clero”, en Prensa Obrera, 21 de agosto de 1997).

El ‘subtema’ del Mst, cuyo candidato no era otro que el periodista Gerez (correa de transmisión de la presión de la Cámara empresaria y de la Iglesia en la Comisión del corte), acumuló votos en favor de este partido patronal, que públicamente se había declarado en favor de los

microemprendimientos, experimentados y fracasados en la zona, y de la flexibilización laboral. Posteriormente, Gerez fue nombrado asesor político del gobierno con un jugoso sueldo y en las elecciones del '99 Gerez se presentó directamente como candidato de un sublema del PJ.

En principio, esta agrupación había definido su presentación en el ámbito municipal pero, a pocos días de las elecciones, estableció un acuerdo para presentarse en el plano provincial y nacional con el partido Solidaridad, formado por viejos nacionalistas de derecha, ex Modin y sectores vinculados a la derecha de la Iglesia. El principal dirigente del partido vecinal de Tartagal, el empresario maderero Camacho, fue el primer diputado nacional.

“El MST impulsó esta política para dividir e impedir el desarrollo de la única alternativa independiente de lucha, representada por el Frente de los Trabajadores, en el que se ha agrupado el sector más consecuente de la Comisión de Vecinos que dirigió el corte de la ruta 34 y que tiene un programa y una política independiente, en función de los intereses de los explotados” (ídem anterior). Así, el carácter antipiquetero del Mst lo llevó a convertirse en furgón de cola de la derecha nacionalista y clerical.

142. Blanco, Daniel, “La pueblada de Tartagal y Mosconi: la victoria de un gran levantamiento popular”, en Prensa Obrera, 25 de mayo de 2000.

143. “Nosotros, apenas nos enteramos de la represión, decidimos abandonar los lugares de trabajo, y nos fuimos concentrando para marchar a Mosconi, que está a 7 kilómetros. En un momento la gente se quiso detener para quemar el hotel que Romero tiene a la salida del pueblo, o ir a saquear un supermercado, y yo, recordando el discurso de Altamira en la época de los saqueos, de que había que pasar de largo por los super para marchar hacia donde se encuentra el poder político, planteé no detenernos y marchar a Mosconi para auxiliar a los compañeros. Cuando comenzamos la marcha, la Gendarmería intentó cortarnos el paso, pero los rodeamos y tuvieron que retroceder. Volvieron a intentarlo cuando llegábamos a Mosconi, pero también los sobrepasamos; así pudimos sumarnos a los compañeros de Mosconi y recuperar la ruta”. “Hablan los protagonistas”, reportaje a Leila, activista docente, en Prensa Obrera, 25 de mayo de 2000.

144. “Hablan los protagonistas”, reportaje a José Barraza, en Prensa Obrera, 25 de mayo de 2000.

145. Idem anterior.

146. “Hablan los protagonistas”, reportaje a César Perico Raineri, en Prensa Obrera, 25 de mayo de 2000.

147. Blanco, Daniel, “La pueblada de Tartagal y Mosconi: la victoria de un gran levantamiento popular”, en Prensa Obrera, 25 de mayo de 2000.

148. “Hablan los protagonistas”, reportaje a José Barraza, en Prensa Obrera, 25 de mayo de 2003.

Argentina piquetera

La pueblada del norte salteño de mayo de 2000 –que se desarrolló paralelamente a la gran huelga de los marítimos del Mar del Plata y al ‘piquetazo’ que llevó a los obreros del pescado a recuperar el Soip– abrió un nuevo ciclo de ascenso del movimiento piquetero.

En junio, 1.500 desocupados de La Matanza, organizados por la CCC y la FTV-CTA, cortaron la ruta 3 y arrancaron la promesa de 9.000 ‘planes Trabajar’, 650.000 kilos de comida fresca, 70.000 kilos de alimentos secos y tres unidades sanitarias. En Mercedes se organizó una marcha de desocupados. El paro convocado por el MTA y la CTA el 9 de junio tuvo un carácter masivo, con piquetes y marchas en el interior.

En julio, en el norte de Santa Cruz, los desocupados petroleros de Las Heras cortaron las rutas y rodearon las oficinas de YPF-Repsol y de Vintage (en Cañadón Seco) en reclamo de “los puestos de trabajo que nos quitaron con las privatizaciones”. El mismo día, los mineros de Río Turbio marcharon por las calles de Río Gallegos.

En septiembre, la recientemente formada Coordinadora de Trabajadores Desocupados de San Fernando estableció una carpa frente al municipio, que habría de mantener una lucha esforzada por casi dos meses, enfrentando y superando el ‘silencio’ del intendente (que se negaba a recibirlos) y los ‘aprietes’ de los matones enviados por el PJ. La carpa se convirtió en un centro de agitación para el movimiento sindical y para los desocupados de toda la zona Norte del Gran Buenos Aires.

A principios de octubre, la CGT San Lorenzo organizó un parazo con cortes de ruta en todo el cordón en apoyo a la lucha de los municipales de Capitán Bermúdez. En el movimiento sindical, se desarrollaron importantes luchas, con métodos piqueteros, como la de los choferes de La Internacional (UTA), la de los investigadores del Conicet o la de los ceramistas de Zanon, en Neuquén.

Al calor de este ascenso piquetero, se reanimaron y se reconstituyeron los movimientos de desocupados que habían sido golpeados en la etapa anterior: los desocupados de Neuquén y Río Negro organizan un Encuentro regional, con participación de delegaciones de Neuquén, Centenario, Plottier y Cipoletti “junto con activistas y delegados barriales surgidos al calor de las luchas del último período”.¹⁴⁹ Los desocupados de Plottier salieron a cortar las rutas y obtuvieron la extensión sin límite de tiempo de los ‘planes de empleo’ municipales, un ticket canasta mensual de 50 pesos y la incorporación de nuevos compañeros a los ‘planes’.

En Córdoba, se desarrolló un importante Congreso provincial de desocupados, con la participación de cien representantes de 50 barrios de la capital provincial y de localidades del interior, el 80% de ellos elegidos en asambleas.¹⁵⁰

Al mismo tiempo que el movimiento obrero y piquetero luchaba en forma creciente, el gobierno aliancista se descomponía aceleradamente: los sucesivos ‘planes’ de Machinea fracasaban uno tras otro en forma estrepitosa agravando la descomposición económica, la recesión y la tendencia a la cesación de pagos; había estallado la crisis de las coimas en el Senado, que ponía en evidencia el completo agotamiento del régimen político; en octubre renunció a la vicepresidencia el ‘progresista’ Chacho Alvarez, lo que establecía un reconocimiento ‘institucional’ del aceleradísimo derrumbe político de la centroeizquierda y le dejaba al gobierno las manos libres para atacar al pueblo.

Las movilizaciones, cortes y piquetazos, por una parte, y la descomposición gubernamental, por la otra, fueron reuniendo las condiciones para la gran explosión de la Argentina piquetera que tuvo lugar en octubre/noviembre de 2000.

El corte de La Matanza

Ante el incumplimiento de los acuerdos que permitieron el levantamiento del corte de junio, los desocupados de La Matanza volvieron a cortar la ruta 3. El corte y su programa habían sido votados en un plenario en el que participaron organizaciones de desocupados –FTV-CTA; CCC; Red de Barrios, Movimiento de Mujeres, Trabajadores Desocupados de Laferrere– y sindicales – ATE, Suteba Matanza, Lista Naranja Gráfica, Lista Gris de la UOM, Polo Obrero– del distrito.

En el programa aprobado se reclamaba la cesión de cinco millones de pesos en Atn al municipio (sin fijar uso y control de estos fondos); 10.000 ‘planes Trabajar’, que se agregaban a los ya reclamados; plan alimentario para no menos de 30.000 familias. En lo que constituía un progreso político respecto de los pliegos de anteriores cortes, se exigía un plan de obras públicas para enfrentar la desocupación (hospitales, salitas de salud, escuelas) y un “seguro de empleo y formación de 380 pesos por jefe de familia y la asignación de 60 pesos por hijo”. Este reclamo fue votado con la abstención del PTP-PCR/CCC, que sólo admitía que se reclamaran ‘planes’ y bolsos de comida. La prensa del PTP-PCR justificaba esta posición con un muy curioso argumento: “Consideramos que a los monopolios no va a ser fácil sacarles el dinero para pagar el subsidio a todos los desempleados. Eso podría ser con otra política y con otro gobierno”.¹⁵¹ De conjunto, el incumplimiento de los acuerdos anteriores y la necesidad de volver a cortar la ruta para imponer los reclamos ponían en evidencia el fracaso del “Consejo de Emergencia” de La Matanza para dar una salida a la desocupación.

Tres mil desocupados cortaron la ruta 3 durante varios días, en un movimiento que fue mucho más profundo que el de junio, no sólo por la deliberación previa del programa sino porque, además, sumó en la misma ruta a un nuevo grupo de barrios y a una representación significativa de sectores sindicales y de la clase obrera. Para José Villalba, dirigente de la Comisión de Desocupados de Laferrere, Barrio La Loma, “el desarrollo de este corte marca un antes y un después en La Matanza (...). Fue muy importante la presencia en el corte de los sindicatos y de un conjunto de organizaciones de desocupados independientes que no existió en ocasión del corte anterior en junio pasado. Otra diferencia es la predisposición de la gente a ocupar la ruta y una mayor deliberación de las bases, como se vio cuando se discutió si debía levantarse el corte de las vías del Ferrocarril Belgrano, a pesar de que los grupos de vigilancia pretendían acallar a los que se oponían a levantar (...). Los desocupados de varios barrios defendemos nuestra independencia”.¹⁵² La Comisión del Barrio La Loma, integrante del Polo Obrero, se había destacado, precisamente, por su aguda crítica al Consejo de Emergencia, al que caracterizaba como “un pacto pérfido para contener a los desocupados”.¹⁵³

El corte se mantuvo firme hasta que el gobierno, obligado por la determinación de los piqueteros y por la aparición de otros catorce cortes (en el Gran Buenos Aires y en el norte salteño), debió ceder. En un clima de victoria, el sábado 4 de noviembre, dos mil trabajadores aprobaron a mano alzada el acuerdo que establecía el retroceso del gobierno: 8.400 ‘planes’ a cargo del gobierno nacional y otros 7.500 de la provincia; un total de casi 16.000 ‘planes’, lo que casi duplicaba los 8.500 al momento de iniciarse el corte. En lo que constituía uno de los puntos más significativos del acuerdo, se establecía que tanto la provincia como la Nación se comprometían a mantener los ‘planes’ hasta que se arribara a “una drástica caída de la desocupación”. También se obtuvo el compromiso de la realización de ciertas obras públicas, la atención alimentaria de 45.000 familias (2.870 toneladas de alimentos secos y frescos al año) y otras concesiones menores como becas y zapatillas.

El corte puso en evidencia el enorme vigor del movimiento piquetero. “El desenlace del corte de la ruta 3 ha abierto una nueva situación de fortalecimiento de lucha en todos sus flancos. La ocupación tuvo un enorme eco popular, como lo reveló el debate en las fábricas (colectas, delegaciones, grupos de solidaridad en las escuelas) y la tendencia a ir desde los barrios y los talleres a expresar su solidaridad con los ocupantes. Por las mismas razones, se ha instalado una tendencia a extender la organización de los desocupados”.¹⁵⁴

Pero también dejó en descubierto la debilidad política de su dirección, la FTV y la CCC. Es que, a pesar del protagonismo excluyente de los desocupados y de las organizaciones de desocupados, estas direcciones no rompieron con el Consejo de Emergencia, lo que planteaba el peligro de que la Intendencia y sus punteros controlaran efectivamente la distribución de lo obtenido y buscaran, por esa vía, retomar el control político que habían perdido con el corte.

Tanto o más importante, el acuerdo no contemplaba la solución de los reclamos de los restantes cortes que habían ido estallando en el resto del país, con lo que se desaprovechó la oportunidad única de establecer un frente de movimientos de desocupados a escala nacional. “El levantamiento del corte de la ruta 3, desconociendo el impulso que había dado a otros numerosos cortes de ruta, dejó aislados a todos los demás y contribuyó a que el gobierno zafara de la emergencia”.¹⁵⁵

Lo que los cortes en La Matanza y en todo el país estaban poniendo en evidencia eran la necesidad de una lucha y de una política de conjunto, una necesidad a la que la política de la CCC y el FTV no daba respuesta. “No se trata de proponer una escalada de cortes de ruta, unos aislados de los otros, con la sola reivindicación de los ‘planes Trabajar’ (‘por diez, mil Matanzas’, propone el PTP-PCR) sino de una política de conjunto: por un congreso nacional de desocupados y por un congreso de base para impulsar la huelga general indefinida, un plan económico de conjunto de la clase obrera y el pasaje del gobierno a una Asamblea Constituyente libre y soberana”.¹⁵⁶

Estalla el Gran Buenos Aires

Al calor del corte de La Matanza, el movimiento de desocupados salió a la ruta en todo el Gran Buenos Aires.

En la zona Sur, se cortaron las rutas y avenidas en casi todos los municipios, ante los anuncios de que los empadronados en los ‘planes Trabajar’ (nacionales, de 160 pesos) serían transferidos a ‘planes’ provinciales, de un monto menor y condiciones más restrictivas (el ‘plan Joven’, de sólo 100 pesos y el ‘Segunda oportunidad’, para desocupados de 45 a 55 años).

Hubo cortes en Varela (donde participaron también los desocupados de Berazategui), Solano, Claypole, Almirante Brown y Lanús. Alberto Spagnuolo, del MTD de Solano, en un reportaje, señalaba que “nosotros no queríamos la presencia de ningún funcionario ni de mediadores ni de la Iglesia, porque son cómplices de esta situación. Esto también llevó a que lanzáramos (nuestra) medida desde un punto geográfico diferente.”¹⁵⁷ El rechazo a la Iglesia no es un dato menor ya que Spagnuolo sabe de lo que habla: es un sacerdote que fue expulsado de la Iglesia por su trabajo entre los desocupados.

En La Plata, un vigoroso corte de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados fue desalojado por la policía. Ante la caída de los ‘planes’ que la CTD había obtenido en luchas anteriores, se cortó la ruta a la altura de Los Hornos en reclamo de 1.000 puestos de trabajo. El intendente Alak (del PJ) ofreció renovar los 120 ‘planes’ si se levantaba el corte y otros 720 pero que serían manejados a su arbitrio por un “Comité de Emergencia Laboral”, en el que la CTD sería una convidada de piedra. Una asamblea en el corte rechazó la ‘oferta’ y reiteró el reclamo de que los ‘planes’ fueran controlados por la CTD y distribuidos entre los empadronados de la Comisión. Entonces Alak ordenó la represión, lo que “desnudó al ‘Comité de Emergencia Laboral’ como un instrumento del PJ y de la Alianza para levantar el corte”.¹⁵⁸

En San Fernando, la Carpa de los Desocupados obtuvo una victoria: después de 50 días de lucha, se consiguieron los primeros ‘planes’ y la entrega de alimentos en tres barrios organizados por la Coordinadora. Eran pocos pero tenían una enorme importancia: “Por primera vez en el distrito, la organización propia de los barrios logró arrancar los ‘planes Trabajar’, cambiando su carácter de instrumento de manejo político a conquista propia”.¹⁵⁹

También en el norte del Gran Buenos Aires, en Tigre, los desocupados que comenzaban a organizarse en la zona cortaron la ruta a pesar del inmenso operativo intimidatorio montado por la policía y de las presiones de Caritas. Quinientos compañeros se mantuvieron cortando la ruta 9 durante 24 horas hasta que se arrancan bolsones de comida y ‘planes Trabajar’.

Tartagal: “No queremos envejecer cortando rutas”

Cansados de actas y acuerdos que no se cumplían y de las manipulaciones de Caritas en el manejo de los ‘planes’, los piqueteros salteños volvieron a la ruta. El detonante fue la caída de ‘planes’, agravada por el anuncio del gobernador Romero, en complicidad con las petroleras y los finqueros, de que construiría una ruta alternativa (a un costo de 1,6 millones de dólares) para minimizar los efectos de los cortes de ruta.

En este nuevo corte, se afirmaron las tendencias que se habían manifestado en los cortes de diciembre del 99 y mayo del 2000. Al frente, se encontraban nuevos dirigentes, activistas natos y organizadores clasistas. Estaba presente en el comité del corte un representante de los trabajadores de la empresa de transportes Atahualpa (propiedad de la familia del gobernador), en lucha contra los despidos y por el pago de los salarios adeudados. “Los punteros y aprovechadores hoy no tienen participación”.¹⁶⁰

El programa reclamaba 1.000 ‘planes Trabajar’, pero por un salario de 280 pesos y exigía, alternativamente, un subsidio de 300 pesos, aunque insistiendo en que “queremos trabajos genuinos y no esta miseria temporaria”. Se reclamaba que la hora de trabajo se pagara a 2,50 pesos para la categoría de ayudante en todas las actividades y reivindicaba un salario mínimo. Se reclamaba también la reducción de las jornadas de trabajo en las petroleras de 12 a 8 horas para generar puestos de trabajo. El programa dejaba de lado los créditos a las Pymes locales, presentes en los anteriores pliegos, “porque este mecanismo se reveló contrario a los trabajadores”.¹⁶¹ El programa de los piqueteros salteños tomaba características de un programa de conjunto cuando reclamaba “un fondo especial de hidrocarburos (financiado por) la triplicación de las regalías que deben pagar las petroleras” y que, asimismo, éstas “financien la reforestación de las áreas explotadas”.

La maduración de la dirección del corte se manifestaba, también, en su llamado a “unificar nuestros reclamos y constituir una Coordinadora Nacional de Piqueteros para realizar un reclamo de conjunto, ya que no queremos envejecer cortando rutas”. Propone “un Congreso Nacional de Trabajadores y Desocupados que elabore un programa económico, social y cultural que signifique la salida para el pueblo”.¹⁶²

Este programa fue aprobado por unanimidad en la asamblea realizada en el corte de ruta el 3 de noviembre de 2000, a las 2:30 de la madrugada.

Provocación y pueblada

En las horas posteriores al levantamiento del corte de La Matanza (4 de noviembre), el gobierno nacional y los gobiernos provinciales salieron a desmontar los cortes existentes en el resto del país concediendo ‘planes’ y promoviendo la integración de los piqueteros en ‘multisectoriales’ y ‘Consejos de Emergencia’. Los que no aceptaban, como en La Plata, eran desalojados violentamente.

Una ‘salida’ de esta naturaleza no era aplicable en el norte de Salta: los piqueteros ya habían hecho su experiencia con las ‘multisectoriales’ y no podían ser convencidos con el espejismo de ‘salvarnos todos juntos’, desocupados y capitalistas, contenido en esa política.

Con el correr de los días, el corte se fue engrosando y fortaleciendo con nuevos sectores, como las comunidades indígenas. Sin embargo, mediante promesas e intrigas, el gobierno logró que algunos dirigentes aborígenes se alejaran del corte. Frente a esta situación, y al ‘operativo

cerrojo' que estaban armando los represores, los piqueteros decidieron trasladar el corte al lugar histórico de los cortes (frente al depósito de combustible de Refinor, en Mosconi).

La represión largamente preparada, que se desató en la madrugada del 10 de diciembre, no sólo buscaba desmontar el corte; su objetivo central era aplastar a la dirección clasista que estaba al frente. Por eso tuvo características brutales y criminales: Aníbal Verón, trabajador de la empresa Atahualpa, fue asesinado a sangre fría mientras las fuerzas policiales huían ante el avance de los piqueteros que habían recuperado la ruta. "A mi esposo lo mató la policía (...) no había una actitud de detenerlo, sino que tiraron directamente a matar (...) le tiraron desde dos o tres metros, a la cara; el que tiró sabía que tiraba a matar".¹⁶³

La pueblada que siguió a la provocación y al asesinato de Verón fue imparable. Fueron atacadas las comisarias, los edificios públicos, Edesa (la empresa de energía en la que se había desarrollado no hacía mucho un durísimo conflicto por despidos) y los garajes de la empresa Atahualpa y se tomó como rehén al personal policial de la comisaría de Mosconi; el grueso de las fuerzas policiales se refugió en el Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal. "La movilización no se convirtió jamás en una masa enardecida y sin norte".¹⁶⁴ El asalto a los comercios no estaba en la 'ruta' de los blancos de la pueblada (como tampoco lo había estado en la pueblada anterior, en la que no fue atacado ningún comercio). Los piqueteros denuncian que el ataque a cinco casas comerciales fue obra de provocadores, vinculados a dirigentes políticos del oficialismo.

La respuesta represiva fue, nuevamente, brutal. La Gendarmería se desplegó por toda la zona y comenzó a realizar allanamientos y detenciones arbitrarios. Se patrullaba cada región de la zona; las radios y la TV llamaban a la 'caza del piquetero'.

"En estas condiciones, la dirección piquetera reveló su templanza: defendió el corte, preparó las condiciones para la resistencia en la noche del sábado, en la que se preveía el 'asalto final' de la Gendarmería, y sacó dos declaraciones denunciando el propósito avieso de dividir a los trabajadores y debilitar la pueblada (...). Esta actitud de firmeza permitió recomponer parcialmente el corte y arrancar la negociación con los funcionarios".¹⁶⁵ Las negociaciones se realizaron en el propio regimiento de Tartagal, donde los dirigentes piqueteros fueron llevados por Gendarmería en un impresionante operativo.

El lunes 13 de diciembre, después de dos semanas de corte, los piqueteros de Tartagal, Mosconi, Aguaray y Pocitos, levantaron la medida en una asamblea general. Demostraban otra vez su madurez. Aunque en la negociación sólo se habían arrancado 400 'planes', que se sumaban a los 4.000 existentes, y un conjunto de subsidios –a la viuda de Aníbal Verón, a los beneficiarios de los 'planes' que habían sido dados de baja– y nuevas promesas, el movimiento no podía, en ese momento, ir más allá. Aunque el piquete se había recompuesto, no había logrado alcanzar el nivel de movilización de las jornadas previas al asesinato de Verón y la pueblada. La Gendarmería rodeaba a los trabajadores y el gobierno y las petroleras azuzaban una masacre.

El gobierno había fracasado en su objetivo estratégico: arrancar de raíz a la nueva dirección clasista de los piqueteros, integrada por dirigentes que actuaban con una política de independencia de clase, varios de ellos 'viejos' obreros despedidos de YPF. Sería esta dirección, probada en la lucha, la que realizaría, en los días inmediatamente posteriores, el Congreso de los piqueteros del norte de Salta.

El paro de 36 horas y los piquetes

Los cortes y los piquetes en La Matanza, en el Gran Buenos Aires y en Tartagal impusieron la huelga general de 36 horas, que convocaron conjuntamente la CTA y el MTA para fines de noviembre del 2000. La convocatoria no establecía, a diferencia de los piquetes y los cortes, un pliego concreto de reivindicaciones sino un difuso llamado a 'cambiar el modelo'. El planteo de estas burocracias estaba en línea con los realineamientos que se producían en el seno de la burguesía frente al completo agotamiento de Machinea, la agudización de la recesión y la abierta

tendencia del régimen a la cesación de pagos (en esos momentos, el gobierno se encontraba discutiendo el 'blindaje' con el Fmi). Es decir que, nuevamente, los trabajadores eran convidados como 'furgón de cola' de un nuevo 'modelo' que acabarían estableciendo las grandes patronales. Fueron los piquetes de obreros y desocupados –y no la política de sus convocantes– los que le dieron una definida fisonomía obrera y clasista al paro general de 36 horas.

Los piquetes y los piqueteros fueron los grandes protagonistas del paro de 36 horas.

Los piqueteros del Soip pararon las plantas procesadoras y el puerto de Mar del Plata; los desocupados cortaron la ruta 2 en el acceso de la ciudad. En Rosario-San Lorenzo, se ocupó la intendencia de Capitán Bermúdez y se cortó frente al hospital Baigorria, ante el carneraje impulsado por la Upcn. En Rosario, los piquetes de Empleados de Comercio paralizaron los supermercados. En Córdoba, hubo un gran acto sindical y el piquete del Sindicato de Desocupados cortó la ruta 9. En Neuquén y Río Negro, una multitud de obreros y desocupados ocupó el puente que une ambas provincias durante las 36 horas, incluso superando los intentos de levantar la medida por parte de ATE y Aten, cuando sólo se habían cumplido 12 horas.

Los piquetes cortaron la circulación del Ferrocarril Belgrano y obligaron al cierre de los supermercados en el Gran Buenos Aires. En el cruce de Varela hubo un gran piquete obrero, en el que no jugaron ningún papel ni el MTA ni la CTA. Se cortó la Panamericana en la zona Norte. En La Matanza, miles salieron a las rutas. En Morón y Merlo, hubo piquetes comunes de organizaciones sindicales y de desocupados. En Tartagal y Mosconi se realizó un acto en el lugar del último corte. En el cierre del acto, la esposa de Aníbal Verón puso algunas cosas en claro: “¿Dónde estaban las organizaciones sindicales mientras nosotros luchábamos en la ruta? Yo tengo confianza en los piqueteros, a quienes solicito su apoyo para esta lucha, para que no haya más piqueteros muertos”.¹⁶⁶

En ese paro de 36 horas hizo su 'debut oficial' un movimiento que venía gestándose desde hacía meses en un intenso trabajo de organización: el de los piqueteros de la Capital Federal. El Puente Alsina, el puente de La Boca, la Perito Moreno, la Paternal y Almagro fueron cortados por piquetes integrados por organizaciones de desocupados, de lucha por la vivienda, y organizaciones sindicales.

Los piquetes habían garantizado la jornada. La prensa patronal destacaba su protagonismo, señalando que se habían realizando cortes “en sitios sorpresivos para los propios jefes gremiales” y que “la organización de la protesta callejera no fue 'cegestista' sino 'setentista'...”.¹⁶⁷ Tenía razón el cronista al decir que la protesta callejera no fue “cegetista”, pero le erraba al definirla como “setentista”: el piquete, el protagonismo de las organizaciones piqueteras y de la izquierda no eran un 'recuerdo del pasado'; eran la marca de los tiempos por venir.

Como había sucedido después de la Marcha Federal del '95, de la huelga general del 14 de agosto del '97, o de la huelga de febrero de 2000, después del paro de 36 horas la CGT de Moyano y la CTA, llamaron a la “concertación”, es decir que desarmaron la movilización. “Esto es como una pelea, cuando después de darse trompadas, suena la campana y los boxeadores se abrazan y se besan” decía el propio Moyano después del paro intentando explicar lo inexplicable.¹⁶⁸

La contradicción entre la política de las direcciones sindicales y las necesidades del movimiento de lucha de las masas, expresadas en la masividad de la huelga y los piquetes, no podía ser mayor.

149. Mora, Jorge, “Encuentro Regional de Desocupados de Neuquén y Río Negro”, en Prensa Obrera, 3 de octubre de 2001.

150. Un hecho destacado, por lo poco habitual, es que en este Congreso de Desocupados participó un agrupamiento de profesionales desocupados.

151. Hoy, 9 de agosto de 2000.

152. “Un antes y un después”, reportaje a José Villalba, en Prensa Obrera, 9 de noviembre de 2000.
153. “Pacto para ‘contener’ a los desocupados”, reportaje a José Villalba, en Prensa Obrera, 21 de setiembre de 2000.
154. Rath, Cristian, “Argentina piquetera”, en Prensa Obrera, 9 de noviembre de 2000.
155. Altamira, Jorge, “Caracterización de la crisis”, en Prensa Obrera, 16 de noviembre de 2000.
156. Idem anterior.
157. “Extender la organización de trabajadores y desocupados”, reportaje a Alberto Spagnolo, dirigente del Mtd de Solano”, en Prensa Obrera, 16 de noviembre de 2000.
158. Rapanelli, Daniel, “Viva la lucha de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados”, en Prensa Obrera, 16 de noviembre de 2000.
159. Jayo, Silvia, “Triunfo de la Carpa de Desocupados de San Fernando”, en Prensa Obrera, 9 de noviembre de 2000.
160. Barraza, José, “Una nueva dirección que propone un Congreso Nacional de Desocupados”, en Prensa Obrera, 9 de noviembre de 2000.
161. Idem anterior.
162. Idem anterior.
163. “Se tiene que esclarecer y la tienen que pagar”, reportaje a Enriqueta Gómez, esposa de Aníbal Verón, en Prensa Obrera, 16 de noviembre de 2000.
164. Rath, Christian, “Una nueva dirección en el norte de Salta”, en Prensa Obrera, 16 de noviembre de 2000.
165. Idem anterior.
166. “Un plan de lucha que imponga nuestros reclamos”, en Prensa Obrera, 30 de noviembre de 2000.
167. La Nación, 25 de noviembre de 2000.
168. Idem anterior.

De la Quiaca a la Patagonia

Cuando un movimiento de lucha responde a una necesidad vital de las masas explotadas, su desarrollo se hace imparable. Supera los golpes represivos, las manipulaciones de los aparatos políticos patronales y supera, también, los particularismos y localismos para convertirse en un movimiento de lucha verdaderamente nacional. Esto es lo que ha sucedido con el movimiento piquetero, que ha derrochado heroísmo y combatividad de una punta a la otra de la vasta geografía argentina.

Santa Cruz: los piqueteros del carbón y del petróleo

En la menos densamente poblada de las provincias argentinas, los principales polos de desarrollo industrial son el petróleo y el carbón: allí sentaron sus reales los piqueteros santacruceños.

En el sur de la provincia, junto a la frontera con Chile, se encuentra la mina de carbón de Río Turbio. Privatizada por Menem, su concesionario (Taselli) se ha dedicado a vaciar la mina, a embolsar subsidios, a despedir personal y a reemplazar trabajadores efectivos por contratados. Esta política consciente de destrucción de Ycrt fue llevando a una viva resistencia obrera, que se materializó en distintas luchas, la mayor de las cuales había sido la gran huelga de 1994.

El 3 de abril de 1998 –ante el despido de 39 trabajadores– estalló otra gran huelga de la cuenca carbonífera que asumió, de entrada, características piqueteras. Un nutrido grupo de mineros, el más combativo, se encerró en el fondo de la mina, a cientos de metros bajo tierra, y juró que no saldría hasta alcanzar la victoria. Otro grupo marchó a Río Gallegos, la capital provincial, donde se movilizó junto a los docentes y los estudiantes y sostuvo una huelga de hambre frente a la Casa de Gobierno. No se trataba, sin embargo, sólo de una huelga piquetera de los mineros: era una lucha piquetera de todo el pueblo de Río Turbio y 28 de Noviembre, las dos localidades próximas a la mina. Las mujeres de los mineros, junto con sus hijos, y con el apoyo de los estudiantes, cortaban las rutas de acceso al pueblo. Los docentes de las dos localidades, en asamblea general conjunta, votaron ir a la huelga indefinida en solidaridad con los mineros. La huelga de solidaridad –es decir, la huelga de un sector de trabajadores que no para por alguna reivindicación propia sino para que triunfe la lucha de otros trabajadores– es otra muy vieja tradición obrera, combatida siempre con saña por la burguesía y enterrada por la burocracia, que fue recuperada por el movimiento piquetero. Los militantes docentes del FUT-PO, que estaban al frente de Adosac, el sindicato docente provincial desde hacía varios años, impulsaban activamente la movilización piquetera de los docentes y los estudiantes junto a los mineros.

Bajo los auspicios del gobernador Kirchner, y a espaldas de los mineros, las direcciones nacional, provincial y local de ATE llegaron a un acuerdo con el concesionario que no reconocía la principal reivindicación de la lucha: la reincorporación de los despedidos. Poco antes, ATE y la CTA habían apoyado la re-elección de Kirchner, opositor al menemismo, con quien habían establecido un acuerdo político que perdura hasta nuestros días. Cuando ATE llamó a una asamblea para convalidar el acuerdo, Kirchner y el obispo local salieron a respaldarlo por los medios y hasta movilizaron a sus ‘bases’ –los curas y los punteros– para convencer a los mineros y a sus familias.

La dirección de ATE pretendía realizar la asamblea en el pueblo, sin la presencia de los mineros que estaban en los socavones ni los que se habían movilizado a Gallegos. La maniobra fue abortada y se obligó a la dirección sindical a realizar la asamblea dentro de la mina. “El clima en boca de mina 5 era tenso: iban entrando los mineros y luego los dirigentes. Y el canto de las

familias, los estudiantes, los docentes y mineros que aguardaban el inicio de la asamblea no se hizo esperar... 'Se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical' con largos abucheos para los dirigentes y gritos de aliento para los mineros. 'Aca están, estos son, los mineros del carbón' y 'Mandarina, mandarina... esta lucha la ganamos desde adentro de la mina'.¹⁶⁹ La asamblea repudió el acuerdo y resolvió continuar la huelga.

Desde ese momento, la dirección de ATE abandonó la huelga a su suerte. Uno de los compañeros movilizados en Río Gallegos denunciaba entonces que "nos cerraron el sindicato, nos negaron el teléfono hasta para hablar con nuestras familias; ni las comidas nos garantizan".¹⁷⁰ En el Turbio, el sindicato docente se transformó en el centro de organización de la huelga: allí llegaban las adhesiones y se recolectaban los alimentos, salían los partes de prensa y se reunían los familiares de los mineros. El papel jugado por los docentes fue reconocido por los mineros, que invitaron a Miguel Del Plá y Omar Latini –dirigentes provinciales del gremio (y militantes del FUT-PO)– a bajar a los socavones para discutir con ellos las perspectivas de la lucha. "En la boca de la mina, las esposas de los mineros no se cansan de repetir que 'si no fuera por los maestros, ya nos habrían cag...'".¹⁷¹

Una semana más tarde, la dirección de ATE consiguió que una parte de los mineros que estaban en el socavón aceptara un nuevo acuerdo que reconocía la 'continuidad laboral' de los 39 despedidos (lo que significaba que seguían contratados pero no reincorporados plenamente; un 'tribunal arbitral' decidiría en cada caso en base a sus 'antecedentes laborales'). Si bien se obligaba a la patronal a recular en numerosos puntos, los mineros caracterizaron el acuerdo como una "traición" porque la burocracia había impedido que se obtuviera un triunfo rotundo.¹⁷²

Uno de los huelguistas de hambre de Río Gallegos, el minero Tapia, consideraba entonces que "el primer paso (...) en esta nueva etapa (después del levantamiento de la huelga) es, sin duda, cambiar la dirigencia de ATE tanto provincial como seccional Río Turbio. Cambiarla, porque no podemos encarar otra nueva lucha con esos dirigentes. Queremos dirigentes de base, dirigentes que realmente sepan pelear y se pongan al frente de los trabajadores".¹⁷³

Los mineros no tardarían en cumplir su palabra: en las elecciones provinciales y seccionales de ATE que se realizaron al año siguiente, la Lista Negra –integrada por la Agrupación 3 de abril, "Mineros en lucha" y la Agrupación 1° de Mayo de ATE Santa Cruz– derrotó a la burocracia degenerarista y, superando innumerables trabas y maniobras fraudulentas, logró recuperar para los mineros ATE-Río Turbio.¹⁷⁴ Con el sindicato en manos de los activistas que sostuvieron la huelga, los mineros de Río Turbio salieron más de una vez a la lucha en defensa de sus reivindicaciones.

La lucha de los mineros del Turbio es un ejemplo vivo de como el movimiento piquetero ha revolucionado la vida de los sindicatos y ha potenciado a sus corrientes antiburocráticas y combativas.

En el norte de Santa Cruz, la principal actividad productiva es el petróleo y, por lo tanto, la mayoría de los desocupados son trabajadores petroleros. Desde 1996 existía en Caleta Olivia, la principal ciudad del norte santacruceño, una Coordinadora de Desocupados, impulsada por el FUT-PO, que venía desarrollando un trabajo de organización y de propaganda por el subsidio a los desocupados y el reparto de las horas de trabajo sin reducción de los salarios. Esta Coordinadora participó en varios de los Plenarios Intersindicales Patagónicos organizados por la directiva clasista de Adosac (docentes).

Pero a fines de 1998 –como consecuencia del derrumbe del precio internacional del petróleo– un verdadero terremoto sacudió a la zona: en pocos meses fueron despedidos 5.000 petroleros en Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco (norte de Santa Cruz) y Comodoro Rivadavia (sur de Chubut). A comienzos de 1998, funcionaban en la zona 36 equipos de perforación; un año después, sólo operaban tres.

Hacia la navidad de 1998, la Coordinadora de Caleta montó una olla popular en el centro de la ciudad, en la que se nuclearon los petroleros despedidos y, especialmente, sus esposas. El sindicato docente respaldó la olla que, luego de varios días de 'permanencia', obtuvo 25 'planes

de empleo' y muchas promesas. El movimiento se extendió: comenzaron cortes de ruta de los desocupados petroleros en Pico Truncado y Las Heras.

Inicialmente, el gobierno del 'progresista' Kirchner apostó al desgaste pero no tuvo éxito; los cortes se prolongaron y, con el correr de los días fueron ganando en masividad. A fines de enero, la Coordinadora de Caleta –que había levantado su olla– votó en asamblea volver a cortar la ruta 3, esta vez en solidaridad con los desocupados de Las Heras y Truncado. Ante la extensión de los cortes, Kirchner cedió y se conquistaron más de 300 'planes'. Pese a que lo ofrecido estaba lejos de lo que se reclamaba, los piqueteros se vieron obligados a aceptar porque, con excepción de los docentes, los sindicatos de la zona habían aislado su lucha.

En retroceso, el gobierno lanzó una campaña represiva contra la Coordinadora de Caleta Olivia, que había estado a la cabeza de la lucha. La Gendarmería se presentó en el corte para desalojar por la fuerza; Norma Villamayor, su principal animadora, fue procesada penalmente, y varias militantes fueron despedidas de los 'planes'. Al mismo tiempo, se lanzó una ofensiva política contra el FUT-PO y Adosac, a los que se acusaba de promover los cortes para 'desprestigiar' al gobierno.

El proceso contra Norma Villamayor era una seria amenaza para el movimiento: en julio de 1999, en la vecina Comodoro Rivadavia, fueron condenados a cinco meses de prisión (en suspenso) y dos años de 'trabajos comunitarios', los compañeros Walter Natera, secretario general de ATE-Comodoro, y Miguel Gatti, dirigente vecinalista y militante del PC. Se los acusaba de haber cortado las rutas en la huelga general del 14 de agosto de 1998.

Pero ni los paliativos ni la represión frenaron el movimiento. En agosto de 2000, volvió a estallar todo el norte santacruceño: los desocupados rodearon las bases y la administración de YPF-Repsol en Las Heras y las de Vintage en Cañadón Seco. Los piquetes eran muy combativos; en Las Heras, el sindicato docente marchó para respaldar a los desocupados. Se conquistaron 400 puestos de trabajo de 500 pesos más el salario familiar –240 en las petroleras o sus contratistas– y otros 160 en las municipalidades (con una 'contraprestación laboral' de 4 horas). Los 'planes' serían financiados por las petroleras y controlados por el sindicato petrolero (afín a Kirchner).

Ante cada vencimiento de los 'planes', las movilizaciones de los desocupados petroleros obligaron a su renovación. Los 'planes', que están vigentes a la fecha se han convertido, incluso, en verdaderos subsidios porque se ha eliminado la 'contraprestación laboral' (las petroleras se ahorran de esta manera el pago del seguro laboral obligatorio). Entre la base petrolera, sin embargo, existía una cada vez mayor desconfianza en su dirección sindical; por este motivo, en una asamblea en agosto de 2001 se propuso y se aprobó que Norma Villamayor, de la Coordinadora de Desocupados de Caleta, fuera incorporada a la comisión de administración de los 'planes'.

Con la victoria en ATE-Río Turbio, la gran votación obtenida en ATE-Santa Cruz y con el protagonismo de los docentes en todas las luchas de la provincia, a los clasistas de Santa Cruz se les presentaba un nuevo desafío: las elecciones provinciales de la CTA, que se realizarían por el voto directo de los afiliados en setiembre de 2000. Se presentaron dos listas: la Verde, repaldada por la dirección nacional de ATE, y la Rosa-Negra, integrada por los activistas mineros y docentes que habían encabezado las luchas. En estas condiciones, las elecciones se transformaron en un plebiscito sobre el propio gobierno provincial, ya que éste mantenía un acuerdo político con la dirección de la CTA mientras que los docentes y los mineros eran sus principales opositores.

Las elecciones no se realizaron, sin embargo, en la fecha prevista: la oposición obligó a que fueran postergadas por dos meses porque los padrones estaban 'inflados'. Depurados los padrones, la Rosa-Negra se impuso por 646 a 445 votos; en el gremio docente y en la mina de Río Turbio la dirección de la CTA fue derrotada en una proporción de 3 a 1. Mónica Galván, dirigente docente de Caleta Olivia y militante del FUT-PO, fue elegida Secretaria General de la CTA santacruceña.

Con la conquista piquetera de la central sindical, los clasistas de Santa Cruz ganaron una nueva herramienta para desarrollar la lucha. Fueron la CTA y Adosac piqueteras las que organi-

zaron las grandes manifestaciones que repudiaron el ‘paquetazo’ de López Murphy y las que garantizaron el cumplimiento, en el lejano sur, de las resoluciones votadas en las Asambleas Piqueteras de La Matanza.

Catamarca

El nacimiento del movimiento piquetero catamarqueño es relativamente tardío: sus primeras movilizaciones tienen lugar a mediados de 1999. Pero como si quisieran ‘recuperar el tiempo perdido’, desde sus mismos inicios los piqueteros de Catamarca han dado muy sólidos pasos de organización y de extensión del movimiento.

Como consecuencia del derrumbe del ‘clan Saadi’ frente a las movilizaciones que siguieron al asesinato de María Soledad Morales, la Alianza –que en Catamarca se llama Frente Cívico y Social– llegó al gobierno en la provincia mucho antes que en el resto del país. En la etapa previa a las elecciones provinciales de 1999, que tuvieron lugar en marzo, el gobierno aliancista montó un verdadero ‘festival’ de ‘planes de empleo’ para ocultar el impresionante crecimiento de la desocupación. Antes de las elecciones fueron asignados 10.000 ‘planes’, tanto nacionales como provinciales: los ‘planes’ eran el primer ‘empleador’ de la provincia. Pero apenas pasaron las elecciones, el gobierno de Castillo arrasó con los ‘planes’: allí nació el Foro de Desocupados, que comenzó a organizar marchas semanales a la Casa de Gobierno.

El Foro de Desocupados no sólo enfrentó al gobierno provincial sino también a la demagogia ‘opositora’ del PJ. Los piqueteros demostraron que la pretendida “salida peronista” al drama de la desocupación –los llamados “diferimientos impositivos”– era un saqueo a las arcas públicas en beneficio de los grandes capitalistas: la empresa que tenía en la provincia Pedro Pou, por entonces presidente del BCRA, recibió “diferimientos” por valor de diez millones... ¡con la obligación de crear apenas 9 puestos de trabajo! A la “salida peronista”, el Foro de Desocupados le opuso la “salida piquetera”: trabajo para todos los desocupados mayores de dieciséis años o, en su defecto, un seguro de 500 pesos; el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; eximición de impuestos y tasas.

El Foro de Desocupados intervino en la lucha contra la privatización de la empresa de obras sanitarias y extendió la organización de los desocupados al interior de la provincia: nacieron comisiones en Belén, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Banda de Varela, San Isidro. A su vez, en algunas ciudades como Belén y la capital provincial nacían organizaciones por barrio, impulsadas por el propio Foro.

En junio de 2001 tuvo lugar el I Encuentro provincial de trabajadores ocupados y desocupados, organizado por el Polo Obrero, en el que participaron –junto a las mencionadas comisiones de desocupados– el Sindicato Provincial de la Sanidad (Siprosca), delegados de ATE, la Comisión Popular de Derechos Humanos, Tribuna Docente y el Partido Obrero. Se votó un programa de lucha, que recogía las reivindicaciones de los desocupados, la estatización de Alpargatas y el establecimiento de regalías del 50% a los pulpos mineros de la provincia. Uno de los reclamos levantados por las organizaciones de desocupados –la eximición de impuestos y tasas– adquiría en esos momentos un carácter explosivo: con la privatización de Obras Sanitarias, se había producido una revaluación que llevó las boletas a las nubes, haciéndolas impagables y no sólo para los desocupados. Se votó presentar petitorios a los gobiernos municipales con estos reclamos.

A mediados de junio de 2001, los desocupados de Valle Viejo organizaron una marcha a la capital –a la que se sumaron, ya en San Fernando, trabajadores de ATE, Conadu y Vialidad Nacional– y un corte de la ruta 33 a la altura de la entrada del Barrio Las Vías. Los compromisos arrancados a las autoridades en el corte (un centenar de ‘planes de capacitación’) no se cumplieron. Ante la falta de respuestas, los desocupados del municipio de Valle Viejo (contiguo a la capital) se concentraron frente a la intendencia: continuaron las promesas pero no apareció ninguna solución. “Ante esta precaria situación, una numerosa asamblea del Polo Obrero decidió una iniciativa de lucha: volver a cortar la ruta 33”. 175 Muchos desocupados, de Las Vías y de otros

barrios, se sumaron al corte, que se caracterizó por la permanente realización de asambleas. Simultáneamente, la Comisión de Desocupados de Belén, también integrante del Polo Obrero, iniciaba un plan de cortes de las avenidas céntricas de la ciudad. Con estos métodos, reforzados por una nueva marcha a la municipalidad, se obtuvieron las primeras conquistas.

El Polo Obrero catamarqueño participó en las Asambleas Piqueteras de La Matanza y garantizó el cumplimiento de sus resoluciones en la provincia. En agosto de 2001 tuvo lugar un segundo Encuentro provincial, cuya asistencia duplicó a la del anterior. Se resolvió abrir dos ollas populares en distintos barrios de Valle Viejo (ya funcionaba una en Las Vías) y nuevas movilizaciones y cortes de ruta.

Como a tantos otros en todo el país, la justicia provincial dictó orden de captura contra los compañeros Enrique Traverso, José Soria, Luis Sacaba y Francisco Sánchez (de las organizaciones de desocupados del Polo Obrero) y Juan Godoy (Suten) y Francisco Acosta (ATE), ambos dirigentes de la CTA, bajo la acusación de “cortes de ruta reiterados”. El lenguaje judicial-policial resume adecuadamente la incansable actividad de los piqueteros catamarqueños.

Tucumán: los piqueteros del azúcar

Como en Catamarca, el desarrollo del movimiento piquetero en Tucumán es relativamente tardío pero, desde su aparición, ha tenido un crecimiento explosivo.

La etapa final del gobierno menemista estuvo signada por grandes levantamientos provinciales; uno de los más fuertes tuvo lugar en Tucumán, donde jugaron un papel central los trabajadores municipales de toda la provincia, movilizados por el pago de sueldos atrasados. La Plaza de la Independencia, en la capital tucumana, se convirtió en el escenario de grandes movilizaciones provinciales que reclamaban “¡Fuera Bussi! ¡Fuera Menem!”

Uno de los sindicatos municipales del sur de la provincia, el de Aguilares –dirigido por Vicente Ruiz, de la CCC– que desde 1998 había comenzado a cortar la ruta 38 en reclamo del pago de los salarios atrasados, jugó un importante papel en la organización de los desocupados de esa zona de la provincia.

El 4 de febrero de 2000, mil desocupados del sur provincial –de las localidades de Alberdi, La Cocha, Graneros y Río Chico– cortaron durante 8 horas la ruta 38 a la altura de Alberdi. El corte reclamaba puestos de trabajo y bolsones de alimentos y fue organizado por la CCC.

Durante los meses siguientes, los cortes se repitieron y fueron sumando trabajadores despedidos del Ingenio Aguilares y de Alpargatas. Frente a esta planta cerrada, en la localidad de Alberdi, se montó una “carpa negra”, que organizó una guardia obrera de despedidos y desocupados “para que la empresa no pueda sacar ni un tornillo”, como declaraba una compañera.¹⁷⁶ El corte fue impuesto a la burocracia de la AOT, que impulsaba a los trabajadores a aceptar la mitad de la indemnización o, directamente, a renunciar.

En noviembre de 2000 se volvió a cortar la ruta 38 en Alberdi y Aguilares. El corte fue prolongado: mil piqueteros lo sostuvieron durante ocho días. Con los cortes, se obtuvieron conquistas –bolsones de alimentos, subsidios para los comedores populares, ‘planes’– que permitieron ampliar el movimiento.

La extensión del movimiento le permitió a la CCC, que lo encabezaba, lanzar una iniciativa audaz: la organización de una marcha provincial de los desocupados del interior tucumano hacia San Miguel, la capital provincial. El 10 de abril de 2001 se realizaron cortes en toda la provincia para preparar la “Marcha del Hambre, por pan y trabajo”. La marcha arrancó el 23 de abril desde distintos pueblos del sur tucumano –La Cocha, Graneros, Alberdi, Monteros, Santa Ana, Los Sarmientos, Aguilares– y del este –Colombres, Ranchillos, junto con obreros del Ingenio Cruz Alta. Como es tradicional en las grandes movilizaciones tucumanas, fue una marcha ‘a pata y pulmón’ en la que participaron mujeres embarazadas, madres con sus niños en brazos y jubilados.

Tres días después, 3.500 desocupados llenaban la Plaza Independencia, en la que fueron recibidos por organizaciones sindicales y estudiantiles. El Partido Obrero y el Polo Obrero de Tucumán participaron activamente en la “Marcha del Hambre”. En la Plaza Independencia, se reclamaron 3.000 ‘planes de empleo’, la reapertura de Alpargatas, que muelan todos los ingenios de la provincia y que se reincorpore a los despedidos del Ingenio Cruz Alta.

Como en todas las provincias, también en Tucumán el movimiento piquetero tiene a sus dirigentes y organizadores perseguidos por la justicia. Antes de concentrarse en la Plaza de la Independencia, cientos de compañeros marcharon a Tribunales para exigir el desprocesamiento de los piqueteros tucumanos Vicente Ruiz, Antonio Suárez, Ruben Portas, José Múscari, Lucía Flores y Miriam Boldo.

Jujuy: volver a empezar

El acta que permitió el levantamiento de la heroica pueblada jujeña de mayo/junio de 1997 dejó expresa constancia de la insatisfacción de los piqueteros, que consideraron “insuficientes” los planes y los beneficios conquistados. Se establecía, además, que la recientemente creada Coordinadora Provincial de Desocupados quedaría a cargo del control del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los gobiernos nacional y provincial. Como ya se ha señalado, en esta Coordinadora Provincial, la Iglesia jugaba un papel decisivo.

Lejos de controlar el cumplimiento de esos acuerdos, la Coordinadora Provincial fue convertida –a través de la acción de la Iglesia– en un instrumento del gobierno de Ferraro. Un año después de la pueblada, el periódico del PTP-PCR sacaba un balance amargo: “Por ser inicialmente un importante órgano de lucha conformado el 30 de mayo del ‘97 con delegados de los piquetes que habían paralizado la provincia e impuesto al gobierno los 19 puntos, el gobierno (que se había opuesto a su formación), utilizando a los traidores que hubo desde el inicio en su seno y a los posteriores, a través de múltiples maniobras, logró degenerarla, romperla, convertirla en un apéndice, conservando el nombre”.¹⁷⁷ El PTP-PCR, sin embargo, no podía desconocer la parte de responsabilidad política que le cabía en el curso de los acontecimientos, ya que un año antes había elogiado el papel jugado por la Iglesia en la pueblada¹⁷⁸ y no había advertido sobre las tendencias contrarrevolucionarias –o potencialmente contrarrevolucionarias– que actuaban en el seno de la Coordinadora.

Así, un año después de la pueblada, el movimiento piquetero jujeño había sido virtualmente descabezado por su propia dirección.

Al gobierno de Ferraro, sin embargo, la desactivación del movimiento de desocupados no le trajo ningún respiro. El descalabro de las finanzas provinciales provocaba una crónica crisis política, en la cual la lucha sistemática de los empleados municipales –el gremio encabezado por Carlos Perro Santillán–, provinciales y docentes para cobrar sus salarios atrasados tenía una gran repercusión popular. Los estatales jujeños cortaban rutas, ocupaban plazas y edificios, realizaban marchas multitudinarias, es decir que, como los desocupados, se movilizaban con métodos piqueteros. En agosto de 1998, una marcha de los municipales y estatales de La Quiaca a San Salvador, la capital provincial, fue ferozmente reprimida: balas de goma y palazos de quebracho fueron descerrajados contra hombres, mujeres y niños. “Fue entonces cuando varios compañeros de ATE y de Municipales se interpusieron con sus propios cuerpos para evitar la masacre. Nando Acosta, de ATE-CTA, y Santillán de Municipales y la CCC, fueron detenidos junto a la totalidad de los dirigentes sindicales de Jujuy por el sólo hecho de haber puesto el cuerpo contra la feroz y sistemática paliza de que eran objeto los trabajadores”.¹⁷⁹

Pero pese a la represión, la pueblada era imparable. Antes de fin de año, Ferraro debió renunciar. “La renuncia del gobernador Ferraro ha sido el ‘mal menor’ que adoptaron los políticos de la oposición patronal, las cámaras empresariales, el clero y hasta el gobierno de Menem, para evitar el estallido de un nuevo jujeñazo. Desde hace meses, Ferraro estaba enfrentando un proceso creciente de paros, movilizaciones, cortes, ocupaciones de reparticiones, motorizadas fun-

damentalmente por los atrasos en los salarios, pero también por el crecimiento de la desocupación que había trepado al 17%...".180

El cambio de gobierno, sin embargo, no trajo soluciones. Los estatales, municipales y docentes debieron continuar con las huelgas y los cortes para cobrar en fecha. En setiembre de 2000, la represión contra una de las habituales manifestaciones por el pago de los salarios, desató un movimiento generalizado por parte de los municipales en toda la provincia: se cortaron las rutas en San Pedro, Libertador, Perico, Calilegua y Fraile Pintado; en Monterrico, los municipales tomaron la intendencia. En diciembre de 2000, en la pequeña localidad de El Fuerte (en el municipio de Santa Bárbara) estalló una pueblada de los municipales ante el atraso de varios meses en el pago de salarios que fue duramente reprimida.

Al calor de estas luchas se fue reconstituyendo el movimiento de desocupados, pero sus movilizaciones en este período tuvieron un carácter aislado y defensivo (evitar la caída de los 'planes' ya obtenidos). Las ramificaciones del Seom en toda la provincia y el prestigio combativo de Santillán le permitieron a la CCC reconstruir el movimiento de los desocupados. A fines del 2000, un millar de desocupados de distintas localidades, organizados por la CCC, se movilizaron en San Salvador y obtuvieron bolsones de alimentos y 'planes de empleo'. Una nueva movilización, en febrero de 2001, logró ampliar esas conquistas.

Las conquistas y la agudización de la desocupación en toda la provincia, masificaban el movimiento. Se reorganizaron comisiones de desocupados en los barrios de la capital y en San Pedro, Calilegua, Libertador, La Esperanza y Perico. El ascenso del movimiento piquetero en la vecina Salta (con los grandes cortes de fin de año del 1999 y mayo del 2000) y en todo el país (el estallido de la Argentina piquetera de octubre/noviembre de 2000) apuntalaron la recomposición del movimiento de desocupados jujeños.

Como los piqueteros salteños, los desocupados de Jujuy deberían enfrentar muy rápidamente la campaña de provocaciones, detenciones y represión iniciada por el ministro del Interior Storani –con su 'denuncia' sobre el 'cónclave de piqueteros' de diciembre de 2000– y continuada por su sucesor Mestre –con las detenciones a Barraza, Raineri y Gil y la brutal represión a la pueblada de Tartagal y Mosconi.

A fines de mayo de 2001, cientos de desocupados, organizados por la CCC, se plantaron frente a la Gerencia de Empleo (el organismo del gobierno nacional responsable de los 'planes Trabajar') en San Salvador. Al octavo día de su permanencia, fueron desalojados por un impresionante operativo policial (600 efectivos) y obligados a desplazarse hacia las afueras, hacia los márgenes del río Chico. La policía había montado una provocación que se haría efectiva un día después.

Al día siguiente, apenas intentaban marchar nuevamente hacia el centro de la ciudad, los desocupados fueron atacados por 900 efectivos de la Infantería y la Caballería. La policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos contra la multitud. Elementos reconocidos de la Brigada, disfrazados de piqueteros, comenzaron a dar vuelta autos, romper los vidrios y quemarlos para justificar la represión. Hubo decenas de heridos de bala y con cuadros de asfixia. Cuando los piqueteros intentaron replegarse hacia el río, fueron perseguidos. La policía quemó las carpas y destruyó las pertenencias de los desocupados. Fueron detenidos 23 piqueteros, entre ellos el Perro Santillán; algunos –como Mónica Vera o Pablo Arias– fueron terriblemente golpeados al punto que debieron ser transferidos a un hospital. La 'caza de los piqueteros' se extendió a los barrios, donde muchos se habían refugiado, y se libraron ocho órdenes de captura.

Como en Tartagal y Mosconi, la lucha contra la represión comenzó inmediatamente: el jueves 7 de junio, un día después de la represión, hubo una movilización a la cárcel; por la noche fue liberado, en forma condicional, Carlos Santillán. La movilización nacional que votó la Ira Asamblea Nacional Piquetera de julio obtuvo la liberación de los restantes 22 detenidos, así como de otros 73 presos piqueteros que había, en esos momentos, en las cárceles de la 'democracia'.

Los piqueteros chaqueños

Los primeros intentos de organizar a los desocupados chaqueños son muy anteriores a los del resto del país: datan de 1991/92 (en otras provincias, las organizaciones y las movilizaciones de los desocupados comienzan a surgir recién a fines de 1994 - principios de 1995).

Este primer intento tuvo lugar en Barranqueras y fue obra de Eduardo Eloy Pereyra, dirigente de una fracción disidente del PC, quien creó una “comisión de desocupados” que rápidamente adoptó el nombre de Sindicato de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Pereyra intentaba dar una respuesta a un problema en el que Barranqueras había ‘anticipado’ al resto del país: la paralización del puerto había llevado a un masivo cierre de empresas –casi todas pequeñas y medianas pero también grandes– que dejaron un tendal de desempleados. A pesar de los esfuerzos de Pereyra y su grupo, el llamado a organizar a los desocupados no cuajó. Con los levantamientos populares en Cutral Co, Tartagal, Jujuy y Cruz del Eje, el grupo de Pereyra relanzó el llamado a organizar a los desocupados pero tampoco esta vez lograron poner en pie un movimiento.

Recién con las grandes inundaciones de abril de 1998 y con la consigna de “indemnización para los trabajadores”, el movimiento de desocupados de Barranqueras logró afianzarse como una organización de masas genuina. Estas inundaciones provocaron una verdadera rebelión popular en el Chaco porque pusieron al descubierto la espantosa situación en que vivían miles de desocupados e incluso los trabajadores que tenían empleo: cuando el agua inundó sus viviendas, a los empleados municipales de Barranqueras se les adeudaban dos meses de sueldo...

La consigna que levantó el movimiento de los desocupados –la indemnización para los trabajadores– enfrentaba de lleno esta catástrofe y la política del gobierno capitalista en la emergencia. El gobernador aliancista Rozas se limitaba a ‘gestionar créditos’ para los productores, lo que significaba que no había un peso para los desocupados y los trabajadores; al contrario, se denunciaba que en los albergues donde se apiñaban los desocupados faltaban comida, ropa y medicamentos. Pero la política aliancista tampoco era una solución para los pequeños productores: su endeudamiento era la antesala de su confiscación por los bancos y los grandes propietarios (precisamente eso era lo que había sucedido en las anteriores inundaciones).

El movimiento de los desocupados libró una importante batalla política por la indemnización, lo que llevó a que fuera expulsada de la llamada Asamblea de Barranqueras, una ‘multisectorial’ que agrupaba a los pequeños comerciantes que planteaba que la indemnización debía ser sólo para quienes tuvieran propiedades.

Como consecuencia de esta movilización, se produjo el Barranquerazo de 1998, cuando 400 desocupados y trabajadores de Barranqueras y los pueblos aledaños (Villa Fuksman, Villa Emilia, Las Malvinas, Ucal, Florida, Hortensia, Puerto, Nuevo Amanecer, La Loma, La Lomita) se movilizaron a Resistencia. Reclamaban un subsidio de 500 pesos para todos los desocupados mayores de 18 años (en una zona donde los sueldos de bolsillo de los empleados públicos no pasaban de 350 pesos); la exención impositiva para todos los desocupados; tarifas subsidiadas de luz y agua y el empadronamiento por el Estado de todos los desocupados.

Poco después, el movimiento tomó el nombre de Movimiento de Trabajadores Desocupados General San Martín y sufrió diversas escisiones. El sector orientado por Eloy Pereyra mantuvo una posición dominante en Barranqueras –donde administra un comedor municipal en el que comen más de 150 personas por día y conquistó algunos ‘planes’.

La escisión más importante es el Movimiento de Trabajadores Desocupados “17 de Julio”, dirigido por Emerenciano Sena y que mantiene relaciones con el MTR de Martino. Durante casi un año, el “17 de Julio” mantuvo el “Rancho de la Dignidad” en la explanada de la Casa de Gobierno, donde fueron reprimidos por patotas radicales en ocasión del triunfo de Rozas en las elecciones de 1999 y en julio de 2000.

En Resistencia surgieron también otras organizaciones provenientes del movimiento original de Pereyra, en particular una que agrupa a los desocupados de los asentamientos, dirigida por Aurelio Díaz, ex candidato a gobernador por el PC, luego suspendido del partido. Este movimiento logró que la Cámara de Diputados expropiara las cuatro manzanas que ocupa el asentamiento

Che Guevara, para titularizar la propiedad de sus ocupantes. También se desarrollan diferentes organizaciones en barrios y asentamientos, sin relación política u organizativa con estos movimientos.

Todas estas organizaciones de desocupados –incluso la de Sena– se reivindican independientes de las corrientes que organizan nacionalmente a los desocupados (Polo Obrero, CCC, FTV-CTA, MTD, MTR, Mijp).

Los desocupados chaqueños han realizado decenas de cortes de ruta, movilizaciones y acampadas frente a los poderes públicos; tuvieron una participación destacada en la Ira Asamblea Piquetera de julio y en el plan de lucha votado en ella.

169. Lahera, Carlos, “Esta lucha la ganamos desde adentro de la mina”, en Prensa Obrera, 16 de abril de 1998.

170. Idem anterior.

171. Idem anterior.

172. Daniel Cortez, minero huelguista de hambre en Río Gallegos, en el acto que se realizó luego del levantamiento de la huelga, hacía una cruda caracterización del acuerdo y de la dirección sindical de Ate: “Tal vez hoy día estén contentos porque se ha firmado esta acta de mierda, porque para mí es un acta de mierda, pero sepamos, y que quede bien claro, que estamos unidos, que los nuevos dirigentes van a surgir de esta lucha, de que vamos a estar más fuertes que nunca y que vamos a defender nuestra fuente de trabajo”. “La casa de gobierno va a ser nuestra algún día”. Intervención de Daniel Cortez al conocerse el levantamiento de la medida de fuerza, en Prensa Obrera, 23 de abril de 1998.

173. “Cambiar la dirección”, reportaje al minero Tapia, en Prensa Obrera, 23 de abril de 1998.

174. En las elecciones provinciales, la Lista Verde de De Gennaro superó por escasos 19 votos a la Lista Negra (394 a 375). El oficialismo pudo mantener el sindicato gracias a las maniobras del gobierno provincial (a último momento, se ‘afiliaron’ a Ate numerosos funcionarios gubernamentales de alto rango) y a la colaboración del Pc (aliado a De Gennaro), que presentó una lista artificial que obtuvo una votación ínfima pero suficiente para impedir que la Lista Negra ganara el sindicato provincial.

175. Torrente, Antonio, “Catamarca: el Polo Obrero da sus primeros pasos”, en Prensa Obrera, 12 de julio de 2001.

176. “Como en la sepultura”, reportaje a Teresa (obrero de Alpargatas), en Hoy, 25 de abril de 2001.

177. “Oportunistas y traidores”, en Hoy, 10 de junio de 1998.

178. “La Iglesia de Jujuy jugó un rol protagónico en las negociaciones con los piqueteros que dieron lugar al acta firmada por el gobernador Ferraro”. Aunque reconoce que en la pueblada “se pusieron de manifiesto las contradicciones entre los distintos sectores de la Iglesia”, sostiene que “prevalecieron posiciones críticas hacia esta política y este gobierno, así como al sistema social que los nutre”. Llega a afirmar, incluso, que “el punto más saliente, sin lugar a dudas, para la historia de la Iglesia jujeña es el que pide ‘revisar el uso de las tierras improductivas y extensiones privadas improductivas para comunidades aborígenes, pequeños productores y planes de vivienda y obras públicas’...” (“La Iglesia pidió revisar el uso de las tierras improductivas”, en Hoy, 4 de junio de 1997).

179. Devoto, Juan Carlos, “Jujuy: Represión con métodos de guerra civil”, en Prensa Obrera, 20 de agosto de 1998.

180. Blanco, Daniel, “Jujuy: La caída de Ferraro y el fantasma del jujeñazo”, en Prensa Obrera, 3 de diciembre de 1998.

El Congreso piquetero del Norte de Salta

El 9 de diciembre de 2000 se reunió el I Congreso de Trabajadores y Desocupados del Norte de Salta, convocado por las direcciones piqueteras que habían dirigido los últimos cortes. Sesión con cerca de 200 compañeros provenientes de la UTD de Mosconi, el Frente Barrial de Desocupados de Embarcación, la Comisión de Desocupados de Pocitos y la Coordinadora de Desocupados de Tartagal; en varias de esas localidades se habían realizado asambleas previas. Un cartel de fondo proclamaba: “Por una salida de los trabajadores a la crisis”.

El Congreso fue un verdadero laboratorio de elaboración política en el que decenas de compañeros debatieron y colectivizaron las conclusiones de las experiencias de lucha en cada localidad.

Las deliberaciones se iniciaron con la palabra de Enriqueta Gómez, viuda de Aníbal Verón, y las madres de los compañeros Gómez y Justiniano, asesinados por la policía en el corte de mayo, y la madre de Maldonado, un joven víctima del gatillo fácil policial en la zona. Se decidió que los familiares de las víctimas de la represión formarían parte de la Coordinadora Departamental, junto con dos representantes de cada organización de desocupados convocante (y un miembro de la UTA, presente en las deliberaciones). “Con esto, se integra la lucha por perpetua a lo asesinados a la lucha general por todo el peticorio, ya que en modo alguno la tarea de meter presos a los responsables de las muertes puede quedar sólo en manos de los familiares”.¹⁸¹

Las intervenciones expresaron una experiencia de lucha.

“La Comisión surgió en mayo, en oposición a ‘toda la clase política’, a la que responsabilizamos por la situación actual. Desde aquel momento se conquistó, mediante la lucha, el ingreso de 150 trabajadores en las compañías de sísmica. Y que luego del último corte, donde obtuvieron 100 planes, se impuso por primera vez que no sean repartidos por los punteros del intendente, sino por la propia Comisión: una parte a los luchadores más comprometidos, otra a los más necesitados y el resto mediante un sorteo público (idéntico método acababa de aplicar la Coordinadora de Tartagal). (...) La Mesa de Concertación que reúne al intendente y a las cámaras empresarias es un instrumento del gobierno contra los trabajadores”. (compañero Arce, representante de los desocupados de Pocitos).¹⁸²

“Luego de muchos años de luchas, de traiciones de dirigentes vendidos al oficialismo, y de confiar, incluso, en el gobierno de la Alianza, la experiencia nos había llevado a tomar todas las luchas en manos propias, desde el manejo de los ‘planes Trabajar’ hasta la vigencia de importantes obras que demuestran lo que podríamos hacer los trabajadores si tuviéramos el poder” (Chiqui Peralta, de la UTD de Mosconi).¹⁸³

“Aquí no hay inversiones, hay saqueo, como lo demuestran largamente las cifras de las ganancias diarias de las compañías, en contraste con la miseria del pago por regalías. El Municipio de Mosconi, que concentra la mayor producción, apenas recibe un millón de dólares anuales por este concepto. No corresponde que los trabajadores nos pongamos a reclamar a favor de la llegada de estas inversiones, y por lo tanto sentarnos a esperar una reactivación para que recién allí se consiga trabajo” (José Barraza, de la Coordinadora de Desocupados de Tartagal).¹⁸⁴

El Congreso debatió la amplia experiencia de la lucha de los últimos dos años, que se extendía mucho más allá de los grandes cortes y puebladas. Desde el corte de mayo de 2000, las organizaciones de desocupados habían venido movilizándose sobre las petroleras para imponerles la contratación de trabajadores desocupados.

En Veritas, una de las empresas dedicadas a abrir picadas y a detectar áreas con petróleo, se logró la incorporación de 670 trabajadores con un básico de 585 pesos por 12 horas. La Coordi-

nadora de Trabajadores Desocupados de Tartagal se movilizó sobre las oficinas de la empresa y lo mismo hicieron, más tarde, los Desocupados de Pocitos. En el corte de ruta de mayo, uno de los puntos del acuerdo prohibía que las tareas de sísmica fuesen cubiertas por integrantes de las fuerzas armadas, como se venía haciendo hasta ese momento, y exigía, en su lugar, la afectación de trabajadores desocupados.

En la petrolera Astra Evangelista, un piquete conjunto de Mosconi, Tartagal y Pocitos arrancó 112 puestos de trabajo de acuerdo a las listas armadas por las organizaciones de desocupados. Los piqueteros, además, rechazaron el salario ignominioso del convenio de la Uocra (0,95 pesos la hora), y lograron imponer un salario horario de 2,50 pesos más un viático: más del doble de la cifra original. En ambos casos se arrancaron contratos por dos meses, cuya reposición planteó nuevas movilizaciones.

La resolución aprobada¹⁸⁵ resume esta experiencia de lucha. Denuncia el carácter hambreador y entreguista del régimen político actual y su política frente al proceso de rebelión popular. En este sentido, caracteriza a las multisectoriales, los comités de emergencia y mesas de concertación, como mecanismos para someter a las organizaciones de lucha. En oposición a esta encerrona política, el Congreso votó la necesidad de construir organizaciones independientes del Estado. La resolución denunció la política de soborno y compra de dirigentes y la Asamblea votó la expulsión de todo dirigente que traicione a los trabajadores.

Se resolvió que la Coordinadora de Trabajadores y Desocupados del Departamento San Martín funcionara en base a asambleas soberanas y de representantes mandatados y revocables; habría elección de delegados de base en los barrios, un padrón único de desocupados y el control de las organizaciones de lucha de todas las concesiones que se obtuvieran, para evitar que los intendentes, los punteros del gobierno o la Iglesia pudieran valerse de los bolsones y 'planes Trabajar' para generar divisiones y manipular compañeros.

El punto que llevó más tiempo y generó más intervenciones fue el del programa de reivindicaciones. Allí se aprobó el reclamo de un salario mínimo de 600 pesos ó 3 pesos la hora, y el control por parte de la Coordinadora del acceso a los puestos en todas las empresas. La resolución reclamó el tercer turno en las petroleras y el reparto de las horas de trabajo en todas las empresas.

El Congreso recogió el pliego de 21 puntos levantado en el corte de ruta de noviembre, donde se destacaba el reclamo de un fondo de 200 millones de dólares anuales impuesto a las petroleras en concepto de reparación histórica. Estos reclamos estaban concebidos como parte de la lucha por la reestatización de YPF bajo control de los trabajadores y para impulsar un plan de industrialización de los recursos petroleros y gasíferos, bajo control de los trabajadores.

El planteo de subsidios a las Pyme fue rechazado.

También el programa esbozó una estrategia orientada a poner en pie una salida política de los explotados al llamar a poner en pie Asambleas Populares en oposición a los gobiernos patronales.

El Congreso de los piqueteros salteños, finalmente, planteó la necesidad de una deliberación nacional común de los piqueteros mediante la realización de un Congreso Nacional de Desocupados. Retomó el planteo formulado por los desocupados neuquinos en su Congreso; pero lo que en mayo de 1996 era, todavía, un planteo de características generales, se había convertido, en diciembre de 2000 y como consecuencia del desarrollo del movimiento piquetero, no sólo en una consigna práctica inmediata sino, por sobre todo, en una necesidad.

Por primera vez, una organización de desocupados producía una delimitación programática tan tajante de los partidos y los gobiernos responsables de la miseria y el saqueo, que la convertirían, objetivamente, en la vanguardia política de todo el movimiento piquetero.

181. Del Plá, Claudio, “Congreso de Trabajadores y Desocupados del Norte de Salta: Balance de una extraordinaria reunión obrera”, en Prensa Obrera, 13 de diciembre de 2000.

182. Idem anterior.

183. Idem anterior.

184. Idem anterior.

185. Ver anexo “Documentos del Movimiento Piquetero”.

Provocaciones de Storani

Desde sus mismos inicios, el movimiento piquetero debió enfrentar la represión y la persecución estatal. La represión salvaje de los cortes y las puebladas costó la vida a casi una decena de compañeros en apenas cinco años. Pero paralelamente a esta represión de características 'espectaculares', hubo otra represión, más silenciosa, más 'burocrática' pero no menos sistemática: cientos y cientos de compañeros –desocupados, delegados de fábrica, dirigentes sindicales– fueron acusados judicialmente y sometidos a proceso en todo el país, bajo las más diversas acusaciones, desde "obstrucción del tránsito" y "daño a la propiedad" hasta "tenencia de armas de guerra", "coacción" y "sedición".

A comienzos de 1996, había trescientos compañeros procesados penalmente; ese número creció –a una tasa superior al 50% anual– hasta alcanzar la cifra de 2.800 procesados cuando se reunió la Ira Asamblea Piquetera Nacional. Muchos de los compañeros procesados debieron esperar la realización de su juicio en las condiciones de detención más penosas, como Panario y Christiansen en Neuquén, Raúl Castells en el Gran Buenos Aires o Emilio Alí, en Mar del Plata.

Con el salto del movimiento piquetero a partir de la pueblada de Tartagal en mayo del 2000 y los cortes en todo el país de octubre/noviembre de ese año, llegó una nueva ofensiva represiva del Estado, esta vez lanzada desde su propia cabeza política, el ministerio del Interior, en manos del 'progresista' Federico Storani.

A mediados de diciembre, se realizó un extraordinario plenario nacional del Polo Obrero en la sede de Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa). Participaron delegaciones sindicales como la CGT de San Lorenzo, la CTA de Santa Cruz (que poco antes había sido conquistada por el clasismo), Adosac (docentes de Santa Cruz), de la Lista Naranja gráfica, delegados del sindicato de la Alimentación, metalúrgicos, telefónicos, bancarios y de camioneros. Participaron también organizaciones de desocupados de todo el país y, en particular, una delegación del Congreso de Piqueteros del norte de Salta. Sus deliberaciones fueron públicas; el plenario fue profusamente publicitado con anterioridad y sus conclusiones fueron dadas a conocer a todo el movimiento obrero.¹⁸⁶

El plenario hizo suyas las conclusiones adoptadas dos semanas antes por el Congreso de Salta: el reclamo de un salario de 600 pesos por una jornada de ocho horas; un seguro al desocupado por 500 pesos; el reparto a escala nacional de las horas de trabajo disponibles; la ruptura con el FMI y el cese del pago de la deuda externa. Se planteó, asimismo, la necesidad de que las centrales sindicales profundizaran la huelga del 23 y 24 de noviembre de 2000 con un paro de 72 horas y con la organización de una huelga general indefinida hasta la satisfacción de las elementales reivindicaciones de los trabajadores. Se resolvió también impulsar un Congreso Nacional de Trabajadores, ocupados y desocupados, o sea un Congreso de Piqueteros, con el objetivo de presentar al país un programa y una política de conjunto como alternativa al programa y a la política de los partidos patronales que están hundiendo social y económicamente al país.

A pesar de la amplia publicidad previa y posterior del plenario del Polo Obrero, el 'progresista' Storani sacó a la luz un "informe de inteligencia" –caratulado "cónclave de piqueteros"– para advertir que ante "la conspiración" en marcha, "el gobierno reprimirá por la vía de la justicia".¹⁸⁷ La mención del ministro a "la justicia" pretendía hacer olvidar el asesinato de los piqueteros correntinos y de Aníbal Verón por parte de la Gendarmería, que estaba bajo su mando directo. Según el mencionado "informe", el plenario había tenido la rara capacidad de "concertar" luchas anteriores y posteriores a su realización, respuestas a despidos que hasta entonces no se habían producido y hasta reclamos a los supermercados, que no formaban parte de la estrategia del Polo Obrero. La ensalada, típica de los servicios, servía para justificar la represión contra cualquier lucha obrera.

En realidad, como denunció Jorge Altamira, “lo realmente conspirativo acerca de esta reunión pública y abierta es la revelación de que fue espiada por los servicios de inteligencia que maneja el ministro Storani, en una clara violación a las disposiciones legales que prohíben el espionaje político interno. Esto significa que en lugar de asegurar la tranquilidad pública, el ministerio de Storani es una usina conspirativa dedicada a perturbarla con provocaciones políticas”.¹⁸⁸

Las ‘advertencias’ de Storani fueron inmediatamente seguidas de una escalada represiva contra los piqueteros. En Salta fue detenido el piquetero Sebastián Cabral, un anticipo de las detenciones que luego vendrían contra los piqueteros Barraza, Raineri y Gil. La detención fue combatida con la movilización piquetera. “Los compañeros de la UTD de Mosconi bloquearon el acceso a la empresa Astra Evangelista donde trabajaba Cabral; los casi 300 obreros que trabajan allí pararon y salieron a reforzar el corte. Con esta medida lograron imponer que la empresa garantizara el sueldo del compañero, mientras durase la detención, reservándole el puesto. En Tartagal se logró parar algunos sectores del ‘plan Trabajar’, que se apostaron al costado de la ruta en el acceso de la ciudad, sumándose también el sector de los desocupados de Sísmica, incorporados a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados de Tartagal”.¹⁸⁹ La dirección piquetera estaba actuando como una dirección de conjunto de los explotados del norte salteño.

Como parte de esta ofensiva represiva contra los piqueteros, el gobierno salteño pidió en marzo la instalación de los ‘rangers’ norteamericanos en el norte de la provincia, con la excusa de “combatir al narcotráfico”. Para tal propósito, habría bastado que el gobernador y su gabinete se presentaran detenidos en los tribunales. Mientras tanto, Tartagal y Mosconi eran virtualmente militarizadas, con la duplicación de los efectivos de la Gendarmería destacados en esas ciudades. En septiembre de 2001 se realizó en Salta el llamado “operativo Cabañas 2001”, con la presencia de tropas norteamericanas y de otros países latinoamericanos cuya “hipótesis de conflicto” no era otra que “una situación insurreccional en Argentina”.¹⁹⁰

La salvaje represión contra la pueblada salteña de junio, que dejó tres piqueteros muertos, la condena impuesta al piquetero marplatense Emilio Alí, las detenciones de Barraza, Gil, Raineri y de casi un centenar de piqueteros en todo el país entre los meses de mayo y julio serían la expresión “concreta” de las amenazas que lanzó Storani en diciembre.

186. Ver anexo “Documentos del Movimiento Piquetero”.

187. Clarín, 28 de diciembre de 2000.

188. Altamira, Jorge, “El ministro Storani está montando una provocación contra los trabajadores”, en Prensa Obrera, 11 de enero de 2001.

189. Barraza, José, “Tartagal-Mosconi: Por la libertad del piquetero Sebastián Cabral”, en Prensa Obrera, 25 de enero de 2001.

190. La República, Montevideo, 20 de septiembre de 2001.

La Matanza: crisis política en el movimiento piquetero

A comienzos del 2001, el Ministerio de Trabajo aliancista lanzó una ofensiva contra el movimiento piquetero de La Matanza: el frepasista Viqueira anunció el “reempadronamiento” de los 8.400 ‘planes Trabajar’ del distrito, con lo que se intentaba golpear a las organizaciones de desocupados, reducir el número de ‘planes’ y poner la distribución de los que quedaran en manos de los punteros peronistas y aliancistas. Junto con esto, el mismo ministerio abrió causas penales contra Luis D’Elía, dirigente de la FTV y concejal de la Matanza, bajo la acusación de “extorsión” y “asociación ilícita”. De la operación política participaba plenamente la fuerza política a la que pertenecía D’Elía, el Frepaso, que exigió su expulsión.

El ataque hizo estallar el Consejo de Emergencia, en el que participaban la FTV y la CCC, ya que el intendente Balestrini, la Alianza, el PJ, el obispo y hasta el propio Frepaso apoyaron la exigencia del “reempadronamiento”, que apuntaba directamente contra la CCC y el FTV. En realidad, el Consejo de Emergencia había fracasado antes de esta ofensiva. No sólo no había podido dar ninguna solución a los problemas de los desocupados del distrito sino que, tampoco, había logrado actuar como ‘contención’ a la movilización de los desocupados. Constantemente estaban surgiendo, nuevos reclamos y nuevas organizaciones de desocupados que no estaban encuadrados en el Consejo de Emergencia.

El caso más expresivo es el del Futrade (Frente Unico de Desocupados), integrante del Polo Obrero, que agrupaba comisiones de los barrios La Loma, Don Juan, San Cayetano y Villa Carmen. El Futrade surgió delimitándose de la política de la CCC y la FTV en dos puntos esenciales: su rechazo a la integración de los desocupados en el Consejo de Emergencia y su rechazo a circunscribir el programa de reivindicaciones a los ‘planes’ y los bolsones de alimentos.¹⁹¹ “Desde el inicio de su organización, primero como comisión de mujeres y luego de desocupados, en cada barrio se levantó un programa de salida a la crisis, que supera el reparto de bolsones de alimentos y los ‘planes Trabajar’. Se hicieron importantes debates sobre la necesidad de reclamar un subsidio de 500 pesos para todos los desocupados y el reparto de las horas de trabajo. Se ha discutido la necesidad de unificar la lucha de los desocupados con los trabajadores ocupados”.¹⁹²

Cuando estalló la crisis del “reempadronamiento”, el Futrade acababa de realizar una exitosa “permanencia” en la plaza de San Justo, que había comenzado el 22 de diciembre, en cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el plenario del Polo Obrero del 16 de diciembre. Luego de 15 días de lucha, además de un conjunto de reivindicaciones, el Futrade logró “el reconocimiento de las comisiones de estos barrios como comisiones de desocupados independientes, y su derecho a exigir en forma directa a las autoridades políticas del distrito”.¹⁹³

Para responder a los ataques del gobierno, la CCC y la FTV convocaron el 12 de febrero a un corte en La Matanza, que se inició con 6.000 compañeros. Se exigían 10.000 ‘planes’, el cumplimiento de los compromisos anteriores y el rechazo del “reempadronamiento”. El corte tenía un carácter contradictorio. Empezó con una concurrencia mayor de desocupados que el corte de noviembre, expresión del desarrollo de las organizaciones y del agravamiento de la situación. Pero su dirección parecía querer ponerle límites al movimiento: no se decidió el corte en la ruta 3, en el lugar histórico de los cortes, ni en el puente del kilómetro 29. La decisión final de cortar la ruta provincial 4 (menos transitada) fue muy resistida porque “si no se corta en un punto más neurálgico, significa que hay un retroceso político”.¹⁹⁴

Pasados seis días, el corte enfrentaba una crisis política. Los gobiernos nacional y provincial se negaban a negociar y el Ministerio de Trabajo ratificaba el “reempadronamiento”. Se realizó una asamblea en el corte que votó una marcha al ministerio de Trabajo como un intento de romper la impasse. La CCC y la FTV rechazaron en esa asamblea las propuestas del Futrade y

del Polo Obrero de reclamar a las centrales sindicales un inmediato paro general y de convocar a un plenario de representantes de todos los cortes y movimientos de lucha para ‘ocupar’ el centro de la Capital en función de un reclamo y un comando común. Incluso los propios planteos de la CCC de ‘acampar’ en el Ministerio de Trabajo hasta obtener las reivindicaciones fueron abandonados en el transcurso de la marcha.

La marcha al Ministerio fue numerosa pero políticamente resultó un fracaso. La Bullrich no concedió un solo reclamo y el movimiento sufrió el golpe. Una compañera de base de Laferrere mostraba la sensación de derrota: “Siempre ganábamos y ahora no, lo que hizo más duro el golpe”.¹⁹⁵ Luis D’Elía, de la FTV, sintetizó el fracaso en pocas palabras: “No arribamos a nada y nos han humillado”.¹⁹⁶

Las organizaciones de desocupados chocaron esta vez contra un pacto político del gobierno de la Alianza y los gobernadores del PJ contra los piqueteros, enderezado a quebrar un movimiento de lucha en ascenso y el surgimiento de una dirección obrera de alcance nacional. Es decir, que las direcciones piqueteras de La Matanza tuvieron que enfrentarse al régimen político con el que las centrales sindicales ‘alternativas’ –a las que la FTV y la CCC tenían como ‘referentes’– habían establecido una tregua que no fue conmovida ni por el corte de La Matanza, ni por los cortes en Salta, Florencio Varela, o los despidos masivos en Alpargatas y en las automotrices. “De conjunto, la política de adaptación a la tregua de las centrales sindicales enchalecó la conducta de las organizaciones de mayor peso en la movilización. Vale para la FTV, parte orgánica de la CTA, pero también para la CCC, cuya ‘unidad popular’ consiste en el reflowtamiento de la fracasada ‘Mesa de Enlace’, es decir el frente único con las burocracias ‘alternativas’”.¹⁹⁷ El movimiento piquetero de La Matanza enfrentaba una seria crisis política.

La misma crisis enfrentó la dirección del MTD de Varela, cuando se vio obligado a levantar el corte de Bosques, después de 12 días sin haber obtenido casi nada. El corte comenzó con mil compañeros, con un ánimo muy combativo, pero se encontró de inmediato con el mismo ‘pacto político’ con que chocaron los desocupados de La Matanza. A la cabeza del ataque se encontraban, también aquí, los funcionarios frepasistas del Ministerio de Acción Social.

Frente al golpe sufrido, la FTV de La Matanza convocó a un encuentro de organizaciones de desocupados en La Matanza para principios de marzo, al que presentaba como “un intento de reordenarse y volver con cortes y protestas múltiples y simultáneas”. Aunque se circunscribía a las organizaciones del conurbano, el llamado de la FTV recogía la iniciativa planteada por el Congreso del norte de Salta y por el plenario del Polo Obrero de diciembre.

El Polo Obrero concurrió a ese plenario, donde planteó la necesidad de acciones comunes en cada distrito para quebrar el “reempadronamiento” y la “convocatoria a un Congreso Nacional de Piqueteros y representantes de la clase obrera, que puede convertirse en la referencia nacional de todo el movimiento de lucha existente en el país”, la organización de una marcha a Plaza de Mayo y la discusión de un programa de conjunto porque “el horizonte de la clase obrera no puede ser el ‘plan Trabajar’ o un bolso alimentario, sino exigir trabajo o subsidio de 500 pesos, un salario mínimo de 600, la recuperación del 82% móvil para los jubilados, la derogación de la reforma laboral, la jornada de ocho horas, la eliminación de los impuestos al consumo y la concentración de la carga impositiva en las ganancias y lucros de los grandes capitalistas”.¹⁹⁸

El planteo de un Congreso Nacional de piqueteros fue rechazado en esa asamblea, tanto por la CCC como por la FTV, que lo consideraron “prematureo”. El Congreso Nacional de Piqueteros ‘estaba en el aire’ pero todavía debían ocurrir nuevas luchas y nuevas crisis para que se lo convocara efectivamente.

191. Ver anexo Documentos.

192. Villalba, José, “Triunfo de los desocupados en la Plaza de San Justo”, en Prensa Obrera, 11 de enero de 2001.

193. Idem anterior.

194. Villalba, José, "Por qué no se cortó la ruta 3", en Prensa Obrera, 22 de febrero de 2001.

195. Crónica, 22 de febrero de 2001

196. Idem anterior.

197. Rath, Christian, "El movimiento de lucha ante una nueva etapa", en Prensa Obrera, 9 de marzo de 2001.

198. Idem anterior.

Los piqueteros de la Capital

El movimiento piquetero presentaba, a comienzos del 2001, lo que puede calificarse como una ‘anomalía’. Se había extendido por todo el país, había protagonizado puebladas impresionantes y, sin embargo, estaba prácticamente ausente en la Ciudad de Buenos Aires, el centro político del país.

No es que no hubiera reivindicaciones por las cuales luchar: el desempleo en las barriadas obreras y en las villas y asentamientos superaba el promedio nacional. En un distrito como la Ciudad de Buenos Aires, donde campea la especulación inmobiliaria, la desocupación y los salarios de miseria significan la imposibilidad de acceder a la vivienda y el desalojo. El problema de la desocupación se presentaba en la Ciudad de Buenos Aires indisolublemente ligado a la cuestión del techo y de la lucha contra los desalojos.

El PO, que había conquistado una banca en la Legislatura de Buenos Aires a mediados de 2000, intervino en los conflictos por la vivienda que se planteaban en todos los barrios, contra los desalojos y contra la represión; puso a la discusión pública la cuestión del salario presentando un proyecto de salario mínimo de 600 pesos. A través de esa intervención, se fue diferenciando una vanguardia piquetera en los movimientos de lucha de la Capital. La primera manifestación de los piqueteros de la Capital fue el paro de 36 horas de fines de noviembre de 2000.

La intervención del Partido Obrero es un ejemplo de utilización revolucionaria de la tribuna parlamentaria. “El objetivo principal que hemos tenido, desde que ingresamos a la Legislatura, fue valernos de esa posición para hacerla un instrumento de organización de los trabajadores, desocupados y desalojados, víctimas de la política capitalista dentro de la ciudad. (...) Toda esa lucha nos ha servido para organizarnos y transformarnos en una fuerza que se tiene que hacer valer. No es una banca lo que vale para derrotar los planes (del gobierno): lo que vale es la movilización y la organización. Al servicio de ella pusimos nuestra condición de diputado”.¹⁹⁹

En Almagro y en Bajo Flores nacen comisiones de desocupados; se multiplican los agrupamientos independientes de lucha por la vivienda, como en la Villa 1-11-14, o la Villa 31. La organización crece. En abril de 2001, el Polo Obrero de la Capital y la banca del PO en la Legislatura convocan a un Congreso de Trabajadores Desocupados y Sin Techo, en el que participan organizaciones de desalojados y de desocupados, delegados de villas y asentamientos, trabajadores docentes, municipales y de la salud.

“El bloque legislativo del PO trabajó activamente por este congreso. Muchas de las reivindicaciones y propuestas de organización planteadas el 21 tuvieron como impulsora y orientadora a la banca del Partido Obrero: desde la ley de salario mínimo a la lucha contra los desalojos, pasando por la investigación de las obras públicas ‘truchas’ en Belgrano. Así concibe el Partido Obrero a la acción parlamentaria: como un factor de organización y centralización política de las luchas de los explotados. Pero la fusión entre la bancada obrera y los piqueteros dice mucho, también, del rumbo y las enormes perspectivas del movimiento de lucha que estamos poniendo en pie: rechazamos la pretensión de diluir a los piqueteros en el apoliticismo, en la lucha sin programa y sin perspectiva. En cambio, luchamos abiertamente para que el movimiento piquetero abrace un programa de salida y una organización propia, es decir, un partido”.²⁰⁰

El Congreso votó una plataforma de reivindicaciones²⁰¹ y una serie de medidas de movilización en apoyo de las luchas en desarrollo –de los trabajadores gráficos de Agropa y Recali que ocupaban la planta contra los despidos; de los vecinos del Padelai y contra los desalojos en San Telmo y La Boca– y una marcha piquetera al Ministerio de Trabajo y a la Casa de Gobierno de la Ciudad el 29 de mayo.

Ese día, dos mil piqueteros de los barrios capitalinos, respaldados por compañeros de las organizaciones de desocupados del Polo Obrero de La Matanza, Tigre, San Fernando, Berazategui y Berisso, cortaron durante horas Paseo Colón y luego la Avenida de Mayo. Había nacido, oficialmente, el movimiento piquetero de la Capital.

199. Altamira, Jorge, intervención en el Congreso Piquetero de la Capital, en Prensa Obrera, 26 de abril de 2001.

200. Ramal, Marcelo, “Una lucha sin fronteras”, en Prensa Obrera, 26 de abril de 2001.

201. Ver anexo.

La necesidad de una política de conjunto

Luego de la derrota del corte y de la marcha al Ministerio de Trabajo de febrero, el gobierno profundizó su ataque contra las organizaciones de desocupados de La Matanza: en febrero, marzo y abril incumplió el pago de 2.800 'planes', no cumplió los compromisos establecidos en el corte de noviembre y hasta lanzó inspectores para verificar que las cuadrillas estuvieran trabajando, con el objeto de retirar los 'planes' de los que no lo hicieran (ocultando el hecho de que muchas de las cuadrillas no podían trabajar porque los gobiernos, en todos sus niveles, no les habían provisto las herramientas necesarias). A la cabeza del ataque estaban la ministra Bullrich y el frepasista Viqueira.

Frente a estos ataques, en mayo de 2001, las organizaciones de desocupados de La Matanza volvieron a cortar la ruta en Isidro Casanova. Los desocupados participaron masivamente, ocupando seis cuadras de la ruta. El corte era muy popular entre los vecinos y los trabajadores.

Lo que estaba en juego en el corte era mucho, y por las dos partes.

Para el gobierno, estaba en juego la política de recortar los 'planes Trabajar' y ponerlos bajo su absoluto control para golpear a las organizaciones de desocupados y recomponer su alicaído aparato de punteros. Para el gobierno estaba en juego, además, la suerte del recientemente firmado 'megacanje' porque sólo derrotando a los desocupados y a los trabajadores sería posible pagar las tasas usurarias del 15% anual que establecía y darle un 'respiro' al recién designado Cavallo.

Para los piqueteros se jugaba la posibilidad de imponer los convenios firmados en el corte de noviembre, que ampliaban los 'planes Trabajar' y extendían su radio de acción a la refacción de caminos, escuelas y hospitales, y que reconocían la autoridad de las organizaciones de desocupados. Una victoria del corte abría la posibilidad de superar los 'planes Trabajar' por verdaderos empleos estables, con salarios no inferiores a 600 pesos por ocho horas de trabajo, derecho a la jubilación y seguridad social, e incluso llegar a imponer a los capitalistas el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios. Además, el corte de La Matanza había sido precedido por muy importantes victorias obreras en luchas fundamentales como la de la cerámica Zanón en Neuquén, la de los municipales de Capitán Bermúdez y la de los mineros del carbón de Río Turbio. Mientras se cortaban las rutas en La Matanza, los trabajadores de Aerolíneas estaban en lucha contra la quiebra de la compañía –¡con métodos piqueteros, como los cortes en Ezeiza y la ocupación de las pistas!– y los trabajadores de Luz y Fuerza Córdoba batallaban contra la privatización de la empresa provincial de energía. Una victoria decisiva en La Matanza potenciaría estas luchas y sería un golpe definitivo a la 'tregua' que habían establecido todas las centrales sindicales con el gobierno de la Alianza y su 'nuevo' ministro de Economía, Cavallo.

La ministra de Trabajo respondió con una provocación a los reclamos: sólo abriría la posibilidad de una negociación si, previamente, se levantaba el corte; en otras palabras, exigía la rendición incondicional. La provocación produjo un efecto inverso: luego de un corto primer momento de desazón en algunos asentamientos, se impuso la decisión de prepararse para un corte "largo" y se acentuó la movilización en los barrios. Los ánimos se radicalizaron (en algunos barrios comenzó a discutirse un plan de cortes 'relámpago') y el apoyo popular crecía.

El gobierno no cedía y apostaba al desgaste. Era una política sin futuro porque significaba postergar una explosión inevitable... al costo de hacerla más aguda. En algunos sectores del gobierno (Mestre-Mathov) se discutía abiertamente la instalación de la Gendarmería en el Gran Buenos Aires y la instauración del Estado de Sitio.

El corte y el destino de las organizaciones de desocupados de La Matanza se acercaban a momentos decisivos. La burocracia sindical hizo jugar todo su peso para aislar el corte e impedir que la corriente de solidaridad que se manifestaba en las fábricas y los talleres se expresara en

un apoyo concreto: las direcciones sindicales de La Matanza no convocaron ni siquiera a una mínima jornada de movilización en apoyo a los piqueteros. La excepción fue el Suteba de La Matanza, que llamó a defender el corte, lo incorporó a su propio plan de lucha y organizó la solidaridad efectiva, incluso a pesar de haber sido proscripta por la FTV (CTA), ante el silencio de la CCC. El ataque de estas organizaciones se produjo porque la dirección del sindicato docente, en una actitud ejemplar, había expulsado de sus filas a un ‘protegido’ de la FTV que se quedó con ‘planes Trabajar’ al mejor estilo Franja Morada.

Los problemas políticos que se habían planteado en el corte de febrero volvían a plantearse en mayo pero a una escala mayor. El gobierno aliancista, agobiado por la perspectiva cierta de la cesación de pagos, estaba obligado a golpear con una fuerza inusitada a los trabajadores y a los desocupados. Los gobernadores e intendentes del PJ hacían causa común con el gobierno en nombre de la ‘gobernabilidad’ y de las ‘expectativas’ en Cavallo. La burocracia de los sindicatos mantenía a rajatablas su tregua con el gobierno.

La necesidad de una orientación común

En estas condiciones, se manifestaron orientaciones divergentes en las direcciones piqueteras. Luis D’Elía, de la FTV-CTA, planteó concentrar al movimiento piquetero de todo el país en La Matanza. La propuesta de D’Elía, señalaba en ese momento José Villalba, del Futrade, “no ha tenido eco entre los compañeros; no cayó bien esta idea de concentrar todas las fuerzas aquí, y no ven correcto que si en Moreno o en Varela están luchando también con reivindicaciones propias, abandonen sus frentes de lucha para venir a concentrarse en La Matanza. No se ve esto como una salida o como una alternativa a una marcha de conjunto”.²⁰²

Al mismo tiempo, Raúl Castells –con el apoyo de la CCC de la Zona Sur del Gran Buenos Aires– iniciaba una marcha de desocupados desde Berisso a Plaza de Mayo, que congregaba a miles de compañeros (entre los cuales se destacaron importantes columnas de los desocupados del Polo Obrero).

“Ambos planteos –señalaba el Partido Obrero en un editorial de su prensa– tienen en común el propósito de superar el aislamiento del corte de La Matanza, pero son evidentemente contradictorios y se anulan recíprocamente. Aún más contradictorio resulta el hecho de que hace sólo un mes, en una asamblea general en La Matanza, tanto la CTA como la CCC caracterizaron negativamente como una ‘política del todo o nada’, la propuesta del Polo Obrero y del Futrade de La Matanza, de realizar un Congreso nacional de piqueteros para concentrar fuerzas y organizar una marcha nacional a Plaza de Mayo. Por otro lado, ni el planteo de concentrar fuerzas en la ruta 3, ni la marcha desde Berisso fueron debatidos previamente por las organizaciones de desocupados de las diferentes zonas del Gran Buenos Aires, es decir que tampoco se han tenido en cuenta las condiciones en que desarrolla su lucha cada región o movimiento. Hay que señalar que está en marcha también la campaña por la movilización a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, organizada por el Polo Obrero, que ocupará los alrededores de la Plaza de Mayo el próximo 29 de mayo. (...) Además del método y de la unidad de la lucha, se plantea también una cuestión política. Castells ha dicho que el objetivo de su marcha es cubrir la Plaza de Mayo con 10.000 manifestantes, para realizar ‘un 17 de octubre’. La CTA de La Matanza, por su lado, se propone llegar a un acuerdo circunscripto a las reivindicaciones matanceras, con el apoyo del Frente para el Cambio de Alicia Castro y del Polo Social de Farinello. Castells hace un planteo de poder, pero de características ambiguas; la organización de D’Elia apoya una perspectiva electoral, que tiene vínculos con la ‘izquierda’ del gobierno, de un lado, y con Duhalde, del otro. Estos planteamientos, sin embargo, ponen de manifiesto que las organizaciones de desocupados necesitan contar con un planteo político propio, pero las posiciones de sus dirigentes no han sido discutidas en ningún lado”.²⁰³

La cuestión del Congreso nacional de piqueteros se había convertido ahora en una necesidad objetiva e impostergable para el movimiento piquetero. El agravamiento de la crisis política, económica y social de conjunto, los ataques concertados de los gobiernos nacionales y provincia-

les, y el propio desarrollo de las organizaciones piqueteras –que hacían a sus direcciones responsables ante decenas y hasta cientos de miles de compañeros organizados– hacían inviable la política de los cortes aislados y de ‘cada uno por su lado’ que había prevalecido hasta entonces. Era necesaria una política de conjunto y una acción de conjunto, lo que significaba la necesidad de prepararlas mediante una deliberación también de conjunto.

El corte de La Matanza se extendió durante 17 días; el gobierno no pudo quebrarlo ni con amenazas ni con el desgaste. Debió aceptar la renovación de 7.500 de los 8.400 ‘planes’ obtenidos en el corte de noviembre y pagar las asignaciones adeudadas; se comprometió también a asignar los recursos para la refacción de escuelas y calles.

El gobierno dio un paso atrás de su objetivo inicial de quebrar el corte pero, en su retroceso, logró una victoria política: la asignación de los ‘planes’ quedaba en manos del viejo Comité de Emergencia que había naufragado en febrero, ahora rebautizado “Comité de Crisis”.

El acuerdo fue votado en asamblea pero una fracción significativa de los desocupados se abstuvo, expresando sus desacuerdos y dudas con lo pactado. Nuevamente, José Villalba: “Nosotros planteamos cuatro críticas a este acuerdo. Primero: la defensa de los 8.400 planes nacionales, un objetivo que suponía exigir tan sólo el cumplimiento de lo pactado en octubre, con una desocupación que, seis meses después, es superior; segundo: aunque parezca un hecho menor, la entrega en cuotas y hasta fin de año de las herramientas es un paso atrás, porque las cuadrillas siguen sin elementos y están expuestas a las provocaciones por no trabajar; tercero: no hemos avanzado en la libertad de Emilio Alí; cuarto: el Comité de Crisis (antes Consejo de Emergencia) es una organización que aunque lo quisieran algunos de sus miembros, no puede representar el interés de los trabajadores desocupados. Esto desde el momento en que integra a representantes del mundo empresarial y de otros intereses. Por eso reclamamos la constitución de una Mesa de Organizaciones de Desocupados, sin exclusión alguna, que lleve sus reclamos en común ante el Comité de Crisis o quien sea”.²⁰⁴

Incluso para los propios firmantes estaba en claro que el acuerdo era extremadamente transitorio y precario: la mayoría del Consejo de Emergencia se había plegado en febrero a la política oficial de “reempadronamiento” y al ataque a las organizaciones de desocupados. Esta política no había cambiado y el propio Ruckauf y sus intendentes se comprometieron en mayo a “reempadronar” a todos los beneficiarios de ‘planes’ nacionales en la provincia.²⁰⁵

A un enorme costo, se había conseguido tan sólo una tregua.

202. Villalba, José, “Hagamos un plenario nacional en el corte”, en Prensa Obrera, 17 de mayo de 2001.

203. Ortiz, José, “Cortes de ruta: necesitamos una orientación común”, en Prensa Obrera, 17 de mayo de 2001.

204. Villalba, José, “El Comité de Crisis no nos puede representar”, en Prensa Obrera, 31 de mayo de 2001.

205. Clarín, 21 de mayo de 2001.

Tartagal-Mosconi: el único gobierno representativo es el de los piqueteros

Una dirección política de los explotados, desocupados y ocupados

Después del Congreso departamental de diciembre de 2000, el movimiento piquetero del Departamento de San Martín pegó el salto que anunciaban sus deliberaciones, sus conclusiones políticas y el programa votado.

A partir de febrero, comenzó una serie de cortes en los accesos de Refinor (Pérez Companc), Tecpetrol (Techint) y otras petroleras exigiendo la incorporación de compañeros propuestos por la Coordinadora, con un salario mínimo para la categoría de ayudante de 2,50 pesos la hora, es decir unos 600 pesos por mes. El básico de convenio de la Uocra (que es el que pagan las petroleras) es de 0,98 pesos la hora. La UTD de Mosconi adoptó la modalidad de cortar los accesos a las zonas de explotación petrolera. La presión, piquetes mediante, sobre las petroleras privadas había comenzado después del corte de mayo del 2000; al momento de realizarse el Congreso, se contabilizaban varios centenares de compañeros ya incorporados. Con el corte sobre Refinor y Tecpetrol se profundizaba esta política.²⁰⁶

Antes de finalizar el corte, dos empresas, Panamerican y Pluspetrol, se avinieron a pagar 2,50 pesos la hora en todas las obras y servicios del área petrolera y aceptaron tomar 400 trabajadores en una obra en la que pensaban tomar sólo 150. La lucha se extendió por 23 días, con dos piquetes en la destilería de Campo Durán y tres piquetes solidarios en Mosconi.

Un día antes de su levantamiento, se había planteado una situación límite. Ante el despliegue de la Gendarmería, que dividió los cortes y las localidades, el piquete en Campo Durán colocó camiones cisterna rociados con combustible con la amenaza de meterlos en la destilería en caso de represión. En esos momentos, se movilizaron para defender a los piqueteros más de doscientos trabajadores de otra petrolera, Astra Evangelista; en un corte victorioso anterior, la Coordinadora había logrado arrancar el mínimo de 2,50 pesos horarios para los trabajadores de esa empresa. Estos compañeros hicieron vacilar a la represión, pero a la vez propusieron levantar el corte a cambio de una negociación con las empresas. Se arrancaron 28 puestos de trabajo efectivo y la promesa de las empresas de ocupar 600 trabajadores del padrón presentado por la Coordinadora, para las obras de dos gasoductos.

En los hechos, la Coordinadora había quebrado el miserable convenio de la Uocra y estaba empezando a imponer, a puro corte y piquete, lo que en el norte salteño se conoce como “el convenio del piquetero”.

A principios de abril, se realizó el II Congreso Departamental de la Coordinadora, con la presencia de 180 delegados de Tartagal, Mosconi, Aguaray, Embarcación y Pocitos. El Congreso denunció la “tregua” establecida por las direcciones sindicales con Cavallo a pesar de que por todo el país arreciaban las luchas y los reclamos obreros (“Los piqueteros no votamos la tregua” declaraba su convocatoria) y volvió a formular un llamado a todas las organizaciones piqueteras a organizar en común un Congreso Nacional de piqueteros.

El Congreso fue un salto político porque el “plan de acción” votado ponía en evidencia que la Coordinadora se estaba convirtiendo en una dirección del conjunto de los explotados del norte de Salta, ocupados y desocupados.

Se votó reclamar una jornada laboral de ocho horas en todas las petroleras y contratistas, contra las 12 que se trabajaban habitualmente, para posibilitar el ingreso de compañeros desocupados a puestos de trabajo efectivos; un salario mínimo de 2,50 pesos por hora ó 600 pesos por mes, una reivindicación que ya había sido arrancada en varias empresas; la defensa y extensión de los ‘planes de empleo’ a todos los desocupados para hacerse cargo de obras públicas en cada localidad. “La Coordinadora presentará estos reclamos ante cada uno de los municipios y organizará un plan de cortes de ruta en cada uno de ellos. La Coordinadora llama a una jornada

da de paros y movilizaciones en apoyo a estos reclamos para el 13 de mayo, Día del Piquetero”.²⁰⁷

Se votó realizar un acto contra la persecución a los piqueteros y un acto obrero independiente el 1º de Mayo, en el lugar en que fue asesinado Verón.

Una resolución especial reclamaba la recuperación de los sindicatos y la expulsión de la burocracia, por la independencia obrera para todas las organizaciones de la región. Poco antes del Congreso, las organizaciones de desocupados del norte de Salta habían logrado destituir al burócrata de la Uocra local y elegir una comisión de cinco compañeros; la Coordinadora había tomado en sus manos la organización de los trabajadores de la construcción. También, un grueso piquete de 300 compañeros de la Coordinadora marchó a la sede del sindicato de petroleros privados para exigir la renuncia de su dirección, que había aceptado salarios por debajo del convenio; en noviembre de 2000, frente a la amenaza de desalojo de los cesanteados de la empresa de energía (Edesa) otros grandes piquetes de Tartagal y Mosconi habían concurrido a defender a los compañeros.

La Coordinadora Departamental organizaba a los desocupados, a los obreros de la construcción, a los petroleros, defendía a los trabajadores de la empresa de energía, le imponía a las empresas la contratación de trabajadores y un salario muy por encima de los salarios de convenios firmados por la burocracia. Hasta impugnó la interna del PJ de Tartagal. Se había convertido en una dirección del conjunto del movimiento de masas y en un auténtico factor de poder en el departamento de San Martín, algo que fue reconocido por el enemigo jurado de los piqueteros, el gobernador Romero. “Los dirigentes políticos están borrados por los dirigentes piqueteros” declaró por esa época en un mensaje a la Legislatura.

La caza del piquetero

El enorme trabajo político-reivindicativo de los piqueteros salteños se engrandece cuando se considera que se realizaba bajo la presión de una enorme ofensiva represiva y política en la que confluían el gobierno nacional, el provincial y la Iglesia.

Más de cincuenta dirigentes y militantes de la Coordinadora fueron procesados y debieron ir a declarar a la justicia; en enero había sido detenido el piquetero Sebastián Cabral; la Gendarmería ocupaba todo el departamento; la Iglesia azuzaba y trataba de oponer a cada población a las restantes y a todas con los aborígenes; la prensa escrita (propiedad de la familia Romero) y buena parte de la prensa oral destilaban dosis industriales de macartismo contra el Partido Obrero.

El ideólogo de esta campaña era el ex ministro Storani, que en diciembre había denunciado al plenario del Polo Obrero, realizado en Fatpren, como la usina que preparaba el “levantamiento” piquetero. El ataque a los piqueteros en el norte de Salta tenía también el padrino del gobernador Romero, que nunca ocultó su oposición a otorgar ‘planes de empleo’ a las organizaciones de desocupados ni su decisión de defender a rajatablas el control de sus punteros en la región. En esos mismos días, Haroldo Dahn, director de Pérez Compans, también propietario de Refinor y de la destilería de Campo Durán, denunciaba “la coacción ejercida por los piqueteros”²⁰⁸, en referencia al reclamo de éstos para que se aplicara el convenio del ramo, y no el de la construcción, bien inferior, que aplicaban las patronales petroleras. A principios de marzo, Romero se reunió con el gobernador tucumano Miranda y el embajador de Estados Unidos, para diseñar un ‘plan Colombia’ en el norte argentino. Pero según un diario porteño, el narcotráfico era el pretexto para organizar la represión de los piqueteros.²⁰⁹ En mayo el gobierno de Salta apoyaba un proyecto para la construcción de viviendas para los gendarmes en el norte de la provincia.²¹⁰

Otra vez, un corte histórico

En la segunda semana de mayo, los obreros que trabajaban en la ampliación del hospital de Mosconi comenzaron una huelga y una olla popular en la obra exigiendo un salario de 2,50 pesos la hora. Una delegación de obreros en huelga del hospital, todos piqueteros de la Coordinadora, se dirigió a Mosconi para apoyar el reclamo. Después de 14 días de huelga general, salieron a cortar la ruta 34 en el histórico escenario de las puebladas de Mosconi y Tartagal. La exigencia de un salario mínimo de 2,50 pesos la hora, el denominado ‘convenio del piquetero’, se transformó a partir de ese momento en el reclamo de los obreros de la construcción de todo el departamento de San Martín.

El corte se extendió a Tartagal, donde los piqueteros de la Coordinadora de Desocupados, megáfono en mano, recorrían las obras llamando a los trabajadores a sumarse a la huelga y al piquete. Los delegados burócratas de la Uocra actuaban como rompehuelgas y cuatro trabajadores fueron despedidos. Se convocó a un paro departamental. En horas, Pocitos decidió hacer el mismo reclamo para las obras de la localidad. El reguero llegó a Embarcación, donde el Frente de Unidad Barrial se lanzó a la ruta, aunque no logró cortarla por el hostigamiento policial: se quedó en la banquina con sus propios reclamos de puestos de trabajo y alimentos y en solidaridad con la demanda salarial de las otras localidades. En Aguaray se movilizó otro grupo.

En las primeras horas del tercer día de corte, los piqueteros de todas las localidades lograron reunir a la Coordinadora Departamental y establecer un pliego de reclamos de 8 puntos (que luego se extendió a 15 puntos) que expresaba un programa de conjunto de los explotados de la zona. Es un corte de los ocupados y desocupados, por el aumento de salarios y por el subsidio y por la estatización de las petroleras.

Se reclamaba el levantamiento de todos los procesos penales a los luchadores, la libertad a los presos y el esclarecimiento de los crímenes de los compañeros caídos; un salario mínimo para todas las obras públicas y privadas de 2,50 pesos por hora para el ayudante; un plan de obras públicas y ejecución inmediata de todas las obras del departamento de San Martín; que las regalías petrolíferas y gasíferas quedaran en el departamento para el financiamiento de las reivindicaciones de todos los trabajadores; la restitución de todos los puestos de trabajo interrumpidos y el otorgamiento de nuevos puestos a todos los desocupados del departamento, representados por la Coordinadora en lucha; la entrega regular de 5.000 kilos de alimentos para todas las familias carenciadas del Departamento; el pago inmediato de las acciones de Propiedad Participada a los desvinculados de YPF; la reestatización de las empresas privatizadas. Casi de inmediato se agregó un nuevo reclamo, la reincorporación de los obreros despedidos de las obras.

El movimiento no tenía la masividad de otras oportunidades porque gran cantidad de compañeros, que estaban trabajando en los ‘planes’, concurría sólo algunas horas. Se sumaron los 60 despedidos de la municipalidad de Mosconi. Algunas empresas comenzaron a ofrecer aumentos de salarios, aunque sin satisfacer los reclamos; el corte se alargaba y se hacía ‘duro’.

Se realizó otro corte en el acceso norte de Tartagal para extender la lucha y se recorrían los obradores para cumplir las resoluciones de la asamblea de la Coordinadora Departamental. Cuando se dirigía a una asamblea fue detenido José Barraza; casi inmediatamente fueron detenidos César Perico Raineri y Carlos Gil, también militantes del PO y reconocidos organizadores piqueteros. Los gendarmes, además, contaban con una autorización en blanco para detener a otros dirigentes piqueteros y a una veintena de militantes del PO.

Desde la cárcel, en una carta, José Barraza puso de manifiesto el “contraste muy pronunciado” entre los piqueteros del norte y “las centrales sindicales que dicen ser combativas”. Mientras éstas “aceptan reducciones salariales, extensiones en la jornada laboral, la introducción de la más brutal flexibilización laboral; mientras los burócratas sindicales aceptan estas cláusulas retrógradas, la lucha de los piqueteros salteños parece una osadía total” porque están movilizándolo a los trabajadores ocupados y desocupados por un aumento de salarios... en medio de la crisis.²¹¹ También contrastaba la ofensiva que habían lanzado los piqueteros salteños con la situación defensiva en que habían sido puestos los movimientos piqueteros del Gran Buenos Aires ante la ofensiva gubernamental por el “reempadronamiento” y la reducción del número de ‘planes’.

En las mismas horas, fuera de Salta, se montaba una grosera provocación para detener a piqueteros de la CCC en Jujuy; en Capitán Bermúdez era detenido Edgardo Quiroga y varios dirigentes de la CGT San Lorenzo y se reprimían violentamente movilizaciones piqueteras en La Plata, Lomas de Zamora, Bahía Blanca (30 piqueteros detenidos), Mar del Plata y La Pampa, con la ‘ayuda’ de la policía provincial. Poco antes había sido condenado Emilio Alí y en Lomas de Zamora había sido nuevamente detenido Raúl Castells. La simultaneidad y el alcance nacional de estas detenciones no dejaban lugar a ninguna duda de que estaba orientada y dirigida por el gobierno nacional. La Alianza, efectivamente, gobernaba con la Gendarmería.

La justicia salteña, utilizando los argumentos de la campaña lanzada en febrero por el diario de los Romero, acusó a Barraza, a Raineri y a Gil de “sedición”, es decir de una acción de alzamiento armado contra el Estado, y –¡espectacular!– de ejercer la “democracia directa” en oposición al sistema constitucional argentino que establece que “el pueblo no delibera ni gobierna”. La “sedición” a la que se refería la justicia salteña fue el levantamiento de 20.000 personas que marcharon a la ruta a echar a la Gendarmería en mayo de 2000; las “formas semidirectas” de democracia eran las asambleas que votaron los cortes, debatieron sus pliegos reivindicativos y aprobaron los distintos acuerdos con las autoridades. El juez Cornejo defendía el carácter conspirativo del Estado ‘democrático’, del cual él mismo era una expresión concreta: a pesar de que todos los “delitos” por los que estaban acusados Barraza y sus compañeros eran excarcelables, se negó a otorgarles la libertad mientras se sustanciaba el proceso. Es decir, que convirtió a los piqueteros presos en rehenes del Estado.

La campaña por la libertad de los piqueteros salteños presos, que tuvo un enorme alcance nacional e internacional, comenzó en las propias entrañas de la bestia: el 5 de junio, la Coordinadora departamental, actuando como una verdadera dirección política de las masas explotadas, convocó a un paro general en todo el Departamento por la libertad de Barraza, Raineri, Gil y de todos los presos, que tuvo un alto acatamiento en Tartagal y Mosconi.

“La caza del piquetero que se ha largado responde a una causa más general: la incapacidad del gobierno para hacer frente a la intensa movilización popular que crece en el país todo. Para el gobierno, esta represión tendría un carácter ‘selectivo’, en el entendimiento de que los piqueteros y las corrientes políticas que actúan en su seno estarían objetivamente aisladas de la corriente social del país. En el descomunal error de este diagnóstico se encuentra la explicación de su inevitable fracaso”.²¹²

De una manera inmediata, este pronóstico sería confirmado por una nueva pueblada en Mosconi y Tartagal, que demostraría que eran los represores y los capitalistas los que estaban aislados por el derrumbe de su propio régimen social y político y por el odio de las masas.

Represión y nueva pueblada

El domingo 17 de junio, mientras se celebraba el Día del Padre, la Gendarmería desarmó los piquetes del acceso sur de Mosconi y ocupó la ciudad. La represión fue a balazo limpio: en el desalojo fueron asesinados dos compañeros; uno de ellos, Carlos Santillán, fue asesinado mientras se dirigía al cementerio a visitar la tumba de su hija; hubo cientos de heridos, muchos de ellos de arma de fuego. Días antes del asalto, y ante el temor de que fueran ocupadas por los piqueteros, la Gendarmería había tomado posición en las instalaciones de la petrolera Refinor. Desde allí se disparaba contra la ruta. El secretario de Seguridad, Mathov, sostuvo que había “piqueteros armados” y “francotiradores”, la misma excusa que utilizó la Gendarmería para reprimir con armas de guerra. Pero después de la ocupación de la ciudad, no pudieron encontrar un solo “piquetero armado” ni, tampoco, la Gendarmería pudo mostrar un solo herido de bala. En la instrucción del juicio a José Barraza, quedó en claro que los que disparaban desde la refinera eran provocadores de la Gendarmería.

Con la ocupación de la ciudad, comenzaron las detenciones arbitrarias, los allanamientos y las razzias; los detenidos eran torturados. Ocuparon el hospital y las radios; los periodistas que informaban verazmente de los hechos eran acosados y golpeados, sus cámaras destruidas. Se desconoce el paradero de muchos compañeros; otros son escondidos por la población que,

arriesgándose frente a los gendarmes, les brinda escondite y seguridad. Surgen, frente a la barbarie represiva, la solidaridad y el heroísmo del pueblo.

El obispo de Orán, Lugones, bendijo la represión y exigía la detención de los dirigentes. Como en tiempos de la Conquista o bajo la dictadura, otra vez 'la cruz y la espada' volvían a marchar de la mano contra los explotados.

La verdadera instigadora de la masacre era Refinor-Pérez Companc: mientras duró el corte, se negó a utilizar los caminos alternativos a la ruta 34 que le habrían permitido seguir operando. Según testimoniaría luego un gendarme en la "causa Barraza", Refinor amenazó con cortar la producción y desabastecer todo el norte si no se desalojaba la ruta inmediatamente. Las petroleras azuzaban la masacre para terminar con los piqueteros que las obligaban a pagar salarios de 2,50 pesos la hora.

Pero a partir de las diez de la mañana, la situación pegó un giro radical. Pasado el primer golpe, el pueblo de Mosconi comenzó a salir a las calles y a retomar el control de la ciudad. Una masa de dos mil trabajadores comenzó a recorrer las calles y a 'liberar' a los compañeros que habían sido obligados a esconderse. Conforme este nuevo "piquete móvil" avanzaba, la Gendarmería se veía obligada a retirarse. El pueblo se congregó en la plaza central, rebautizada "plaza del aguante", con permanentes asambleas; se montaron carpas para permanecer en la plaza. Se reclamaba el retiro inmediato de la Gendarmería, la libertad de todos los detenidos y el juicio y castigo a los responsables de la masacre. Se le exigía a Moyano y De Gennaro una huelga general en todo el país.

El pueblo liberó a General Mosconi de las tropas de ocupación de Mestre y Mathov, de Romero y el juez Cornejo, de Pérez Companc y del obispo Lugones. Como un cuerpo extraño que es, la Gendarmería fue obligada a retirarse a la ruta. Como la Comuna de París, Mosconi era una ciudad libre pero sitiada.

El fracaso de la represión tiene un enorme significado político. La pueblada que expulsa a la Gendarmería liquida el planteo represivo con que el gobierno aliancista pretendía enfrentar al movimiento piquetero y al movimiento obrero en general, que había vuelto a cobrar nuevo vigor con el paro general del 8 de junio y la movilización de los piqueteros del MIJP (Castells) y del Polo Obrero de ese día a la Plaza de Mayo.

El fracaso represivo agudizó la crisis política del gobierno aliancista. "No es la falta de represión lo que amenaza con desembocar en una 'disolución social', sino que es esta disolución social lo que hace inviable la política del gobierno y la represión. El capitalismo está en bancarota; se cae Aerolíneas, la recesión sigue tremenda, el megacanje fracasó, Cavallo ha tenido que devaluar 213 y lo hará todavía más, la desocupación no deja de crecer, hay una ruptura de la cadena de pagos, la cesación de pagos es total. La rebelión popular del 20 de junio tiene, por todo esto, consecuencias incalculables".²¹⁴

El triunfo de la pueblada había puesto las contradicciones del régimen al rojo vivo.

Mosconi: El único gobierno representativo es el de los piqueteros

Con el retiro de la Gendarmería y el triunfo de la pueblada, el poder político en Mosconi y en Tartagal quedó disuelto: no había intendentes; no había concejos deliberantes; los interventores habían desaparecido; la policía provincial estaba escondida y apaleada; el obispo era repudiado. La única autoridad política real en Mosconi y Tartagal eran los piqueteros y la Coordinadora Departamental. En una visita a la zona, el ministro de Acción Social, el frepasista Juan Pablo Cafiero, declaraba que "en Mosconi no hay Estado"²¹⁵. La afirmación era falsa –el Estado era la Gendarmería que rodeaba la ciudad y defendía a Refinor y a las petroleras– pero pintaba muy adecuadamente el hundimiento de las 'instituciones de la democracia' en el norte de Salta.

El propio Romero sufrió en carne propia esta disolución política. En una visita que realizó a Mosconi, acompañado por todo su gabinete, anunció que no iba a reunirse con los piqueteros.

¿Pero para qué iba a Mosconi o qué se podía decidir si no trataba directamente con la dirección política reconocida por el pueblo? El fracaso de la gira fue tan rotundo que ni siquiera la Cámara de Comercio aceptó reunirse con él; sólo pudo entrevistarse con sus punteros y dos directoras de escuela... a las que la policía tuvo que ir a buscar a sus domicilios.

En Mosconi y en Tartagal, la disolución de las 'instituciones' y la autoridad piquetera ponían crudamente sobre el tapete la cuestión del poder político, no de tal o cual reivindicación, por importante que ésta fuera. Por eso, las negociaciones entabladas con los enviados del gobierno nacional estaban condenadas al fracaso. El primer punto del reclamo de los piqueteros –el retiro de la Gendarmería, la liberación de todos los detenidos y la investigación y el castigo de los responsables de la represión– estaban 'más allá' de las posibilidades negociadoras de los funcionarios, que en sus valijas sólo traían ofertas de nuevos 'planes' –a ser manejados por la Iglesia– y 'proyectos' de 'incentivos' para las Pymes.

Al aludir a las propuestas de 'reactivación' dirigidas a las patronales, el enviado del gobierno recibió una respuesta tajante de José 'Pepino' Fernández: "Ustedes quieren reunirse con los empresarios, pero resulta ser que por culpa de ellos estamos como estamos".²¹⁶ Al mencionar los 'proyectos de incentivos' a las Pymes de la zona para invertir en forestación, agricultura e infraestructura, motivó otra respuesta, esta vez de Juan Carlos 'Hippie' Fernández: "¿Usted me viene a hablar de proyectos?, todos éstos tengo para mostrarle' dijo antes de sacar de su bolso un abanico interminable de tarjetas de funcionarios que nunca consideraron uno solo de ellos".²¹⁷ Después de la pueblada, el secretario de las Pymes, Juan Carlos Martínez, había venido a descubrir que en el norte de Salta había 650.000 hectáreas sin utilizar, cuando la Coordinadora desde hacía más de cinco años venía reclamando una reforma agraria... pero no para hacer el cuento del microemprendimiento inviable, sino para plantear la confiscación de los latifundios.

Mientras las negociaciones fracasaban, la 'Plaza del Aguante' se fortalecía: cada vez eran más las carpas instaladas; la coordinadora de estudiantes secundarios había organizado un festival que reunió a mil personas y donde se juntaron alimentos para 'aguantar' durante un largo tiempo. En ese momento crítico, la Coordinadora dio un paso en falso.

El 9 de julio se reunió en Mosconi, convocado por la Coordinadora, un Congreso al que se invitó a organizaciones piqueteras de todo el país; concurren 200 compañeros. Salvo el primer punto –la ratificación de la lucha por la libertad de todos los detenidos, el fin de los procesos y persecuciones y el retiro de la Gendarmería– el Congreso no aprobó ninguna moción. El planteo formulado por el PO –la ratificación de los 21 puntos del I Congreso y del programa del II Congreso; la participación en la Asamblea Nacional Piquetera, que para ese entonces ya había sido convocada por la FTV, la CCC y el Polo Obrero; y la lucha por una Asamblea Popular Constituyente en Mosconi–, así como los planteos de otras organizaciones presentes no fueron tratados. Muchos delegados se retiraron en mitad de las deliberaciones en rechazo al curso que tomaban los acontecimientos.

El fracaso del Congreso era la consecuencia de una política autoproclamatória y ultimátista que venía desarrollando una parte de la dirección piquetera respecto de los restantes movimientos de lucha del país.²¹⁸ El vocero fundamental de esta política era un grupo provocador que se hacía llamar, vaya uno a saber por qué, Democracia Obrera.²¹⁹

"La expresión más brutal de este intento de expropiar políticamente la representación de los piqueteros fue la propuesta de formar una 'Coordinadora Nacional' para que ejerza la representación de la lucha de Mosconi en el resto del país. Es decir, que un grupo que no dirige ni organizó movimiento piquetero alguno a lo largo y ancho del país pretende convertirse en la representación de un movimiento que ya acumula 5 muertos y 4 años de cortes de ruta. La propia dirección de la UTD tuvo que salir a denunciar esta pretensión de usurpar la lucha. En la misma línea, la importante delegación del MTR del Gran Buenos Aires se negó a hablar y nos hizo saber que su posición es que debía expulsarse a los provocadores de Democracia Obrera".²²⁰

El problema del poder

Para la burguesía, estaba planteada la necesidad de reconstruir su poder político en el norte de Salta. El primer punto de apoyo para esta reconstrucción era, lógicamente, la presencia de la Gendarmería. Pero con la sola represión no alcanzaba. Los funcionarios frepasistas lanzaron la idea de la inmediata realización de elecciones y alentaron a los piqueteros a presentarse e, incluso, a gobernar la ciudad si eran elegidos. Los frepasistas pretendían repetir en Mosconi y Tartagal la misma política que había hundido la pueblada de Cutral Co.

Esta política de 'reconstrucción democrática' del poder político iba de la mano, no podía ser de otra manera, de un mayor y más concentrado ataque contra el Partido Obrero, que fue virtualmente proscrito en la provincia. La Gendarmería destruyó parte de la casa de Perico Raineri mientras éste se encontraba detenido; se impidió el viaje de Jorge Altamira a Salta para visitar a los presos bajo directas amenazas de encarcelamiento. Romero llegó a decir que "el Partido Obrero tenía un brazo político y un brazo militar, como el IRA o la ETA", confundiendo al PO con su propio partido, que primero tuvo su 'brazo armado' en la 'Triple A' de López Rega y ahora lo tiene en la Gendarmería, siempre con el mismo fin: asesinar obreros y militantes populares.

Pero el problema que había planteado la disolución de las instituciones políticas no era el recambio circunstancial de una figura odiada por otra o, incluso, de todas las figuras odiadas por un piquetero. Lo que le importaba al movimiento piquetero era imponer su programa, liberar a los presos, establecer un salario mínimo de 2,50 la hora, aumentar las regalías de las petroleras y destinarlas a la reconstrucción e industrialización del Norte. Para eso no alcanzaba que un piquetero ocupara una concejalía o incluso la Intendencia. Estaba planteado un problema de poder. En esta situación, el PO llamó a luchar por una Asamblea Popular Constituyente en Mosconi, en Tartagal y en todo el norte, para reemplazar al poder que se había hundido y llevar a la práctica el programa piquetero.

Pero el norte de Salta no era un caso aislado sino que expresaba concentradamente la tendencia política general en la Argentina. El periodista Joaquín Morales Solá advertía en esos momentos que "no hay un solo Mosconi sino muchos Mosconis potenciales".²²¹

La tendencia a la disolución de las relaciones sociales (cesación de pagos del Estado ya no sólo con los acreedores externos sino incluso con sus empleados y los jubilados) y el derrumbe del régimen político, de una parte, y el crecimiento de la lucha del movimiento piquetero y de las masas explotadas, por el otro, plantean objetivamente una cuestión de poder en la Argentina. "Nadie puede frente a esto, simplemente lanzar una u otra reivindicación obrera; el eje central es el problema de quien define la lucha por el poder que objetiva y subjetivamente está planteada en Argentina".²²²

Para convertirse en una alternativa política, el movimiento piquetero debía unificar su acción en el plano nacional y, al mismo tiempo, plantear una salida política de conjunto para las masas explotadas. Ese es el camino que comenzó a recorrer la Asamblea Piquetera Nacional que se reunió el 24 de julio en La Matanza.

206. Con características particulares, en los hospitales de Neuquén se desarrollaba una lucha similar a la encarada por los piqueteros salteños. En los hospitales públicos, el gobierno provincial y los gobiernos municipales habían reemplazado trabajadores efectivos por beneficiarios de la "2128" (el salario de los primeros era de 470 pesos más cargas sociales y jubilatorias; el 'subsidio' de los segundos era de 150 pesos), en una clara demostración práctica de los objetivos que perseguían las patronales y el gobierno con los 'planes de empleo'. A comienzos de 2001, un agrupamiento de delegados clasistas ganó las elecciones en la rama salud de Ate-Neuquén e inmediatamente comenzó a organizar la lucha por el pase a planta permanente de los trabajadores de la "2128". En Cutral Co, en marzo de 2001, luego de un paro de 48 horas contra el gobierno municipal aliancista, se conquistó el pase a planta permanente de estos compañeros.

207. "Plan de acción", en Prensa Obrera, 11 de abril de 2001.

208. El Tribuno, de Salta, 24 de febrero de 2001.

209. Clarín, 29 de marzo de 2001.
210. El Tribuno, de Salta, 29 de mayo de 2001.
211. Barraza, José, “En la crisis, ¿se pueden conseguir aumentos salariales?”, Prensa Obrera, 7 de junio de 2001.
212. Altamira, Jorge, “Gobiernan con la Gendarmería”, en Prensa Obrera, 14 de junio de 2001.
213. Se hace referencia al llamado “factor de empalme”, que encarece el dólar para las importaciones y lo devalúa para las exportaciones.
214. Altamira, Jorge, “La pueblada”, en Prensa Obrera, 21 de junio de 2001.
215. La Nación, 24 de junio de 2001. Cafiero viajó a Mosconi por pedido expreso de la Curia, que temía que la “falta de contención” hiciera estallar a toda la provincia, pero con la oposición explícita del ministro de Interior, Ramón Mestre, que planteaba que “no se debe dialogar con los que eligieron el camino de la lucha armada”. Con el viaje de Cafiero quedó al descubierto el carácter clerical del ‘progresismo’ frepasista y, también, las agudas divergencias en el seno del gobierno frente al ascenso piquetero.
216. El Tribuno, 26 de junio de 2001.
217. Página/12, 26 de junio de 2001.
218. La UTD de Mosconi no concurrió a la Asamblea Piquetera Nacional del 24 de junio de 2001.
219. La naturaleza provocadora de este grupo quedaba reflejada en su ‘versión’ de los acontecimientos salteños que no sólo era absolutamente falsa sino que, además, coincidía exactamente con la que dieron Romero, Mathov, Mestre y la Gendarmería: “(...) Los trabajadores entonces se retiraron hacia Mosconi y han estado defendiendo la ciudad –armas en mano– desde entonces (...) cuando los gendarmes atacaron el corte de la ruta 34, fueron impedidos de entrar a la ciudad por destacamentos de obreros armados (...) los piqueteros usaron las armas que capturaron durante el último levantamiento, en diciembre de 2000, para mantener a raya a la policía (...). Estos destacamentos deben convertirse en el núcleo de una milicia obrera argentina...” (“Workers’ uprising in N. Salta, Argentina”, Declaración del llamado International Workers’ Committee, tendencia internacional de Democracia Obrera, 27 de junio de 2001). Repetir una ‘historia’ inventada por los represores para justificar la represión y hacerlo después de que en reiteradas oportunidades la Coordinadora negara la veracidad de esos hechos y los denunciara como un ‘montaje’ para justificar los ataques a la organización obrera, sólo puede ser obra de provocadores. La directiva clasista del sindicato ceramista de Neuquén ha confirmado esta caracterización al informar que en un plenario de ese sindicato, los propios obreros y delegados fabriles exigieron la expulsión de los miembros de DO por ser ajenos a la lucha y por sus permanentes e injustificados ataques a la dirección gremial.
220. Del Plá, Claudio, “Balance del Congreso Nacional Piquetero del 9 de julio en Mosconi”, en Prensa Obrera, 12 de julio de 2001.
221. La Nación, 1º de julio de 2001.
222. Intervención de Jorge Altamira en el XII Congreso del Partido Obrero, 9 de julio de 2001.

Asamblea Nacional y plan de lucha piquetero: dos estrategias, una salida

El 24 de julio se reunió en La Matanza la Ira Asamblea Nacional Piquetera, con la presencia de 2.000 compañeros.

“¡Se hizo!”. El comentario de Silvia Barraza, de la Coordinadora Departamental de Trabajadores y Desocupados del Norte de Salta, traducía la expectativa de quienes habían batallado tan duramente por un Congreso Nacional de Piqueteros y representantes de la clase obrera.

La Asamblea reunió a todas las organizaciones que habían canalizado la rebelión popular y cambiado la fisonomía del movimiento obrero en los últimos cinco años. Estaban las organizaciones piqueteras de La Matanza (CCC, FTV, Futrade), de Tucumán, de la Ciudad de Buenos Aires, de Catamarca, del Norte de Salta, del Chaco (Movimiento de Desocupados 17 de Julio), de Mar del Plata, del Plenario de Organizaciones en Lucha de la Zona Sur (MTR, MTD). “Estaban los que pueden concretar los cortes” sintetizaba un corresponsal.²²³

Aunque la convocatoria original no preveía la concurrencia de organizaciones sindicales de base, este criterio fue variando y el encuentro en La Matanza terminó convirtiéndose en un primer congreso nacional de representantes del conjunto del movimiento obrero en lucha, que agrupó a seccionales de la CTA (Neuquén, Santa Cruz), a bastiones de la clase obrera industrial (Congreso Obrero Minero convocado por ATE-Río Turbio), a comisiones internas gráficas y del transporte, e incluso a expresiones de la lucha agraria contra la masacre social de los pequeños productores. En la Asamblea no se hizo presente la dirección de Ctera pero sí sus opositores clasistas: Mónica Galván, de Adosac y Secretaria General de la CTA santacruceña, anunció la formación de la lista opositora docente para luchar por una “Ctera piquetera”.

El solo hecho de que se reuniera esa Asamblea estaba probando la caducidad de los llamados partidos populares, convertidos en meros taparrabos de la especulación capitalista, y de la burocracia de los sindicatos, que durante más de dos meses le habían dado una “tregua” al gobierno para apoyar la “reactivación” que prometía Cavallo y que terminó en un irremediable fracaso.

La realización de la Asamblea Nacional era por sobre todo la expresión de la veloz maduración del movimiento piquetero y de la tendencia a convertirse en un factor político. Apenas tres meses antes, en mayo, había sido rechazada la propuesta de convocar a un Congreso nacional piquetero. Desde entonces, el corte de La Matanza en mayo, la provocación de los gobiernos nacional y provincial en el Norte de Salta, la invasión de la Gendarmería, la detención de los compañeros, la negativa a conceder nuevos ‘planes de empleo’, el fracaso total y absoluto del “plan” Cavallo, el derrumbe del gobierno y la volatilización del centroizquierda “oficial” abrieron paso a la convocatoria de la Asamblea.

El movimiento piquetero estaba evolucionando con características revolucionarias, porque también se habían conjugado en él, además de la valiente lucha de los compañeros desocupados, la lucha piquetera fabril y sindical, las movilizaciones en los paros generales y las luchas de los estudiantes y de los explotados del campo.

Dos estrategias

En la Asamblea piquetera se plantearon dos estrategias que no sólo eran contradictorias sino también excluyentes: las presentaron, por un lado, Jorge Altamira en nombre del Partido Obrero, y, por el otro, Claudio Lozano en nombre de la CTA.

Altamira señaló que la situación del momento se distinguía por tres características fundamentales. Una era la propia realización de la Asamblea Nacional, porque esto convertía al movimiento piquetero en un factor, ya no parcializado sino de conjunto, en la situación nacional, y por lo tanto en un factor político, o sea en una alternativa popular frente a los explotadores y su Estado. A este importante elemento subjetivo se añadía, en segundo lugar, la extensión de la lucha popular a sectores cada vez mayores. La tercera característica, y por momentos la más dinámica de todas, era el derrumbe capitalista y de su Estado, la cesación de pagos, la inviabilidad completa de las políticas de turno, sus reiterados “ajustes” y fracasos, la situación sin salida del régimen político en su conjunto. Altamira insistió en que la situación argentina sólo podía entenderse a fondo en el marco de una creciente crisis capitalista mundial, que se evidenciaba en la recesión industrial norteamericana y europea, en la larga depresión de Japón y en el nuevo hundimiento de los “tigres asiáticos”. Esto explicaba la marcha de 300.000 “piqueteros” europeos que acababa de tener lugar en Génova.²²⁴

En consecuencia, resumió Altamira, estaba planteada una cuestión de poder. La subsistencia de este régimen sin salida es incompatible con la más mínima de las reivindicaciones del movimiento popular. La llamada política del “déficit cero” agravaría la depresión económica y la bancarrota financiera del Estado y acentuaría la rebelión popular. Altamira planteó como salida la sustitución del gobierno nacional y de las provincias por Asambleas Constituyentes soberanas, o sea con todo el poder para ejecutar un programa profundo de cese de pago de la deuda externa, nacionalización bajo control obrero de los bancos y Afjp, un impuesto extraordinario a los grandes capitales, el reparto de las horas de trabajo entre toda la población trabajadora, un mínimo salarial de 600 pesos por una jornada de ocho horas. La conquista de una Asamblea Constituyente soberana, dijo, sería el resultado de las luchas, de la huelga general y de las puebladas.

Altamira destacó que su planteo pretendía abrir una discusión en el marco de un plan de lucha común de todas las organizaciones piqueteras y de lucha de la clase obrera por la derogación de todos los “ajustes”, la libertad de los compañeros presos, el retiro de la Gendarmería de Salta y el fin de los 2.800 procesos judiciales contra los luchadores.

La crisis de poder y la necesidad de oponerle una alternativa fue un debate presente entre los propios protagonistas de la Asamblea. D'Elía (FTV) había planteado el agotamiento del gobierno y la necesidad de oponerle una Constituyente en el corte común de la ruta 3, el lunes 16; y Alderete (CCC) había planteado: “Queremos una Asamblea Constituyente que elija sus representantes y no el Parlamento que solo sirve para defender los intereses de los poderosos”.²²⁵ El debate sobre la existencia de una crisis de poder y qué alternativa oponerle recorrió la Asamblea en distintos tramos.

La intervención de Claudio Lozano (CTA) trazó una estrategia de “shock redistributivo”, para lo que propuso poner en pie un “Frente Nacional contra la pobreza”, junto a las Apymes y la banca cooperativa y los diputados del ARI (Carrió) y el Polo Social (Farinello). Destacó la campaña por la convocatoria de una “consulta popular” por un seguro de empleo y formación de 380 pesos para los jefes de familia desocupados y una asignación de 60 pesos por hijo como centro de esa estrategia. Las limitaciones de este “shock redistributivo” son evidentes.

En primer lugar, su monto de 380 pesos cuando el costo de la canasta familiar, que debe ser considerado como el umbral de la pobreza, es de 1.200 pesos. Un seguro de 380 pesos no tiene nivel de salario sino de asistencia social y si se entrega a cambio de una “contraprestación laboral” constituye una inocultable explotación de los trabajadores.

En segundo lugar, que se encuentre circunscripto a los “jefes de familia”, que constituyen apenas 700.000 de los cuatro millones de desocupados que existen en Argentina. La excelente intervención del representante del Sutrade de Córdoba cuestionó, en medio de una ovación, el concepto de subsidio para “jefes de familia”, exigiéndolo para todos los desocupados.

En tercer lugar, que se le dé el carácter de “empleo y formación” transforma ese seguro en un nuevo piso salarial para los ocupados, sin límite de horas de trabajo, sin siquiera eliminar la competencia entre los ocupados y los desocupados porque aún quedan sin seguro y sin salario varios millones de trabajadores que no revistan como “jefes de familia”.

En cuarto lugar, que se conciba la conquista de este reclamo mediante el recurso a las urnas en una “consulta popular” –que no se encuentra reglamentada ni reconocida por el Estado– desnuda una política que no pretende la victoria sino que se autocomplace con la gesticulación y la distracción.

En quinto lugar, cuando el Estado está bajando los salarios y las jubilaciones, que se proyecte una lejana “consulta” electoral y marchas en apoyo a esa “consulta”, y no la huelga general contra el ajuste en curso es, a todos los fines prácticos, una capitulación hacia el “déficit cero” de De la Rúa y Cavallo.

El intento de “redistribuir los ingresos” en el cuadro de una crisis mortal del capitalismo y sin tomar ninguna medida que afecte a la propiedad capitalista es una completa ilusión. No puede haber ninguna “redistribución de ingresos” sin expropiar a los bancos, a Repsol, a los grandes monopolios y sin repudiar la deuda externa. La propia experiencia del movimiento piquetero demuestra que la menor de sus reivindicaciones, desde un ‘plan Trabajar’ hasta el sustento para un comedor, es incompatible con el actual régimen capitalista en descomposición. Pero todas estas limitaciones palidecen ante el hecho de que la dirección de la CTA transformó la “consulta popular” en un pretexto para armar un frente político de apoyo a los candidatos del ARI y el Polo Social de Farinello, los que no han tenido empacho en definirse como antipiqueteros.

Lozano anunció una larga agenda de la CTA con el objetivo de la “consulta”, que la Asamblea, volcada al plan de cortes de ruta progresivos, no consideró.

Plan de lucha piquetero

La Asamblea votó por unanimidad un plan de lucha nacional con cortes de ruta progresivos (de 24, 48 y 72 horas) para arrancar dos objetivos: a) la derogación del decreto y la ley de ajuste y b) la libertad de los presos, el retiro de la Gendarmería de Salta y el desprocesamiento de los luchadores. Se llamó a participar a los docentes, los estudiantes, los trabajadores de Aerolíneas, los jubilados, todos los afectados por la nueva embestida contra las masas. A mano alzada, los 2.000 representantes que congregó el encuentro votaron también una coordinación nacional y distrital de las organizaciones en lucha.

La primera jornada del plan de lucha piquetero fue un enorme éxito, a pesar de las provocaciones previas y de las amenazas de represión del gobierno. Se registraron más de 300 cortes en todo el país –desde Jujuy a Tierra del Fuego; desde la Capital a Mendoza; en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos del interior de las provincias– que movilizaron cien mil compañeros. El plan de lucha piquetero fue tomado como referencia por organizaciones de desocupados y sindicales, que no habían concurrido a La Matanza pero que decidieron coincidir en la misma fecha, para desarrollar sus propios reclamos.

Cuando el gobierno sostenía que el movimiento se ‘desinflaba’, en la segunda semana (48 horas), las organizaciones piqueteras de la Capital y el Gran Buenos Aires movilizaron 40.000 trabajadores a la Plaza de Mayo, en lo que constituyó una enorme victoria política sobre el gobierno. El mismo día, en las plazas de las principales ciudades del interior se concentraron decenas de miles de piqueteros; las concentraciones de Bahía Blanca y Misiones fueron especialmente masivas. El temor del gobierno se manifestaba en la ola de detenciones de piqueteros en todo el país (al promediar el plan de lucha, sumaban casi 100 los piqueteros presos) y en sus amenazas de eliminar los ‘planes Trabajar’.

En la tercera semana, se mantuvieron y acrecentaron los cortes y una nueva manifestación masiva ocupó la Plaza de Mayo.

Ante la completa ausencia de la burocracia de las dos CGT, el movimiento piquetero se había convertido en el referente político excluyente de las masas explotadas de la Argentina.

La segunda Asamblea Piquetera

A principios de septiembre, cuando se reunió la II da Asamblea Nacional Piquetera, cada uno de los elementos que caracterizaban el momento político, en ocasión de la reunión de la I ra Asamblea Nacional –la transformación del movimiento piquetero en un factor político, el crecimiento de las luchas de las masas y la excepcional crisis política del régimen gobernante– se habían profundizado notoriamente.

El movimiento piquetero –como consecuencia del éxito del plan de lucha votado en la I ra Asamblea– se había desarrollado masivamente y se había transformado en el eje de crecientes movilizaciones populares.

La huelga docente bonaerense por tiempo indeterminado –en respuesta al ‘ajuste’ de Ruckauf y al pago de los salarios con bonos sin valor, los llamados ‘patacones’– mostraban la creciente tendencia a la lucha de vastos sectores explotados.

La crisis de poder había pegado un nuevo salto con la virtual cesación de pagos de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, porque la cesación de pagos de la principal provincia agravaba la descomposición económica del régimen en su conjunto y la tendencia general a la cesación de pagos. En segundo lugar, porque no sólo hundía la candidatura presidencial de Ruckauf sino que, además, pulverizaba una de las ‘salidas’ que se planteaban ante el hundimiento del régimen de De la Rúa-Cavallo: un gobierno de ‘unidad nacional’ de la Alianza y el peronismo. En tercer lugar, porque había desencadenado un generalizado movimiento de lucha en los más recónditos municipios de la provincia.

El momento político se caracterizaba, además, por otro hecho fundamental: la traición de la burocracia de Suteba-CTA a la huelga indefinida de la docencia: Maffei y Yaski fueron a salvarle el pellejo a Ruckauf cuando toda la situación de lucha justificaba el llamado a una huelga indefinida de todos los estatales que derrotara el ajuste bonaerense y por esa vía acabara con Cavallo y consortes y liquidara las pretensiones del FMI y del Tesoro norteamericano. Esta traición ponía en claro que “si el movimiento piquetero no lucha en forma consecuente por establecerse como una nueva dirección, será sepultado por las burocracias sindicales firmemente soldadas al sistema”.²²⁶

En este cuadro se reunió la segunda Asamblea piquetera, realizada el 4 de setiembre. Tuvo una representatividad todavía mayor que la primera, expresión del éxito del plan de lucha piquetero, y en ella pudieron participar José Barraza, del Polo Obrero y de la Coordinadora Departamental de San Martín, y Roberto Martino, del MTR, que pocas horas antes habían sido liberados gracias a la movilización.

La II da Asamblea se reunió en un cuadro de moviliación piquetera. Un día antes, en La Matanza y en Berisso hubo cortes masivos que impusieron el pago de los ‘planes de empleo’ en efectivo y no en ‘patacones’ como pretendía el gobierno provincial. La Asamblea deliberó en el mismo momento en que siete masivos piquetes bloqueaban la totalidad de las rutas que conducen a Zapala, en reclamo de un “fondo de reparación histórica” financiado con las regalías del gas y el petróleo.

¿Qué problemas políticos enfrentaba la Segunda Asamblea Piquetera?

En primer lugar, habiendo demostrado su poder de convocatoria y su capacidad movilizadora, la Asamblea Piquetera había abierto la posibilidad de poner en pie una dirección combativa de alcance nacional. Pero la traición de Suteba a la huelga docente demostraba que esa tarea debía realizarse en contra de las direcciones sindicales oficiales. La segunda Asamblea Piquetera debía establecer una alianza estratégica con las direcciones obreras de base (fábricas, talleres, escuelas, distritos) en el marco de un Congreso de Delegados de los piquetes obreros de ocupados y desocupados.

En segundo lugar, la profundización del ataque contra las masas –“déficit cero”; ‘pataconización’– planteaban la necesidad de que la Asamblea Piquetera profundizara el plan de lucha, impulsando la consigna de la huelga general.

En tercer lugar, el agravamiento de la crisis del régimen ponía a la Asamblea ante la responsabilidad de discutir un planteamiento de conjunto para dar una respuesta obrera y popular a la crisis de poder existente: el reemplazo del gobierno impotente de la Alianza y de los gobiernos impotentes de todas las provincias por Asambleas Constituyentes que reorganizaran el país sobre nuevas bases sociales.

La II da Asamblea votó un programa más desarrollado que la anterior.²²⁷ Además de las reivindicaciones aprobadas en la I ra Asamblea, estableció como “ideas fundamentales” para el debate de una III ra Asamblea “el No al pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta; la reestatización de las AFJP; la renacionalización de los bancos y empresas estratégicas; la condonación de la deuda usuraria a los chacareros pequeños y precio sostén en origen para ellos”. El programa votado dio un paso importante hacia la adopción de una salida de conjunto frente a la crisis con la consigna “fuera el régimen hambreador”.

El programa votado en la II da Asamblea Piquetera se destacaba, además, porque planteaba “reclamar y organizar un paro activo nacional de 36 horas y la huelga general”, es decir, establecía un método de lucha común de ocupados y desocupados para derrotar al gobierno e imponer las reivindicaciones.

La Asamblea votó la continuidad del plan de lucha con un corte de 36 horas, que debía culminar con actos piqueteros en las principales plazas de la república.

Expropiación política

El debate estratégico que la I ra Asamblea piquetera había esbozado, pero no resuelto, fue ‘zanjado’ burocráticamente por la CTA, que a espaldas de los piqueteros decidió convertir el acto en Plaza de Mayo con que debía concluir la jornada de corte de 36 horas en el acto de lanzamiento del “Frente Nacional de la Pobreza” (FNP).

Este Fnp, que había sido presentado en sociedad poco antes, estaba compuesto por fuerzas declaradamente antipiqueteras como el ARI de la Carrió, el Polo Social de Farinello y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La excusa para la formación de ese frente era el apoyo de los diputados del ARI y el Polo Social a la “consulta popular” por el seguro de empleo y formación propuesto por la CTA.

A quince días de las elecciones parlamentarias, el intento de poner al movimiento piquetero a la rastra del FNP era una desembozada expropiación política en beneficio de fuerzas que no sólo eran ajenas al movimiento piquetero sino también, abiertamente, hostiles a él. Pero un “Frente contra la Pobreza” y contra los piqueteros es una violenta contradicción que se resuelve en una política distraccionista: se habla de la “pobreza” al mismo tiempo que se intenta desplazar a los piqueteros del escenario político que han conquistado.

El cura Farinello se definió como antipiquetero en una carta donde explicaba que había decidido ‘bajar’ como candidato a diputado nacional del Polo Social a Luis D’Elía, de la FTV-CTA de La Matanza, “para no dar la impresión ante la sociedad de que apoyo los cortes de ruta”.

Elisa Carrió y el ARI ponen como ejemplo del “capitalismo no mafioso que hay que construir” a Pérez Compagnon y a Techint, que además de mafiosos, coimeros y evasores, fueron los que foguearon e instigaron la represión y el asesinato de los piqueteros en el norte de Salta en la pueblada de junio.

La banca cooperativa (Credicoop) y las Pymes, en el mismo momento en que se integraban al FNP estaban trabajando abiertamente por la destrucción política del movimiento piquetero salteño. Con la colaboración del gobierno nacional y de la Iglesia salteña (y con el apoyo del PC), la

banca cooperativa y las Pymes habían establecido en Mosconi un Centro de Investigaciones para el Desarrollo Industrial, que tenía como propósito lograr fondos públicos en beneficio de un puñado de Pymes.

Los ‘microemprendimientos’ que promueven son un callejón sin salida, como lo prueba la propia experiencia del norte. Pero no es eso lo que les interesa a la entente entre los banqueros de Dios y los ex banqueros de Moscú. Frente al fracaso del intento represivo de la Gendarmería, impulsan el método pérfido de la corruptela económica para cooptar a la dirección piquetera y destruir el movimiento.²²⁸ La naturaleza antiobrera de este engendro saltaba a la vista por las denuncias de los propios trabajadores salteños: “Las Pymes de la zona quieren que pidamos laburo para las empresas de la zona y nos negrean igual que las que vienen de otros lados”.

El acto del FNP en la Plaza de Mayo estuvo muy lejos de la movilización piquetera en ese mismo escenario unas semanas antes. Apenas concurrieron 7.000 personas y la columna de La Matanza, siempre la más numerosa, esta vez fue muy reducida. “La tónica de los discursos (fue) defender a los 20 diputados (del ARI y del Polo de Farinello) que presentaron un proyecto para convocar el 10 de diciembre a una consulta popular por el seguro de empleo y formación exclusivamente para los jefes de familia. (...) En el acto, subidos por los organizadores, estuvieron Alfredo Bravo y Marcela Bordenave, del ARI, y Alicia Castro, del Polo Social (...). La contradicción más llamativa del acto fue, sin duda, que mientras se habla de distribuir la riqueza, sus protagonistas abandonan la lucha por la derogación del ajuste y de la ley de “déficit cero”. Se repite la perfidia de dejar pasar el atropello actual para enfrentar al que vendrá. Fue lo que sucedió con el impuestazo, la rebaja salarial y la reforma laboral”.²²⁹

Ante esta expropiación política en favor del ‘progresismo’ antipiquetero, el Polo Obrero, el MTD-Aníbal Verón, el MTR de Martino y el Mijp de Castells decidieron no concurrir al acto del FNP en la Plaza de Mayo. El rechazo explícito de estos agrupamientos y el ‘voto con los pies’ de miles de compañeros que no concurrieron a la Plaza detrás de los que nunca habían cortado una ruta o ‘aguantado’ en un piquete, estaban demostrando que una parte sustancial del movimiento no estaba dispuesto a tolerar la entrega de la lucha piquetera a sus enemigos políticos y de clase.

223. La Nación, 25 de julio de 2001.

224. En ocasión de la reunión anual del G-8.

225. Crónica, 22 de julio de 2001.

226. “La próxima Asamblea Piquetera”, en Prensa Obrera, 30 de agosto de 2001.

227. Ver anexo Documentos del Movimiento Piquetero.

228. El Centro de la Iglesia, el PC, el Credicoop y las Pymes ha sido apoyado, desgraciadamente, por la dirección de la Utd, que ha abandonado así el programa de la Coordinadora de Desocupados del Norte de Salta. En su I Congreso (9 de diciembre de 2000) se rechazó este planteo precisamente porque las Pymes en muchos casos son simples tercerizadas de los grandes pulpos. Se denunció allí mismo que las Pymes madereras habían utilizado el corte de ruta del año ‘97 para obtener subsidios y ‘negrear’ con el salario y las condiciones de trabajo de los asalariados. Ahora la Utd plantea “que las operadoras petroleras de la zona otorguen los servicios o todo tipo de trabajo a las Pymes del departamento con eximición de impuestos y créditos con mínimo interés”, es decir que impulsa una tercerización en beneficio de las petroleras.

229. Solano, Gabriel, “Marcha del Frente de la Pobreza: La caravana electoral del Ari y el Polo Social”, en Prensa Obrera, 27 de septiembre de 2001.

Adonde va el movimiento piquetero (epílogo provisional)

El movimiento piquetero enfrenta dos perspectivas políticas antagónicas.

La primera es definir una estrategia de profundización de la lucha mediante la huelga general y pugnar por erigirse como una dirección combativa a escala nacional, superando a las burocracias sindicales oficiales y desarrollándose como una alternativa de poder para los explotados frente al Estado y al régimen político. Esto le plantea la necesidad de discutir y establecer una salida política de conjunto frente a la crisis terminal del régimen, es decir, un planteo frente a la crisis de poder que existe en la Argentina: la lucha por una Asamblea Constituyente nacional y en cada provincia y municipio para reorganizar política y socialmente el país.

La segunda es renunciar a convertirse en un factor político independiente y limitarse a ‘apuntalar’ un recambio ‘progresista’ en el 2003. Es decir, reiterar –en condiciones extremadamente más graves– la política que siguió la CTA en 1998/99: ‘apuntalar’ a De la Rúa y a Chacho Álvarez y ‘castigar’ al gobierno en las urnas. No es un dato menor que la CTA, que hoy promueve la formación del FNP, fue –como lo ha reconocido el propio Alfonsín– la principal impulsora de la formación de la Alianza. Una y otra son, tanto objetiva como subjetivamente, antipiqueteras. Pero en la misma medida en que esta ‘salida’ sólo podría aplicarse dentro de dos años, se trata de un factor de defensa y de sostenimiento del acabado régimen político actual. La expresión más acabada de la estrategia del FNP es la traición de la burocracia del Suteba a la huelga docente bonaerense.

El agravamiento de la crisis política, la descomposición económica imparable y el empuje de las masas que buscan desesperadamente una salida a la miseria por medio de la lucha, pondrán al movimiento piquetero ante la obligación de definir su estrategia: independencia política o subordinación a sus enterradores. Los intentos de establecer una conciliación entre ambos polos sólo podrán tener un carácter episódico o pasajero: la crisis y las masas exigen definiciones tajantes.

Pero el movimiento que se encuentra ante tal disyuntiva histórica no ha nacido ayer. Tiene tras de sí una riquísima experiencia de luchas, de triunfos y de derrotas, de organización y de debates políticos, de mártires y de presos, de selección de dirigentes, de construcción y de reconstrucción de organizaciones. Agrupa a luchadores experimentados que han creado este movimiento de la nada y también a grandes masas obreras y trabajadoras. En este movimiento, además, existe una vanguardia política que lucha concientemente por la independencia política de la clase obrera y por su elevación como caudillo de la nación explotada.

Este movimiento que ha conmovido a la Argentina con los cortes de rutas y las puebladas y que ha sido el protagonista excluyente de las grandes movilizaciones populares de los últimos seis años, ¿podrá volver a ser arrastrado al mismo callejón sin salida del apoyo a los burgueses ‘progresistas’... que dejan de serlo apenas llegan al gobierno?

Es posible, pero no será sin una durísima lucha política porque si algo ha demostrado el movimiento piquetero es su capacidad para aprender de su propia experiencia. Y esa experiencia – en Cutral Co, en Jujuy, en tantos lados– le enseña que el ‘progresismo’, civil o clerical, es la tumba del movimiento piquetero.

¿Marioneta en manos de los que se candidatean como próximos verdugos de los trabajadores o dirección política de las masas oprimidas contra el régimen que las hambrea, las despide, las reprime y las asesina?

Uno es el camino de la victoria; el otro el de la derrota.

El final está abierto. La lucha política lo decidirá.

Documentos del movimiento piquetero

Neuquén, mayo de 1996

PROGRAMA APROBADO EN EL I ENCUENTRO DE trabajadores desocupados de neuquen
TRABAJADORES DESOCUPADOS DE NEUQUEN

El Encuentro de Trabajadores Desocupados resuelve: ituir una mesa vincial con laparticipación de las distintas co

- Llevar adelante un empadronamiento en todo el ámbito provincial de trabajadores desocupados mayores de 16 años.
- No a la rebaja y el inmediato pago de los 200 pesos a los beneficiarios de la ley 2128 y el pago retroactivo de la rebaja.
- Pase a la planta de todos aquellos beneficiarios de los distintos programas que emplean mano de obra desocupada, que estén desarrollando tareas ya sea en el Estado como en la actividad privada.
- Inmediata apertura del Registro de la ley 2128, para incorporar sin discriminación alguna a los miles de desocupados que quedaron fuera de la misma.
- Reconocimiento de las cargas familiares, seguro por accidente, licencia por enfermedad, obra social, jubilación, ropa y herramienta de trabajo, etc., en todos los planes en que se tome mano de obra desocupada.
- Declarar la emergencia ocupacional.
- Trabajo para todos o Seguro al desocupado mínimo de 500 pesos.
- Colonización de tierras para que sean puestas en producción por los desocupados, tal cual lo prevé la Constitución Provincial.
- Plan de Obras Públicas por administración y ejecución sin empresas intermediarias.
- No a los despidos. Reparto de las horas de trabajo sin disminuir el salario.

Nos expresamos por la unidad en la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados, rechazando los decretos de rebaja salarial a los compañeros docentes y estatales.

Reclamar la inmediata libertad de Horacio Panario y Alcides Christiansen. Por el cese de las persecuciones y el proceso judicial.

El Encuentro de Trabajadores Desocupados resuelve solicitar una urgente entrevista con el gobernador de la provincia, a fin de discutir la crítica situación y las soluciones propuestas.

Neuquén, 24 de mayo de 1996

Coordinadora de Desocupados de Neuquén Capital - Comisiones de Desocupados de Centenario, Plottier, Senillosa, Cutral Có, S.M. de los Andes, Junín de los Andes, Loncopué, El Hucú, Unión Trabajadores Desocupados Zapala. Mesa Directiva regional del CTA.

Buenos Aires, julio de 2000

carta abierta al movimiento obrero

El paro del 9 de junio confirmó una nueva etapa en el movimiento obrero. Su masividad aplastante, así como las marchas y el paro anterior, forman parte de un ascenso de la lucha de los trabajadores. Hemos golpeado al gobierno, abrimos una brecha en la situación política, se avizora la posibilidad de ganar. ¿Cómo continuar?

La Reforma Laboral, el impuestazo y el ajuste van adelante; está planteada entonces una continuidad en nuestra movilización. Pero, ¿puede ser continuidad una concertación sobre la base de la 'legitimidad' de los decretos que plantea el gobierno? ¿Cómo aceptar ahora una concertación sobre la base de que no se discute lo que nos llevó a la lucha?

El clero busca detener la lucha con la concertación. 'Consensos' de este tipo llevaron a la privatización de las jubilaciones o a la anterior reforma laboral bajo Menem, y más aún, la CGT oficial concertó la actual reforma.

Otros buscan sitios en esa mesa, pero tenemos que desnudarlos, no encubrirlos. Si al decir de Moyano el PJ "rompió con los trabajadores" al votar la Reforma Laboral, hoy los disidentes de la Alianza rompen con los trabajadores al votar a favor del ajuste aunque quieran maquillarlo. A los 'progresistas' del gobierno los retrató el Chacho Alvarez firmando de puño y letra el criminal decreto de privatización de la salud obrera.

El camino de la clase trabajadora pasa por otro lado. Los estatales de Neuquén han reclamado, en asambleas intergremios multitudinarias, el lanzamiento de la huelga general. De hecho, se suceden los paros y movilizaciones entre miles y miles de estatales de todo el país; hay una clara tendencia a la huelga general contra la rebaja salarial, contra el cierre de organismos, contra los despidos.

Otros sectores irán saliendo obligados a una lucha de este tipo, urgidos por reivindicaciones que no pueden esperar, como hoy ocurre con miles de compañeros de Aerolíneas, confirmando que la Reforma Laboral apunta a la reducción generalizada de salarios, tal cual lo denunció la CGT disidente.

La huelga general está inscripta en la situación política, organicémosla conscientemente.

Necesitamos desplazar hacia la masa de los huelguistas el centro del debate político y reivindicativo. Un Congreso de Delegados electos con mandato de base sería el ámbito adecuado para encarar el programa de los trabajadores frente a la crisis.

Nuestro reclamo a la CGT-Moyano, como a la CTA, en el sentido de que convoquen un congreso de este tipo, se basa en el papel de sus organizaciones en los recientes paros y movilizaciones, pero debería abarcar a todas las organizaciones obreras y de desocupados, de estudiantes, de jubilados y del conjunto de explotados en lucha.

Proponemos partir de un programa consecuente de reivindicaciones (ver aparte).

Los abajo firmantes llamamos a las Comisiones Directivas, Comisiones Internas, Delegados y activismo a mocionar y votar en Asambleas de sus sindicatos esta propuesta.

Impulsamos el Congreso de Delegados de Base para organizar esa lucha y fijar su programa y su estrategia.

Programa

1. Derogación del ajuste, el impuestazo y la Reforma Laboral.
2. Por 600 pesos de salario mínimo. Inmediata convocatoria a paritarias con anteproyectos resueltos en asamblea. Jubilación mínima de 500 pesos, restitución de los aportes patronales, estatización de las AFJPs bajo control de los trabajadores.
3. Por 500 pesos de subsidio para todos los desocupados. Repudio a la maniobra de canjear el fondo de desempleo y los planes Trabajar y otros programas por un seguro de miseria sólo para jefes de familia.
4. Jornada de 8 horas. Prohibición de todo despido. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario en toda empresa que suspenda o despida.
5. Derogación de todos los decretos de privatización de la salud. Por un plan único de salud basado en la defensa del hospital público y de las Obras Sociales, la restitución generalizada del aporte patronal en sus niveles anteriores, y la cárcel al evasor y al empleador en negro. Control obrero de las Obras Sociales.

Edgardo Quiroga (Secretario General de la CGT San Lorenzo) - Miguel del Plá, Mónica Galván, Ricardo Mercado (Adosac-Docentes Provincia de Santa Cruz - Coordinadora de Desocupados de Caleta Olivia) - Comisión Interna Inti-Upcn - José Barraza (Comisión de Desocupados-Tartagal) - Claudio del Plá (Docentes autoconvocados de Salta) - N. Pitrola, R. Cardozo, M. Bravetti, H. Fernández, R. Padín, R. Vargas (Congresales Naranjas-Federación Gráfica Bonaerense) - Comisiones Internas Gráficas de Quebecor, Interpack I y Talleres Unión - Sergio Sosto (Secretario de Prensa-Foetra Buenos Aires) - Néstor Correa, Eduardo Sartelli, Daniel Ríos, Pablo Cámara (Asociación Gremial Docente-UBA) - M. Verón, P. Comparada, M. de Mattei, L. Verón (Comisión Directiva Provisoria del Soip-Pescado Mar del Plata) - Alejandro Martínez (Coordinadora de Desocupados-Bo Grande-Mar del Plata) - Carlos Giménez (Comisión Interna metalúrgica M. Royo) - R. Abraham, J. Fragueiro, C. Farfan, C. Pérez (Delegados de Metrovías) - R. Triper (delegado Sanatorio Wilde-Sanidad) - C. Chaves, J. López, V. Galván, S. Bosco, S. Guzmán, G. Ayala (delegados del Hospital Ramos Mejía, Sutecba) - Carlos Pacheco (Secretario General de Transportes del Oeste) - Romina del Plá (Comisión Directiva de Suteba La Matanza) - Roberto Gellert (Congresal de Suteba-Florencio Varela) - Claudia Consiglio (Comisión Directiva de Suteba Escobar) - Delegados y Activistas de APTA (Técnicos Aeronáuticos) - Rubén Giménez (Comisión Interna de Shell-Petroleros privados) - Rubén Schofrin (Comisión Interna de Editorial Perfil-Utpba) - Quico Vignoles, Luciano Chimento, Ricardo Fioravanti (Comisión Interna de Crónica-Utpba) - José Zárate (delegado de Trolicor-UTA Córdoba) - José S. Adamo (delegado de Luz y Fuerza-Córdoba) - delegados Rama Postal-Camioneros

Julio de 2000

Norte de Salta, diciembre de 2000

llamamiento del I congreso de trabajadores y desocupados del norte de salta

Los trabajadores aquí reunidos declaramos lo siguiente:

1. Salta es el país. El Norte de Salta es el país. Somos el ejemplo vivo de un país confiscado por un puñado de monopolios y banqueros, por sus agentes políticos y un régimen que no sirve a los trabajadores.

Los desocupados de hoy no son el fruto de una ley inevitable, sino el resultado del negocio capitalista que se ha montado sobre nuestro sacrificio y la entrega de los activos que se hicieron sobre la base de nuestro aporte. Hay que recordar que Repsol compró YPF por 8.000 millones de dólares y sólo en los primeros tramos de la concesión tendrán 48.000 millones de dólares de ganancia. Hay que recordar que del Departamento San Martín se llevan 30 millones por mes, dejando solo 1 millón, lo que revela que los saqueadores son ellos, no los piqueteros. Hay que recordar que se ha despedido en masa a los trabajadores ypefianos para reducir el costo laboral en función del beneficio y de la lucha por sobrevivir de estos pulpos y del sacrificio de todo plan de industrialización y exploración. Toda la operatoria de YPF ha quedado reducida al envío de petróleo crudo al exterior y al uso de los beneficios en los negocios especulativos de los grandes grupos. YPF es, además, el ejemplo de la compra fraudulenta de las empresas públicas a cambio de los títulos de la deuda externa, una deuda externa armada con autopréstamos de los grupos económicos, convalidada por la democracia y jamás investigada.

2. Los aquí reunidos declaramos que nuestros reclamos son nuestros derechos. Que un subsidio al desocupado no es una dádiva, es un derecho, porque es este régimen el que está obligado a darnos trabajo y, si así no fuera, no tiene razón de ser. No se nos escapa que los planes de empleo son instrumentados como un mecanismo para hacer bajar aún más el salario del trabajador activo y, al luchar por ellos, lo hacemos con la perspectiva de arrancar trabajo, lograr la efectivización plena y liquidar la precariedad laboral.

3. El Estado ha adoptado como política frente a la rebelión popular la creación de “consejos de emergencia” o “multisectoriales” o “mesas de concertación” en las que las organizaciones de los trabajadores quedan sometidas al compromiso con los representantes de las fuerzas políticas y sociales que son responsables de la catástrofe que estamos viviendo.

Declaramos, frente a este intento, la construcción de organizaciones independientes del Estado y de todo interés contrario al de los trabajadores. Haciendo un balance de las distintas experiencias de lucha hemos constatado cómo el gobierno ha tratado de dividir a los desocupados mediante la compra de dirigentes. Los dirigentes que han traicionado a los desocupados deben ser expulsados de las organizaciones y considerados enemigos de los trabajadores. Se pretende desorganizarnos convirtiendo a los piqueteros en punteros de los intendentes y, muchas veces lo que se ha conseguido por la lucha, en la ruta, se lo reparte como si fuese un favor de los funcionarios que en su momento ordenaron la represión, que este año, ya mató a tres compañeros.

4. Los aquí reunidos declaramos la constitución de una COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DESOCUPADOS DEL NORTE DE SALTA, conformada por la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados de Tartagal, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados de Salvador Mazza (Pocitos) y el Frente de Unidad Barrial de Trabajadores Desocupados de Embarcación, sobre la base de los siguientes métodos:

a) Funcionamiento en base a asambleas que tomen las decisiones y elijan los representantes que deben ser revocables cuando la asamblea lo decida.

b) Organizaciones independientes del gobierno provincial y nacional, de todos sus agentes y de las organizaciones patronales.

c) Organizar un padrón único de desocupados de cada pueblo en donde conste el oficio y el grupo familiar y otros datos, a cargo de las organizaciones integrantes de la Coordinadora Departamental. Imponer el reconocimiento de este padrón único en oposición a la maniobra de armar muchas listas para favorecer la división y el manejo de los punteros oficialistas.

d) El manejo de los planes de trabajo, los puestos que se consigan en las privadas, los bolsones alimentarios y todo lo que se conquiste, debe estar bajo control de las asambleas para que se reparta a los que más lo necesitan y a los que más se comprometen con la lucha.

e) De abajo hacia arriba, llamamos a organizar la coordinadora con delegados electos en asamblea de cada barrio, en las que se aporte a la elaboración del pliego común de reclamos.

f) Edición de un boletín periódico de la Coordinadora de Trabajadores y Desocupados del Norte de Salta, cuyo primer número se imprimirá con las resoluciones de este Congreso.

5. Los aquí reunidos declaran su voluntad de organización y de lucha en función de los siguientes objetivos:

a) Control por la Coordinadora del acceso en los cargos a todas las empresas.

b) Piso salarial de 600 pesos mensuales de básico para 8 horas de trabajo o 3 pesos la hora, para todas las actividades.

c) Tercer turno en las empresas petroleras y reparto de las horas de trabajo sin bajar los salarios.

d) Imponer a la nación, la provincia y a todos los municipios que la obra pública se construya por administración y con contratación directa de los compañeros por la municipalidad, eliminando el negocio de las contratistas.

e) Fondo Especial de Hidrocarburos afectando la ganancia de las petroleras en 200 millones de pesos anuales, como compensación especial por los daños ambientales, económicos y de salud (por la aparición de enfermedades como el hantavirus, la leishmaniasis, el cólera y los desastres causados por la modificación de los cursos de agua). Triplicación de las regalías bajo control de los trabajadores, en el camino de la renacionalización de YPF bajo control de los trabajadores, sin indemnización. No a la prórroga de la concesión a las empresas privadas de los yacimientos del Norte. Pago inmediato de las acciones de YPF del PPP (Programa de Propiedad Participada) antes de fin de año. Plan de industrialización del petróleo bajo control de los trabajadores.

f) 10.000 planes de trabajo de 300 pesos como mínimo para el Departamento San Martín o inmediato subsidio a los desocupados por ese monto. Condonación de tasas e impuestos municipales y provinciales para todos los desocupados, tarifas subsidiadas de electricidad, gas y agua. Combustible subsidiado en todo el Departamento San Martín al igual que en el sur del país.

g) Aumento de los presupuestos de salud y educación públicas. Gratuidad de las prestaciones de alta complejidad. Becas para todos bajo control de la comunidad educativa. Desdoblamiento de los cursos escolares con un máximo de 25 alumnos y sin mínimo.

h) Combustible.

i) Reclamo de un inmediato paro general de 72 horas a las centrales sindicales como parte de un plan de lucha hasta la derogación de toda la legislación antiobrera dictada por el FMI (reforma laboral, ataque a la jubilación y a las obras sociales, etc.)

j) Ratificar el llamamiento hecho por los piqueteros a favor de un congreso nacional de organizaciones y desocupados, para golpear todos juntos y al mismo tiempo, por nuestros reclamos. Planteamos la convocatoria a un Congreso Nacional de Bases, con representantes electos de todo el movimiento obrero.

k) Libertad a Raúl Castells y Emilio Alí y cese de la persecución a los 2.500 luchadores populares procesados. Libertad a los presos políticos. Derogación del indulto, la Obediencia Debida y el Punto Final, castigo a los asesinos de ayer y de hoy.

l) Derogación de la resolución 262 para zonas de frontera. Basta de atropellos y persecuciones a los compañeros que realizan compras en la frontera. Eliminación de la aduana interior en Aguarray. Que el Senasa persiga a quienes debe. Que el Estado provea sin cargo toda la atención sanitaria animal a las familias que tienen ganado en cantidades mínimas.

m) Cárcel y perpetua a los asesinos de Verón, Justiniano, Gómez, víctimas de la represión en la ruta y de Maldonado, víctima de la policía de gatillo fácil. Por una comisión investigadora independiente.

n) Reparto de las tierras fiscales ociosas entre los trabajadores y desocupados del Departamento San Martín (5 a 10 hectáreas) para el desarrollo agrario con financiamiento del Estado.

o) Fuera las intervenciones y los gobiernos personeros del régimen de entrega y saqueo. Soberanía de las organizaciones obreras y construcción de una Asamblea Popular que represente el interés de los trabajadores.

6. Declaramos al 13 de mayo “Día del Piquetero”, por la gran pueblada que resistió y derrotó a la represión.

7. En función de estos reclamos y estos objetivos, el Congreso resuelve un plan de acción, la elección de una dirección responsable y la convocatoria a un segundo Congreso en el lapso de 60 días.

Plan de acción

Se convoca a una movilización por el esclarecimiento y el juicio y castigo a los asesinos de los compañeros caídos para el día jueves 14 diciembre, a las 20 horas, en forma simultánea en Mosconi, Tartagal, Embarcación, Salvador Mazza.

Se convoca a una jornada de movilización para el 22 de diciembre, con el propósito de presentar el pliego de reclamos.

Se vota la concurrencia al plenario por la unión clasista de dirigentes, internas, delegados y agrupaciones que han respaldado el llamado a un Congreso Nacional de Desocupados.

Se elige una dirección integrada por dos representantes por cada organización de desocupados de los pueblos presentes, el representante de UTA y los familiares de los compañeros caídos.

Con excepción de la referida al Día del Piquetero, todas las resoluciones fueron votadas por unanimidad.

En General Mosconi, a los 9 días de diciembre de 2000

Buenos Aires, diciembre de 2000

Declaración del Plenario Nacional de Organizaciones de Trabajadores Ocupados y Desocupados

Los trabajadores aquí reunidos declaramos lo siguiente:

1. Se ha dado un salto en la intervención y en la organización de la clase obrera, expresado en la huelga general activa de 36 horas del pasado 23 y 24 de noviembre, que ha tenido como protagonista fundamental a los piqueteros. Nos atrevemos a sostener que sin los piqueteros, esta huelga no habría existido. En primer lugar, porque fue a partir del corte de ruta en La Matanza, del corte de ruta en el norte de Salta, del resto de cortes y del levantamiento popular en General Mosconi y Tartagal que nació y se instaló la tendencia a la huelga general. En segundo lugar, porque los piquetes no se limitaron a cortar una ruta para reclamar pan y trabajo, sino que se convirtieron en una herramienta para garantizar la huelga, sea cortando las vías o el acceso a los lugares de trabajo. Queremos destacar esta nueva realidad y declarar que reivindicamos a

los piqueteros como hijos de la clase obrera y como herederos de su mejor tradición histórica, de los piquetes anarquistas y socialistas de principios de siglo, de los piquetes de huelga durante la Década Infame, de los piquetes de huelga bajo la Libertadora y el gobierno de Frondizi, de los piquetes de huelga del Cordobazo y la huelga general del '75. Ni excluidos, ni trabajadores despojados de su identidad de clase: obreras y obreros que habremos perdido en muchos casos nuestro empleo, pero jamás la memoria.

2. Por estas razones proclamamos la unión indisoluble en la lucha de los ocupados, desocupados y jubilados, unión a que nos lleva la propia política de las patronales y el gobierno. ¿O acaso no están aquí los compañeros piqueteros que en el norte de Salta han exigido la incorporación de trabajadores en las plantas y luchado por un salario para ellos que no sea la miseria de los planes Trabajar, convirtiendo a los desocupados en factor de organización de los activos? ¿O acaso no tenemos denuncias sobre empresas que están tomando compañeros en las condiciones de estos Planes, desconociéndoles el carácter de asalariados y obreros y empujando a la división con otros compañeros, lo que plantea la lucha de todos para arrancar el pase a planta permanente? Planteamos la unión de lucha de los activos y los desempleados por el conjunto de los reclamos, la fusión profunda en base a un programa y una acción en común, asumiéndonos, de conjunto, como representantes de una misma clase social.

3. Luego de la inmensa huelga general, las direcciones oficiales del movimiento obrero han planteado una nueva tregua en función de la búsqueda de una concertación social con el gobierno y las patronales. Los aquí reunidos declaramos que estamos en presencia de un doble crimen. Al paralizar la acción de los trabajadores se da por consumada la destrucción de la prestación básica universal (PBU) y de los restos de la jubilación estatal, la rebaja de los salarios y la privatización de las obras sociales. Al mismo tiempo, un gobierno profundamente golpeado por la crisis y la acción de la clase obrera puede rehacerse y seguir golpeando. Queremos recordar que esta política se repite por tercera vez en el año. Después de enormes paros y movilizaciones se llamó a los trabajadores a detener su acción en nombre de “concertaciones” o “gabinetes de emergencia” que no tuvieron otra función que inmovilizar a la clase obrera. Así pasó la reforma laboral, la rebaja de salarios y se está dejando pasar el ajuste de hoy. Está planteado claramente un problema de dirección. Los aquí reunidos sostenemos que está vigente la posibilidad de derrotar el paquetazo del gobierno a través de la profundización de la lucha. Las centrales obreras nos dicen, sin embargo, con su conducta, que no están dispuestas a asumir esta perspectiva. Pero todas las reivindicaciones por las que salimos a luchar están pendientes. Reclamamos a las direcciones oficiales y llamamos a actuar por una huelga general de 72 horas, en la perspectiva de la huelga general indefinida hasta arrancar nuestros reclamos. Planteamos la lucha común por:

- Aumento salarial del 50%. Salario mínimo de 600 pesos. Subsidio al desocupado de 500 pesos.
- Jornada de ocho horas. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.
- Derogación de la reforma laboral y de la flexibilidad en su conjunto, es decir, de las leyes, actas y convenios que la contienen. Derogación del presupuesto del 2001 y del Pacto Federal II con los gobernadores. No pago de la deuda externa.
- Reestatización de YPF, Aerolíneas y todas las empresas privatizadas bajo control de los trabajadores.
- Viviendas sociales para trabajadores ocupados o desocupados que las necesiten.
- Convenios colectivos con paritarios electos por los trabajadores en asamblea general. Abolición del trabajo en negro mediante el blanqueo bajo control de comisiones obreras fiscalizadas. Condena penal a la patronal evasora y que integre el circuito del trabajo en negro.
- Efectivización, sindicalización e inclusión en convenio de todos los trabajadores transitorios. Administración de todo plan de empleo y asistencia social por las organizaciones de trabajadores sin ninguna injerencia del aparato del Estado.

- Libertad a Castells, Alí y Luis Cruz de General Mosconi, libertad a los presos de La Tablada, levantamiento de todas las causas penales a los luchadores. Esclarecimiento y castigo a los asesinos de Aníbal Verón y de todos los mártires de la lucha.

4. Llamamos a todas las organizaciones del movimiento obrero que declaran enfrentar la política de hambre y entrega del gobierno fondomonetarista a convocar a un Congreso Nacional de Piqueteros y de la Clase Obrera en el segundo fin de semana de abril en un lugar a determinar, para establecer un gran plan de lucha y encarar la convocatoria a una Marcha Nacional del Hambre, con paros y piquetes de las organizaciones convocantes, hacia mediados del 2001.

5. Declaramos que frente a la política sin salida de la burocracia es necesario luchar por una nueva dirección obrera. Para abrir esta perspectiva llamamos a los piqueteros y luchadores a organizar una alternativa clasista, que luche por un programa obrero de salida a la crisis y se proponga la expulsión de la burocracia de los sindicatos. Al vaciamiento de nuestros reclamos en nombre de una política “antimodelo” de concertación con la patronal nativa, oponemos la defensa irrestricta de todas y cada una de nuestras reivindicaciones. Al método de los paros aislados y desgastantes, oponemos el plan de lucha y la huelga indefinida hasta arrancar lo que nos corresponde. A la perspectiva de un “gobierno de conciliación nacional” con quienes no representan nuestros intereses, el planteo de convertir a los piqueteros en vanguardia política de la clase obrera y de todos los explotados en la lucha por un gobierno de trabajadores.

6. Nos comprometemos a constituir sólidas organizaciones en cada uno de los escenarios en los que estamos actuando. A promover congresos regionales que apunten a nuclear a todo lo vivo y actuante del movimiento de lucha, a desenvolver nuestro programa y estructurar una dirección. Nuestra columna vertebral es una política de independencia y fidelidad a la clase obrera frente al gobierno proimperialista, los partidos patronales y las direcciones que nos llevan a un callejón sin salida.

7. El 22 de diciembre somos todos piqueteros; por una Navidad con Pan y con Trabajo. Llamamos a efectivizar cortes, ollas y piquetes en todo el país.

La mesa impulsa al mismo tiempo la difusión nacional y, en particular, a las comisiones de desocupados de todo el país, las resoluciones del congreso del norte de Salta del 9/12, y gira a todas las organizaciones la propuesta de ese mismo plenario de instaurar el 13 de mayo como día nacional del piquetero.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2000.

Capital Federal, abril de 2001

Plataforma de reivindicaciones aprobada por el Congreso Piquetero de la Capital Federal

1. Aumento salarial del 50%. Salario mínimo de 600 pesos por una jornada de 8 horas. Subsidio al desocupado de 500 pesos. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Derogación de la reforma laboral y de toda la legislación “flexibilizadora”. Convenios colectivos con paritarios electos en asamblea. Derogación inmediata del criminal decreto de Cavallo que anula el salario familiar a quienes ganan menos de 100 pesos.

2. Suspensión de todos los desalojos; censo de las casas desocupadas e investigación de la propiedad de éstas y de inquilinatos y conventillos, para sacar a luz los fraudes y negociados de los monopolios inmobiliarios contra el pueblo sin vivienda.
3. Comisión investigadora de los hoteles transitorios contratados por Promoción Social para albergar a desalojados, integrada por representantes de los barrios y la Legislatura. Que el dinero que se destina a hoteles sea aplicado integralmente a la construcción de viviendas sociales.
4. Apertura de las cuentas e investigación de los fondos de la Secretaría de Promoción Social. Administración de planes de empleo y asistencia social por parte de las organizaciones de trabajadores sin ninguna injerencia del Estado.
5. Por un presupuesto de vivienda de 300 millones de pesos, equivalente al 10% del actual presupuesto de la Ciudad. Por planes de construcción de viviendas y autoconstrucción que aseguren una vivienda a todos los sin techo. Con materiales y asesoramiento técnico a cargo del gobierno y mano de obra empleando a los trabajadores desocupados, con un salario mínimo de 600 pesos. Control obrero y participación de los vecinos en la Corporación del Sur, Puerto Madero y Retiro Puerto.
6. Urbanización de las villas con garantía de acceso a la vivienda para todos sus habitantes. Por la titularización inmediata y el derecho a la plena radicación de todas las poblaciones y asentamientos en el territorio de la ciudad.
7. Por el acceso a la vivienda de los trabajadores extranjeros, sin discriminaciones. Documentación inmediata y gratuita para todos los que lo soliciten.
8. Fuera la policía y “Promoción Social”, que operan en conjunto para el desalojo del Padelai. Vivienda ya para todos sus habitantes.
9. Apoyo a las luchas de los gráficos de Agropa y Talleres Recali. Defensa de todos los puestos de trabajo y pago de los salarios caídos. Ningún despido en TBA y Aerolíneas. Apoyo a la lucha de los trabajadores de Metrovías.
10. Libertad a Emilio Alí y César Matoso. Levantamiento de todas las causas contra los luchadores populares. Esclarecimiento y castigo a los asesinos de Verón.
11. Por un Congreso nacional de piqueteros y de la clase obrera. Por una Marcha nacional del hambre a Plaza de Mayo. No a la tregua. Paro de 72 horas y huelga general. Fuera De la Rúa-Cavallo.
12. Defensa de la Salud y el Hospital Público. Por la producción y provisión estatal y gratuita de medicamentos. Contra la privatización de la salud.

21 de abril de 2001

Aprobada por unanimidad

La Matanza, agosto de 2001

Declaración de principios del Futrade (Frente Unico de Trabajadores Desocupados) de La Matanza

1. Los desempleados (desocupados, subocupados, es decir, todos aquellos carentes de un puesto de trabajo) no somos responsables de nuestra situación. La desocupación es propia del sistema capitalista, que mantiene una masa de trabajadores sin empleo como presión sobre los trabajadores en actividad para bajar salarios y eliminar las conquistas obreras en aras de aumentar la productividad (es decir, la explotación).
2. Los sucesivos gobiernos patronales han llevado el desempleo a niveles escalofriantes, convirtiéndolo en una tragedia nacional que afecta a más de cuatro millones de trabajadores. El desempleo es, en primer lugar, el resultado de la liquidación de las conquistas laborales más elementales (la llamada 'flexibilización' laboral), como la jornada de ocho horas de trabajo, las categorías, los convenios colectivos por industria y el valor del salario, entre otras. El planteo oficial que pregona un crecimiento del empleo como resultado de la eliminación de las disposiciones favorables a los trabajadores, ha quedado desnudado como una total falsedad: la desocupación, el trabajo en negro, los contratos han crecido a la par que las patronales embolsan beneficios; a medida que cae el 'costo laboral' aumenta el 'costo patronal' (o sea, la tasa de beneficio capitalista).
3. El desempleo tampoco es el resultado del 'desarrollo tecnológico', en principio porque la inversión en tecnología ha sido ínfima. De todas maneras, el avance tecnológico debe traer aparejado el alivio del trabajo humano y, por lo tanto, el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores; en manos capitalistas, se ha convertido en una pesadilla y en una fuente de miseria popular. El aumento de la productividad ha sido logrado a expensas de la explotación del trabajador, vía los infernales ritmos de producción y la eliminación de trabajadores, dejando los puestos de trabajo entre menos trabajadores.
4. Tampoco es la supuesta falta de capacitación la razón de los despidos. Los gobiernos patronales han ido lejos en las pretensiones de banqueros e industrias de liquidar la educación pública y el acceso a la enseñanza de las más amplias capas de la población. Las leyes educativas aprobadas en los últimos años no hacen más que descalificar los títulos, en un intento de desvalorizar aún más la fuerza de trabajo.
5. Denunciamos la superexplotación de los compañeros desempleados que impulsan el gobierno nacional y los provinciales con los llamados "programas de empleo". Este régimen pretende valerse de la desocupación para establecer de hecho un 'salario mínimo' nacional inferior a 1 peso la hora, para fomentar aún más la caída de los salarios del conjunto de los trabajadores. No renunciamos a la lucha por ningún paliativo en defensa de nuestra subsistencia pero proclamamos que el horizonte de la clase obrera no puede ser un 'plan Trabajar'. Llamamos a la organización de los desempleados y al pago de un seguro mínimo de 500 pesos.
6. La catástrofe capitalista que se abate sobre los trabajadores en su conjunto, requiere, justamente, una respuesta de conjunto. Las burocracias sindicales han sido cómplices del entierro de nuestras conquistas y de la falta de respuesta frente a la desocupación. Frente a la situación sin salida que nos plantean, frente a la destrucción de las más elementales condiciones en beneficio del régimen de un puñado de chupasangres capitalistas, planteamos la lucha por la asamblea, la expulsión de la burocracia de los sindicatos, la huelga general, un congreso de bases del movimiento obrero ocupado y desocupado.
7. Los "consejos de emergencia" o "de crisis" son creaciones del estado patronal, en asociación con la jerarquía del clero y cámaras empresariales, que pretenden arrogarse la distribución de planes de empleo y otras asignaciones asistenciales para impedir su control por las organizaciones de desocupados. Planteamos la independencia de nuestras organizaciones respecto al Estado y la soberanía de las asambleas de estas organizaciones.
8. Nos oponemos, por lo tanto, al planteo de sindicalización que parte de las usinas oficiales, con cuota obligatoria, control del Estado y bancarización del cobro del aporte a las organizaciones, un negocio para la banca y una injerencia en nuestras organizaciones de desocupados. Defendemos el criterio de aportes voluntarios, libremente votados en asamblea, para sostener la organización de nuestra lucha.

9. El derrumbe del planteamiento económico de los gobiernos patronales, expresado en la recesión que hoy asola al país, ha planteado la incapacidad de estos gobiernos para dar una salida al desarrollo productivo de la Nación. Las fabulosas ganancias que lograron las empresas en los años de las 'vacas gordas' no fueron repartidas entre los trabajadores ni tampoco generaron el 'pleno empleo'; fueron hechas a costa de nuestro sudor y de innumerables subsidios fiscales e impositivos. Ahora, que llegó el turno de las 'vacas flacas', debemos pagar con miseria y desocupación la crisis que ellos mismos generaron. La salida al derrumbe capitalista, con su secuela de barbarie, es la planificación y control de la economía en manos de los productores de la riqueza: los trabajadores, es decir, de un gobierno de los trabajadores.

10. Hechas estas consideraciones, el Futrade:

- Declara su lucha por la organización de los desempleados. Como parte de la clase trabajadora, a la que pertenecemos, nos sumamos a los reclamos y luchas de los trabajadores en actividad contra la explotación, la liquidación de las conquistas obreras y la miseria capitalista.
- Reafirma la responsabilidad indeclinable del Estado (como representante de las patronales) de hacerse cargo de nuestra situación y por ello exigimos:
- Que el Estado pague un subsidio de 500 pesos paratodos los desempleados mayores de 16 años, mientras dure la situación que atravesamos.
- Que el Estado se haga cargo del pago de los alquileres o de la provisión de tierra y vivienda de las familias sin trabajo, en defensa del techo de los trabajadores.
- Que se exima del pago de tasas, impuestos, contribuciones y servicios (agua, luz, gas, teléfono) a todos los desocupados.
- Que el Estado garantice la cobertura médica integral de los desempleados y sus familias en forma gratuita, así como la educación.
- Que el Estado empadrene a todos los desempleados, bajo control de las organizaciones de desocupados.
- Que se repartan las horas de trabajo existentes entre todos los trabajadores, sin afectar el salario.
- Que, entretanto, se garanticen planes de empleo para todos los trabajadores desempleados mayores de 16 años, a 2,50 pesos la hora como mínimo, con cobertura asistencial y jubilatoria.

17 de agosto de 2001

La Matanza, setiembre de 2001

Resolucion de la II Asamblea Nacional Piquetera

Los trabajadores aquí reunidos planteamos como objetivos inmediatos de nuestra lucha:

- 1) Los reclamos de nuestro plan de lucha, que están hoy más vigentes que nunca: la derogación del ajuste expuesto en la ley de déficit cero y la libertad y el desprocesamiento de los luchadores.

2) El retiro del proyecto de presupuesto que consagra la profundización de la masacre social de nuestras familias y nuestros hijos. No al recorte del presupuesto para las universidades. No al arancelamiento.

3) La defensa y la extensión de los planes de empleo y comida a cada trabajador desocupado mayor de 16 años, estableciendo el reempadronamiento masivo bajo el control de las organizaciones de esta Asamblea nacional, rechazando la disminución de las asignaciones y el pago en bonos.

4) Cien pesos por hectárea para los pequeños y medianos chacareros para poder sembrar.

5) Prohibición de despidos y suspensiones.

6) Retiro inmediato de la Gendarmería de General Mosconi.

Convocamos, como continuidad de nuestro plan de lucha, a:

1) Cortes de ruta a lo largo y ancho de todo el país por 24 horas, desde las 12 hs. del jueves 6 de septiembre hasta las 12 hs. del día siguiente, con cortes de acceso a las plantas industriales, por puestos genuinos de trabajo, confluyendo el viernes 7 con el paro nacional y movilización de los trabajadores estatales.

2) Asambleas piqueteras en cada provincia, municipio o distrito para unirnos con todo el movimiento obrero y popular en lucha o enfrentado al régimen, y deliberar juntos para actuar por nuestras reivindicaciones y plantear una salida nuestra frente a la crisis, desde ahora mismo.

3) Cortes de ruta por 36 hs, desde las 12 hs del jueves 20 hasta el día siguiente, para confluir en la Plaza de Mayo y en las plazas de cada provincia y localidad, en una gran tribuna de lucha por la derogación del ajuste, del presupuesto del hambre, y por la libertad y desprocesamiento de los luchadores.

4) Convocar a una tercera Asamblea Nacional abierta a todas las organizaciones de trabajadores en el mes de octubre, con el método planteado aquí de un representante cada 20 compañeros organizados, ocupados o no, para resolver la continuidad de nuestro plan de lucha y un programa de salida a la crisis. Para este programa, esta Asamblea enarbola cinco ideas fundamentales:

- No al pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta.
- Reestatización de las AFJP.
- Renacionalización de los bancos y empresas estratégicas.
- Condonación de la deuda usuraria a los chacareros pequeños y precio sostén en origen para ellos.
- Fuera el régimen hambreador; no al gobierno de salvación nacional, que es sólo un recambio en las propias filas de los ajustadores.

5) Reclamar y organizar un paro activo nacional de 36 horas y la huelga general.

6) Constituir en esta misma Asamblea una Mesa de Coordinación nacional. De su seno surgirá una Mesa de Enlace con las centrales de trabajadores. La primera tarea de esta Mesa será, con la mejor disposición posible, buscar puntos de coordinación con las iniciativas elaboradas y puestas en marcha por la Central de Trabajadores Argentinos.

Libertad a Alí, Castells, y todos los compañeros

Aprobada por unanimidad, en La Matanza, 4 de setiembre de 2001